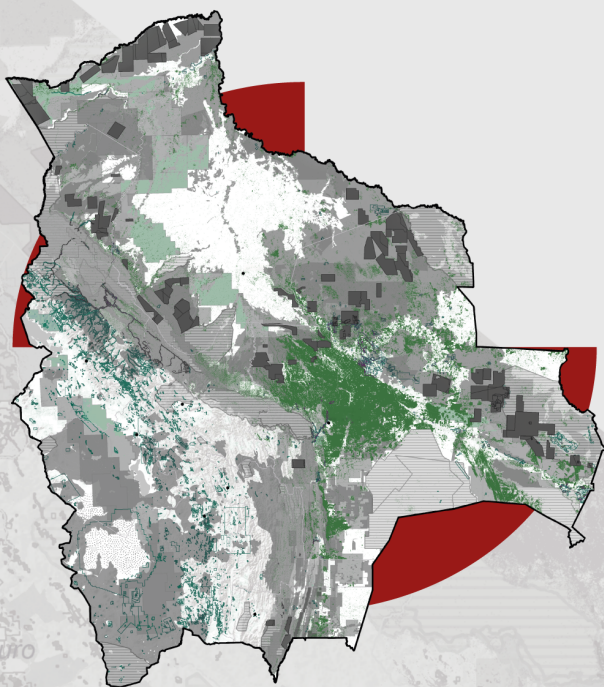

Hablemos de economía boliviana sin ser **economistas**

*¿CÓMO SALIR DE LA MALDICIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES?*

GONZALO COLQUE



Hablemos de economía boliviana
sin ser economistas

Gonzalo Colque

Hablemos de economía boliviana
sin ser economistas
¿Cómo salir de la maldición de los
recursos naturales?



Colque, Gonzalo

Hablemos de economía boliviana sin ser economistas:
¿cómo salir de la maldición de los recursos naturales?

Santa Cruz: TIERRA, 2024

272 pp.; 9 tablas, 13 gráficos y 2 esquemas

DL: 4-1-3574-2024

ISBN: 978-9917-9749-0-1

ECONOMÍA BOLIVIANA / RENTISMO /
DESARROLLO / BOLIVIA /

© Gonzalo Colque; TIERRA, 2024

Primera edición, mayo de 2024

Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir, escanear ni difundir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que el editor continúe publicando libros para todos los lectores.

Contactos:

Tel. Celular/WhatsApp : (591) 73580438

Tel. oficina: (591) 2 243 2263

Correo electrónico: g.colque@ftierra.org

Impreso en Bolivia

ÍNDICE

Prefacio	5
Introducción	7
• Hablemos del atraso económico	10
• Hablemos de la maldición de los recursos naturales..	13
• Hablemos también del “rentismo”	15
• Hablemos sin ser economistas	17
• Por qué hablar ahora.....	19
• Objetivos del libro.....	22
• Contenido	23
 Capítulo 1. Explorando el terreno:	
marco conceptual y definiciones económicas	27
• Introducción	27
• La maldición de los recursos naturales	29
• Causas de la “paradoja de la abundancia”	34
• Renta y rentismo	38
• Actores rentistas	42
• Atraso económico	46
• Preguntas básicas de economía	48
 Capítulo 2. Herencia histórica:	
el modelo primario-exportador del siglo XX	53
• Introducción	53
• Desenlace de la era del estaño	54
• 1901-1930: Bolivia, productor de clase mundial del “metal del diablo”	57
• 1930-1952: Mono-dependencia del estaño y el “Plan Bohan”	61
• 1952-1985: Nacionalismo, declive y fin de la era del estaño.....	65
• 1985-2000: La “década perdida” y liberalización económica.....	70
• Un siglo del modelo primario-exportador	74
• Herencia histórica: un siglo de dependencia de los recursos naturales ...	78
• Conclusión	80

Capítulo 3. El modelo del siglo XXI:

renta petrolera, agrícola y minera	83
• Preámbulo.....	83
• Panorama general, 2001-2023.....	85
• El breve reinado del gas natural.....	89
• La expansión de la agricultura cruceña	99
• La minería y llegada de la fiebre del oro	106
• Balance: el modelo del siglo XXI	112

Capítulo 4. Los males económicos..... 117

• Preliminares.....	117
• El atraso económico de Bolivia.....	119
• Grados de dependencia de los recursos naturales...	124
• Atraso y dependencia	128
• La “enfermedad holandesa” en Bolivia.....	133
• Los males económicos en los hechos: dos casos ilustrativos	139
• Males económicos venideros: ¿hacia dónde vamos?	144
• Cierre	146

Capítulo 5. Los males políticos 149

• Introducción	149
• Rentismo y política	151
• Efecto rentista.....	152
• Efecto represión	164
• Efecto censura	168
• Caso ilustrativo: El Fondo Indígena	175
• Cierre	180

Capítulo 6. Balance: Rentismo y atraso como fenómenos persistentes..... 183

• Planteamiento introductorio.....	183
• Cuando la historia importa	185
• Cuando la historia se repite	188
• El Estado rentista	191
• El sector privado rentista	196
• Ilustración simplificada del estado actual de la economía boliviana	204
• El atraso económico como agenda nacional	208
• Cierre	210

Capítulo 7. Salir del atraso económico, ¿cómo?.....	213
• Realismo mágico vs. realidad	213
• Ejes de transformación	217
• Políticas económicas.....	222
• Protagonistas del cambio	226
• Política de Estado para salir del atraso.....	228
• Diseño, financiamiento e institucionalidad.....	229
• Proceso de planificación y consenso	234
• Cierre	236
Consideraciones finales	239
Referencias y notas	243
Lista de tablas y gráficos	265
Lista de siglas y acrónimos.....	267
Agradecimientos.....	271

PREFACIO

Este libro busca explicar un fenómeno económico conocido como “la maldición de los recursos naturales”, sus conexiones con el rentismo y el persistente atraso de Bolivia. Además, constituye una invitación abierta al público en general para que abordemos estos problemas arraigados en todos los rincones de nuestra geografía, y juntos exploremos posibles respuestas y soluciones.

Los problemas están tan extendidos que resulta prácticamente imposible viajar por el país sin cuestionarnos por qué —teniendo abundancia de recursos naturales— seguimos siendo una economía débil y rezagada. Esta interrogante resuena con mayor intensidad cuando comparamos nuestra situación con la realidad de otros países. Y no hace falta fijarnos en países lejanos. Basta acercarnos a Chile, Argentina o Brasil, para darnos cuenta de que nuestro progreso lento no sólo está en el campo económico, sino que permea casi todos los aspectos de la vida.

No son problemas nuevos; de hecho, existen valiosos estudios que abordan sus causas y consecuencias, y muchos bolivianos y no bolivianos contribuyeron silenciosamente desde la práctica. Gracias a estos esfuerzos de años y décadas, hemos llegado a comprender que uno de los problemas fundamentales radica en nuestra excesiva dependencia económica de los recursos naturales y que, a pesar de tiempos de bonanza, no supimos dar pasos firmes y decididos hacia adelante.

Así como se desperdiciaron las oportunidades que trajeron consigo la bonanza de la plata o el estaño del siglo XX, no supimos hacer algo distinto en la historia reciente. La bonanza del gas natural que duró cerca de nueve años (2005–2014), generó una renta petrolera abundante que saltó desde 640 millones de dólares anuales hasta 5.489 millones; es decir, un crecimiento porcentual de 758% en el periodo. Para ilustrar el tamaño del cambio, esto sería como si el salario de un

trabajador hubiera aumentado de repente de 3.000 bolivianos a 25.740 bolivianos mensuales. Pero de poco o nada sirvió esta abundancia repentina ya que hemos vuelto a desperdiciar la más reciente oportunidad. El declive del gas natural no llega solo sino acompañado de los males de siempre: endeudamiento externo e interno, desahorro, desempleo y, ante todo, ausencia de alternativas económicas a la sobreexplotación de los recursos naturales.

Sin embargo, las bonanzas no siempre conducen al desastre. En otras circunstancias y momentos, la abundancia de los recursos naturales más bien ha sido una ventaja estratégica para engranar, encadenar y poner en marcha una serie de actividades económicas para el desarrollo sostenido de los países. Existen experiencias variadas de donde podemos extraer lecciones valiosas para transformar la “maldición de los recursos naturales” en una “bendición”.

En cualquier caso, el desafío que enfrentamos como Bolivia es enorme, lo que exige compromisos decididos de todos nosotros, sin importar mucho qué lugar ocupamos o a qué esfera social, política o campo de conocimiento pertenecemos. Bajo este entendido, si bien este libro proviene de un campo de estudio específico como es la economía, ha sido escrito como un aporte al diálogo multidisciplinario. Además, los economistas estamos en deuda con la sociedad boliviana, porque —reconozcamos— no supimos contribuir suficientemente al debate nacional y, a juzgar por los hechos, a menudo hemos fallado al no saber comunicar nuestras ideas y aportes en un lenguaje claro, digerible y, quizá lo más importante, libre de explicaciones enredadas y jergas innecesarias.

Parafraseando una expresión poco conocida en nuestro medio, pero certera a propósito de estos temas; se puede decir que los problemas económicos que tenemos como Bolivia son demasiado importantes como para dejarlos en manos de economistas.

Santa Cruz, 27 de mayo de 2024

INTRODUCCIÓN

La canción “Lamento boliviano” es una de las composiciones musicales de origen argentino más conocidas de Latinoamérica. Fue escrita por Natalio Faingold y Raúl Gómez en 1984, interpretada por primera vez por la banda “Alcohol Etílico” y, años más tarde, popularizada por la banda de rock “Los Enanitos Verdes”. La memorable melodía que emana está impregnada de sentimientos de profunda tristeza y desconsuelo, realzados por los instrumentos de viento propios del altiplano andino: la zampoña y la quena. Según una publicación del diario Clarín¹ solo existen teorías no confirmadas por sus creadores sobre el origen y el significado de algunos fragmentos. Una de estas refiere que la expresión que da nombre a la versión arreglada —la que todos conocemos— estaría inspirada en la difícil situación económica de los migrantes bolivianos que llegaron a Argentina durante la crisis de los años 80 o, de modo general, en la realidad boliviana de la época.

En particular, un fragmento hace una alusión directa:

*Soy como un lamento
Lamento boliviano
Que un día empezó
Y no va a terminar²*

Aunque no hay manera de corroborar o descartar esta y otras conjeturas, lo cierto es que esta creación artística sigue recordando a propios y extraños las grandes dificultades económicas de Bolivia. En los años 80, el país atravesó una de las peores crisis conocidas desde su fundación en 1825 y, cuatro décadas después, estamos a punto de repetir la historia, aunque guardando las distancias, por supuesto. Los problemas acumulados hasta finales de los años 70 explotaron en forma de lo que el mundo llegó a conocer como “hiperinflación”³ —se cree que este término habría sido acuñado por los periodistas bolivianos—.

Poco después, el colapso del precio internacional del estaño asestó el golpe decisivo para desencadenar una serie de eventos catastróficos que tuvieron repercusiones más allá de la esfera económica. Para el colmo, la crisis de la “década perdida” coincidió con la mayor sequía que azotó al campesinado del altiplano y valles de las tierras altas (1982-1983), dando origen a una masiva ola migratoria de cientos de miles de jóvenes rurales hacia las principales ciudades del país y hacia nuevos polos de migración internacional en el área metropolitana de Buenos Aires-Argentina o en los barrios marginales de Sao Paulo-Brasil.

Durante el periodo de las reformas de liberalización económica de los 90, los sentimientos de tristeza fueron transformándose en desobediencia, rebeldía y éstas en movimientos políticos. Así como el protagonista de la icónica canción se queja constantemente del desamor, el descontento social y la protesta política calaron hondo en la cotidianidad y la personalidad boliviana. Manifestantes descontentos de todas las edades tomaban a diario las calles de las principales ciudades expresando su rechazo a las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), combatiendo a los gobiernos tildados de serviles a los intereses foráneos y exigiendo el resarcimiento de los altos costos socioeconómicos causados por la “política de *shock*”⁴ de 1985. Fue un caldo de cultivo casi perfecto para abrazar más que nunca las ideologías antisistema.

Con los años, la agitación desembocó en la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS)⁵ a principios de 2006. Evo Morales y sus seguidores lograron capitalizar el descontento acumulado al fusionar en una única narrativa la rebeldía anticapitalista, la resistencia antineoliberal y la lucha de los pueblos excluidos. Este cambio político coincidió con los años de bonanza del gas natural y, por un tiempo, la gente dejó de pelear en las calles. En un afán por mostrar futuros promisorios, la propaganda gubernamental comenzó a transmitir mensajes en sentido de que la Bolivia económicamente atrasada y políticamente inestable estaba quedando atrás y que solamente haría falta la continuidad del nuevo gobierno para seguir avanzando por la senda del desarrollo y crecimiento económico. Los grupos de poder del sector privado, que prosperaban al influjo de la bonanza petrolera, también se sumaron a la retórica

triumfalista. Pero los años de las “vacas gordas” no duraron mucho tiempo. Hacia el año 2015, el auge se detuvo, el crecimiento económico comenzó a desacelerarse y, desde entonces, se incubaba una nueva crisis económica, parecida a la de los años 80.

La amenaza de esta nueva crisis hizo reflotar el descontento de la población. Las protestas políticas que están emergiendo, todavía carecen de una forma definida y tampoco giran en torno a un centro gravitacional y aglutinador, pero tienen coincidencias a la hora de rechazar las políticas y acciones del gobierno del MAS. Además, la administración de Luis Arce enfrenta una fuerte oposición interna por parte de la facción liderada por Evo Morales. Este último no disimula sus intenciones de acelerar el estallido de la crisis económica como parte de su estrategia electoral. Desde la oposición, el agotamiento del gas natural, el insostenible gasto público, la escasez de dólares, el fracaso del litio y otras dificultades económicas han sido atribuidas directamente a la incompetencia de los líderes del gobierno del MAS y sus “entornos ultra mediocres”⁶. Incluso, varias voces internas del gobierno de Arce coinciden, al menos en parte, con los cuestionamientos sobre el manejo de la economía y de los problemas del país. Los opositores, unos en mayor medida que otros, están convencidos que la crisis económica y otros problemas conexos pueden desactivarse mediante un cambio de gobierno. Pero, ¿realmente bastaría cambiar de líderes políticos para solucionar nuestros problemas económicos profundamente arraigados? Casi con seguridad la mayoría de los bolivianos respondería que no. Si es así, ¿qué más debemos de hacer para trascender más allá de las protestas y luchas político-electorales?

El término “Lamento boliviano” parece ser una mera descripción de constantes penas y expresiones de malestar, pero también podría tomarse como un cuestionamiento fundamentado hacia cualquier persona —o incluso hacia un país como Bolivia— que se limita a quejarse en lugar de hacerse cargo de la situación. Una manera casi instintiva de reaccionar sería rechazar tal cuestionamiento con cualquier argumento, pero una otra manera más juiciosa sería aceptarla como una crítica, como un elemento motivador que nos empuje a entrar en acción y a unir esfuerzos para encarar los problemas económicos.

Esto implica tomar partida por un punto medio que no nos obligue a abandonar nuestro compromiso con los cambios estructurales y, al mismo tiempo, esté situado más allá de las soluciones coyunturales y debates cortoplacistas.

Y precisamente, esta mirada o enfoque general es el hilo conductor del contenido de este libro.

HABLEMOS DEL ATRASO ECONÓMICO

Si nos preguntamos con honestidad o pedimos a alguien una opinión sincera sobre qué piensa de Bolivia, muchos dirían que es un país atrasado, estancado y casi sin remedio. Y más allá de estas percepciones propias o ajenas, existen datos y cifras que ofrecen suficiente información para hacer una valoración más objetiva. Varios estudios internacionales, que se encargan de evaluar periódicamente el estado de crecimiento y desarrollo de los países del mundo, reportan resultados nada alentadores para Bolivia. Cuando estos estudios colorean el mapamundi, según diferentes indicadores que miden grados o niveles socioeconómicos, por lo general nuestro país aparece pintado de un color distinto al de las naciones vecinas, lo que indica que existen marcadas diferencias o que estamos en los escalones más bajos del continente. No es inusual que en algunos aspectos tengamos parecidos más cercanos a los países centroamericanos, o incluso africanos, que a nuestros vecinos. Una evidencia de lo dicho podemos encontrar en el libro *“El club de la miseria: Qué falla en los países más pobres del mundo”* escrito por Paul Collier, quien llega a la conclusión de que la lista de los países más rezagados del planeta está compuesta por 58 países. En este ranking, la mayoría son africanos, varios centroamericanos, otros del Caribe y —para sorpresa o no del lector— Bolivia es el único país de América del Sur que calificó para ingresar en lo que el autor denominó el “club de la miseria”.

Los bolivianos sabemos bien que, históricamente, no hemos podido superar las fallas estructurales que caracterizan nuestro aparato productivo. Aunque Bolivia llegó a ser el segundo productor internacional de estaño, hace cien años, este protagonismo de clase mundial no desencadenó una transformación económica lo suficientemente significativa y

duradera. Eran tiempos de Simón I. Patiño, Carlos V. Aramayo y Mauricio Hoschild: los tres “Barones del estaño”. Aunque la nacionalización de las minas, que tuvo lugar con la Revolución Nacional de 1952, convirtió al Estado boliviano en lo que algunos llamaron un “super-Estado minero”, tampoco logramos despegar hacia el crecimiento y desarrollo sostenido. En esta misma época del *boom* minero, los terratenientes del occidente boliviano fracasaron en su intento de transformar el agro andino, quienes desde los tiempos de la Ley de Exvinculación de 1874⁸ habían impuesto un sistema de hacienda basado en el despojo de las tierras de los quechuas y aymaras, y la explotación de la fuerza laboral de los indios desposeídos. Las haciendas de los patrones del siglo XX, que formaban parte del proyecto estatal de crear una agricultura moderna y capitalista, acabaron en desastre debido a la obstinada resistencia y las revueltas permanentes de los originarios avasallados desde “tiempos inmemoriales”. La Reforma Agraria de 1953 se encargó de sepultar estas haciendas e inclinar decisivamente la balanza a favor de la lucha de los campesinos andinos⁹. En definitiva, ni los barones ni los terratenientes, y tampoco el Estado nacionalista, lograron transformar el aparato productivo para disminuir nuestra extrema dependencia de los recursos naturales.

El Estado boliviano ha sido el dueño mayoritario de los recursos naturales en dos momentos de gran importancia. Primero, entre 1937 y mediados de los 80, cuando tuvo control sobre la economía nacional mediante la nacionalización de los recursos naturales, fundamentalmente del petróleo y la minería. Este periodo de estatismo que duró algo más de cuatro décadas, terminó con la crisis mundial del estaño, endeudamiento externo insostenible y la “hiperinflación” de la primera mitad de la década de los 80. Las siguientes dos décadas (1985-2005) fueron años de reformas de liberalización económica y privatización de las empresas estatales. Este periodo duró la mitad en comparación con el estatismo previo y se caracterizó por grandes agitaciones sociales e inestabilidades políticas ocasionadas por los altos costos socioeconómicos de las medidas liberales. El segundo momento de protagonismo estatal arrancó en 2006 y continúa hasta el día de hoy (2024). También es conocido como el retorno del Estado o neo-estatismo caracterizado por la “nacionalización del gas natural”, los bonos sociales o

transferencias monetarias directas a favor de la población pobre y la creación de alrededor de cuatro decenas de nuevas empresas públicas para efectivizar la intervención estatal en la economía y, recientemente, para la “industrialización con sustitución de importaciones”¹⁰. Este segundo periodo alcanzó su momento cumbre hacia el año 2014, cuando la renta petrolera escaló hasta 5.500 millones de dólares, principalmente por la exportación del gas natural a Brasil y Argentina. Aunque el dinero del gas controlado por el Estado prometía mucho, al final de cuentas tampoco hubo la ansiada transformación económica productiva.

A juzgar por los hechos, el retorno del Estado no fue un proceso arrollador de similar alcance a la Revolución Nacional de 1952. Ciertamente, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a tomar el control mayoritario sobre la renta petrolera, pero no así sobre la minería, la aurífera en particular, ni sobre las tierras del oriente boliviano. Al día de hoy, mientras el gobierno nacional tiene la última palabra sobre los ingresos hidrocarburiíferos, los mineros cooperativistas mandan sobre los dólares que genera la exportación de minerales a costa de graves daños al medio ambiente y los contemporáneos terratenientes del oriente cuando se trata de propiedades agropecuarias orientadas a los monocultivos y la agroexportación. La explotación y exportación del gas natural y los cultivos comerciales explican en gran medida el crecimiento económico experimentado en las últimas dos décadas del nuevo milenio, pero este crecimiento ha sido insuficiente para encaminarnos hacia la anhelada transformación de la matriz productiva nacional. Aunque la propaganda gubernamental no se cansa de repetir que la “industrialización avanza”, la cruda realidad es que la economía nacional no tiene ninguna posibilidad de sostenerse en pie sin los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales; es decir, sin la renta de los recursos naturales.

Entonces, la historia sentencia que Bolivia, a pesar de tener y extraer recursos naturales de alto valor, sigue arrastrando el lastre del atraso económico. Aunque la explotación de los recursos naturales ha traído consigo momentos de bonanza y verdaderas oportunidades para utilizar los ingresos extraordinarios como palancas de cambio y desarrollo, lo cierto es que no sufrió cambios nuestra dependencia de las economías extractivas.

Sin embargo, todo esto no quiere decir que estamos en la misma situación que hace veinte años o décadas pasadas. Por supuesto que la economía boliviana aumentó de tamaño, al igual que la población, las inversiones públicas, en alguna medida las inversiones privadas y el sistema financiero, entre otros. Y a la vez, la pobreza rural y urbana también disminuyeron gracias a las rentas petroleras, al igual que otros males socioeconómicos como la desnutrición de los niños o las altas tasas de mortalidad por falta de auxilio médico básico. Incluso sobresalen nuevos polos de crecimiento regional, como es el caso de Santa Cruz.

Pero, tal como vamos a ahondar más adelante, el atraso no equivale a decir que nos hemos congelado en el tiempo, sino que: i) seguimos teniendo alta dependencia de la extracción y exportación de los recursos naturales —es decir, del sector primario— en calidad de materia prima o insumos semi-procesados hacia los países desarrollados e industrializados, ii) comparativamente, seguimos rezagados con respecto al ritmo de las transformaciones económicas de países similares al nuestro; esto es, los países vecinos y de América del Sur, iii) el aparato productivo boliviano sigue teniendo características similares al pasado en cuanto a la escasa diversificación económica, iv) existe una brecha demasiado grande entre el enorme tamaño de los sectores económicos dependientes de los recursos naturales y el tamaño “alasita” de las actividades productivas que realmente crean valor (sector secundario y terciario).

El atraso económico también implica que nuestra mentalidad, cotidianidad, manifestaciones culturales y nuestras maneras de hacer política, están moldeadas por nuestras formas cuasi-arcaicas de hacer riqueza: extrayendo materia prima y apostando al corto plazo.

HABLEMOS DE LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Para hablar de atraso económico, tenemos que hablar necesariamente de la llamada “la maldición de los recursos naturales”. A primera vista, esta expresión puede causar cierta confusión en el lector y con mucha razón. Para mucha gente, es lógico pensar que tener recursos naturales es una bendición.

No tendría por qué ser una maldición. Se supone que extraer y comercializar los recursos de la naturaleza genera beneficios económicos, crecimiento y desarrollo. Si queremos ir un poco más lejos, crea oportunidades productivas, genera fuentes de empleo, reduce y alivia la carga de la pobreza. Incluso podría representar la oportunidad de crear nuevas fuentes de ingresos económicos. Esta creencia está enraizada en que, históricamente, los recursos naturales jugaron un papel muy importante para el crecimiento económico y el desarrollo de los países que, al día de hoy, están entre los más poderosos del mundo. Por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia o los países escandinavos emergieron como grandes potencias económicas de la era moderna gracias a la existencia, descubrimiento y explotación de recursos naturales de gran valor estratégico.

Sin embargo, varios estudios demostraron, en distintas partes del mundo, que tener recursos naturales no siempre es una bendición. Al contrario, en varios de los llamados países en vías de desarrollo como es el caso de Bolivia, sucede lo contrario; es decir, tener recursos naturales es una maldición. A este fenómeno también se lo conoce como “la paradoja de la abundancia”.

Existen varios estudios que abordan esta cuestión de por qué los países ricos en recursos naturales —países con abundancia de petróleo, minerales o tierras agrícolas— se desarrollan menos que los países en donde estos recursos no abundan en la misma medida. Algunas de las investigaciones se preocuparon por recolectar pruebas o evidencias empíricas y, sobre esa base, realizaron evaluaciones comparando distintos países entre sí, a partir de la información estadística cada vez más accesible con el avance de las plataformas digitales y las redes de conocimiento. Incluso existen estudios dedicados a teorizar o formular explicaciones que aspiran a ser sistemáticas y válidas para la generalidad de los casos. Al día de hoy, este tipo de estudios siguen rastreando posibles explicaciones sobre el funcionamiento general de las economías de los países ricos en recursos naturales pero pobres en desarrollo y crecimiento económico.

Los bolivianos sabemos por experiencia propia que los recursos naturales no representan necesariamente prosperidad. La vivencia en carne propia nos confirma que, en efecto, la abundancia de recursos naturales ha sido una maldición para la economía nacional

de mediano y largo plazo. Nuestra historia es la historia de un país rico en minerales, hidrocarburos, tierras y bosques; pero pobre porque tuvimos y seguimos teniendo un aparato productivo débil y obsoleto, una economía incipiente y seguimos dependiendo de la explotación permanente de las riquezas naturales. Hasta el presente, en Bolivia la abundancia de recursos naturales coexiste con el atraso económico. Es por demás conocido también que nuestra historia económica ha sido moldeada a la imagen y semejanza de los “Barones del estaño”, los terratenientes altoandinos del siglo pasado, el Estado nacionalista y dueño de los recursos naturales y, en el nuevo milenio, a la imagen del neoestatismo, los terratenientes del oriente y los cooperativistas mineros. En otras palabras y sin remontarnos a los tiempos de la colonia española y la era republicana del siglo XIX, nuestra historia contemporánea es una historia de ciclos de auges o bonanzas basados en la explotación de minerales e hidrocarburos, seguidos por períodos de crisis y colapsos cuando se agotan los recursos naturales o se derrumba el mercado internacional de las materias primas.

HABLEMOS TAMBIÉN DEL “RENTISMO”

Hablar de la maldición de los recursos naturales sería incompleto si no hablamos de otro fenómeno económico estrechamente emparentado e interconectado: el rentismo. Mientras el primer concepto pone el énfasis en el atraso económico y crecimiento lento que sufren los países con abundancia de recursos naturales, el rentismo refiere a un sistema económico donde una parte significativa de los ingresos proviene de la renta; es decir, de los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales. Dicho de otra forma, la maldición llega a ser la reproducción cíclica de un sistema económico altamente dependiente de la renta.

Como se puede deducir fácilmente, el término “rentismo” deriva de la palabra “renta” que, en simple, es el nombre que recibe el ingreso generado por la explotación de los recursos naturales. Sin entrar todavía en definiciones y conceptos económicos, diremos que la palabra “renta” está asociada a la idea de conseguir un beneficio generoso y rápido por ser dueño de algo o por tener control sobre algo. En el contexto de este

estudio, ese algo son los recursos naturales. Quien es dueño o tiene control sobre los recursos naturales obtiene una renta.

En la realidad actual boliviana, las rentas de mayor valor monetario provienen de tres tipos de recursos: gas natural, tierra y minerales. A su vez, el control de estos recursos, por lo tanto, también de las rentas, está dividido entre tres actores económicos: i) el Estado en calidad de dueño del gas natural a nombre de todos los bolivianos, ii) los grupos de poder económico de Santa Cruz que tienen propiedad y control sobre extensas tierras de monocultivos y ganadería, y iii) los mineros cooperativistas que controlan especialmente la minería del oro. Si volteamos la mirada hacia todo lo que queda al margen de estos tres sectores, nos vamos a encontrar con un aparato productivo fragmentado, marginal y empobrecido; donde la mayoría de los bolivianos no tiene más opción que ganarse la vida de mil maneras. La mayoría de los bolivianos no dependemos directamente de la renta, porque no somos parte del aparato burocrático del Estado, ni dueños de la tierra de monocultivos, ni tenemos acceso a las concesiones mineras. No por nada, dos de cada tres bolivianos se ganan la vida como comerciantes, cuentapropistas o transportistas.

En suma, la economía boliviana es un sistema rentista; es decir, que depende de la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales. Aunque la mayoría de la gente no vive directamente de la renta, indirectamente, de una u otra manera, todos estamos atrapados dentro de un único sistema económico: el rentismo boliviano.

El rentismo tiene una lógica y un comportamiento con características propias que trascienden más allá del ámbito económico y se reproducen en otros ámbitos de la vida individual y colectiva: en lo social, cultural, político y otros. Son comportamientos orientados a la obtención de beneficios de cualquier tipo y sin necesidad de contribuir de manera significativa a la creación de tales beneficios. Cuando la lógica rentista está en nosotros, buscamos aprovecharnos de cualquier circunstancia, situación o resquicio que podamos encontrar en las normativas vigentes, los subsidios creados con fondos públicos, las políticas proteccionistas o en los privilegios gubernamentales. Basta ver cómo la gran mayoría de los políticos con mentalidad rentista luchan despiadadamente por tomar control del aparato

público, porque saben que si tienen éxito, podrán meter la mano en las arcas del dinero público y sacar el máximo beneficio. La lucha política-partidaria se vuelve más encarnizada cuando las oportunidades afuera del Estado son marginales, informales y escasas. Cuando la alternativa es la calle, los políticos rentistas o pseudo-políticos luchan y lucharán con todo para aferrarse al poder o para llegar al mismo. Por supuesto que existen políticos con verdadera vocación de servicio a la gente, pero lamentablemente son la excepción.

La lógica rentista también puede afectar la cultura y la mentalidad de muchas personas, generalmente de forma negativa cuando se trata de perseguir cambios. La gente que vive de los ingresos rentistas puede llegar a tener fuertes inclinaciones hacia el conservadurismo y la complacencia con el estado actual de las cosas. Por esta razón, no debe sorprendernos que muchos bolivianos beneficiarios del rentismo, así sea en forma de un bono social pequeño, acaban dando la espalda a los grandes problemas del país. Por su lado, quienes no viven de la renta están demasiado ocupados ganándose la vida, a veces demasiado sumergidos en sacar adelante sus negocios y emprendimientos, o cuidar de no perder sus fuentes de empleo; porque saben muy bien que su trabajo tiene desventajas frente al dinero fácil del sector rentista. En última instancia, tanto los que viven directamente de la renta como los que no, pueden estar reproduciendo el mal hábito boliviano de vivir ignorando o, lo que es peor, tolerando el atraso de la economía nacional, sin siquiera cuestionar hechos inaceptables como la corrupción, el derroche de la bonanza o la construcción de “elefantes blancos”. Esta lógica rentista es peligrosa porque acaba siendo funcional para el continuismo de la maldición de los recursos naturales.

HABLEMOS SIN SER ECONOMISTAS

Hasta aquí, hemos invitado al lector a que hablemos del atraso económico¹¹, la maldición de los recursos naturales y el rentismo; pero, además, la propuesta es que hablemos sin ser economistas. Tal como anuncia la portada, este libro intencionalmente está planeado y escrito para tratar de comunicarnos sin las barreras que obstaculizan la colaboración

entre todos nosotros, entre dos o más campos de conocimiento y, concretamente, entre la economía y la sociedad en su conjunto. En todo momento, se hizo esfuerzos por escribir y reescribir cada uno de los capítulos en un lenguaje lo más claro, accesible y comprensible posible para la mayoría de los lectores interesados en las cuestiones económicas de nuestro país. También se cuidó de que el lector no tenga la necesidad de tener conocimientos específicos o avanzados en economía. Pero no por ello se dejó de utilizar las herramientas analíticas, los conceptos económicos propios de distintas escuelas de pensamiento o las técnicas de análisis cuantitativo que se utilizan en la disciplina económica.

La idea de que hablemos de economía sin ser necesariamente economistas tiene una justificación básica, pero no siempre bien ponderada. La economía afecta a todas las personas en casi todos los aspectos de la vida privada o pública; en consecuencia, no debe ni tiene que ser algo exclusivo de los economistas. Cuando los gobiernos toman decisiones económicas, éstas tienen consecuencias para toda la población y los impactos — no importa si son positivos o negativos— pueden llegar a ser generalizados. Además, la economía no existe en solitario como lamentablemente piensan muchos economistas, sino que está inexorablemente interconectada a otros campos del conocimiento como la política, la historia, la sociología, el medioambiente, el derecho y varios otros. Aquellos economistas que pretenden explicar todo por sí mismos y sin entrar en colaboración con otras disciplinas y el público en general, acaban proponiendo diagnósticos parcializados o, peor aún, recetas equivocadas. Por eso, hablar entre todos sobre los temas económicos es fundamental porque son problemas que nos importan a todos y, por lo tanto, debería ser un ejercicio cotidiano entre todos los bolivianos.

Hay una razón más para hablar entre todos. La economía aplicada a los recursos naturales y las teorías de desarrollo que abordan temas como el atraso económico de los países son campos de estudios mucho menos reservados para los economistas. Las problemáticas a tratar son mucho más enmarañadas de lo que suele modelarse en econometría, más complejas que las ecuaciones matemáticas utilizadas por los economistas y más exigentes en cuanto a esfuerzos de análisis sistemático.

La necesidad de entablar colaboraciones interdisciplinarias y comunicarnos entre todos sin tecnicismos, jergas o lenguajes redundantes es permanente, pero en tiempos como el presente se convierte en una necesidad apremiante. De hecho, este libro ha sido escrito con un sentido de urgencia, con la expectativa de que sea un pequeño aporte con sentido de oportunidad y pertinencia para contribuir, en alguna medida, al debate público para trazar juntos soluciones duraderas. Después del fin de la bonanza del gas natural y el fracaso del litio, estamos ingresado a un escenario de crisis, donde los problemas económicos están causando dolores de cabeza dentro de cada familia, de modo que hablar del tema no solo es inevitable sino obligatorio para todos los bolivianos.

Para concluir este apartado, me parece relevante compartir una recomendación del economista coreano Ha-joon Chang, uno de los exponentes de la escuela heterodoxa más reconocidos y respetados dentro y fuera del mundo académico. Es autor de libros como *“23 cosas que no te dicen sobre el capitalismo”* o *“Economía para el 99% de la población”*¹², los cuales brindan conocimientos accesibles para los lectores interesados. En sus escritos y entrevistas, Chang no se cansa de reiterar que “la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas”.

POR QUÉ HABLAR AHORA

Hablar sobre los problemas económicos es un tema urgente y, a la vez, una necesidad histórica. Aunque no son pocos quienes creyeron que estábamos finalmente despegando, al calor de las historias de éxito contadas por políticos en el poder y los grupos económicos que se enriquecieron con el rentismo de las últimas dos décadas, no necesitamos ser economistas para darnos cuenta que los años de “vacas flacas” ya están aquí y llegaron para quedarse por varios años.

Desde una perspectiva histórica, importa debatir sobre los caminos de salida de la maldición de los recursos naturales porque, tal como hemos adelantado, no es un destino fatídico tallado en piedra. No tiene que ser una fatalidad ante la cual tengamos que paralizarnos y resignarnos. Incluso, sabiendo que el orden mundial nos impone grandes desventajas y roles

funcionales a los intereses de los países que están felices con que seamos un país periférico, haciendo el trabajo sucio de extraer y suministrar materias primas, existe suficiente espacio de maniobra para dar batalla desde nuestras habilidades, ventajas y capacidades productivas. Por supuesto que los cambios estructurales no dependen únicamente de esfuerzos bienintencionados, voluntades y optimismos, pero podemos ganar mucho terreno remangándonos la camisa para planear y hacer las cosas cuidadosamente.

Anotemos tres razones concretas sobre la necesidad de contribuir a la reflexión, diálogo y debate sobre el atraso económico y la maldición de los recursos naturales en Bolivia.

Primero, el debate sobre estas cuestiones dejó de recibir la atención que tenía antes del *boom* de la renta petrolera. A pesar de que América Latina y Bolivia tienen una larga tradición de reflexión cuestionadora sobre los problemas estructurales del subdesarrollo, destacando el pensamiento de la escuela “cepalina”¹³, la llegada al poder del MAS en el año 2006 tuvo un impacto negativo al respecto. Las discusiones sobre los grandes problemas nacionales fueron abandonadas paulatinamente, a medida que los burócratas se marearon con la bonanza de la renta y los movimientos sociales fueron cooptados. De muchas maneras, los debates fueron funcionalizados a los intereses partidarios y proyectos político-electorales del MAS. Recordemos que los llamados “librepensantes” fueron expulsados tempranamente del gobierno de Morales. Y los protagonistas de la izquierda boliviana que se quedaron dentro del aparato gubernamental pasaron a ocupar cargos en la burocracia estatal, lo que a menudo les condujo a la defensa ciega y acrítica de los desaciertos del gobierno nacional y al abandono de las banderas de lucha apoyadas por la mayoría de sus votantes.

Segundo, aunque los recientes fracasos gubernamentales de transformación de la matriz productiva son atribuidos con argumentos totalmente válidos a la incompetencia del MAS, también debemos reconocer que desde la acera opuesta se están cometiendo los mismos errores que los defensores engegucidos del gobierno. Con toda razón, los opositores y detractores políticos acusan al gobierno nacional de haber despilfarrado los ingresos multimillonarios de la renta del gas

natural, por ejemplo, al haber construido “elefantes blancos”, infraestructuras sin utilidad productiva, obras con sobreprecios y muchos otros gastos insulsos. Aunque la mayoría de los reproches tienen sustento en los hechos, el riesgo está en creer que un cambio de las autoridades políticas resolverá una buena parte de los problemas económicos. En el mejor de los casos, cambiar a las actuales autoridades podría ser apenas el primer paso de varios que deberían estar contemplados en un paquete mucho más amplio de reformas estratégicas. Para entender la importancia de pensar más allá de las elecciones basta recordar que el “gobierno transitorio” de Jeanine Añez, que había condenado el derroche y la corrupción, acabó aprobando reformas económicas que canalizaron el dinero público a los bolsillos de intereses particulares.

Tercero, reconstruir el aparato productivo nacional requiere medidas económicas distintas a las típicas recomendaciones que hacen los organismos internacionales y que vayan más allá de las soluciones centradas en la macroeconomía. Como vamos a explicar en detalle, una de las consecuencias negativas de la maldición es la desindustrialización o el achicamiento de los rubros productivos no rentistas, como son las manufacturas, la pequeña industria, las cadenas de transformación con valor agregado y los sectores exportadores de bienes procesados. Estas economías no crecen necesariamente en la misma dirección y a la par de las economías rentistas, como presuponen algunos economistas. Por ejemplo, la pequeña industria de El Alto retrocedió durante los años de bonanza del gas al dejar de exportar bienes manufacturados como prendas de vestir y calzados hechos en pequeños talleres familiares. Al final de cuentas, la bonanza del gas acabó afectando negativamente a este tipo de economías porque incentivó la migración de sus trabajadores hacia rubros más rentables relacionados con la dinámica rentista, como las importaciones, el contrabando, el comercio, el transporte público o, incluso, el empleo del sector público. La abundancia de ingresos rentistas facilitó el crecimiento del empleo público y sectores conexos como los servicios de alimentos o restaurantes, transporte y hotelería, pero no estimuló industrias sin chimeneas como el turismo. Una desventaja del crecimiento condicionado y dependiente de

economías rentistas es que también todos los rubros entran en crisis cuando acaba la bonanza de recursos naturales.

Entonces, hablar del atraso económico y la maldición de los recursos naturales es una obligación y una responsabilidad histórica para todos. Es una cuestión urgente para todos los bolivianos. Estando más involucrados, estaremos más y mejor informados y podremos influir de mejor manera sobre las decisiones económicas. La gente debe tener sus propias respuestas sobre qué hacer con el gasto público que, si bien ayudó a dinamizar la economía, ahora depende del endeudamiento externo e interno que todos los bolivianos tendremos que pagar en las próximas tres a cinco décadas. Las supuestas soluciones que se están aplicando son las del gobierno de turno o de los grupos de poder y el problema fundamental con estas soluciones es que están hechas a la medida de sus intereses sectoriales o particulares. La clase gobernante no hará nada que ponga en riesgo su control del poder político y los sectores privados que lucran con el modelo vigente no se cansarán de divulgar sus propuestas como si fueran las que mejor responden a los intereses de todos los bolivianos.

OBJETIVOS DEL LIBRO

Bajo este entendido, el objetivo de este libro es responder a una pregunta central: En Bolivia, *¿cómo se explica la maldición de los recursos naturales y, consecuentemente, su relación con el rentismo y el atraso económico?* Para responder esta pregunta, se requiere tener una imagen general, pero clara, sobre los ejes principales del sistema económico boliviano, su organización y, por supuesto, sus mecanismos de funcionamiento. Entender cómo está organizado y cómo funciona nuestro sistema económico es fundamental para descifrar cómo se genera la riqueza. Todos tenemos una imagen bastante acertada sobre la economía nacional, pero no conocemos del todo el contexto, los antecedentes y los cambios recientes. En el lenguaje de la academia, estas cuestiones son abordadas como temas de discusión teórica o empírica sobre los patrones de acumulación económica o modelos de crecimiento y desarrollo económico.

Como una interrogante secundaria, no por ello menos importante, está una pregunta inevitable y siempre esquiva: *¿Cómo podemos revertir la maldición de los recursos naturales?* Es decir, *¿cómo podemos salir del atraso y encaminarnos decisivamente hacia un aparato productivo reestructurado y sostenible?* No existen respuestas fáciles y tampoco la pretensión es ofrecer una receta única y rígida para problemas nacionales por demás complejos e intrincados. Sin embargo, este libro plantea y propone varios puntos de partida para alimentar la reflexión y el diálogo informado.

CONTENIDO

Además de esta sección introductoria, el contenido está organizado en siete capítulos. El primero acerca al lector a los principales conceptos y definiciones que se utilizan en el desarrollo de los ejes temáticos planteados. Para una lectura fluida, deliberadamente se dejaron en un segundo plano las cuestiones de estilos de citación o técnicas propias de la academia que privilegian el uso del lenguaje formal y referencias bibliográficas que interrumpen la lectura. Esto no significa, sin embargo, que lo escrito no haya pasado por una revisión cuidadosa y cruzada. Este primer capítulo introduce los estudios previos más relevantes como el modelo primario-exportador, la “enfermedad holandesa”, las definiciones de “renta”, “rentismo”, actor rentista, atraso económico y cierra abordando las preguntas básicas de economía relacionadas con los temas centrales del libro. El Capítulo 2 revisa escuetamente la historia económica del siglo XX como un proceso largo de dependencia de los recursos naturales, fundamentalmente del estaño y cómo es que, a pesar de algunos esfuerzos meritorios, no logramos alcanzar la diversificación y la ampliación de la base productiva. Afortunadamente, existen varios y excelentes libros sobre la historia económica para los lectores que estén interesados en profundizar sus conocimientos. Aquí, la revisión es escueta porque no es el principal propósito, pero qué duda cabe de que la perspectiva histórica es fundamental para entender los problemas en curso.

El Capítulo 3 presenta los elementos centrales que configuran la composición de la economía boliviana en lo que va del siglo XXI. Aborda el periodo 2001-2023, durante el cual el estaño pierde protagonismo y en su lugar aparecen tres sectores claves: el gas natural, la agricultura mecanizada del oriente y la minería, particularmente el oro en la zona andina. Muestra la persistencia de la dependencia de los recursos naturales en un contexto altamente influenciado por la bonanza petrolera, el lento, pero sostenido, crecimiento de la agricultura de exportación y la irrupción imprevista del oro en la última década. El Capítulo 4 se concentra específicamente en temas económicos del periodo 2001-2023, identificando, midiendo e interpretando la información económica en función a los elementos explicativos relacionados con los conceptos de la maldición de los recursos naturales, el rentismo y el atraso. Se utilizan metodologías internacionales de evaluación sobre la dependencia de los recursos naturales exportables, los impactos de la bonanza petrolera sobre economías no rentistas, el rezago comparativo de Bolivia con respecto a los países vecinos, entre otros. Se problematizan los temas emergentes que tienen importancia para la actualidad. En definitiva, esta sección expone las evidencias de las consecuencias de la maldición de los recursos naturales y las interconexiones con el rentismo.

El Capítulo 5 se concentra en el campo político, pero desde una entrada económica. Baraja la proposición de que la renta de los recursos naturales tiene una influencia negativa sobre el desempeño de la política y sobre la calidad de las políticas económicas. Concentrándonos en el periodo 2006-2023, exponemos varios argumentos para explicar la naturaleza de las interacciones entre la economía, la política y el Estado en su papel de tomador de decisiones. Muestra cómo la renta es utilizada para la reproducción del poder político por parte de los gobernantes, lo que a su vez conlleva al deterioro y a la corrupción del aparato estatal y de las instituciones políticas fundamentales. El Capítulo 6 no solamente hace un balance de los principales elementos de discusión del libro, sino que pretende ser un punto de llegada donde desembocan los principales temas trabajados.

Esto implica que también contiene elementos de discusión abierta para tender puentes de diálogo más allá de esta publicación.

El Capítulo 7 retoma la pregunta esquivada de cómo podemos salir del atraso y la maldición de los recursos naturales. En esta sección, para evitar gastar hoja y tinta o hacer perder su valioso tiempo al lector, se ha hecho un esfuerzo consciente de no repetir lo que la mayoría dice o escucha cuando se habla de propuestas. Por lo general, las propuestas que conocemos consisten en recomendaciones o formulaciones —sean extensas, cortas o escuetas— con las que resulta difícil estar en desacuerdo. A veces no dejan de ser listas de buenos deseos sobre qué hacer en el corto plazo, pero la mayoría de los bolivianos sabemos que las soluciones de fondo deben plantearse con la mirada puesta en el mediano y largo plazo. Esto último es a lo que aspiramos. Por último, el apartado de consideraciones finales redondea algunos mensajes de cierre.

1

EXPLORANDO EL TERRENO: MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES ECONÓMICAS

INTRODUCCIÓN

Al hablar de América Latina, tenemos la imagen de una región del mundo bendecida con vastos recursos naturales, que van desde los minerales en las profundidades de las montañas de la cordillera de Los Andes, petróleo en las zonas costeras y tierra adentro, extensas tierras fértiles, biodiversidad incomparable, hasta los bosques tropicales de la Amazonia. La explotación masiva de estas riquezas naturales comenzó con los colonizadores europeos y, desde entonces, la economía extractivista se ha instalado como el elemento rector y ordenador de la vida de los países de la región. Sin embargo, la extracción y la exportación de las materias primas —como el estaño de Bolivia, el café de Brasil, el cobre de Chile o el petróleo de Venezuela— no condujeron necesariamente a la región por la senda del desarrollo con economías fuertes y estables, socialmente incluyentes y ambientalmente sostenibles. Esta contradicción entre la existencia de grandes reservas de recursos naturales, por un lado, y el bajo desarrollo económico, por otro, es lo que denominaremos como “la maldición de los recursos naturales” o la “paradoja de la abundancia de los recursos naturales”.

Macondo sería una representación en clave literaria de cualquier país de América Latina rico en recursos, pero signado por fracasos. La novela *“Cien años de soledad”* de Gabriel García Márquez tiene como tema central el surgimiento, crecimiento, esplendor, declive y la desaparición de Macondo. Es la historia ficticia de un pequeño y apacible pueblo que gradualmente queda expuesto a la civilización y el progreso del mundo externo, donde el concepto de riqueza toma forma con el descubrimiento del oro y otros metales preciosos.

Con el tiempo, un ambicioso José Arcadio se convierte en terrateniente de la noche a la mañana, al apoderarse de las tierras de su padre y de otras familias del entorno local. Uno de sus herederos de sangre e igual de codicioso, Aureliano II, llega a acumular fortunas “sin esfuerzo y a puros golpes de suerte”¹. De esa manera, encuentra la llave que le abre puertas para pasar a formar parte de la clase privilegiada que vive explotando el trabajo de los desposeídos. Años más tarde, las rencillas y divisiones internas acaban conduciendo al empobrecimiento moral de los pobladores y la explotación desigual, conflictiva y caótica de los recursos naturales empuja a la decadencia económica. Todo esto condena a Macondo a una destrucción inevitable y ruina definitiva.

Bolivia es parte y protagonista de historias similares. La historia económica del siglo XX, probablemente la más estudiada y la mejor documentada de nuestra era republicana, es un testimonio irrefutable de la permanente dependencia de las exportaciones de materias primas, funcionamiento defectuoso del aparato económico y reproducción de sociedades desiguales, lastimadas y fracturadas. La historia nos dice que los tiempos de bonanza se parecen a la “peste del insomnio” de Macondo que causa la pérdida de la memoria del pasado, incluso llegando a olvidar el nombre de las cosas y los registros lingüísticos. Al parecer, los momentos de auge tienen, pues, efectos perversos sobre nuestra conciencia y memoria colectiva de los problemas económicos del pasado, razón por la que abandonamos con relativa facilidad o dejamos en un segundo plano la necesidad histórica y estratégica de encarar y superar el atraso económico.

Con este telón de fondo, pasamos ahora a presentar el contenido que sigue. El propósito de este capítulo es introducir conceptos, definiciones y elementos económicos necesarios para abordar la temática central del libro: la maldición de los recursos naturales, el rentismo y el atraso económico en Bolivia. La intención de esta sección es acercar al lector a algunas de las herramientas conceptuales y analíticas que se manejan en la disciplina económica y que vamos a utilizar en los siguientes capítulos.

LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Se conoce como “la maldición de los recursos naturales”² a aquellas situaciones o realidades donde los países ricos en recursos naturales tienen o acaban teniendo un desempeño económico pobre o incluso negativo. Estamos hablando de economías que crecen muy lentamente, se encuentran estancadas o que incluso sufren retrocesos. Históricamente, no siempre ha sido así y tampoco es una fatalidad absoluta de la cual no se pueda escapar, sino que existen situaciones bastante frecuentes en que países con abundancia de recursos no renovables como la minería o el petróleo, experimentan estancamientos o rezagos económicos, generalmente en el mediano y largo plazo.

La primera vez que la expresión “maldición de los recursos naturales” (en inglés, *resource curse*)³ se utilizó en publicaciones sobre economía fue en 1993, por el economista inglés Richard Auty. Este autor publicó un estudio sobre seis países exportadores de minerales, analizando varios inconvenientes registrados y los efectos devastadores que tuvieron sobre la economía. Bolivia fue uno de los seis países estudiados por Auty, junto con Perú, Chile, Jamaica, Zambia y Papua Nueva Guinea. Posteriormente, aparecieron otros estudios y publicaciones, exponiendo resultados basados en datos empíricos sobre la existencia de muchos países pobres que, teniendo abundancia de recursos naturales, no habían dado pasos firmes hacia el desarrollo con crecimiento económico⁴.

Estos estudios empíricos y otros que se esforzaron en teorizar el fenómeno de la maldición de los recursos naturales tenían como antecedente un caso histórico muy influyente. Se trata de la experiencia de los Países Bajos (Holanda) en la década de 1960, cuando se produjo el descubrimiento de grandes reservas de gas natural y petróleo, tanto mar adentro como en tierra firme. Fue un hallazgo que superó todas las estimaciones y expectativas previas de los holandeses. Pronto, la explotación petrolera generó multimillonarios ingresos en un periodo de tiempo muy corto. Inicialmente, los neerlandeses se beneficiaron con la expansión generalizada de la renta del gas y petróleo, pero al poco tiempo tomó fuerza un fenómeno que habría de llamar la atención de propios y extraños.

El auge del sector petrolero y rubros directamente relacionados, había afectado negativamente al sector industrial de los Países Bajos. En lugar de crecer, al igual que los sectores en alza, las industrias y manufacturas retrocedieron notoriamente a lo largo y ancho del país. Varios años después, este comportamiento económico recibió el nombre de “la enfermedad holandesa” (*“Dutch disease”*, en inglés), término que fue utilizado por primera vez en 1997 en una publicación de la revista internacional *“The Economist”*⁵.

Después de años de debate y estudios especializados, prevaleció una explicación sobre las demás a la hora de explicar de forma consistente el caso de los Países Bajos. Los economistas que trabajaron sistemáticamente sobre el caso, intentando descifrar este fenómeno llegaron a la conclusión de que el auge petrolero había provocado el aumento del gasto nacional tanto en el sector público o gubernamental como en el sector privado, causando así una “apreciación” significativa en el “tipo de cambio real”, lo que a su vez ocasionó la recesión de los rubros económicos no relacionados con el auge del petróleo y del gas natural⁶. En otras palabras, la economía de los Países Bajos había experimentado un proceso de “desindustrialización” a causa del aumento repentino de la renta petrolera. Para decirlo de otra manera, la renta petrolera generó un incentivo perverso, vía mecanismos de mercado, que acabó afectando negativamente a los sectores o rubros productivos no relacionados con los sectores florecientes.

La experiencia de los neerlandeses ofrece valiosas lecciones que nos enseñan cómo el fenómeno de la maldición de los recursos naturales puede surgir a partir del descubrimiento de abundantes reservas de petróleo en el fondo del mar y tierra adentro. Sin embargo, varios otros estudios que se inspiraron en esta experiencia sostienen también que la “maldición”, en realidad, puede aparecer como una consecuencia de muchos factores relacionados con cualquier tipo de aumento sustancial de las divisas de un país. Un ejemplo bastante común es una subida repentina de los precios internacionales de los recursos naturales que ya se estaban extrayendo y exportando. No necesariamente tiene que tratarse del descubrimiento de nuevas y grandes reservas de riqueza natural. También puede ocurrir como resultado de una combinación del aumento de precios

internacionales y del aumento de los volúmenes de explotación. En efecto, en distintos momentos de la historia, los precios altos de los minerales influenciaron y decidieron la suerte de muchos países mineros, al igual que de los países petroleros. El *boom* del café colombiano en la primera mitad del siglo XX es otro caso que ha sido estudiado por haber relocalizado a los trabajadores del sector manufacturero hacia la emergente agricultura de exportación, causando el declive de las textiles y el auge de éste último.

La llegada de divisas en forma de inversiones extranjeras directas (IED) también puede generar un comportamiento económico negativo para los negocios nacionales. Por lo general, la inversión extranjera se interesa en los sectores extractivos, antes que en los sectores productivos o industriales. La mayor parte del capital extranjero suele estar invertido en el sector petrolero, minería o agroindustria, y muy poco en los rubros creadores de valor a partir de procesos de transformación o negocios intensivos en el empleo de la fuerza laboral. Además, el capital extranjero generalmente está concentrado en las llamadas “ventajas tecnológicas exógenas”⁷ que adoptan los negocios de propiedad de los extranjeros, lo que puede llegar a poner en desventaja a los negocios de propiedad de empresarios nacionales. El hecho es que las inversiones extranjeras, por lo general, se caracterizan por ser intensivas en el uso de capital y tecnología, por lo que no generan necesariamente impactos positivos sobre el empleo de los trabajadores nacionales, ya que las nuevas tecnologías requieren de trabajadores calificados y suelen tener alto potencial para desplazar o sustituir a los trabajadores. Cuando los modelos de negocios son intensivos en el uso de tecnologías y conocimiento, no crean o crean pocas oportunidades de empleo para los trabajadores nacionales.

Estas dinámicas pueden acentuar el carácter dual que suelen tener las economías de países en vías de desarrollo, entre pocos rubros exitosos y la mayoría signada por fracasos. Incluso existen casos de países asiáticos que atravesaron por situaciones similares a la “enfermedad holandesa”. En 2004, países como Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y Maldivas sufrieron los efectos catastróficos de un tsunami de magnitud 9,1-9,3 desencadenado por un terremoto submarino. Las olas alcanzaron alturas de

hasta 30 metros, arrastraron poblados enteros y cobraron la vida de más de 230 mil personas en 14 países⁸. Este desastre generó una respuesta humanitaria a gran escala para apoyar la recuperación de los países y ciudades devastadas. Sin embargo, un tiempo después, la llegada repentina de miles de millones de dólares de todas partes del mundo tuvo un efecto económico ya conocido para el lector: causó entre los países afectados procesos inflacionarios que afectaron negativamente la rentabilidad y factibilidad de los rubros productivos del sector manufacturero e industrial.

Aunque el caso de los Países Bajos sigue siendo el más estudiado, esto no quiere decir que fue el primer fenómeno económico con estas características. Los libros de historia ofrecen testimonios de grandes problemas de estancamiento que sufrieron España y Portugal en la época de la colonización durante el siglo XVI. Los metales preciosos, fundamentalmente la plata extraída de las minas de Potosí, tuvieron un impacto indeseado sobre varios componentes de la estructura económica de los españoles, provocando procesos inflacionarios con efectos similares a la “desindustrialización” de la historia contemporánea. La dependencia del constante flujo de los abundantes y baratos metales preciosos provenientes de las minas de la colonia favoreció al aumento de la riqueza y poder de la monarquía española, concentró las tierras en manos de una élite minoritaria, pero desaceleró y obstaculizó el crecimiento económico general de España, en comparación con otros países europeos de la misma época. Paradójicamente, a pesar de haberse beneficiado con la abundancia de la plata de Potosí, la tierra de Cervantes quedó rezagada con respecto a sus pares europeos.

En América Latina es fundamental guardar en la memoria los estudios influyentes de los economistas Prebisch y Furtado, quienes son considerados como los padres de la tesis de que la dependencia de las exportaciones de materias primas tiene una tendencia en el tiempo a perpetuar las estructuras económicas subdesarrolladas y desiguales en los países de la región. Fueron los pioneros en el pensamiento latinoamericano al sostener que sufrimos un atraso sistemático y estamos atrapados en el papel de proveedores de recursos naturales a las economías industrializadas y que, bajo estas circunstancias, no existían

oportunidades para el desarrollo industrial y la diversificación de las economías nacionales⁹. Aunque algunos estudios posteriores desestimaron la teoría de la “dependencia” de Prebisch, en el sentido de que no existiría un deterioro significativo de los términos de intercambio entre las exportaciones de materias primas e importaciones de productos manufacturados, la discusión no está cerrada por completo. En respuesta a la tesis planteada por su contemporáneo, Furtado abogó por la necesidad de promover políticas de industrialización y sustitución de importaciones en los países de América Latina, junto a la diversificación productiva, inversión en infraestructura y reducción de desigualdades sociales. Estas ideas influyeron en proyectos nacionalistas de desarrollo endógeno, cuyos resultados, décadas después, fueron más bien ambiguos.

Probablemente, la experiencia de Venezuela es el caso emblemático de la maldición de los recursos naturales en América Latina. En su mejor momento, este país llegó a producir anualmente 150 millones de toneladas de petróleo¹⁰. En sí mismo, este dato dice poco o nada, pero si comparamos con 2,4 millones de toneladas de combustibles importados por Bolivia en 2023, caeremos en cuenta del enorme tamaño y valor que todavía tiene el sector petrolero del país gobernado ahora por Nicolás Maduro. Aunque a partir del 2019 sufrió sanciones económicas internacionales en forma de bloqueos a la exportación petrolera, el 2023 llegó a exportar por encima de 40 millones de toneladas de petróleo crudo. Y a pesar de este poderío exportador, Venezuela es una de las economías latinoamericanas más disfuncionales y problemáticas no solo de la región sino del mundo, al grado que un problema cotidiano que literalmente paraliza a la tierra de Simón Bolívar es nada menos que la escasez de la gasolina en las estaciones de servicio. La gente, en lugar de emplear su tiempo productivamente, tiene que hacer filas en los surtidores de combustibles por varias horas y días a la semana.

CAUSAS DE LA “PARADOJA DE LA ABUNDANCIA”

Entre las explicaciones sobre la maldición o la paradoja de la abundancia de los recursos naturales, en particular, sobre los retrocesos que sufren los sectores que no están relacionados directamente con los rubros económicos dependientes del *boom* de los recursos naturales, destacan unas cinco. No existen razones para considerar estas explicaciones como competitivas entre sí o mutuamente excluyentes, sino que se complementan en muchos aspectos.

Una de las explicaciones más difundidas señala que un incremento generalizado de ingresos —a causa del auge de los recursos naturales exportables— ejerce presión tanto para la subida generalizada de los precios (incluyendo los costos de producción y los salarios) como para la reducción de los márgenes de ganancias o utilidades de los rubros manufactureros e industriales¹¹. El auge del rubro exportable y la falta de incentivos económicos para los demás rubros provoca un efecto de atracción de capital y trabajo hacia el rubro más rentable, lo que tiene un impacto contrario en el tiempo para la innovación tecnológica y la acumulación de conocimientos. Si un país vive de la renta durante periodos prolongados, significa que se irán deteriorando los dos elementos más valiosos para el crecimiento generalizado y equilibrado entre todos los sectores económicos: la innovación y el conocimiento.

Entre los autores que impulsaron esta explicación, destacan Matsuyama, Sachs y Warner¹², quienes se interesaron en estudiar los efectos de la especialización en la explotación de los recursos naturales y llegaron a la conclusión de que la misma no favorece a la acumulación del capital y el conocimiento. Según estos trabajos, la acumulación de las capacidades y habilidades productivas es fundamental para el desarrollo económico y será posible principalmente en los sectores productivos relacionados con los bienes manufacturados o procesados. Es decir, sostienen que los rubros extractivos no crean entornos favorables para la acumulación de los factores clave para el despegue de economías productivas. Esto sería así porque los beneficiarios de la renta saben y creen que no hace falta las innovaciones ni los ahorros, al menos mientras siga fluyendo la riqueza natural. Pero, el resultado final será inevitablemente el estancamiento económico.

Una versión extendida de estas ideas hace énfasis en que la renta o el dinero fácil provoca comportamientos predatorios, falta de transparencia en la rendición de cuentas, distorsiones en las políticas de precios y medidas proteccionistas innecesarias que, incluso, empeoran la desacumulación del capital humano y del capital social.

Una segunda explicación de la maldición de los recursos naturales aborda el problema de la volatilidad de las rentas o ingresos altos. Existen varias razones por las que el dinero abundante es pasajero y desaparece en los momentos menos esperados, siendo una razón de peso el comportamiento volátil del precio en los mercados globales. Por lo general, el precio internacional de las materias primas presenta muchos altibajos, especialmente si lo comparamos con los precios más estables que rigen para los bienes manufacturados e industrializados. Por esta particularidad, aunque un país tenga recursos naturales abundantes, la bonanza dependerá no tanto de la existencia y extracción de las reservas de la materia prima, sino de la subida de los precios internacionales. Cuando el precio sube, la extracción y exportación del recurso natural pueden llegar a trastocar todos los ámbitos económicos y no económicos, pero cuando el precio alto desaparece, más aún si es repentino, dejará atrás un país sin alternativas, como si fuese un campamento minero que no estaba acondicionado ni preparado para resistir los *shocks* externos. Como veremos en el siguiente capítulo, el tema de la volatilidad se estudia como una parte fundamental del modelo primario-exportador.

También existe otra explicación relacionada con la anterior. La bonanza eleva temporalmente el ingreso per cápita, lo que induce al consumismo; es decir, menor ahorro y menor inversión. Mientras el flujo constante de la renta continúe, el consumismo no será un problema económico, al igual que el ahorro escaso y la necesidad de nuevas inversiones. Los problemas surgirán cuando termine el ciclo de auge, ya sea por la caída de precios o por el agotamiento de la riqueza natural. En los periodos de declive de la renta, el consumismo se hace insostenible, especialmente para los países pobres o en vías de desarrollo. Autores como Rigobon¹³ analizaron y concluyeron que los efectos son similares en el sector público.

Durante los años de bonanza, los gobiernos se vuelcan a financiar y construir infraestructuras costosas y durante los periodos de crisis intentan resolver los problemas con mayor endeudamiento. Por supuesto, cuando el declive toca fondo, la deuda pública se hace insostenible y la inestabilidad económica y política se profundizarán para toda la sociedad.

Si la administración de los momentos de depresión económica sigue en las mismas manos de los gobiernos que incentivaron el consumismo en tiempos de bonanza, la política económica preferida de los políticos será el intervencionismo en la economía, fijando precios mínimos y máximos para tratar de combatir la escasez en el mercado. El control de los precios es problemático y en cualquier caso demanda una alta capacidad gubernamental para calibrar la intervención sobre la base de un conocimiento profundo del funcionamiento de los mercados, algo en que precisamente no destacan los países afectados. En su desesperación, también los gobiernos refuerzan o crean nuevos privilegios para los sectores exportadores que generalmente serán percibidos como estratégicos para revertir el declive. Pero al igual que en las políticas de control de los precios internos, el intervencionismo estatal sobre el comercio exterior exige una eficiencia del más alto nivel en la gestión pública y necesita de instituciones públicas consolidadas, algo en que tampoco destacamos los países atrasados.

Otra explicación de relevancia es la falta de inversión en educación o en capital humano para el desarrollo de los rubros no extractivos. Existen varios estudios sobre la relación inversa entre la abundancia de los recursos naturales y la baja calidad de la educación¹⁴. Cuando una sociedad transita por momentos de bonanza existe la creencia de que no se requiere un alto nivel educativo, mayor capital humano o mano de obra altamente calificada, por lo que se descuida la formación de cuadros humanos estratégicos para el crecimiento económico y diversificación productiva. A menudo, los países o sociedades ricas en recursos naturales pueden vivir relativamente bien durante largos periodos de tiempo, incluso sin necesidad de políticas económicas eficientes o grandes inversiones en educación de calidad, mientras que los países o sociedades pobres en recursos naturales no tienen demasiado margen

para equivocarse, por lo que la población sabe que arriesga su futuro si no apuesta decididamente por la educación. La importancia de la educación puede constatarse a partir de la experiencia de los países asiáticos que irrumpieron en la escena global como economías de alto crecimiento. Los cuatro dragones asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong¹⁵, son pruebas vivientes de que la acumulación de capital humano ha sido fundamental para la inserción en el mercado global, además de haber facilitado enormemente la incorporación y adopción de nuevas tecnologías.

Por último, una explicación que recibe atención creciente en los años recientes es la debilidad del Estado al momento de gestionar la bonanza. La abundancia de la renta por lo general debilita la institucionalidad pública, obstaculiza el funcionamiento de la sociedad en todas sus esferas según las leyes o reglas de juego establecidas, crea incentivos perversos para la competencia desleal en el mercado, aumenta la corrupción y la ineficiencia en la burocracia estatal. Además, el funcionamiento del aparato estatal no productivo o improductivo suele absorber una proporción excesiva de los ingresos generados por los recursos naturales. Aunque no siempre es así, el diseño del Estado y las cualidades de estadista de los gobernantes siguen siendo considerados como elementos centrales para extender los ciclos de explotación de los recursos naturales por medio de inversiones en exploración, cambios tecnológicos y conocimientos de aplicabilidad práctica. Los Estados rentistas descuidan la formación y el reclutamiento de servidores públicos eficientes para el manejo del aparato público.

Es interesante constatar que existen caminos de ida y vuelta entre la calidad de las instituciones públicas y la renta de los recursos naturales. Por un lado, la renta tiende a influir negativamente sobre las instituciones estatales y, de esa manera, frenará la adopción de reformas oportunas y la consolidación de las buenas prácticas. Por otro lado, la debilidad institucional tiende a empeorar la gestión económica de los recursos naturales y la ineficiencia generalizada del sector público. Este tipo de interacciones degenerativas está siendo motivo de nuevos estudios por parte de los politólogos interesados en descifrar el funcionamiento del aparato estatal y gubernamental en países altamente dependientes de la renta.

Para cerrar cabe subrayar que los estudios sobre la maldición de los recursos naturales se han concentrado en examinar sobre todo a nivel multi-país; es decir, comparando varios países e indagando relaciones directas e indirectas entre la abundancia de los recursos naturales y el crecimiento de las economías nacionales. Y, en contraste, los comportamientos económicos a nivel país o subnacional han sido menos estudiados. En Bolivia, existen pocos, pero valiosos estudios, cuyas conclusiones tienen grandes convergencias en el sentido de que la primacía de los rubros extractivos es un hecho histórico, vigente y desfavorable para la diversificación productiva o cambios estructurales en la economía nacional¹⁶. El fenómeno del gas natural es el menos estudiado, en parte porque es un hecho reciente, aunque se puede decir que está creciendo la atención de parte de varios actores: universidades, centros de investigación económica, organizaciones no gubernamentales, investigadores independientes, entre otros.

En los años recientes, los estudios desde el enfoque ambiental son mucho más conocidos y prolíficos que los propiamente centrados en el análisis económico. Este énfasis tiene su razón de ser en que la extracción de los recursos naturales genera costos ambientales evidentes e inaceptables, mientras que los impactos económicos negativos de la paradoja de la abundancia son más bien silenciosas y menos visibles, o simplemente no reciben suficiente atención pública. Las luchas ambientales pueden dar mejores resultados si están acompañadas por un mejor entendimiento económico de cómo funciona la maldición de los recursos naturales.

RENTA Y RENTISMO

En el apartado de arriba hemos introducido el concepto de la maldición de los recursos naturales y también hemos adelantado el uso de los términos “renta” y “rentismo” como si fueran sinónimos de ingresos provenientes por la explotación de los recursos naturales. Si bien esta acepción genérica es correcta, tenemos que aclarar que en economía la palabra “renta” tiene un significado más específico todavía. Se utiliza en referencia a los ingresos obtenidos que se originan en actividades

extractivas, y no como sinónimo de ingresos obtenidos en otro tipo de actividades como serían las relacionadas con el sector manufacturero o el industrial. Por lo tanto, no es una palabra intercambiable para referirse indistintamente a cualquier tipo de ganancia o utilidad empresarial.

En economía, la “renta” está asociada a la existencia de algún tipo de derecho o control de los recursos naturales explotados. Quién controla o tiene derechos sobre la explotación es el dueño y beneficiario de la renta. Por eso, hablar de renta conlleva la idea de *conseguir un beneficio por ser dueño de algo o por tener control sobre ese algo*, siendo generalmente ese algo los recursos naturales. Entonces, la renta es un tipo particular de ingresos, generalmente dando a entender que el dinero percibido proviene de poseer propiedad sobre algo o por tener acceso o control sobre algún tipo de recurso, fondo, bono social o beneficio gubernamental¹⁷.

“Rentismo” es una palabra que deriva de “renta”, y la gente suele utilizar para expresarse sobre las prácticas, habilidades o maneras de obtener dinero sin necesidad de grandes esfuerzos o trabajos duros y sacrificados. También se utiliza para referirse a la dependencia excesiva y permanente de ingresos fijos. Sin alejarnos de estos significados, para los propósitos de este libro, en esencia, entenderemos por “rentismo” como un *proceso sistemático de generación y obtención de ingresos económicos a partir de los derechos de propiedad, acceso o control de los recursos naturales* (y también de otros recursos). En este sentido, la “renta” es un ingreso asociado estrechamente a la generación de la riqueza por medio de la mercantilización de materias primas y esfuerzos no productivos o procesos reproductivos con poco o sin valor agregado. No debe confundirse con la manera en que, por ejemplo, una persona jubilada obtiene una renta mensual, generalmente después de haber trabajado toda su vida.

Para explicar con un ejemplo ilustrativo, pensemos en una empresa constructora que llega a un acuerdo con el dueño de un lote de terreno urbano para construir una casa de principio a fin bajo la modalidad de “llave en mano”, donde el objetivo del propietario es “rentar” o alquilar la casa. Una vez puesta en marcha la obra, el empresario constructor deberá volcar los diseños arquitectónicos del papel al terreno, contratar trabajadores,

comprar material de construcción, trabajar con contratistas especializados en obra fina y manejar otros asuntos propios del negocio inmobiliario. Una vez cumplido el contrato, recibirá un pago a cambio de haber construido la casa. Evidentemente, lo que vaya a recibir el contratista no será una renta porque son ingresos en retribución a su esfuerzo productivo de constructor. En cambio, el dueño del lote y ahora propietario de la casa, una vez que alquile el “activo”, percibirá una renta (o pago por el alquiler) y será un actor económico de tipo rentista, en el sentido de que obtendrá ingresos económicos fijos cada cierto tiempo, generalmente al final de cada mes. Aunque una parte de los ingresos generados será efectivamente en retribución al capital invertido, otra parte será la renta en razón de la propiedad del “activo” (la casa en cuestión).

Existen dos conceptos esclarecedores para insistir y remarcar un poco más las diferencias entre renta e ingresos. Mazzucato, en su libro *“El valor de las cosas: quién produce y quién gana en la economía global”*¹⁸ cuestiona la noción neoclásica de que el valor está determinado por el precio de mercado porque, además de ser instrumental para justificar por qué algunos son más ricos y otros pobres, no distingue entre el “valor creado” mediante procesos productivos basados en la transformación y el “valor extraído” a partir de la extracción de los recursos naturales. En estricto sentido, lo primero es ingreso y lo segundo no es otra cosa que renta.

En este libro nos interesa utilizar esta noción básica, aplicándola al fenómeno de la maldición de los recursos naturales que, en un sentido amplio, tenemos que ubicar dentro de un sistema de producción y reproducción económica; es decir, dentro de una organización económica. Para ello, no debemos perder de vista que la organización económica (y social) dominante del siglo XXI es el “capitalismo”, un término con el que estamos familiarizados tanto los economistas como los no economistas.

Hablamos de capitalismo básicamente cuando el capital o los medios de producción están en manos privadas, cuando el lucro es el motor de las empresas y el salario es la principal fuente de ingreso de los trabajadores. Se entiende que una sociedad capitalista es aquella que genera riqueza o excedentes económicos a través de la creación y agregación de valor, pero también existe

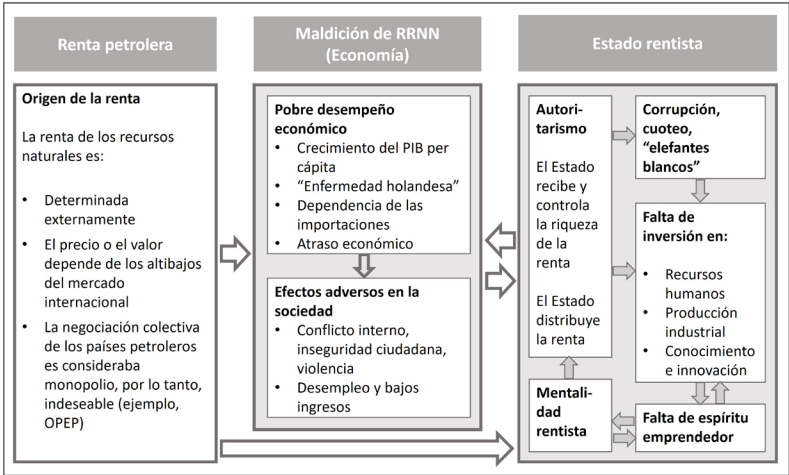
lo que se conoce como “capitalismo depredador o rentista”. Este último, es un tipo particular de capitalismo donde los ingresos y ganancias están principalmente conformadas por las rentas o el “valor extraído”. La propiedad y el control de los recursos generadores de la renta son fundamentales para apropiarse de la riqueza. En pocas palabras, se puede entender por “capitalismo rentista” al modo de organización económica donde la riqueza, fundamentalmente, se basa en el control y propiedad de los “activos”, llámese recursos naturales, y no tanto en procesos o esfuerzos productivos creadores de valor. Por lo tanto, se puede decir que el fenómeno de la maldición de los recursos naturales está íntimamente asociado con la existencia del “capitalismo depredador o rentista”

Este tipo particular de capitalismo forma parte de los planteamientos y temas de estudio de la “escuela heterodoxa”¹⁹ de la economía, es decir, de los economistas críticos con la “escuela ortodoxa” o los economistas neoclásicos considerados parte de la corriente dominante. Según esta última, la renta está definida como el “beneficio esperado debido a la escasez de competencia en el mercado”²⁰, que no sería otra cosa que el ingreso extraordinario proveniente del poder capitalista de las empresas para monopolizar el control de los mercados. Sin embargo, un problema con esta conceptualización que sutilmente justifica el enriquecimiento fácil, es que el fenómeno de la renta puede presentarse sin necesidad de mercados monopolísticos. Por ejemplo, muchos países pobres que exportan materias primas generan y viven de la renta, a pesar de que en el mercado internacional son uno más de numerosos competidores.

Para terminar esta sección, es importante introducir una última aclaración. A menudo el “rentismo” es criticado desde una mirada moralista, en el sentido de que un actor económico rentista obtiene ingresos extraordinarios sin esforzarse, sin trabajar de forma sacrificada, por lo que no merecería tales beneficios. Censurar moralmente a alguien o a actores rentistas —por ejemplo, a los mineros auríferos— no es un tema de interés de este libro por una razón básica: sumarse a la crítica moralista que está presente en muchos escritos puede ayudar en alguna medida a abrir el debate y agendar el tema, pero será más productivo si tratamos de entender *cómo el dinero de la renta*,

que no requiere eficiencia económica, causa estancamiento y atraso económico en Bolivia, no solo en el campo económico sino también político. Esto no quiere decir que las críticas no tengan valor para el debate, sino que el rentismo como fenómeno económico tiene un impacto negativo de alcance generalizado al paralizar, atrofiar y condenar a toda una sociedad al estancamiento y atraso económico permanente. Y tal como estamos atestiguando todos los días en nuestro país, el atraso político es también un fenómeno rentista.

ESQUEMA 1. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ESTADO RENTISTA



FUENTE: Adaptado de Emilie Rutledge, 2017. "Oil rent, the Rentier State/Resource Curse Narrative and the GCC Countries".

ACTORES RENTISTAS

Los rentistas son aquellos actores económicos que tienen control o propiedad sobre la renta o los ingresos generados por la explotación y exportación de los recursos naturales. El actor rentista tiende a estar involucrado en actividades sin altos niveles de eficiencia económica y existen actores rentistas tanto en el sector público como en el sector privado. El Estado que controla las reservas de los recursos naturales es rentista y no requiere tener derecho de propiedad, ya que puede ejercer autoridad por medio de la confiscación, la nacionalización o fijación de

patentes o licencias de usufructo. Del mismo modo, el sector privado que se apropia de recursos naturales, sean nacionales o extranjeros, es rentista y puede acceder a la renta mediante varios mecanismos, como la propiedad privada, la privatización, el despojo o apropiación de recursos naturales.

Como señalamos antes, en el lenguaje cotidiano se suele llamar rentista al jubilado que vive de su renta de vejez o a los grupos poblacionales que reciben algún tipo de bono de parte del gobierno. Según la definición económica adoptada aquí, no aplicaría ese significado en un sentido estricto. Si bien los jubilados reciben ingresos periódicos sin tener que trabajar, el origen de los fondos son los aportes que el propio trabajador realizó al fondo de pensiones durante su carrera laboral. Al margen de que la mayoría de los jubilados recibe una renta que no condice con su salario ni aportes, es un ingreso más que justificado por los aportes de toda una vida laboral. Lo más preciso sería llamar “pensión de jubilación” y no “renta”. En el segundo caso, tampoco parece un acierto llamar renta a los bonos casi simbólicos que reciben ciertas capas poblacionales.

Volviendo al tema, existen otro tipo de rentistas, además de los que se benefician con la tenencia o el control de los recursos naturales. El rentista financiero es un caso clásico estudiado tempranamente por el economista John M. Keynes (1936)²¹. Las principales fuentes de ganancia de los accionistas financieros son las utilidades obtenidas por los poseedores de los activos financieros; es decir, por las familias que tienen deudas con los bancos y las empresas que trabajan con créditos bancarios. Según Keynes, los banqueros lucran no en virtud de un “sacrificio genuino”, sino en razón de una supuesta escasez del capital financiero, lo que justificaría la existencia de un costo para el acceso a los fondos y del papel facilitador de los banqueros. El razonamiento de Keynes es que tal escasez ha sido creada artificialmente por los dueños del sistema financiero.

Otros rentistas nacen en el contexto de la era contemporánea del capitalismo, donde muchos “activos” ya no son recursos materiales sino creaciones de la mente o el intelecto. Hablamos de los activos intangibles. Algunas de estas creaciones son propiedad intelectual reconocida y protegida por las leyes. Los ejemplos comunes de propiedad intelectual son las patentes,

las marcas registradas o los derechos de autor. Una patente otorga derechos sobre un producto o un proceso productivo inventado por una persona, un centro de investigación o una empresa. Una marca registrada reconoce derechos de propiedad sobre productos o servicios que distinguen o identifican a una empresa o compañía de sus competidores. Los derechos de autor otorgan propiedad sobre un trabajo creativo original. Por ejemplo, Microsoft probablemente es el rentista de propiedad intelectual más exitoso de la historia capitalista contemporánea.

Entre los activos intangibles aparece un sector emergente y de gran influencia. Son las “economías de plataformas”, un conjunto de redes sociales facilitadas o interconectadas por plataformas digitales o tecnológicas. Las empresas más conocidas son Google, Facebook, eBay, Amazon, TikTok y otros. Estas plataformas generan dos tipos de beneficios económicos para sus dueños y accionistas. Primero, tienen ingresos multimillonarios por publicidad en vista que recolectan inmensas cantidades de información de los usuarios, por lo que son altamente atractivas para los anunciantes que desean llegar con sus mensajes a su público objetivo. Segundo, obtienen ingresos por pagos o comisiones a cambio de las transacciones económicas que fluyen por las plataformas instaladas. Ciertamente, construir una plataforma digital implica creatividad, trabajo e inversión, pero una vez puesta en funcionamiento, las plataformas generan y organizan el trabajo de miles y millones de usuarios a gran escala, llegando a cosechar ganancias jugosas que están por encima de las ganancias promedio o normales de la economía real. Por eso, solo una pequeña parte de los ingresos obtenidos se justifica como retorno a la inversión de capital y retribución por los trabajos de mantenimiento o administración de las redes y la mayor parte del dinero es simplemente renta. Por eso, no es casual que las listas de los nuevos multimillonarios estén repletas de rentistas de las plataformas digitales.

Otro tipo de actor rentista que llama la atención en Bolivia y Latinoamérica es el denominado “empre-saurio”, un término nacido de la inventiva de los hispanohablantes que combina las palabras “empresario” y “dinosaurio”. Refiere de forma coloquial —a veces de forma algo despectiva— a empresarios o dueños de

negocios millonarios cuyas ganancias se deben, principalmente, a favoritismos, privilegios o prácticas económicas reñidas con la eficiencia productiva. Forman parte de este tipo de rentistas los que obtienen beneficios económicos por tener ciertos privilegios tributarios, amnistías tributarias o subvenciones estatales directas e indirectas. También se los conoce como “empre-saurios” a los que ganan las licitaciones públicas de gobiernos nacionales y subnacionales para construir infraestructuras con dinero público o los que son adjudicatarios de contratos de prestación de servicios, mediante procesos de selección intencionalmente manipulados.

Estas prácticas favorecen a los más ineficientes y menosprecian a los más competitivos. El “empre-saurio” vende bienes y servicios al Estado, sin importarle si estos tendrán utilidad o no para la sociedad, generalmente, con sobreprecios y “comisiones” previamente convenidas con los políticos con poder de decisión sobre tales licitaciones. Las obras e infraestructuras que construyen son conocidas como “elefantes blancos”²² por no tener utilidad productiva o práctica. En la gran mayoría de los casos, se trata de obras contratadas por entidades gubernamentales a cambio de “comisiones”.

El “empre-saurio” es un actor rentista, con poca o ninguna capacidad para competir limpiamente en el mercado. Las ganancias que obtienen no son el resultado de su desempeño económico y aporte productivo. Su existencia, fundamentalmente, dependerá de las relaciones prebendales o clientelares con la clase gobernante. Es considerado un actor económico obsoleto, una rémora del pasado (de ahí la asociación con el término “dinosaurio”) porque su extinción es considerada como deseable para el crecimiento de economías modernas de valor agregado, para la generación de la riqueza basada en el trabajo creador de valor, en la competitividad empresarial y en la transparencia de las instituciones públicas.

En pocas palabras, “renta” y el “rentismo” son conceptos asociados a las economías que dependen de ingresos basados en la apropiación de la riqueza natural, y en la propiedad y control de recursos inmateriales como las plataformas digitales y en el acceso al poder político discrecional para hacer negocios opacos. El rentismo existe en todos los países y economías como tal, pero en Bolivia tiene una presencia casi omnipotente en todos los

ámbitos de la vida e influye decisivamente sobre la estructura, organización y funcionamiento del aparato productivo nacional.

ATRASO ECONÓMICO

Como punto de partida, se puede plantear que el sistema económico de Bolivia es un “capitalismo incipiente, depredador o rentista”. Esto quiere decir que existen varios elementos del capitalismo, como la propiedad privada sobre los medios de producción, una clase trabajadora asalariada, la libre empresa o el libre mercado; sin embargo, estas organizaciones y expresiones económicas son débiles, no alcanzaron su pleno desarrollo y la dependencia de la renta es alta. También significa que la propiedad privada o la clase trabajadora asalariada no son elementos plenamente consolidados o determinantes para el funcionamiento del aparato productivo nacional. Además de la propiedad privada, existe la propiedad estatal sobre los recursos naturales y los trabajadores asalariados siguen siendo la gran minoría en comparación con toda la población ocupada. Otra razón para caracterizar a nuestro país como de capitalismo incipiente y rentista es que las actividades económicas siguen concentradas en el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y minería), seguido de lejos por el sector secundario (industria y construcción) y el terciario (servicios, comercio, transporte y comunicaciones).

El capitalismo incipiente se caracteriza también por el intervencionismo estatal en la economía. El Estado boliviano no solo interviene regulando el mercado, los precios o teniendo un papel protagónico en la distribución de la renta, sino que participa directamente en la economía mediante varias empresas públicas de reciente creación o por medio de la administración directa de los sectores nacionalizados. Aunque el gobierno nacional no se cansa de decir que promueve una organización económica de corte socialista, lo cierto es que no tiene control mayoritario de los medios de producción fundamentales. Además, la mayoría de las empresas públicas no son rentables y lo más probable es que acaben fracasando. Por eso es que sería más adecuado afirmar que hoy en Bolivia reina una especie de “capitalismo de camarilla”.

Tener un capitalismo incipiente o rentista como el eje central, sin el pleno desarrollo de los elementos constituyentes y focalizado en el sector primario, constituye un grave problema de atraso económico. El sistema económico boliviano es como una maquinaria híbrida que tiene fallas de diseño y sus partes no engranan con facilidad porque están mal ensambladas.

Lo dicho significa que la mayoría de los bolivianos formamos parte de sistemas económicos paralelos o subordinados como sería la “economía popular”, un término genérico para referirse al sector informal, que incluye actividades económicas no reguladas o que existen al margen de las regulaciones gubernamentales. La economía informal de la gente puede contemplar desde vendedores ambulantes, transportistas, comerciantes, pequeños negocios y servicios, hasta empresas que funcionan sin autorizaciones y al margen de las regulaciones laborales. Existen porque las empresas capitalistas del sector formal no son capaces de absorber a toda la fuerza laboral ni de crear oportunidades laborales indirectas para la mayoría de los grupos marginados. En realidad, la economía boliviana es la suma de cientos de miles de emprendimientos informales de pésima calidad laboral y muy bajos ingresos. En medio de estas dinámicas, aparecen otros fenómenos económicos como el enriquecimiento de algunos sectores (importadores, dueños del transporte pesado, cooperativistas) o la proliferación de economías ilegales o subterráneas (contrabando, narcotráfico, tráfico de tierras).

Entonces, el atraso económico significa experimentar bajos niveles de desarrollo económico. Esto se puede constatar o medir utilizando indicadores económicos como el ingreso per cápita, el índice de necesidades básicas satisfechas, tasas de desempleo o índices de medición de la pobreza. El atraso económico de un país también se puede medir comparándolo con países similares o de la región. Veamos este último.

Bolivia ocupa el último lugar entre los países de América del Sur. Excepto Paraguay, los cuatro países vecinos (Argentina, Brasil, Chile y Perú) tienen economías nacionales de mayor tamaño, al igual que los restantes cuatro países de la región (Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela). El país vecino — nuestro enemigo en la Guerra del Chaco (1932-1935)— tiene un tamaño económico prácticamente igual al de Bolivia en los

últimos cincuenta años. El 2022 registró un Producto Interno Bruto (PIB) de 41,7 mil millones de dólares, mientras que Bolivia sumó 44,01 mil millones²³. Pero, Paraguay, al tener menor población (7,4 millones en 2022) divide su riqueza nacional entre un menor número de personas, lo que hace que su ingreso per cápita sea más alto que el de Bolivia.

Bolivia también ocupa el último lugar en la región, según las listas de clasificación de las economías del mundo que elabora el Banco Mundial. En la última lista disponible (2021), Bolivia aparece con un ingreso per cápita de 3.290 dólares y luce visiblemente rezagado frente a Paraguay que ocupa el penúltimo lugar con 5.740 dólares. Al menos en los últimos cincuenta años, nuestro país no abandonó ni una sola vez el último peldaño. Además, es el único país de América del Sur que sigue siendo categorizado dentro del grupo de “economías de ingreso mediano bajo”, mientras que otros seis países están un peldaño arriba: en el grupo de “economías de ingreso mediano alto”, que está reservado para países con ingresos per cápita mayores a 4.256 dólares y menores a 13.205 dólares²⁴. Los otros dos, Chile y Uruguay, integran el grupo privilegiado de latinoamericanos con “economías de ingresos altos”.

El atraso económico es el reflejo del grado de desarrollo del sistema económico o del aparato productivo nacional. Si la dependencia de la renta es alta y el rentismo es un hecho, el capitalismo siempre será incipiente, depredador y el caos un común denominador.

PREGUNTAS BÁSICAS DE ECONOMÍA

Para cerrar este capítulo exploratorio e introductorio a conceptos económicos necesarios para abordar ordenadamente los temas planteados, vamos a completar explicando tres preguntas básicas de economía que suelen servir como guías o herramientas de trabajo para el abordaje y análisis de realidades concretas.

En cualquier curso de economía, algunas de las preguntas básicas son: i) ¿qué se produce?, ii) ¿qué se consume? y iii) ¿cómo se organiza la sociedad? (tanto durante el proceso productivo como para la distribución). En conjunto, estas tres preguntas

generales se utilizan como puntos de entrada para acercarnos al entendimiento de un determinado sistema productivo o económico. Los sistemas productivos o económicos serán más complejos en cuanto a estructura y funcionamiento en la medida en que involucre a sociedades cada vez más grandes. A escala de un país como Bolivia, aunque los sistemas ya se complejizan bastante, todavía existen ciertos rasgos distintivos o características propias, debido fundamentalmente a que la población tiene una o muchas historias en común. Además, el Estado cumple el papel de ser el techo común que establece las reglas de juego para el funcionamiento de las instituciones económicas, sociales y políticas.

Vamos a abordar las tres preguntas interrogándonos lo opuesto. A veces, hacer este ejercicio abre la mente a respuestas insospechadas. Por ejemplo: en lugar de preguntarnos ¿qué produce Bolivia?, diremos ¿qué NO produce Bolivia? Este replanteamiento nos obliga a prestar atención a aquello que no está a la vista de todos en el día a día. Los gobernantes y políticos raras veces hablan sobre los bienes y servicios que no produce un determinado país, porque están más interesados en mostrar lo visible o hablar de sueños económicos para el futuro. Por eso los políticos se dedican a inaugurar obras en lugar de hablar de lo que no pueden mostrar. Por su lado, los empresarios están casi siempre concentrados en promocionar y defender lo que ya producen o en producir lo que es más rentable.

Al momento de ensayar las respuestas, nos vamos a encontrar con que, en realidad, Bolivia no produce muchísimos bienes de capital y de consumo. Un botón de muestra: no tenemos una industria automotriz, ni siquiera empresas ensambladoras instaladas en el territorio nacional y; sin embargo, tenemos un parque automotor que sobrepasa 2,4 millones de unidades²⁵. Más o menos, existe un motorizado por cada cinco habitantes. El consumo nacional de motorizados es significativamente alto y representa una proporción grande de los gastos de las familias, empresas y gobierno. Existe una gran demanda de autos, pero está claro que no es una razón suficiente para producir motorizados hechos en Bolivia. Una de las razones de la abundancia de automóviles en Bolivia es el bajo precio de los carburantes debido al subsidio gubernamental.

Tomando otro ejemplo de menor escala, tampoco producimos fósforos. No siempre fue así. Bolivia poseía la Fábrica Nacional de Fósforos, creada mediante el Decreto Supremo N° 8829 en 1969²⁶, misma que tenía derechos de exclusividad para producir los cerillos para todos los bolivianos. Esta fábrica nació como parte de los proyectos de industrialización de la Revolución Nacional de 1952. Pero la crisis de la minería del estaño y la baja rentabilidad obligaron al cierre de esta empresa. Aunque los avances tecnológicos trajeron consigo productos sustitutos como los populares encendedores a gas, mucha gente sigue comprando y usando los fósforos. Y ya que no producimos, importamos. Es más que comprensible que tengamos limitaciones para producir autos, pero ¿por qué no producimos algo tan elemental como los fósforos, algo que no requiere tecnología avanzada, ni grandes conocimientos o inversiones de varios millones de dólares?

La idea de este ejercicio no es responder a estas preguntas, sino que estos dos ejemplos y otros que el lector puede aportar sirvan para resaltar la utilidad analítica de preguntarnos lo opuesto, porque en muchas situaciones nos ofrece nuevas pistas y perspectivas para pensar y abordar los problemas económicos.

Ahora replanteemos la segunda pregunta de economía básica: ¿Qué NO consume Bolivia? Desde luego, los bolivianos no consumimos muchas cosas, sean tangibles (bienes) o intangibles (servicios o conocimientos). Para empezar, los hábitos y las diferencias culturales influyen para no consumir los mismos alimentos que comen otros países, por ejemplo, los asiáticos o incluso los propios latinoamericanos. Pero en economía, el término “consumo” tiene una connotación más generalista. Por ejemplo, a diferencia de varios países líderes en las nuevas tecnologías, la industria boliviana no consume una materia prima de alto valor en el mundo actual: el carbonato de litio. Hasta ahora, Bolivia sigue tropezando con grandes dificultades para explotar el “oro blanco” de los salares andinos, a pesar de que tendría la mayor reserva potencial del mundo. Aunque los dos últimos gobiernos anunciaron varias veces que no exportarían litio en calidad de materia prima, sino como baterías de iones de litio, lo cierto es que no existe esa posibilidad por la simple razón de que no tenemos una industria nacional en tecnologías energéticas.

En términos más generales, los bolivianos no consumimos masivamente “lo nacional” o los productos con el sello “Hecho en Bolivia”, al menos no mayoritaria o significativamente. A pesar de que existen productos nacionales disponibles en el mercado, simplemente la población no consume lo nuestro. El autoabastecimiento sigue siendo deficitario en muchos aspectos de la vida nacional porque la baja demanda desincentiva la producción. Esto es así porque, lamentablemente, no basta tener producción nacional, sino que son decisivos los costos de producción, los precios y la calidad de los productos. El mercado es un lugar cruel donde no todos los emprendimientos sobreviven a la competencia. En pocas palabras, los bolivianos no consumimos ciertas materias primas debido a que no tenemos industria y manufacturas y a veces no consumimos productos nacionales porque la calidad es baja y los precios no son competitivos en el mercado.

Por último, la tercera pregunta replanteada sería, ¿cómo NO se organiza una sociedad como Bolivia en la esfera económica? Dicho de otro modo, ¿cuáles son las formas de organización económica o los “modos de producción” ausentes o poco enraizados en la sociedad boliviana? Aquí, la respuesta ya no es muy obvia. Si queremos responder sin generalidades, debemos prestar atención por separado a algunos elementos centrales, como el tipo de propiedad y los derechos existentes y asignados sobre los recursos económicos, las unidades de producción, los mercados o los sistemas de distribución, el empleo o el mercado laboral y los marcos regulatorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, una pregunta más concreta sería, ¿Bolivia es una organización económica de tipo capitalista, socialista, comunista, una economía mixta o híbrida? En sentido estricto y al igual que muchos países, el sistema económico nacional no encaja del todo y únicamente en una de estas casillas. Como hemos explicado a lo largo de este capítulo, tiene algunos elementos del capitalismo y del libre mercado, pero no reúne todos los elementos definitorios. También se caracteriza por la presencia de la propiedad estatal o la intervención estatal en la economía de materias primas exportables o por la monopolización de sectores estratégicos como el transporte aéreo y las telecomunicaciones.

Incluso, el gobierno actual tiene inclinaciones hacia planificación y asignación centralizada de los recursos y bienes producidos. Es un capitalismo incipiente, corporativista, rentista, pero también depredador. Si la economía mixta se puede entender como la combinación del capitalismo y el socialismo, Bolivia reúne ciertos elementos de ambas categorías, pero ello no lo convierte automáticamente en una economía mixta con elementos armónicamente combinados e integrados.

Más bien, la organización económica de Bolivia es una donde predomina la coexistencia caótica de elementos de origen diverso.

2

HERENCIA HISTÓRICA: EL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR DEL SIGLO XX

INTRODUCCIÓN

La historia de los países que son víctimas de la maldición de los recursos naturales está marcada por tres características en común: i) tienen la condición de ser proveedores de materias primas, ii) tienen una alta dependencia del comercio exterior y iii) tienen una economía nacional de carácter cíclico que oscila entre momentos de expansión, auge y recesión. También comparten algunos otros rasgos, pero todo esto no significa que sean realidades homogéneas. Cada país tiene una historia única y un camino propio, conocidos en algunos estudios como “Dependencia de trayectoria” (*Path dependence*, en inglés)¹ que, en esencia, significa que las decisiones económicas del pasado tienen influencia sobre el presente y el futuro, de modo que pueden obstaculizar los intentos de cambiar significativamente el curso de los acontecimientos. La historia específica de cada país condiciona su presente y su futuro. Los condicionamientos históricos explican, en buena medida, por qué las recetas genéricas para salir del atraso simplemente no funcionan o al menos no por igual para todos los países.

Los últimos 120 años (1900 en adelante) de la historia económica de Bolivia se caracterizan por la repetición de periodos en que avanzamos dos para adelante y periodos en que retrocedemos uno o dos pasos. Nuestra economía está protagonizada por años de auge, precedidos y seguidos irremediabilmente por años de crisis o estancamiento.

Los periodos de crecimiento basados en el *boom* de los recursos naturales han dado paso a periodos de colapso o declive, según los caprichos de las fluctuaciones del mercado global de las materias primas. No únicamente, pero la minería del estaño ha estado por detrás de los mejores y los peores periodos de Bolivia.

La dependencia de la explotación de la minería tiene raíces en la plata de Potosí de la época colonial, al grado que el mineral descubierto por Diego Huallpa siguió jugando un papel fundamental hasta finales del siglo XIX o incluso hasta inicios del siglo XX de la era republicana. Los momentos de expansión y contracción económica han tenido lugar según las variaciones de las reservas de riqueza natural, fluctuaciones de los mercados y precios internacionales de materias primas. Con todo, la minería de exportación se posicionó como un elemento central de la historia boliviana.

Antes de abordar cronológicamente los principales momentos e hitos del siglo XX, resulta útil brindar una mirada sucinta del desenlace del periodo 1901-2000, que es también la historia del fin de la minería del estaño.

DESENLACE DE LA ERA DEL ESTAÑO

En la segunda mitad del siglo XX, las minas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)² se habían convertido en la columna vertebral de la economía y, aunque generaron un flujo constante de renta minera, la empresa estatal llegó a acumular deudas y pérdidas que habrían de influir en el desenlace final. Colapsó en 1985, pero no como consecuencia del agotamiento de los yacimientos de estaño, sino debido a la caída abrupta del precio internacional del “metal del diablo”. El fin de la era del estaño se produjo en un contexto nacional e internacional muy complicado. Además de que la crisis económica mundial ya había provocado una disminución generalizada de la demanda de materias primas, Bolivia se encontraba en una situación desesperante. La llamada “hiperinflación” de los precios se agravó a inicios de los 80, provocando un desorden y caos monetario sin precedentes. El gobierno nacional, simplemente, no pudo pagar la agobiante deuda externa que se había acumulado desde las décadas pasadas, los alimentos

comenzaron a escasear severamente y la pobreza se multiplicó en cuestión de semanas y meses.

Los esfuerzos del gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985) por mantener bajo control la crisis económica y social naufragaron sin remedio. La inestabilidad política y social se apoderó de todo el país, haciendo prácticamente imposible la adopción temprana y oportuna de medidas económicas de corrección del gasto público y descontrol de los precios. El Gobierno de Siles se vio obligado a recortar su periodo de gobierno democrático y adelantar las elecciones generales. Hugo Banzer resultó ganador en las urnas, pero su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) no sumó suficientes votos a lo largo y ancho de la geografía nacional, algo que requería para convertirse en la primera fuerza parlamentaria. Había triunfado solamente en dos departamentos (La Paz y Cochabamba). Víctor Paz Estenssoro, quien había quedado en segundo lugar, fue electo como el sucesor de Siles gracias a que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) contaba con mayoría absoluta en la cámara de senadores y mayoría simple en la cámara de diputados³. El nuevo gobierno tomó medidas drásticas de inmediato. Víctor Paz, bajo la consigna “se nos muere Bolivia” firmó el Decreto Supremo 21060 para la aprobación e implementación de las políticas de *shock* económico diseñadas por los organismos internacionales, destacando Jeffrey Sachs entre los principales asesores económicos⁴.

Los “mineros relocalizados” de la COMIBOL cambiaron la historia boliviana de una forma no descifrada por completo hasta el día de hoy. Más de 22 mil mineros fueron despedidos y desalojados de los centros mineros, en muchos casos con rumbos desconocidos y futuros inciertos⁵. La palabra “relocalización” es un eufemismo que utilizó el gobierno para no decir las cosas por su nombre; en este caso, “despido”. Los trabajadores de las minas no fueron reubicados en otros puestos laborales, sino simplemente abandonados a su suerte. Pasaron a engrosar las filas ya abultadas de los desocupados de los principales centros urbanos como la ciudad de El Alto y las tres ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). El cierre de las minas tenía como finalidad no empeorar la acumulación de las pérdidas económicas que arrastraba la minería estatal, reducir el gasto público y pagar la deuda externa. Este último no sucedió al final,

porque años más tarde, Bolivia se benefició con la condonación de la deuda externa para los países del tercer mundo. La crisis era de tal magnitud que el país calificó para una condonación completa dispuesta para los países pobres altamente endeudados (en inglés, *Heavily Indebted Poor Countries, HIPC*)⁶.

La recuperación fue lenta y dolorosa. Los indicadores socioeconómicos mejoraron levemente hasta finales del siglo. La minería del estaño había dejado una herencia millonaria de deudas y varias empresas estatales fueron declaradas en quiebra o simplemente desmanteladas. La privatización fue implementada con la promesa de rescate y capitalización, pero principalmente sirvió para liquidar las empresas estatales inviables. En parte, la lenta y la dolorosa recuperación fue estimulada por la agricultura cruceña que, después de varios intentos, finalmente comenzó a despegar hacia mediados de la década de 1990. Un factor tecnológico decisivo para el agro del oriente fue la llegada a la región sudamericana de la agricultura mecanizada de monocultivos y semillas transgénicas, principalmente de soya. Los países vecinos Brasil y Argentina adoptaron rápidamente el modelo de producción de soya transgénica a gran escala, introducido con anterioridad a escala comercial por los Estados Unidos. Todo esto indujo decisivamente a la ampliación de la frontera agrícola de Santa Cruz y de la agroexportación boliviana. En adelante, la soya habría de jugar un papel influyente para la reinserción gradual del país en el circuito de los mercados internacionales.

En el periodo pos-hiperinflacionario, Bolivia no tuvo más opción que volver a abrazar la economía de la dependencia o lo que se conoce como el “modelo primario-exportador”⁷. Aunque la agricultura cruceña coadyuvó en esta fase, el factor decisivo fue la exportación del gas natural a Argentina. El descubrimiento de las reservas de gas natural de los años previos, influenció positivamente para el acceso a créditos externos que se requerían para la construcción de los gaseoductos de exportación. En la primera década del nuevo siglo, los ingresos del gas y la llegada al poder del MAS determinaron para que Bolivia olvide las penurias que había traído consigo el agotamiento de la era del estaño y el no haber aprovechado la renta minera para la transformación y diversificación de la matriz productiva.

En medio de grandes transformaciones políticas, el gobierno de Evo Morales inauguró el ciclo de bonanza más reciente que, a diferencia del largo reinado del estaño, solamente duraría algo más de una década.

Para entender este desenlace que, a su vez, es el inicio de la era actual, debemos exponer y caracterizar los principales periodos e hitos de la historia económica de la Bolivia del siglo XX (1901-2000).

1901-1930: BOLIVIA, PRODUCTOR DE CLASE MUNDIAL DEL “METAL DEL DIABLO”

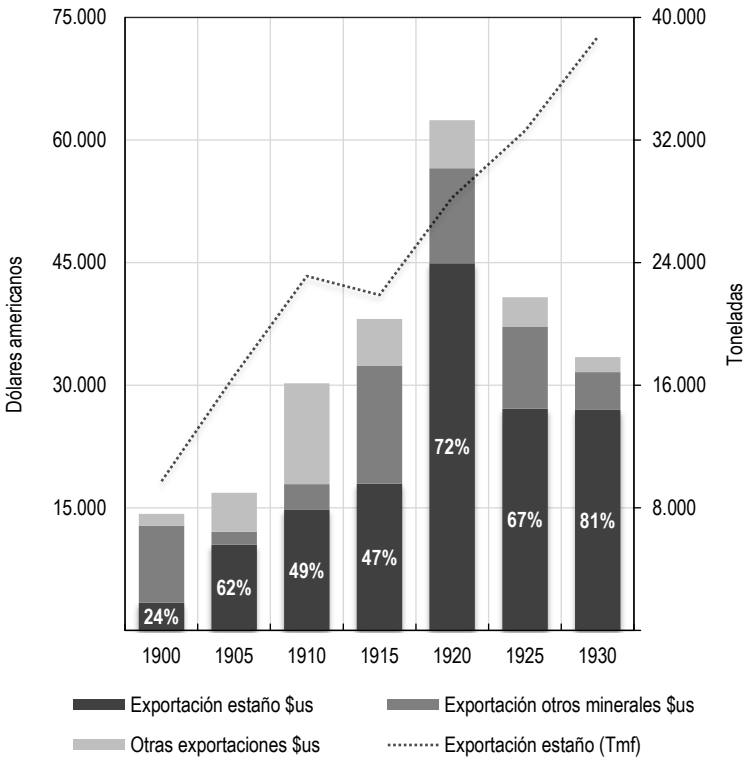
Un hecho de gran trascendencia de esta época fue sin lugar a dudas la ampliación o expansión de las vías férreas. Se construyeron líneas férreas y estaciones de ferrocarriles que conectaban los principales centros mineros con los puertos de exportación situados en las costas del océano Pacífico de Chile y Perú. Los puertos marítimos de Antofagasta, Mollendo y Arica se convirtieron en las principales puertas de entrada al mercado mundial⁸. Al mismo tiempo, las vías férreas jugaron un papel facilitador para la integración de los principales centros poblados del país, en esa época, mayormente asentados en el occidente.

Inicialmente, el estaño tuvo una participación minoritaria en las exportaciones, llegando al 24% para el año 1900. Sin embargo, sostuvo una tendencia ascendente por 23 años, hasta alcanzar una participación del 75% sobre el total exportado. Desde 1924 en adelante su importancia en el comercio exterior declinó levemente, pero se recuperó en los últimos cuatro años del periodo, llegando al 81% para el año 1930.

En volúmenes, la producción del estaño pasó de 9,7 mil toneladas en 1900 a 26,8 mil toneladas en 1913; y después de una caída que duró algunos años se recuperó para alcanzar el punto alto de producción, con más de 47 mil toneladas para el año 1929. En 1930 las estadísticas registraron 38,7 mil toneladas de producción. Como se puede observar en el siguiente gráfico y tabla, el comportamiento general del periodo estuvo caracterizado por un crecimiento sostenido. La producción más baja se registró en 1921 con 19 mil toneladas.

El *boom* del estaño comenzó con el descubrimiento de la mina La Salvadora en el cerro de Llallagua y paulatinamente sustituyó a la producción y exportación de la plata, misma que fue cayendo a medida que el estaño ganaba protagonismo. La importancia del metal que dominaría la historia del siglo XX estaba dada por el aumento de la demanda mundial del estaño. Las industrias extranjeras empezaron a usar el mineral principalmente para la producción de hojalata y como material de soldadura y aleación⁹.

GRÁFICO 1. BOLIVIA: EXPORTACIONES 1900-1930
EN MILES DE DÓLARES AMERICANOS Y TONELADAS



FUENTE: Elaborado con base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, para los años 1925-1930; Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, Tomo I; Bolivia en el siglo XX: La formación de la Bolivia Contemporánea.

NOTA: Toneladas métricas finas - Tmf

TABLA 1. BOLIVIA: EXPORTACIÓN 1900-1930
EN MILES DE DÓLARES AMERICANOS Y TONELADAS

Año	Estaño (Tmf)	Dólares americanos				% Estaño
		Total exportación	Estaño	Otros minerales	Otras exportaciones	
1900	9.739	14.263	3.409	9.414	1.441	24%
1901	13.146	15.031	3.758	8.192	3.081	25%
1902	10.566	11.217	3.511	7.067	639	31%
1903	12.558	10.068	4.712	4.158	1.198	47%
1904	12.930	12.586	6.834	5.212	540	54%
1905	16.614	16.824	10.500	1.548	4.777	62%
1906	17.622	17.951	14.099	-	3.852	79%
1907	16.608	20.133	11.957	-	8.176	59%
1908	17.964	15.116	7.504	3.858	3.754	50%
1909	21.342	25.505	12.651	3.070	9.785	50%
1910	23.130	30.249	14.803	3.100	12.346	49%
1911	22.242	33.052	21.056	2.443	9.553	64%
1912	23.166	36.049	24.095	3.173	8.780	67%
1913	26.754	37.488	27.114	2.774	7.600	72%
1914	22.356	26.320	16.992	4.155	5.174	65%
1915	21.894	38.084	17.954	14.392	5.738	47%
1916	21.324	40.594	17.061	15.860	7.674	42%
1917	27.858	63.099	34.103	20.431	8.565	54%
1918	29.280	72.865	51.844	14.486	6.534	71%
1919	29.100	57.700	39.970	10.415	7.315	69%
1920	28.230	62.408	44.913	11.624	5.871	72%
1921	19.086	26.768	17.164	7.101	2.503	64%
1922	32.088	37.907	27.165	8.535	2.208	72%
1923	30.258	43.078	32.245	8.353	2.480	75%
1924	32.064	46.076	33.688	9.007	3.381	73%
1925	32.598	40.774	27.123	10.006	3.645	67%
1926	32.184	43.119	29.521	10.529	3.069	68%
1927	35.382	45.983	35.684	7.182	3.117	78%
1928	42.074	42.009	32.753	6.678	2.578	78%
1929	47.191	47.123	37.388	7.552	2.183	79%
1930	38.723	33.430	26.967	4.634	1.829	81%

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, para los años 1925-1930; Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, Tomo I; Bolivia en el siglo XX: La formación de la Bolivia Contemporánea.

En promedio, el estaño representaba el 61% de las exportaciones de Bolivia este primer periodo de 30 años del siglo XX. Durante los primeros años, la plata tuvo una participación mayoritaria, seguida por la goma que declinó después de 1913. La economía del estaño se benefició de los altos precios internacionales, debido a que las potencias mundiales se habían volcado de lleno al desarrollo industrial que demandaba materias primas de todas partes del mundo. Bolivia se convirtió en un productor de clase mundial, junto con los países del Sudeste de Asia como Malasia, Indonesia y Tailandia. Aunque Estados Unidos era el principal comprador mundial del “metal del diablo”, fue el segundo mercado de destino para las exportaciones bolivianas, después de Gran Bretaña.

Los minerales en general, estaño y otros, concentraban la mayor parte del total de las exportaciones bolivianas. En promedio, representaban el 84% del total, habiendo alcanzando el valor más alto en 1930 con 95% de participación y el mínimo en 1911 con 71%. Este predominio de los minerales confirma que, al margen de la minería, existían muy pocos productos y materias primas exportables como el caucho que floreció por un corto tiempo.

El auge pasajero del caucho fue impulsado por la demanda mundial. El crecimiento de la industria automotor aumentó la demanda de la goma o látex por parte de los países desarrollados, lo que indujo al crecimiento de la explotación del caucho en las regiones amazónicas de América del Sur, incluyendo Bolivia, Perú y Brasil. La goma provocó migraciones de importancia de los buscadores de la resina que sangra el árbol de “siringa” hacia las zonas despobladas del oriente y la Amazonia boliviana. Hacia el año 1913, la producción de la goma había alcanzado su punto más alto, lo que permitió exportar más de 5.000 toneladas. Pero, el negocio del caucho rápidamente se estancó y colapsó en menos de una década debido, principalmente, al aumento de la producción del caucho por parte de los países asiáticos, sobre todo de India, Ceylan y Malasia¹⁰.

Esta fue la época de los llamados los “Barones del estaño”, conformado por Simón I. Patiño (1860-1947), Mauricio Hochschild (1881-1965) y Carlos V. Aramayo (1889-1981). Su protagonismo y poder económico quedó reflejado en su presencia

dominante en las exportaciones mineras de la época. En 1927, Patiño alcanzó una participación del 49% sobre el total, seguido por Hochschild con 13% y Aramayo con 7% de participación¹¹. En otras palabras, el 69% del total de las exportaciones mineras provenían de las minas de los tres barones mineros.

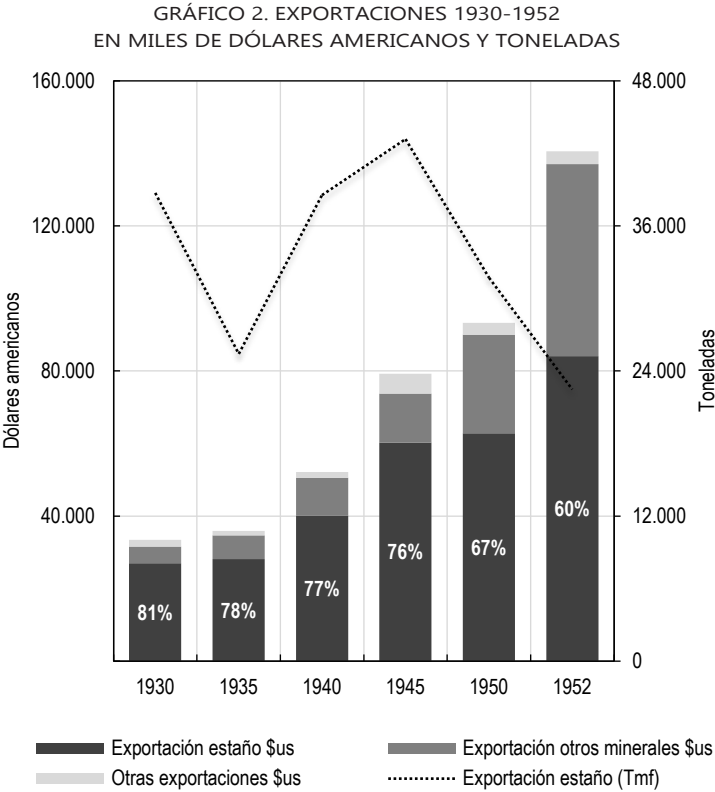
Simón I. Patiño es conocido hasta el día de hoy por su trayectoria de vida excepcional. Cochabambino de origen, de una familia de clase media modesta, cuyo ascenso económico despegó con la adquisición de la mina La Salvadora situada en el cerro de Llallagua. Hochschild era de nacionalidad judío alemán, ingeniero en minas, doctorado en finanzas en Alemania. En 1911 fundó *Hochschild Minnig*, y durante las siguientes dos décadas levantó un imperio económico en torno a la minería y la exportación. Carlos Víctor Aramayo era descendiente de tercera generación de una familia dedicada a la minería de la plata y perteneciente al señorialismo boliviano. Fue conocido como industrial minero, dueño de la Compañía Aramayo de Minas de Bolivia, fundó el periódico “La Razón” y llegó a ocupar el cargo de Ministro de Hacienda¹².

1930-1952: MONO-DEPENDENCIA DEL ESTAÑO Y EL “PLAN BOHAN”

La primera década de este periodo debemos situar en el contexto de dos hechos de alcance mundial. La Gran Depresión Económica de los años 30 de los Estados Unidos y varios otros países industrializados, y la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La crisis estadounidense comenzó en octubre de 1929, provocando una reducción drástica de la producción industrial, cuyos efectos multiplicadores se esparcieron sobre casi todos los rubros productivos y las importaciones de materias primas. La recuperación económica llegó tres años después, hacia el año 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt implementó la llamada “*New Deal*”¹³, un conjunto de programas de estimulación para la producción industrial y creación de fuentes de empleo en la industria bélica que precedió a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La Guerra del Chaco que confrontó a Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935 tuvo un impacto económico negativo

para nuestro país. Empeoró la precaria situación de las finanzas públicas, impactó negativamente en la producción nacional y el comercio exterior sufrió una depresión generalizada. El país contrajo una deuda externa elevada para financiar la guerra y el servicio de la deuda restringió por varios años la capacidad nacional para invertir en el desarrollo económico y social¹⁴. La economía campesina de Los Andes también perdió capacidad productiva debido al reclutamiento masivo de los jóvenes para engrosar la infantería militar. En 1938, cuando finalmente Bolivia firmó el Tratado de Paz con Paraguay, se oficializó la pérdida de una porción territorial estratégica para el acceso soberano al océano Atlántico por medio del río Paraguay.



FUENTE: Elaborado con base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, 1930-1956.

Las exportaciones bolivianas tocaron fondo entre los años 1930-1933; es decir, durante los años de la Gran Depresión. Al año siguiente (1934) se recuperó hasta llegar a 31,9 millones de dólares. En adelante mantuvo una tendencia ascendente hasta alcanzar el valor récord del periodo en 1951, con 150,7 millones de dólares en exportación (ver tabla y gráfico 2).

TABLA 2. BOLIVIA: EXPORTACIONES 1930-1952
EN MILES DE DÓLARES Y TONELADAS

Año	Estaño (Tmf)	Dólares americanos				% Estaño
		Total exportación	Estaño	Otros minerales	Otras	
1930	38.723	33.430	26.967	4.634	1.829	81%
1931	31.637	20.152	16.257	2.845	1.050	81%
1932	20.919	10.321	8.059	1.684	578	78%
1933	14.957	15.854	12.089	3.023	742	76%
1934	23.201	31.914	26.663	4.330	921	84%
1935	25.403	35.934	28.147	6.492	1.295	78%
1936	24.461	36.950	24.696	9.127	3.127	67%
1937	25.531	44.436	30.363	11.346	2.727	68%
1938	25.893	34.102	23.723	7.928	2.451	70%
1939	27.916	38.484	27.843	8.598	2.043	72%
1940	38.531	52.133	40.044	10.514	1.575	77%
1941	42.740	63.496	48.283	12.954	2.259	76%
1942	38.907	68.226	49.538	16.409	2.279	73%
1943	40.960	81.334	55.188	22.976	3.170	68%
1944	39.341	82.554	59.889	18.163	4.502	73%
1945	43.168	79.253	60.274	13.469	5.510	76%
1946	38.222	71.606	52.000	13.301	6.305	73%
1947	33.800	77.715	54.615	20.365	2.735	70%
1948	37.935	112.615	79.971	31.074	1.570	71%
1949	34.662	101.173	72.087	25.123	3.963	71%
1950	31.714	93.258	62.843	27.131	3.284	67%
1951	33.664	150.737	93.213	52.313	5.211	62%
1952	22.472	140.587	84.083	52.956	3.548	60%

FUENTE: Elaborado con base a datos de CEPAL, 1930-1956.

Al inicio de este periodo, el estaño representaba el 81% del total de las exportaciones, pero paulatinamente fue decreciendo hasta bajar al 60% para el final del periodo. En su lugar, tomaron fuerza otros minerales como el zinc, wolframio y plomo, logrando que las exportaciones mineras se mantuvieran por encima del 95% con respecto al total de las exportaciones bolivianas. En promedio, la participación del estaño estuvo por encima del 73% con respecto al total de las exportaciones bolivianas.

El resto de las exportaciones (no mineras) estuvo cifrado en torno al 5%, en parte conformado por productos del sector agropecuario que en su mejor momento (1936) llegaron al 8% con respecto al total, mientras que otros rubros tuvieron participaciones prácticamente irrelevantes. Entre los principales productos exportados estaban almendras, goma, cuero de animales, quina y hoja de coca. Para este momento de la historia, Bolivia seguía siendo un importador neto de alimentos, razón por la que tomó fuerza la idea de incrementar la producción agropecuaria a escala comercial¹⁵.

Durante esta época, Bolivia cambió de socio comercial. En la primera década (1931-1940), Gran Bretaña concentraba la mayor parte de las exportaciones bolivianas, en parte debido a la crisis de los años treinta que ralentizó la economía norteamericana. Sin embargo, en el resto del periodo (1941-1952), Estados Unidos se posicionó como el principal socio comercial de Bolivia, llegando a concentrar más del 60% de las exportaciones y de esa manera dejando a Gran Bretaña en segundo lugar con una participación promedio del 33%. Ambos países predominaron como los principales mercados de exportación para los minerales bolivianos.

Pasando a la cuestión del “Plan Bohan”, es importante señalar que este periodo destaca en la historia boliviana por el mencionado plan, cuyo título original es “Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia”. En 1942, una comisión técnica con apoyo norteamericano delineó los principales contenidos y componentes del “Plan Bohan”, el mayor programa de desarrollo planeado, financiado e implementado en el país. El objetivo principal era la ampliación y diversificación de la economía nacional, siendo el proyecto caminero La Paz-Cochabamba-Santa Cruz considerado como uno de los principales componentes¹⁶.

El Informe de la misión, liderado por Mervin Bohan¹⁷ brindó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación económica del país, donde destacaba la recomendación estratégica de conectar el occidente y el oriente con el objetivo de aprovechar las potencialidades agropecuarias de las tierras bajas, aumentar la producción nacional de alimentos y, eventualmente, generar excedentes agropecuarios para la exportación.

Después de la Revolución Nacional de 1952, el plan fue reformulado y parcialmente adoptado bajo el denominativo de “Marcha al Oriente”, cuyos objetivos estaban centrados específicamente en el desarrollo de la agricultura comercial del oriente, la ampliación de las tierras cultivadas y la creación de zonas de asentamientos humanos en el norte de La Paz, el trópico cochabambino y en los alrededores de la ciudad de Santa Cruz¹⁸.

En 1952 acaeció el estallido de la Revolución Nacional. Fue el desenlace de conflictos y revueltas sociales alimentadas por la explotación de los trabajadores mineros, los bajos impuestos mineros, el despojo de tierras comunitarias en la zona andina y la exclusión política y económica de los sectores populares. El MNR emergió como un partido político de ideología nacionalista, reformador del liberalismo económico y sistema político elitista de las décadas previas. La Revolución Nacional evidenció el agotamiento del enfoque liberal en materia económica y política y gestó el inicio de un nuevo ciclo: el ciclo del Estado intervencionista y de proyectos nacionalistas.

1952-1985: NACIONALISMO, DECLIVE Y FIN DE LA ERA DEL ESTAÑO

Este periodo de 33 años destaca en nuestra historia económica por varias transformaciones de gran alcance. Para tener una idea general, las exportaciones escalaron desde 140,5 millones de dólares en 1952 hasta más de 1.000 millones en 1980, la cifra más alta alcanzada antes de la crisis de los ochenta. Del mismo modo, las importaciones crecieron desde 150 millones de dólares hasta cerca de 1.000 millones hacia el año 1979. La expansión de la economía nacional fue evidente y por demás significativa, tanto en términos de volúmenes de producción, valor de producción, comercio exterior y crecimiento del sector agrícola¹⁹.

Algunos de los componentes del “Plan Bohan” y del programa “Marcha al Oriente” fueron implementados en esta época y gracias al involucramiento directo y financiamiento del Estado nacionalista. El gobierno del MNR nacionalizó las minas de los “Barones del estaño” y tomó control mayoritario sobre la minería boliviana. La carretera Cochabamba-Santa Cruz terminó de construirse en 1954. La Reforma Agraria de 1953 abolió las haciendas altoandinas y devolvió las tierras usurpadas a las comunidades aymaras y quechuas.

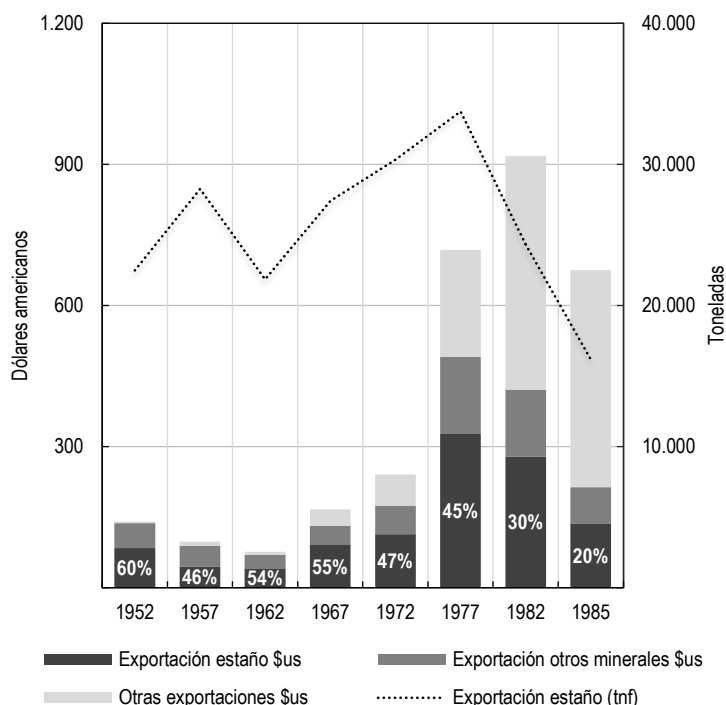
Poco después, el mismo gobierno puso en marcha las primeras versiones de los programas de “colonización dirigida” para el reasentamiento de campesinos pobres de la zona andina en nuevas zonas de colonización identificadas en las tierras bajas y consideradas como componentes estratégicos para alcanzar los objetivos del “Plan Bohan”. A la vez, el gobierno proporcionó apoyo financiero y asistencia técnica con respaldo internacional para el desarrollo del sector agropecuario e industrial en el oriente boliviano, principalmente para la producción de azúcar, arroz y algodón. En este periodo jugó un rol importante la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), hasta que fue disuelta en 1986, nada menos que por el mismo gobierno que había promovido su funcionamiento: el gobierno de Víctor Paz Estenssoro²⁰.

Aunque la producción agropecuaria aumentó y aminoró en alguna medida la dependencia de las importaciones de alimentos de consumo básico para el mercado nacional, mantuvo una participación minoritaria en cuanto a las exportaciones, habiendo alcanzado su mejor momento en 1976, con una participación del 13% sobre el total. Los productos agrícolas exportables de la primera mitad del siglo XX, como almendras, goma o cueros, fueron sustituidos en este periodo por productos agropecuarios emergentes como el azúcar, café, algodón y madera aserrada²¹.

El Estado nacionalista también impulsó el fortalecimiento y crecimiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)²². Hacia mediados de los años 1960, esta empresa petrolera comenzó a tener relevancia por el aumento de la producción hidrocarburífera e inserción en el mercado de exportaciones del petróleo crudo. Durante el segundo quinquenio de 1960 y el primero de 1970, la exportación petrolera llegó a representar como la cuarta parte del total de exportaciones,

un hecho positivo, novedoso y sin antecedentes en la historia boliviana. En 1966, la exportación petrolera registró un 4,4% de participación en el comercio exterior, y creció aceleradamente hasta llegar al 30% de participación en 1974. Inicialmente, tanto la producción como la exportación estuvieron centradas en el petróleo crudo, aunque ya existían señales sobre el potencial de explotación del gas natural. Las primeras incursiones en la actividad gasífera destinada al mercado exterior fueron llevadas a cabo por *Bolivian Oil Company*, una empresa privada que alentó la exportación de gas boliviano a Argentina desde el campo de Madrejones en la provincia Gran Chaco de Tarija²³. En los últimos años de este periodo, el gobierno boliviano se interesó en la ampliación de los acuerdos comerciales con el país vecino y el financiamiento para el desarrollo de los gaseoductos para explotar las reservas encontradas al sur del departamento de Santa Cruz y Tarija.

GRÁFICO 3. BOLIVIA: EXPORTACIONES 1952-1985
EN MILES DE DÓLARES AMERICANOS



FUENTE: Elaborado con base a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL²⁴, para los años 1952-1956; Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, Tomo I.

TABLA 3. BOLIVIA: EXPORTACIONES 1952-1985
EN MILES DE DÓLARES Y TONELADAS

Año	Estaño (Tmf)	Dólares americanos				% Estaño
		Total exportación	Estaño	Otros minerales	Otras	
1952	22.472	140.587	84.083	52.956	3.548	60%
1953	35.384	112.260	72.238	37.338	2.684	64%
1954	29.287	97.003	59.674	34.045	3.284	62%
1955	28.369	99.790	57.067	38.120	4.603	57%
1956	27.273	106.511	59.250	40.011	7.250	56%
1957	28.242	97.667	44.909	43.552	9.206	46%
1958	18.013	64.736	36.321	20.308	8.108	56%
1959	24.193	77.635	40.806	28.089	8.740	53%
1960	19.718	67.828	42.959	16.941	7.928	63%
1961	20.735	76.136	50.534	18.166	7.436	66%
1962	21.837	76.123	41.382	28.618	6.123	54%
1963	23.117	86.400	54.583	25.817	6.000	63%
1964	24.412	113.837	80.963	26.837	6.037	71%
1965	24.210	131.836	93.022	31.078	7.736	71%
1966	25.237	150.436	93.343	36.457	20.636	62%
1967	27.411	166.326	90.930	40.370	35.026	55%
1968	29.409	170.649	92.521	46.379	31.749	54%
1969	29.961	173.200	102.471	64.538	6.191	59%
1970	27.812	225.600	101.900	103.116	20.584	45%
1971	29.385	215.901	105.920	67.380	42.601	49%
1972	30.332	240.400	113.500	60.600	66.300	47%
1973	31.183	338.300	131.000	94.900	112.400	39%
1974	30.150	650.101	230.100	157.200	262.801	35%
1975	31.898	522.401	171.424	133.100	217.877	33%
1976	30.314	623.001	216.400	150.500	256.101	35%
1977	33.740	718.400	326.700	163.800	227.900	45%
1978	30.910	723.701	373.700	141.300	208.701	52%
1979	27.760	859.999	395.500	196.200	268.299	46%
1980	27.328	1.049.826	378.149	268.675	403.002	36%
1981	27.588	991.309	343.096	214.356	433.857	35%
1982	24.341	917.220	278.344	142.212	496.664	30%
1983	25.280	829.511	207.906	140.071	481.534	25%
1984	19.438	783.957	247.748	115.751	420.457	32%
1985	16.159	675.287	136.204	77.236	461.847	20%

FUENTE: Elaborado con base a datos de la CEPAL²⁴, para los años 1952-1956; Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, Tomo I.

Sin embargo, a pesar del desarrollo petrolero prometedor, la minería siguió liderando el comercio exterior de Bolivia durante todo el periodo, excepto los últimos años marcados por el deterioro generalizado de las exportaciones. Entre 1952 y 1970, la economía minera (estaño, más otros minerales) tuvo una participación promedio por encima del 85% sobre el total de las exportaciones. En los siguientes cinco años sufrió caídas constantes. Posteriormente, la minería se recuperó levemente, pero sin llegar a ocupar la posición dominante o hegemónica que había tenido desde los albores del siglo XX.

El estaño mantuvo su liderazgo entre los minerales de exportación, pero también atravesó por grandes dificultades para revertir la producción que estaba en caída libre o para aprovechar oportunamente los momentos favorables que brindaba el contexto internacional. A inicios de la década de 1970, el precio del estaño escaló significativamente, pero no condujo al aumento de la producción nacional. El declive definitivo comenzó en 1980 y el colapso llegó cinco años después, con la bancarrota del Consejo Internacional del Estaño. Otros minerales como la plata, el zinc y el cobre continuaron teniendo ciclos de crecimiento lento y, por lo tanto, insuficientes como para llenar el vacío que dejaba el “metal del diablo”.

La crisis económica caracterizó los últimos cinco años de este periodo. La importancia de los minerales y metales cayó del 62% de participación sobre las exportaciones nacionales al 39% de participación. En alguna medida, la reducción de los ingresos mineros fue compensada por el aumento de las ventas del gas natural a Argentina. El valor de exportación cayó desde 1.000 millones de dólares en 1980 a 675 millones en 1985, lo que representa un decrecimiento de 33% en el lapso de cinco años. La exportación de estaño se contrajo de 27.328 toneladas a 16.159 toneladas en el mismo periodo (40% de decrecimiento). El precio internacional tuvo un desempeño errático, en promedio en torno a 5-7 dólares por libra fina. En estas circunstancias, la minería estatizada sobrellevaba con grandes dificultades los problemas de ineficiencia que encarecían los costos de producción.

Aunque las exportaciones de productos alternativos habían alcanzado un mayor grado de diversificación en comparación con el periodo precedente, no tenían el potencial ni el tamaño

suficiente para ocupar el lugar del estaño. La economía del gas natural estaba en sus inicios y la agricultura de exportación del oriente no había despegado según lo planeado porque, en buena medida, una parte significativa de los créditos estatales otorgados al sector fueron desviados discrecionalmente hacia actividades no agrícolas²⁵.

1985-2000: LA "DÉCADA PERDIDA" Y LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA

Este periodo de 15 años encierra una de las etapas más azarosas de la historia boliviana. Como vimos al inicio de este capítulo, la economía del estaño colapsó, el Estado nacionalista llegó a su fin y su lugar fue ocupado por un Estado promotor de la liberalización económica. Fueron tiempos de implementación de reformas de corte neoliberal. El Estado interventor o nacionalista murió con el nacimiento de la Nueva Política Económica de 1985, la "relocalización" de los mineros, el cierre de las minas estatales deficitarias y la privatización o liquidación de las empresas públicas. Las reformas iniciadas por Víctor Paz marcaron el nuevo horizonte de los cambios económicos, políticos y sociales de los siguientes años²⁶.

El hecho más significativo ocurrió en octubre de 1985, cuando la cotización internacional del estaño se desplomó en el mercado de Londres, el mercado mundial más importante del mineral. El precio del "metal del diablo" cayó drásticamente hasta 2,5 dólares por libra fina y se mantuvo estable en ese nivel con mínimas variaciones durante los meses siguientes. Las noticias de Londres llegaron en el peor momento para las minas estatales de Bolivia. La nueva cotización apenas cubría el 20% del costo de producción o explotación de las principales minas de Oruro, Potosí y La Paz. La minería estatizada adolecía desde hace años de graves problemas de ineficiencia y elevados costos en planillas salariales y burocracia administrativa. A estos males se sumaban las grandes pérdidas acumuladas por la COMIBOL durante los últimos diez años. La deuda de la Corporación minera alcanzaba a 750 millones de dólares.

Las malas noticias también llegaron en el peor momento para el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Para entonces, ya

había firmado el histórico Decreto Supremo 21060 que ponía en marcha los planes de ajuste estructural que estaban diseñados bajo el supuesto de que el precio internacional del estaño se mantendría en torno a 5,5 dólares por libra fina. Pero, el nuevo precio dictaminado en Londres era menos de la mitad de lo planeado. En estas circunstancias, el gobierno del MNR tomó una segunda decisión drástica para tratar de mantener en pie su política de estabilización macroeconómica: la “relocalización” de los mineros. Más de 22 mil trabajadores mineros fueron despedidos, de un total de 30 mil que estaban registrados en las planillas salariales de la COMIBOL.

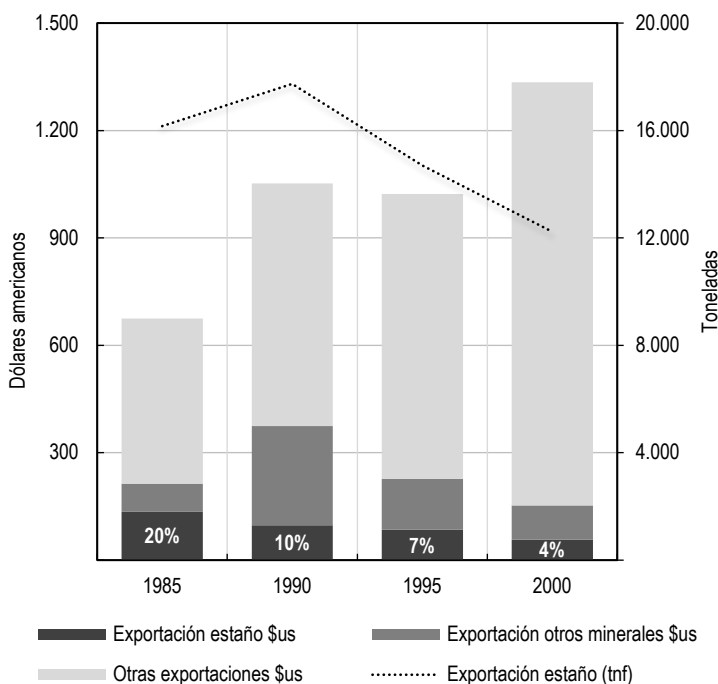
En materia de comercio exterior, el gobierno del MNR implementó un paquete compuesto por varias medidas de liberalización e inserción de Bolivia en el mercado internacional, bajo los lineamientos y las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se comprometió a cumplir rigurosamente el calendario del pago de la deuda a cambio de recibir desembolsos de nuevos créditos para lidiar con la crisis económica. Las medidas de inserción en el mercado internacional priorizaron dos líneas de trabajo: i) las políticas de promoción y diversificación de las exportaciones y, ii) la construcción del gaseoducto Bolivia-Brasil para exportar gas natural.

Sobre lo primero, cabe señalar que el gobierno tomó la decisión de devolver los impuestos pagados por los exportadores, con la intención de alentar la recuperación y el crecimiento del sector privado exportador. También hizo reformas institucionales de consideración, como la implementación de un sistema de ventanilla única para los exportadores, la simplificación de trámites y procedimientos relacionados con el comercio exterior, y la creación de centros de promoción para el sector empresarial. Estas y otras medidas fueron complementadas con acuerdos regionales y bilaterales para abrir y ampliar las oportunidades de comercio exterior, destacando el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Arancel Externo Común (AEC). Aunque estas decisiones gubernamentales gozaron de aceptación del sector privado y empresarial, algunos estudios posteriores sugieren que los resultados fueron más bien modestos²⁷.

Sobre lo segundo, el gobierno boliviano retomó las conversaciones y los acercamientos diplomáticos y comerciales

con los potenciales socios comerciales, particularmente con los países vecinos, destacando las conversaciones para la construcción del gaseoducto Bolivia-Brasil. Gracias a estas gestiones, dicha obra comenzó a formar parte de las prioridades nacionales y de la agenda económica regional. En 1991, la empresa boliviana YPFB y Petrobras de Brasil firmaron una carta de intenciones para comprometerse con el proyecto gasífero. En los siguientes cinco años los acercamientos no llegaron a acuerdos concretos y recién en septiembre de 1996, ambos países firmaron el contrato de construcción del mencionado gaseoducto²⁸.

GRÁFICO 4. BOLIVIA: EXPORTACIONES 1985-2000
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS Y TONELADAS



FUENTE: Elaboración con base en datos del Ministerio de Minería y Metalurgia: Boletín estadístico del sector minero y metalúrgico, 1980-2015²⁹. Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, Tomo I.

El comportamiento de las exportaciones del periodo se caracterizó por altibajos y bajas tasas de recuperación. Entre los años 1987 y 1992, las exportaciones de minerales aumentaron tenuemente, pero posteriormente cayeron hasta tocar fondo.

Entre 1985 y 2000, el estaño tuvo una participación marginal en el comercio exterior, tanto en volumen como en valor de exportación. El zinc se posicionó como el mineral de mayor importancia, presentando tasas significativas de crecimiento en cuanto a explotación y exportación. Los precios bajos de los minerales continuaron manteniéndose sin grandes oscilaciones durante el periodo y las cotizaciones de minerales repuntaron recién hacia el año 2003.

TABLA 4. BOLIVIA: EXPORTACIONES 1985-2000
EN MILLONES DE DÓLARES Y TONELADAS

Año	Estaño (Tmf)	Dólares americanos				% Estaño
		Total exportación	Estaño	Otros minerales	Otras	
1985	16.159	675.287	136.204	108.925	482.347	20%
1986	10.286	650.462	41.573	294.489	557.191	6%
1987	8.129	587.727	34.876	363.559	488.021	6%
1988	10.504	608.235	51.851	368.223	420.913	9%
1989	17.105	852.368	122.892	266.121	581.791	14%
1990	17.735	955.650	97.230	277.223	677.595	10%
1991	17.811	895.283	91.101	241.490	650.362	10%
1992	17.669	773.838	85.777	170.282	512.367	11%
1993	18.880	808.939	87.368	131.560	503.931	11%
1994	16.306	1.124.232	84.874	129.522	774.478	8%
1995	14.701	1.181.213	84.865	141.852	795.927	7%
1996	15.485	1.295.347	85.588	155.211	946.505	7%
1997	14.119	1.272.099	59.450	74.114	917.334	5%
1998	10.542	1.324.735	56.839	45.948	994.432	4%
1999	11.852	1.405.364	61.133	45.632	1.106.341	4%
2000	12.234	1.474.992	57.502	95.120	1.181.929	4%

FUENTE: Elaboración con base en datos del Ministerio de Minería y Metalurgia: Boletín estadístico del sector minero y metalúrgico, 1980-2015²⁹, Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, Tomo I.

En cuanto a la exportación hidrocarburífera, este sector también disminuyó su participación e importancia durante la “década perdida”, tanto en volumen como en valor de exportación. Durante el periodo anterior, Bolivia había empezado a vender gas natural a Argentina en volúmenes más o menos significativos, pero este mercado decayó durante los años de colapso de la economía del estaño. Recién hacia el año 2000, la exportación de gas natural ingresaría a una nueva etapa, debido a que la construcción del gaseoducto Bolivia-Brasil había concluido y comenzado la exportación al país vecino que años más tarde se habría de convertir en el principal mercado de destino.

Este último periodo del siglo XX concluyó con la emergencia explosiva de movimientos políticos que nacieron en las zonas rurales, ciudades y centros urbanos más pobres y más afectados por la crisis económica de la década de 1980. Las reformas de liberalización habían causado costos sociales demasiado elevados entre los sectores populares y poblaciones de las áreas rurales. Los mineros “relocalizados” trasladaron sus tácticas de lucha política y narrativa de clases oprimidas hacia nuevos entornos sociales como la ciudad de El Alto, densamente poblada por migrantes campesinos del altiplano, o el Chapare del trópico de Cochabamba, colonizado por campesinos coccaleros de la época del Instituto Nacional de Colonización (INC)³⁰. Los movimientos sociales indígena-originario-campesinos reivindicaron con renovadas fuerzas sus banderas históricas de lucha contra la discriminación, el racismo y la exclusión sistemática. Los movimientos sociales urbanos y rurales desconfiaban profundamente de las reformas neoliberales y las soluciones de mercado. Las reformas económicas, implementadas en medio de la inestabilidad política, habían gestado posibilidades reales para reemplazar el estaño por el gas natural, pero todavía no era un hecho tangible y visible para la población boliviana.

UN SIGLO DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR

El común denominador del siglo XX, durante los cuatro periodos expuestos, es la dependencia de los recursos naturales exportables. Esta cuestión ha sido estudiada ampliamente a nivel latinoamericano por la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), investigadores y centros de estudios adscritos a esta organización o con influencia de la escuela Cepalina³¹. Aportaron significativamente a la identificación y caracterización de los modelos de desarrollo dependientes de la exportación de materias primas y vulnerables a la volatilidad de la demanda y precios internacionales.

Los estudios de la CEPAL identificaron dos elementos centrales para caracterizar el denominado “modelo primario-exportador”: i) la fuerza o motor principal del sistema económico y, ii) el sector clave o eje. Lo primero fue visto como el elemento que define las tendencias y fluctuaciones del modelo y lo segundo como aquello que posibilita la expansión o contracción de las economías vinculadas a la fuerza motora³². Bajo esta caracterización, el modelo primario-exportador fue entendido como un modelo económico donde la fuerza o el motor dinamizador es el mercado internacional y el sector clave o eje es el “sector primario” de la economía³³. En la Bolivia del siglo XX, el estaño jugó el papel del barco económico a vela y el mercado mundial del estaño el rol del viento que pone en movimiento la embarcación.

Entonces, el modelo primario-exportador se diferencia de otros por tener una alta dependencia de la exportación de materias primas (productos agrícolas, pecuarios, minerales, petróleo), donde los eslabonamientos de las cadenas productivas tienen poca o ninguna relevancia, al igual que la diversificación productiva o los procesos de formación de “economías de base ancha”. Como nos recuerda el capítulo anterior (1), un modelo económico con esta configuración se convierte en un caldo de cultivo para el surgimiento y multiplicación de los males asociados a la maldición de los recursos naturales.

Siguiendo los estudios de CEPAL, las principales características del modelo primario-exportador pueden detallarse de la siguiente manera:

1. *Especialización en explotación y exportación de materias primas*, donde la mayor parte de la economía nacional depende de los ingresos y divisas extranjeras generados por la venta de los productos primarios en los mercados internacionales.

2. *Dependencia de los ciclos altos y bajos de los precios internacionales*, esto significa que existe una alta exposición a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Las variaciones abruptas pueden provocar tanto impactos positivos como negativos y son difíciles de controlar desde el nivel nacional.
3. *Escasa diversificación económica*, debido a las ventajas económicas que ofrece el sector primario o dominante, concentra la presencia y el interés de los actores económicos, además de crear amplias facilidades para abastecer la demanda interna mediante las importaciones.
4. *Vulnerabilidad económica*, debido a que la especialización aumenta la dependencia de la economía nacional de factores externos, existe poco margen de actuación para disminuir los riesgos ante cambios en la demanda internacional o ante la aparición de competidores nuevos.

Esta corriente de pensamiento enfatiza en que existen determinantes estructurales a nivel mundial, como la división mundial del trabajo impuesto por los países más avanzados o industrializados, donde los países latinoamericanos tienen el papel de proveedores de materias primas. Se asume que, ante contextos internacionales desfavorables, los países atrasados como Bolivia fueron obligados a adaptarse a los cambiantes entornos políticos, económicos y sociales de los países avanzados³⁴. En consecuencia, las economías nacionales tejen relaciones de dependencia con los mercados internacionales en los que se insertan en condiciones desfavorables y en calidad de exportadores de recursos naturales o materias primas. A pesar del paso de los años, esta concepción sigue teniendo vigencia e influencia en los debates y discusiones sobre las causas y consecuencias del modelo de dependencia, pero también ha sido objeto de críticas, porque, a veces, los argumentos estructuralistas se utilizaron como una excusa para soslayar nuestras responsabilidades o como una manera excesiva de echar la culpa del subdesarrollo a los factores externos.

Siempre hablando a escala latinoamericana, la primera etapa del modelo primario-exportador se remonta a la época colonial y tuvo vigencia hasta los años 1940. En este periodo, prevaleció la

exportación de productos agrícolas tradicionales como el café, el cacao, la caña de azúcar, cueros, recursos maderables y similares, incluyendo la explotación y exportación de los minerales. Las relaciones comerciales de las colonias y repúblicas jóvenes estaban centradas en intercambios comerciales entre Europa y América. La segunda etapa del modelo primario estaría asociada con el *boom* del petróleo que dio origen a los primeros experimentos de industrialización en Latinoamérica, en un intento por convertir las “ventajas comparativas” (la disponibilidad de materias primas) de algunos países sudamericanos y del Caribe en “ventajas competitivas” frente al mundo. Es también la época en que ganaron gran influencia los cuestionamientos latinoamericanos a las relaciones de poder desiguales y la dependencia centro-periferia. A modo de proyectos de ruptura con los nexos desfavorables, surgieron los primeros experimentos y proyectos económicos dirigidos por los Estados y orientados a la sustitución de las importaciones por medio de procesos de industrialización.

Se asumía en ese entonces que, teniendo materias primas, existían grandes oportunidades para el desarrollo de industrias latinoamericanas y de esa manera lograr desvincularse por doble partida de las relaciones desiguales que regían en el mercado mundial: menos exportación de materias primas y menos importación de productos manufacturados e industrializados. Los resultados de estos experimentos latinoamericanos fueron más bien desiguales entre un país y otro, algunos alcanzaron efectivamente grados considerables de industrialización, pero otros reportaron resultados negativos o ambiguos. Toda esta experiencia sufrió una interrupción brusca con la crisis generalizada de América Latina hacia los años 80.

Finalmente, la tercera etapa del modelo primario-exportador es algo imprecisa, pero algunos autores enfatizan en que comenzó con el resurgimiento o surgimiento tardío de la bonanza petrolera (hacia finales del siglo XX). Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se multiplicaron en varios países de la región, llegando en algunos casos a convertirse en uno de los rubros principales de exportación³⁵ Al día de hoy, la renta petrolera sigue teniendo un peso significativo en la economía de la región.

HERENCIA HISTÓRICA: UN SIGLO DE DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES

Durante el siglo XX, sin duda, el estaño ha sido el sector clave o eje de la economía boliviana, y la demanda mundial, la fuerza o el motor principal. La economía boliviana se estructuró y funcionó por cerca de 100 años en torno al estaño, lo que fue determinante para la historia política, los proyectos nacionalistas y la integración entre el oriente y el occidente. La minería del estaño dio origen a los actores políticos que protagonizaron las principales luchas por el poder económico y político de Bolivia. Del mismo modo, la ubicación geográfica de las minas determinó el carácter occidental o andino de la sociedad boliviana por mucho tiempo. Por eso, Bolivia fue conocido por el mundo como un país andino, a pesar de ser mayormente oriental y amazónico en términos territoriales. Aunque Bolivia vivió al calor e influjo de los pensamientos latinoamericanos para desconectarse de las economías capitalistas, los planes de industrialización y sustitución de importaciones no echaron raíces y algunos emprendimientos no lograron ni germinar a pesar de tener a su favor el proteccionismo estatal.

El reinado de los “Barones del estaño” duró la primera mitad del siglo XX, una época en que la renta minera estuvo controlada por el sector privado. Uno de los aportes destacados de la economía del estaño en manos de los grandes empresarios mineros fue la construcción y la ampliación de las vías férreas o ferrocarriles. Las principales urbes de Bolivia, los grandes centros mineros y los puertos de exportación de la zona andina estuvieron interconectados por el transporte férreo. Aunque la minería privada generaba empleo significativo y desempeñaba un papel estratégico para el funcionamiento de la economía, las altas tasas de concentración de la riqueza en manos de empresarios mineros no favorecieron la gestión de mecanismos (estatales o privados) para la distribución y redistribución equitativa de la renta minera. En consecuencia, la explotación minera sin redistribución alimentó el surgimiento y crecimiento de las tensiones sociales y revueltas políticas que antecedieron a la Revolución Nacional de 1952. Simón I. Patiño no alcanzó a ser testigo del cambio de época debido a que estableció su residencia en Europa y murió en París-Francia, en 1947.

A inicios de la segunda mitad del siglo XX, el control de la renta minera pasó a manos del Estado nacionalista inaugurado por el MNR. El nacionalismo coexistió junto con las medidas de implementación de la Reforma Agraria de 1953 que, aparte de la abolición del sistema hacendal del occidente y el surgimiento de la clase campesina en comunidades quechuas y aymaras, dio origen a los planes de colonización del oriente boliviano y la posterior formación del capitalismo agrario en el departamento de Santa Cruz. Los excedentes mineros fueron destinados significativamente para los proyectos y programas de integración nacional de una Bolivia afanada por salir de su encierro geográfico en el occidente. La construcción de la carretera del eje central La Paz-Cochabamba-Santa Cruz ha sido uno de los componentes centrales de los programas de inversión pública. Hacia la década de 1970, el Estado nacionalista desplegó esfuerzos económicos significativos para la construcción de ingenios azucareros y arroceros en Santa Cruz, otorgó y condonó créditos mediante el extinto Banco Agrícola³⁶ y apostó por proyectos que no prosperaron como la producción de algodón a gran escala en el norte integrado cruceño.

La abrupta llegada de la crisis del estaño en 1985 no fue a causa del agotamiento del potencial de producción de las minas de estaño, sino a causa de la caída del precio internacional del mineral. Aunque Bolivia había diversificado en cierta medida la exportación de los minerales, seguía teniendo una alta dependencia del estaño, sobre todo para sostener las minas estatizadas y los gastos del Estado interventor en la economía nacional. Los proyectos de integración entre el occidente y el oriente fueron financiados por el estaño. El cierre de las minas desnudó la penosa situación del aparato productivo nacional. Las empresas públicas creadas en el sector industrial y manufacturero también colapsaron ante la imposibilidad de seguir recibiendo las subvenciones directas e indirectas provenientes de la renta minera. Las drásticas políticas de estabilización macroeconómica y la “relocalización” de los mineros dejaron una huella profunda en la historia de la Bolivia del siglo XX. Las reformas económicas de la última década del siglo llegaron a su fin sin haber alcanzado los objetivos de transformación del aparato productivo y, mucho menos, la reducción de la dependencia de los recursos naturales.

Las reformas económicas orientadas a la privatización y liberalización de la economía nacional, crearon las condiciones iniciales para que la agricultura de Santa Cruz comience a tener un rol económico de alcance nacional. Estas reformas coincidieron con la aparición del fenómeno mundial de los monocultivos de soya. Este factor que sería decisivo para la transformación del oriente boliviano, apareció el año 1996 con la introducción al mercado global de parte de los Estados Unidos de la soya genéticamente modificada (GM)³⁷. Tanto Brasil como Argentina adoptaron rápidamente el modelo de los cultivos modificados y Bolivia no fue la excepción. Desde entonces, los monocultivos de soya se convirtieron en una pieza fundamental para la agroexportación boliviana.

CONCLUSIÓN

Durante el siglo XX, Bolivia no logró liberarse de la dependencia económica de los recursos naturales, fundamentalmente del estaño extraído de las minas del occidente y exportado en calidad de materia prima a países industrializados como Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto no quiere decir que Bolivia no haya hecho esfuerzos para diversificar y ampliar el aparato productivo. El “Plan Bohan” y varias medidas adoptadas durante y después de la Revolución Nacional de 1952 marcaron el horizonte de las principales transformaciones bolivianas. La historia del ferrocarril en Bolivia comenzó en 1870, pero tomó forma durante el siglo XX con la ampliación y construcción de ramales de interconexión. La expansión de la red occidental y la red oriental reflejan el interés decidido que hubo en algún momento para que las locomotoras desempeñen un papel fundamental en la integración de la economía nacional y el desarrollo del mercado externo. En la segunda mitad del siglo pasado, la política estatal priorizó las carreteras por encima de los ferrocarriles, destacando la vía nacional Cochabamba-Santa Cruz.

Los planes y programas para el aumento de la producción nacional de alimentos y disminución de la dependencia de alimentos importados, también formaron parte de los esfuerzos nacionales por escapar de la maldición de los recursos naturales. Siguiendo las recomendaciones delineadas en los planes de

desarrollo, el Estado nacionalista apostó decisivamente por el desarrollo del sector agropecuario en el departamento de Santa Cruz. La Reforma Agraria de 1953 definió los mecanismos legales y técnicos para el reconocimiento y creación de medianas y grandes propiedades agropecuarias en el oriente y, a la vez, incentivó la migración de los campesinos pobres del occidente hacia las zonas de colonización del oriente y norte boliviano. El agro cruceño tuvo un crecimiento lento y se desempeñó con grandes altibajos hasta finales de la “década perdida”³⁸. El despegue definitivo llegó hacia inicios de la última década.

La crisis generalizada de finales del siglo XX arrastró consigo a la mayoría de las plantas de producción, fábricas y programas dirigidos por el Estado para la industrialización y desarrollo del sector manufacturero. La minería estatizada no sobrevivió a la tormenta porque ya estaba debilitada por las deudas y las pérdidas económicas acumuladas durante varios años consecutivos. Aunque el sector hidrocarburífero contribuyó modestamente a la diversificación de la economía durante los años 70, fue insuficiente para cambiar la suerte de la “década perdida”. Las fábricas y empresas públicas que operaban con subsidios estatales también se desmoronaron a la par del agotamiento de la renta minera.

3

EL MODELO DEL SIGLO XXI: RENTA PETROLERA, AGRÍCOLA Y MINERA

PREÁMBULO

A las puertas del tercer milenio, a medida que se acercaba el 01 de enero de 2000, el mundo estaba pendiente de las noticias relacionadas con el “problema Y2K”¹. Los países desarrollados y las grandes economías estaban particularmente nerviosos ante los pronósticos de probables daños masivos y caos en cascada a causa del hábito de abreviar los años de cuatro dígitos a los dos últimos dígitos que reinaba entre los ingenieros en sistemas de computación. Los principales centros económicos esperaron temerosos posibles fallas en los sistemas de suministro de servicios de transporte, energía, sistemas bancarios o financieros, telefonía, internet y otros. Sin embargo, los países como Bolivia no perdieron la calma porque el funcionamiento de sus economías apenas estaba enlazado a los sistemas informáticos en redes y a las tecnologías más avanzadas de la época. En ese momento, Bolivia estaba gobernada por Hugo Banzer Suárez (1997-2001), quien se mantuvo al mando hasta el 7 de agosto de 2001, fecha en que renunció por motivos de salud, dejando el cargo a su vicepresidente Jorge Quiroga (2001-2002)².

En estas circunstancias, Bolivia ingresó al siglo XXI con dos hechos nacionales que habrían de marcar el curso de la economía de los siguientes años: i) la conclusión de la construcción del gaseoducto Bolivia-Brasil y ii) la introducción de cultivos genéticamente modificados (GM) en la agricultura cruceña. Las expectativas de reactivación económica de Banzer estaban centradas, precisamente, en el aumento de las rentas petroleras a partir de la exportación del gas natural a Brasil, la ampliación del mercado argentino y la agroexportación de cultivos GM.

La alianza del Estado boliviano con las petroleras multinacionales había finalmente jugado un rol estratégico para el descubrimiento de grandes reservas de gas natural y materialización de los compromisos para exportar con la participación del sector privado.

Sin embargo, el gobierno de Banzer es recordado no tanto por sus planes de reactivación económica, sino por la llamada “Guerra del agua”, que se suscitó en la ciudad de Cochabamba a consecuencia de la privatización del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado³. El consorcio multinacional conformado por *Bechtel* de Estados Unidos, *Edison* de Italia, *Abengoa* de España y otros⁴, luego de adjudicarse un contrato con el gobierno nacional en febrero de 2000, tomó la decisión de elevar las tarifas del servicio de agua en más del 50%, incluso llegando al 300% en algunos casos. Este cambio tarifario no cayó nada bien a la población ya empobrecida por la crisis y rápidamente desató una inestabilidad política con repercusiones a nivel nacional. Las protestas cochabambinas empoderaron a la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR)⁵, escalaron hasta obligar al gobierno a rescindir el contrato de privatización del agua, alimentaron el surgimiento y crecimiento de los movimientos sociales a nivel nacional e, incluso, motivaron la llegada a Bolivia de varios activistas y movimientos anticapitalistas desde diversas partes del mundo. Así, Cochabamba se convirtió en la capital de lucha social contra el neoliberalismo.

En los años posteriores y hasta las vísperas de la llegada al poder de Evo Morales en 2006, los movimientos sociales irrumpieron en la arena política desde múltiples sectores y regiones. Además de los regantes de FEDECOR, los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba se levantaron en contra del plan gubernamental “Coca Cero” y los sindicatos campesinos del altiplano andino reavivaron sus luchas con la aparición impetuosa del liderazgo de Felipe Quispe⁶. Por su lado, las juntas vecinales de la ciudad de El Alto encabezaron las protestas en contra de los anuncios gubernamentales de privatización del gas natural y exportación a Chile. Varias otras regiones víctimas de la crisis económica se sumaron al descontento generalizado. Finalmente, las luchas sociales y políticas en contra de la privatización de los recursos naturales tomaron forma como

demandas de “nacionalización de los recursos naturales”, tanto en la agenda de los movimientos sociales como en las propuestas económicas de los partidos políticos no tradicionales como el Movimiento al Socialismo (MAS).

Sin embargo, el creciente descontento social mayormente concentrado en el occidente del país no fue un impedimento para que el gobierno de Hugo Banzer haya adoptado decisiones claves a favor de su tierra natal y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Los grupos de poder cruceño conquistaron varias medidas sectoriales para la reactivación de la agricultura mecanizada, destacando dos: i) el congelamiento del precio del diésel⁷, y ii) la modificación de las alícuotas del Régimen Agropecuario Unificado (RAU)⁸, para reducir al mínimo los tributos de los grandes propietarios de tierras.

De esta manera, Bolivia ingresó al siglo XXI, con la idea de reactivación económica posicionada en la agenda nacional, con la esperanza de alivianar la pobreza con la renta petrolera que comenzaba a germinar y con ello, desactivar el descontento de los movimientos sociales, y que las ventajas otorgadas a la agricultura mecanizada consoliden a Santa Cruz como un polo regional estratégico para el desarrollo nacional. El estaño, simplemente, había pasado al olvido.

PANORAMA GENERAL, 2001-2023

La dependencia de los recursos naturales experimentó un cambio de tipo estructural con respecto al siglo XX: la minería del estaño dejó de ser el sector clave o el eje de la economía nacional. Perdió protagonismo y su lugar fue ocupado por el gas natural. Después de una agonía de cerca de 20 años (1981-2000), la economía boliviana comenzó finalmente a mostrar señales estables de estar a puertas de un periodo de recuperación. Las inversiones en exploración hidrocarburífera arrojaron resultados positivos y el aumento de las reservas de gas propició la puesta en marcha de los planes de exportación a Brasil y Argentina. Hacia el 2005, el gas comenzó a impulsar la exportación boliviana, inaugurando así uno de los periodos más exitosos de bonanza rentista. Al mismo tiempo, la agricultura cruceña se posicionó como el segundo rubro económico de

mayor importancia dentro del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el comercio exterior. Por su parte, la minería del oro prácticamente no tenía relevancia en un inicio, pero apareció hacia el 2013 de forma explosiva, llegando a representar cerca de la mitad de las exportaciones mineras. Esta llegada rezagada del *boom* del oro fue casi providencial debido a que coincidió con los años de declive de las exportaciones del gas natural.

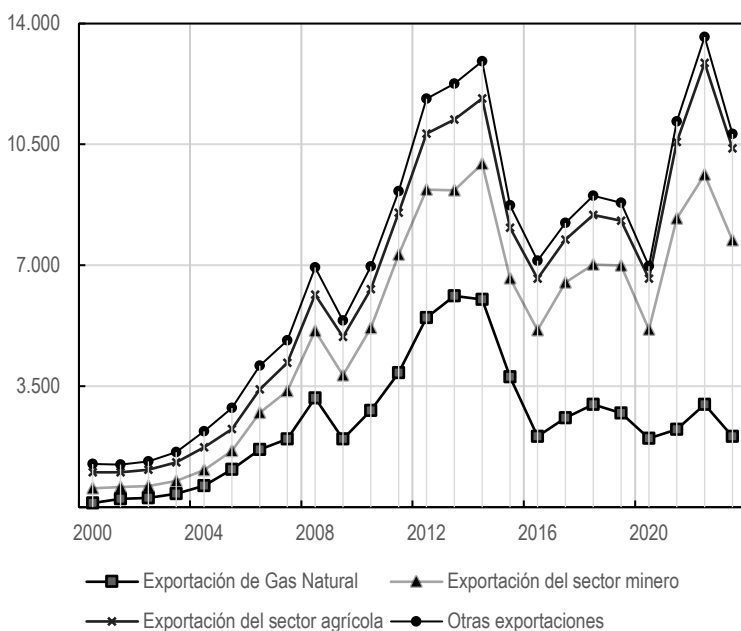
El ascenso de la exportación del gas natural tocó el punto más alto el año 2013, cuando el volumen exportado llegó a 16.953 millones de metros cúbicos (mm^3), lo que generó en valor 6,1 mil millones de dólares. En ese momento cumbre, la importancia del energético en cuestión quedó reflejado en el 50% de participación que tuvo sobre el total de las exportaciones nacionales, seguido por la minería, cuya participación quedó registrada en 25% y la agricultura con 17%. Estos tres rubros sumaban un 92% sobre las exportaciones. En ese momento, el oro representaba apenas un 4%. La importancia del gas natural fue acentuada por la subida de los precios internacionales del petróleo y derivados.

Dos años después, en 2015, la fase recesiva comenzó de forma gradual e irreversible, obligando al gobierno nacional a adoptar nuevas políticas y medidas en busca de nuevas reservas de recursos exportables y fuentes de ingresos alternativos a la renta petrolera. Los proyectos de exploración de hidrocarburos no arrojaron los resultados esperados, al igual que los proyectos de industrialización del gas natural. Para el 2023, el gas natural generó en exportaciones dos mil millones de dólares, lo que equivale tan solo al 34% del valor más alto alcanzado en 2013.

Por su parte, la expansión de la agricultura cruceña había comenzado un poco antes del cambio del siglo y siguió un curso ascendente, lento, pero sostenido. Tocó techo el año 2022, cuando el valor de la agroexportación alcanzó 3,2 mil millones de dólares. Del mismo modo, la superficie cultivada y los volúmenes de producción crecieron gradualmente y sin pausa. Al inicio del nuevo milenio, la superficie cultivada de Santa Cruz estaba en 1,2 millones de hectáreas cultivadas y para el año 2022 superó 3 millones hectáreas. Esto significa que en 23 años, el crecimiento porcentual superó 154%. El precio internacional de la soya también favoreció al crecimiento del agro cruceño, sobre todo en los últimos seis años (2018-2023),

periodo en el que la cotización en la bolsa de Chicago tocó techo al registrar 650 dólares por tonelada de soya. Este desempeño sectorial ascendente por más de dos décadas, y en un entorno nacional desfavorable, condujo al aumento de la importancia relativa de la agricultura de Santa Cruz en las cuentas del comercio exterior. En el último quinquenio (2019-2023) la agroexportación representa, en promedio, el 21% del total de las exportaciones bolivianas.

GRÁFICO 5. BOLIVIA: EXPORTACIONES 2000-2023
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (DATOS ACUMULADOS)



FUENTE: Elaboración en base a datos obtenidos del Sistema Integral de Información Productiva (SIIP); Banco Central de Bolivia (BCB); e Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por último, la minería superó el techo de 1.000 millones de dólares de exportación en 2006 y desde entonces no paró de crecer, principalmente, influenciada por la bonanza del oro, que está a punto de cumplir una década de auge. Anteriormente, la minería del oro tenía una participación marginal en la economía minera y el comercio exterior. De forma gradual, las exportaciones del oro fueron creciendo,

tanto en volumen como en valor. En 2013, Bolivia producía 18 toneladas de oro, pero para el 2022 escaló hasta 53 toneladas. Prácticamente se triplicó en una década. Es un fenómeno sin igual que fue estimulado decisivamente por la subida del precio internacional. Al inicio del *boom*, el precio de la onza troy estaba en torno a 1.100 dólares, lo que fue subiendo hasta llegar al precio actual situado por encima de 2.300 dólares. El aumento de la demanda internacional obedece al hecho de que el oro es considerado como un refugio seguro ante las amenazas de recesión de la economía mundial. Los bancos centrales de varios países se convirtieron en uno de los principales compradores. Para Bolivia, en poco tiempo, la exportación del oro sobrepasó en importancia al gas natural.

Por todas estas consideraciones, está claro que la dependencia de los recursos naturales no desapareció con el desvanecimiento del estaño, sino que sigue teniendo vigencia en el siglo XXI, aunque con características propias. Algunas particularidades que no debemos perder de vista son: i) La bonanza del gas natural tuvo un ciclo de duración corta, no más de 20 años, en comparación con el estaño que estuvo vigente por casi un siglo; ii) El declive del gas natural obedece al agotamiento de las reservas y no a un cambio abrupto o desfavorable en el precio o demanda internacional, como lo sucedido con el estaño en los años 1980; iii) Ahora, los sectores clave o ejes son tres en lugar de uno, como lo fue con el “metal del diablo”; y iv) El control de los recursos naturales no está concentrado en manos de un solo actor económico (los “Barones del estaño” en la primera mitad del siglo XX y el Estado nacionalista en la segunda mitad), sino que es un control compartido entre tres actores rentistas: el Estado (gas natural), los dueños del agro cruceño y los dueños de la minería, destacando en éste último los cooperativistas de la minería del oro.

Bajo estas consideraciones generales, las siguientes tres secciones están dedicadas a desglosar con mayor detalle los elementos centrales, el desempeño económico y las tendencias de cambio de cada uno de los tres sectores clave, abarcando las primeras dos décadas del nuevo milenio y, cuando es posible, actualizando los datos al año 2023. La parte final de este capítulo presenta un balance evaluativo y preparatorio para el siguiente apartado.

EL BREVE REINADO DEL GAS NATURAL

Bolivia inauguró la bonanza del gas natural sobre la base de cinco hechos altamente favorables:

1. *Aumento de reservas.* Las reservas probadas de gas natural crecieron de 5,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de 1999 a 18,3 TCF para el 2000. En los siguientes tres años, esta cifra siguió aumentando hasta llegar, en 2003, a 28,7 TFC de reservas probadas y certificadas por la firma *Goldyer & MacNaughton*⁹ de Estados Unidos. Con ello, Bolivia se convirtió en uno de los países de América del Sur con mayores reservas de gas natural. En ese momento, Argentina tenía 25,7 TFC de reservas, seguido por Perú con 13,3 TFC, Brasil con 8,1 TFC y Chile con apenas 4,4 TFC.
2. *Gasoducto Bolivia-Brasil.* Esta infraestructura terminó de construirse el año 2000. En el territorio boliviano, el tendido del gasoducto alcanzó una extensión de 557 km, desde la estación cabecera de Río Grande, en las cercanías de la ciudad de Santa Cruz, hasta la estación de transferencia del Mutún, en la frontera con Brasil. El gasoducto fue interconectado con el sistema brasileño que tenía 2.593 km de extensión. Esta inversión sentó las bases materiales para transportar las reservas del gas natural boliviano a los mercados de São Paulo y Porto Alegre, del sureste de Brasil.
3. *Exportación.* Los contratos de exportación a Argentina y Brasil entraron en vigor casi de inmediato. Aunque Bolivia ya vendía gas al norte argentino, los volúmenes de exportación se multiplicaron con la mayor participación del mercado brasileño. Durante la primera década, las exportaciones a Argentina se mantuvieron por debajo de los volúmenes transportados al lado brasileño, pero en adelante creció hasta llegar a triplicarse.
4. *“Nacionalización”.* En 2006, el gobierno de Evo Morales renegoció y firmó nuevos contratos de exploración y explotación con las empresas petroleras.

Estas negociaciones conocidas como “nacionalización de hidrocarburos” convirtieron al Estado boliviano en “dueño nominal del gas y petróleo”, y permitieron aumentar el pago de impuestos por parte de las petroleras multinacionales como Petrobras y Repsol.

5. *Precio.* El precio internacional del gas natural se incrementó significativamente desde el año 2003. Hasta fines de la primera década, el precio internacional del energético prácticamente se triplicó, y debido a que los precios del gas boliviano estaban indexados a los precios referenciales del petróleo, las recaudaciones por la renta petrolera también se dispararon hasta cifras multimillonarias.

Producción y comercialización

Entre los años 2001 y 2023, la producción nacional de gas natural sumó 350.765 mm³ y la exportación 252.817 mm³, habiéndose destinado el 72% para la exportación a Brasil y Argentina. En 23 años, se extrajo el equivalente al 42% de las reservas internacionalmente certificadas en 2003. El ritmo de producción creció sin pausa desde inicios del siglo en curso hasta el 2014, cuando alcanzó 22.188 mm³, el punto más alto que consta en los registros oficiales. En adelante, la tendencia se invirtió hasta descender a 13.390 mm³ de producción anual para el año 2023.

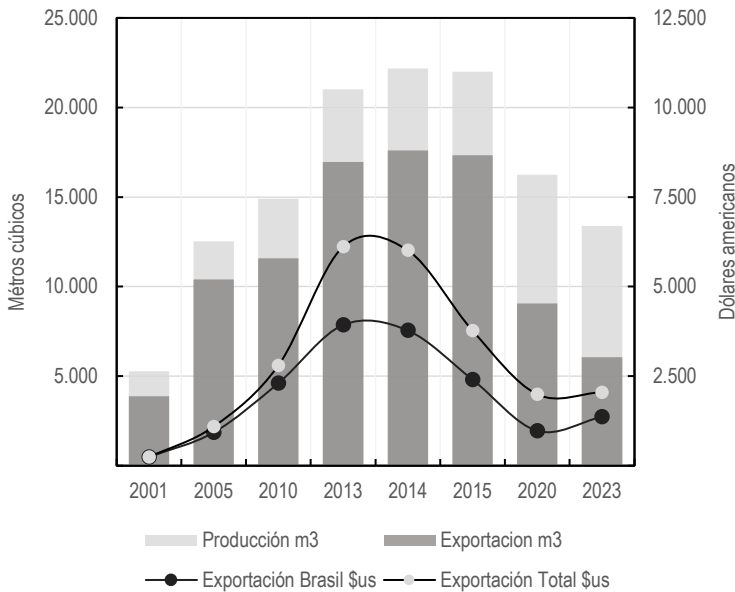
La exportación tocó techo el 2014 con un volumen exportado de 17.608 mm³. En adelante, experimentó un descenso precipitado del que no logró recuperarse a pesar de dos momentos de repunte. Llegó al nivel más bajo en 2023, con 3.170 mm³, lo que solamente representa el 25,7% de la producción del mismo año, la brecha más grande registrada desde el 2001. En los últimos años, los volúmenes exportados tienden a disminuir a un ritmo mayor que los volúmenes efectivamente producidos.

En términos monetarios, Bolivia exportó gas natural por un valor total mayor a 58,9 mil millones de dólares en el periodo 2001-2023. En los años posteriores, la caída abrupta fue a consecuencia del efecto combinado entre precios internacionales bajos y reducciones paulatinas de los volúmenes de exportación. Entre el

2013 y 2016, la renta del gas se redujo en más de 4 mil millones de dólares, lo que equivale a un decrecimiento de 66% en tan solo tres años. El valor más bajo registrado corresponde al 2023, con 2.047 millones de dólares en exportación de gas natural.

Casi de forma paralela, el precio de exportación del gas presentó un comportamiento ascendente entre los años 2000 y 2012, pasando de 57,5 dólares por mil metros cúbicos a 274,2 dólares, lo que significó un crecimiento de 377% en el periodo. En adelante descendió aceleradamente hasta tocar el punto más bajo en 2017 con 168,7 dólares por mil metros cúbicos. En los años posteriores a la emergencia sanitaria del 2020 hubo una recuperación significativa en los precios, alcanzando un nuevo punto alto el 2022, con 389,7 dólares.

GRÁFICO 6. BOLIVIA: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL 2001-2023
EN MILLONES DE METROS CÚBICOS Y MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS



FUENTE: Elaborado con base en datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE); Banco Central de Bolivia (BCB); y Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB).

NOTA: Millones de metros cúbicos - mm3.

Una conclusión parcial que se extrae de lo dicho es que durante los años anteriores al 2013, la economía del gas natural creció por doble partida. Por un lado, el crecimiento constante de la producción anual elevó los volúmenes de exportación, llegándose a exportar el 80% y por otro, los altos precios internacionales incrementaron el valor de comercialización del gas boliviano. En cambio, desde el 2014, la renta descendió en relación directa con la disminución de los volúmenes de producción y exportación y la tendencia descendente de los precios del gas natural. En los últimos tres años (2021-2023), en promedio, la exportación del gas natural generó un valor de comercialización que ronda 2,4 mil millones de dólares por año.

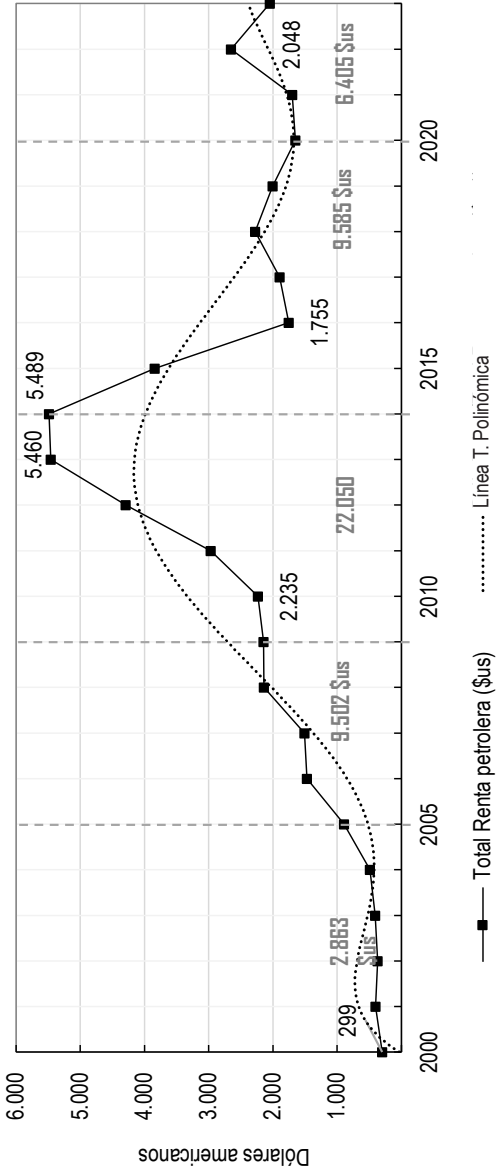
En el periodo 2001-2023, Brasil fue el principal mercado de exportación, con una participación promedio del 67%, mientras que el mercado de Argentina representó el restante 33%. Durante los primeros años, la participación de Brasil predominó por encima de Argentina, llegando al 86% en el periodo 2001-2010. En adelante, el mercado argentino fue ganando mayor importancia hasta bordear un 50% de participación en los últimos años (2021-2023). Tanto el descubrimiento de grandes reservas de gas en el campo de Vaca Muerta como la menor capacidad exportadora de nuestro país obligaron a rondas de renegociación entre Argentina y Bolivia para acordar la finalización del acuerdo comercial para mediados del 2024.

Renta petrolera

La renta petrolera está compuesta por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)¹⁰, que representa el 42% del total en el periodo 2001-2023, seguido por las regalías con 23% y la participación de YPFB que llegó al 15%. Los impuestos *Upstream* y otros alcanzaron una participación del 20% en el periodo de 23 años.

En el primer quinquenio del nuevo milenio (2001-2005), la renta petrolera sumaba 2.564 millones de dólares y en la segunda parte de la misma década, 2006-2010, totalizó 9.502 millones de dólares. Comparando las dos sumas quinquenales, se observa que la tasa de crecimiento superó 270%. Este cambio es una evidencia concreta del ascenso que tuvo la importancia del gas natural para las arcas del Estado.

GRÁFICO 7. BOLIVIA: RENTA PETROLERA 2000-2023
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS



FUENTE: Elaborado en base a datos obtenidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Fundación Jubileo 2000-2005; y Sistema de Impuestos Nacionales (SIN).
NOTA: Para el total de la renta petrolera se considera los siguientes regímenes fiscales a partir del 2005: Regalía departamental 11%; Regalía nacional compensatoria 1%; Participación TGN 6%; Impuesto Directo a los Hidrocarburos 32%.

TABLA 5. BOLIVIA: RECAUDACIÓN DE LA RENTA PETROLERA SEGÚN COMPONENTES EN INTERVALOS QUINQUENALES, 2000-2023
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

Periodo quinquenal	Total	Ingresos Extra ordinario	Patentes	Impuestos Upstream y otros	Participación de YPFB	Regalías y participación del TGN	IDH
2000-2005	2.863	0	0	0	0	0	0
2006-2010	↑ 9.502	0	32	1.271	1.571	2.370	4.258
2011-2015	↑ 22.050	0	60	3.359	4.201	5.200	9.230
2016-2020	↓ 9.585	0	62	1.147	1.030	2.637	4.709
2021-2023	↓ 6.405	555	36	830	771	1.516	2.697
Total	50.405	555	190	6.607	7.573	11.723	20.894

FUENTE:: Elaborado con base en datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 2006-2023, Fundación Jubileo 2000-2005.

Entre los años 2000 y 2023, la renta petrolera por la explotación de hidrocarburos, principalmente el gas natural, sumó 50.405 millones de dólares, lo que equivale a un ingreso anual promedio de 2,1 mil millones de dólares. La renta petrolera alcanzó el punto más alto el año 2014, con un registro de 5,5 mil millones de dólares. En adelante, siguiendo la tendencia decreciente de la producción y precios internacionales, los ingresos fiscales también descendieron, situándose en torno a 1,7 mil millones anuales para el 2021, aunque repuntó al año siguiente registrando 2,9 mil millones, fundamentalmente debido a la incidencia de los “ingresos extraordinarios” contabilizados en 763 millones de dólares, algo sin antecedentes.

Una manera de entender el impacto de la renta petrolera es comparar la misma con el tamaño de la economía nacional de cuando comenzó el ciclo. En 2005, cuando el PIB de Bolivia alcanzaba 10,6 mil millones de dólares (lo que es como a la cuarta parte del tamaño actual), la renta petrolera sumaba 894 millones de dólares, de donde se deduce que equivalía al 8% del PIB. Pero la renta petrolera de 2014 (5,5 mil millones) llega a representar el 52% del PIB de referencia (2005). En otras palabras, bastaron nueve años de crecimiento sostenido de la renta para convertirse en el factor decisivo para el desempeño de la economía nacional. Esta es la principal explicación para

que el PIB boliviano durante ocho años (2011-2018) haya crecido por encima del 4% anual en promedio.

El marco normativo que regula la distribución de la renta petrolera entre el nivel nacional y subnacional, y que en algunos casos como el Fondo Indígena establece alícuotas especiales de participación, contiene disposiciones suficientes para transparentar el acceso a la información sobre el uso de la renta, pero el acceso real es bastante limitado y poco fiable cuando se trata de información desagregada sobre el destino de los ingresos fiscales tanto a nivel del gobierno central como subnacionales. En general, se sabe que el incremento repentino de fondos impulsó el financiamiento de proyectos de dudosa viabilidad y utilidad pública por parte de las autoridades nacionales, departamentales, municipales y las mismas universidades. Además, el gobierno nacional utilizó diversos mecanismos para recentralizar los fondos, algunas veces recortando las transferencias a los niveles subnacionales y otras presionando a los gobernadores y alcaldes municipales para el cofinanciamiento de obras de infraestructura.

Desde 2016 en adelante, los volúmenes de exportación petrolera disminuyeron de forma persistente, pero, llamativamente, la producción del gas natural no bajó a la misma velocidad. La brecha entre producción y exportación del gas natural se ensanchó levemente, particularmente el último año, 2023, cuando la producción alcanzó 13.390 mm³, mientras que la exportación llegó a tan solo 6.053 mm³. Se exportó menos de la mitad de lo producido.

A pesar de ello, el agotamiento de las reservas descubiertas en la década de 1990 es una realidad, peor aun teniendo en cuenta que los proyectos de exploración no arrojaron los resultados esperados. En un intento casi desesperado por incrementar las reservas probadas, el gobierno nacional flexibilizó la normativa para autorizar trabajos de exploración en la Amazonia boliviana, áreas protegidas y territorios indígenas titulados a favor de los pueblos de las tierras bajas. Sin embargo, estas incursiones tampoco arrojaron los resultados ambicionados. Paralelamente, también cayó la producción de petróleo nacional que permitía el suministro de gasolina y diésel para el consumo interno. La menor producción de petróleo motivó el crecimiento de los volúmenes de importación de gasolina, diésel y petróleo crudo.

Y debido al congelamiento de los precios de combustibles, el gasto público para subvencionar el consumo nacional sigue escalando hasta niveles imprevisibles.

Industrialización fallida

La idea de la industrialización de los hidrocarburos tomó fuerza a partir del segundo año del gobierno de Evo Morales (2007). Las autoridades optaron por usar un lenguaje políticamente correcto para no desdecirse de los postulados anticapitalistas del MAS. En los discursos y planes de desarrollo estaba por demás dicho que no se trataba de una “industrialización capitalista”, sino de una “industrialización del Vivir Bien” que, según la versión oficial, se diferenciaría de la primera por su orientación hacia una lógica de redistribución social de la riqueza¹¹. En otras palabras, el Estado se haría cargo de la industrialización y a la vez se encargaría de distribuir las ganancias según las necesidades del pueblo.

Inicialmente, había una lista larga de proyectos de industrialización como las plantas de refinación y separación de líquidos, plantas de conversión del gas en líquidos (GTL), una megaplanta de amoniaco y urea, plantas de fertilizantes químicos, plantas de etileno y polietileno, entre otros. Con el tiempo, todos estos proyectos fueron sufriendo modificaciones y retrasos. Hasta 2014, la única propuesta que entró en operaciones fue la planta de separación de Río Grande. Posteriormente, el gobierno instaló otra planta similar en Yacuiba con el objetivo de producir gas licuado de petróleo (GLP) y derivados. El presupuesto programado para ambos proyectos alcanzaba 700 millones de dólares.

El proyecto petroquímico más importante es la megaplanta de Amoniaco-Urea de Bulo Bulo, consistente en un complejo compuesto por cinco plantas para producir amoniaco, urea, nitrato de amonio, NPK y DAP y etanolaminas (MAP). La construcción arrancó a finales del 2013 junto con el anuncio gubernamental de una producción anual planeada de 650 mil toneladas de urea y 420 toneladas de amoniaco. Fue construida por la multinacional coreana Samsung y la inversión total superó mil millones de dólares. A cambio, se preveía generar ingresos anuales en torno a 300 millones de dólares. La planta comenzó a operar en 2018, reportando inicialmente una producción de 279 mil toneladas de urea.

El 2019 creció hasta 330 mil toneladas, pero el 2020 bajó drásticamente a 7,1 mil toneladas. Prácticamente, la planta no operó durante los meses de emergencia sanitaria por Covid-19¹².

Para el 2023, la planta fue reactivada y la producción reportada escaló a 347 mil toneladas de urea y los ingresos por ventas sumaron 256 millones de dólares. Es decir, operó casi a la mitad de la capacidad instalada. Sin embargo, prácticamente no existe información pública sobre los márgenes de utilidad de la planta o las ganancias netas, excepto un anuncio en redes sociales de YPF B que sugiere una rentabilidad aproximada del 13% sobre el valor de las ventas¹³. Si esto es verdad, significa que la ganancia del 2023 estaría en torno a 33 millones de dólares, para una inversión que supera mil millones de dólares. No hace falta mayores consideraciones ni conocimientos financieros especializados para concluir que este nivel de rentabilidad de la planta es inaceptable para una inversión que supera mil millones de dólares.

Para otros proyectos de industrialización de hidrocarburos, el gobierno optó por crear la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH)¹⁴ que, según el sitio web oficial, es “la empresa responsable de cambiar el patrón primario exportador de los hidrocarburos, desarrollando la industria petroquímica para darles un mayor valor agregado y así contribuir al crecimiento soberano del país”. Entre sus planes está la instalación de una planta de tuberías de aluminio flexible con doble capa de polietileno, la planta de garrafas de composite o plástico construido en polietileno de alta densidad, y la planta de geomembranas para la producción de material de revestimiento impermeabilizante. Durante la gestión 2022, los ingresos de EBIH sumaron 3,3 millones de dólares y los egresos 4,1 millones de dólares. El resultado de gestión fue negativo.

Finalmente, cabe mencionar el proyecto estatal de biocombustibles. El gobierno de Luis Arce retomó la política de la “era de biocombustibles” que había lanzado Morales entre el 2018 y 2019. Sin embargo, para desmarcarse de su predecesor, Arce justificó el proyecto como un eje estratégico para la “industrialización con sustitución de importaciones”, una apuesta que permitiría ensanchar y diversificar la base productiva. El Estado industrializador justificó así sus planes de producción de

biocombustibles a partir de soya, palma aceitera, caña de azúcar, jatropa, macororó y otras plantas oleaginosas. A diferencia de los proyectos de industrialización del gas, el plan de biocombustibles contemplaba el establecimiento de alianzas entre las entidades estatales y los agropecuarios del sector privado con el fin de incrementar la producción de los cultivos requeridos para etanol y biodiesel. Además de comprometerse a construir plantas de acopio de granos y procesamiento con fondos públicos, el gobierno de Arce aceptó seguir subvencionando la importación de los combustibles requeridos para la expansión de la frontera agrícola.

Hacia el final del primer trimestre de 2024, Luis Arce inauguró la primera planta de biodiesel en Santa Cruz. Un día después, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, explicó que el 75% del aceite crudo de soya sería procesado y suministrado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)¹⁵. Aunque esta empresa fue creada para apoyar la seguridad alimentaria, fue implicada en una tarea diferente a sus mandatos por una razón elemental: no existen productores de materia prima para el biodiesel en Bolivia. La única opción realista para producir el energético es a partir de la soya. Pero, el gobierno, intencionalmente, instaló la idea de que el “diésel renovable” se produciría principalmente a partir de arbustos silvestres como el macororó o la jatropa, y la palma aceitera. Producir carburantes con aceites de ricino que se obtienen de estos arbustos, no tiene sustento técnico ni económico. Colombia y Ecuador son los países que más avanzaron en estudiar su potencial técnico y comercial y llegaron a la conclusión de que el biodiesel obtenido no cumple con los parámetros técnicos que rigen en la industria para su utilización como combustible para automotores.

Este es el contexto en que EMAPA apareció como el intermediario accidental para el acopio de la única materia prima disponible: la soya. Según las autoridades, la planta inaugurada procesará diariamente 1.500 barriles de biodiesel de soya. Esto equivale al 3,3% del consumo diario de diésel que está por encima de 45.000 barriles a nivel nacional. Para hacer funcionar la planta a plena capacidad, se necesitará 500 mil toneladas de grano de soya por año, lo que a su vez requiere 250 mil hectáreas cultivadas. Como develan estas cifras, aunque el biodiesel

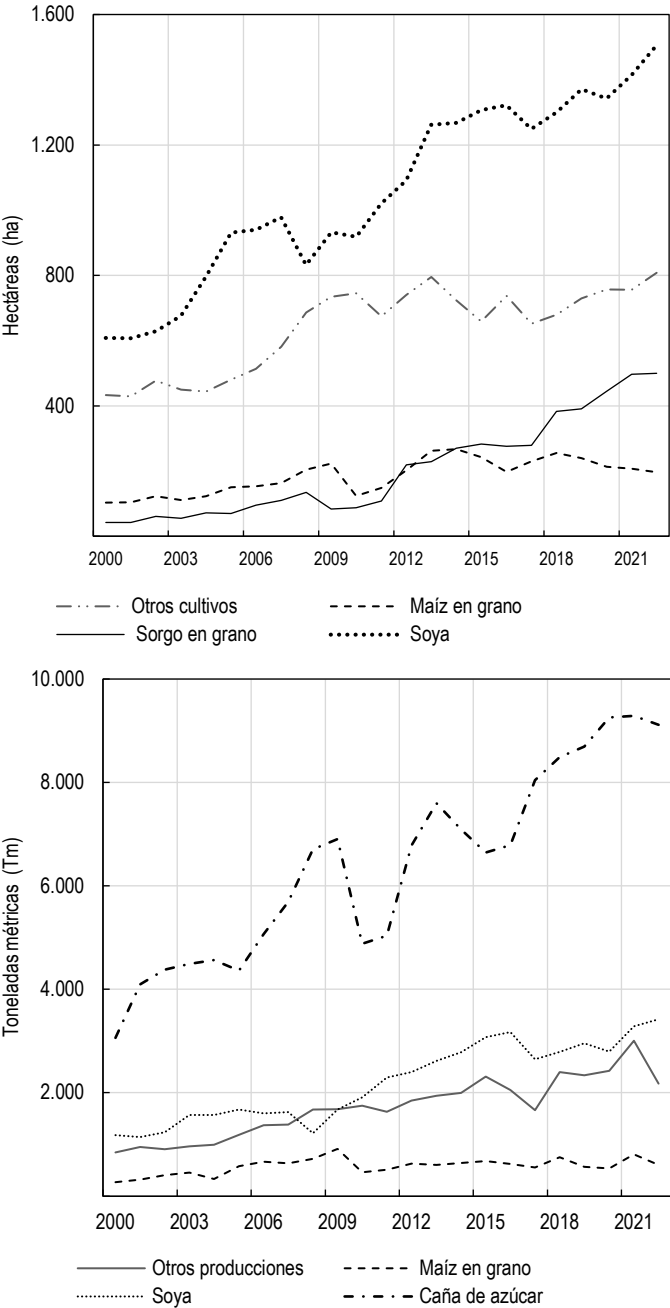
esperado no tiene relevancia con respecto al consumo total, es muy exigente en cuanto a volúmenes de producción y tamaño de superficie cultivada.

LA EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA CRUCEÑA

El entorno favorable para el agro mecanizado surgió en la década de 1990, a partir de las políticas económicas orientadas a la agroexportación y, más tarde, con la adopción de cultivos genéticamente modificados (GM). Un factor que influyó decisivamente para el crecimiento del sector fue el proyecto “Tierras Bajas del Este” del Banco Mundial, que tenía como objetivo la ampliación de la agricultura comercial a partir de la producción de soya y trigo. Atraídos por las nuevas oportunidades, el sector sojero se benefició con la llegada de capitales brasileños y argentinos¹⁶. Al igual que otras medidas de liberalización de mercados de aquellos años, el proyecto agrícola en cuestión fue concebido con el argumento de contribuir al despegue del crecimiento económico de Bolivia. Y en efecto, aunque la deforestación ilegal se disparó rápidamente, la ampliación de la frontera agrícola se materializó y favoreció al auge del complejo oleaginoso (soya, girasol y sorgo). No sucedió lo mismo con otros cultivos, como el trigo, la caña de azúcar o el maíz, que fueron calificados como cultivos de crecimiento lento.

La adopción legal de los cultivos GM se produjo el 2005. En realidad, los cultivos GM ya estaban presentes desde finales de la década anterior, de modo que la medida gubernamental legalizó lo que ya existía en los hechos. En enero del 2005, el Comité de Bioseguridad aprobó el informe final de tres ensayos presentados por el Comité Regional de Semillas de Santa Cruz y con ese antecedente, el mismo Comité recomendó en abril del mismo año la aprobación del informe del SENASAG que determinaba la no existencia de riesgos de la soya GM para la elaboración de alimentos y bebidas. Unos días después, el gobierno nacional emitió una Resolución Multimministerial (001/2005), autorizando la producción, procesamiento y comercialización de la soya GM resistente a glifosato. Todas estas medidas antecedieron y justificaron la promulgación del Decreto Supremo 28225 del 01 de julio de 2005.

GRÁFICO 8. SANTA CRUZ: SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN, 2000-2022
EXPRESADO EN MILES DE HECTÁREAS (HA) Y MILES DE TONELADAS (TM)



FUENTE: Elaborado en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas, 2000-2022 (INE).

En el periodo 2001 y 2022, la superficie cultivada de Santa Cruz se multiplicó por 2,5, desde 1,2 millones de hectáreas a más de 3 millones de hectáreas. Este ritmo de crecimiento tuvo una relación directa con el aumento de la producción, habiéndose multiplicado por 2,9 en el mismo periodo. Santa Cruz pasó de cosechar 5,3 millones de toneladas anuales a 15,3 millones de toneladas. Durante los 22 años, la línea ascendente en la agricultura cruceña se ha mantenido prácticamente sin grandes variaciones. La expansión de la superficie cultivada mantuvo un ritmo constante, con un crecimiento promedio de 75,2 mil hectáreas por año, equivalente a un crecimiento interanual de 4%. Este comportamiento agrícola de Santa Cruz no tuvo similitudes en el resto del país, particularmente en la zona andina, donde el estancamiento del agro fue el común denominador.

Una característica invariable del periodo en cuestión es que el 93% de las tierras cultivadas han sido destinadas a siete cultivos principales: soya, maíz en grano, sorgo en grano, girasol, arroz con cáscara, caña de azúcar y trigo. Este nivel de concentración de la superficie cultivada en estos cultivos no sufrió cambios significativos en el tiempo, pero varió en cuanto a la composición interna.

Así, entre los años 2000 y 2022, la superficie cultivada de la caña de azúcar cayó del 6,03% de participación al 5,6%. El maíz en grano descendió del 8,7% de participación al 6,5% en el mismo periodo. Pero cabe aclarar que estas disminuciones porcentuales no significan un menor número de hectáreas cultivadas. En 2000 se sembraba 71.583 hectáreas de caña de azúcar y esta superficie aumentó hasta 169.125 hectáreas para el año 2022. La situación del maíz fue similar, habiéndose ampliado de 103.300 a 196.693 hectáreas durante el mismo periodo. La menor participación porcentual de cultivos como maíz y caña de azúcar se debió al mayor ritmo de crecimiento de los cultivos de soya. Este grano oleaginoso creció desde 608,5 mil hectáreas hasta más de 1,5 millones de hectáreas para el año 2022.

El fenómeno sojero

A inicios del milenio, la superficie cultivada de soya estaba en 608,5 mil hectáreas y para 2010 subió a cerca de un millón de hectáreas anuales (918.847 ha). Para el 2022, llegó a 1,5 millones de hectáreas. De esta manera, se constata que en algo más de dos décadas, los cultivos de soya se multiplicaron 2,5 veces en términos de extensión cultivada.

Los crecimientos interanuales más altos se registraron entre 2011 y 2012, cuando la superficie cultivada aumentó en 170 mil hectáreas y entre 2003 y 2004 al haberse incrementado en 135 mil hectáreas. Aunque la expansión sojera dista bastante del tamaño del sector oleaginoso de Brasil (el primer productor mundial), Bolivia fue influenciada y tuvo un desempeño que tiene similitudes con el vecino gigante debido a que la ampliación de los suelos agrícolas tiene relación directa con el aumento de la deforestación. Es decir, la agricultura sojera crece necesariamente a costa del desmonte de los bosques tropicales. Brasil es el primer país productor de soya del mundo y en paralelo el país con mayor pérdida de bosques. Bolivia ocupa el tercer lugar en deforestación, después de la República Democrática de Congo.

Otra característica de la agricultura cruceña es la alta concentración de las tierras cultivadas para un solo cultivo: la soya. Actualmente, este grano representa el 50% de la superficie cultivada del departamento. El 2022, de un total de 3 millones de hectáreas cultivadas, 1,5 millones se destinaron a la soya. Este fenómeno de concentración entra en contradicción con los objetivos nacionales de producción prioritaria de alimentos, diversificación de la producción agrícola, diversificación del sector agroexportador y provoca una mayor dependencia de los mercados internacionales de materias primas agrícolas. En la última década, la expansión sojera provocó la aparición de otro fenómeno agrícola: el crecimiento acelerado de los cultivos de sorgo. El 2010, el sorgo ocupaba solamente 77,5 mil hectáreas anuales y paulatinamente aumentó hasta llegar a 499 mil hectáreas cultivadas para el año 2022. El *boom* del sorgo está impulsado por los anuncios gubernamentales de utilizar como materia prima para la producción de alcohol anhidro para biocombustibles y por las ventajas productivas que tiene como cultivo de rotación de las tierras soyerías¹⁷.

A nivel internacional, la soya y sus derivados son *commodities* agrícolas que tienen alta demanda para múltiples usos. Se utilizan como alimento animal en granjas industriales dedicadas a la producción de carne y derivados, alimento humano en forma de productos con proteínas de origen vegetal y aceite comestible, insumo industrial para la elaboración de alimentos procesados o sustitutos de carne de origen vegetal, suplementos nutricionales, cosméticos, entre muchos otros usos. En los últimos años, la soya también tiene mayor demanda en la industria de biocombustibles, especialmente para la producción de biodiesel a partir el aceite crudo.

Bolivia es uno de los principales proveedores de soya y derivados en el mercado mundial, ocupando el décimo lugar entre los principales países productores a nivel mundial.

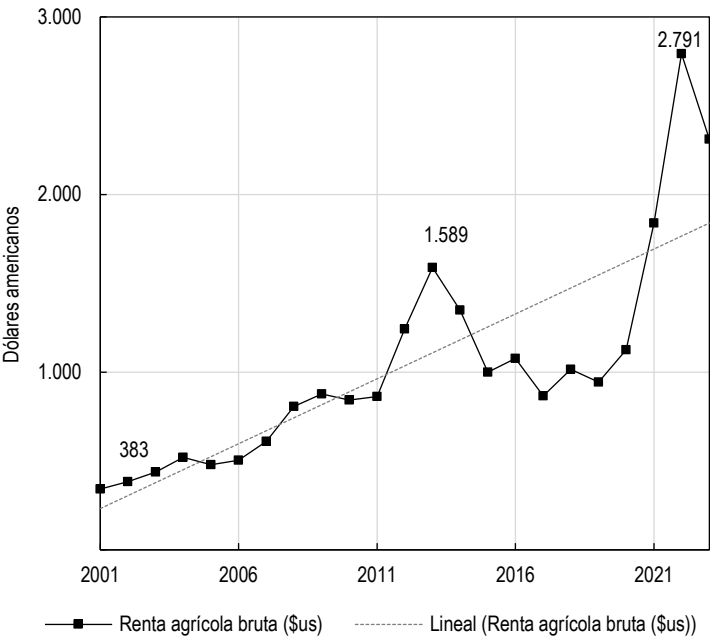
Renta agrícola

La agricultura cruceña, concretamente la soya, está mayormente orientada a la exportación, al igual que el gas natural y el oro. Según las estimaciones de los gremios agropecuarios, el 80% de la producción soyera está destinado al mercado externo y el restante 20% es suficiente para abastecer la demanda nacional. La exportación de girasol, sorgo y derivados de caña de azúcar crece lentamente, pero no tienen la misma importancia que el “grano de oro”. El maíz, arroz y trigo se producen casi en su totalidad para el mercado interno.

Para una aproximación a la estimación de la renta agrícola del modelo agrícola cruceño, la siguiente tabla presenta el detalle de los ingresos generados por los productos agrícolas que tienen participación en el mercado de exportación, lo que denominaremos renta bruta, debido a que incluye los costos de producción. Para el cálculo de la renta neta de la agricultura cruceña, se tendría que restar los costos de producción, pero esta información no está disponible a nivel de datos agregados. A diferencia de la renta petrolera que cuenta con estadísticas nacionales por tratarse de una economía del sector público, la renta de la soya y derivados está en manos privadas, por lo que solo existen cálculos referenciales de los costos de producción y márgenes de utilidad. En todo caso, la renta bruta de carácter

referencial expuesta en el gráfico 9 provee una imagen general sobre los principales rasgos de la renta agrícola.

GRÁFICO 9. SANTA CRUZ: RENTA AGRÍCOLA BRUTA
DEL MODELO CRUCEÑO (2001-2023)
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS



FUENTE: Elaborado con base en datos obtenidos del Sistema Integral de Información Productiva (SIIP), Instituto Nacional de Estadística (INE).
Nota: Los datos de Ingresos brutos calculado en base a la metodología UNCTAD, (Exportación commodities) Rev 3. CUCL.

En el periodo 2001-2023, la renta agrícola suma 23.811 millones de dólares, mayormente provenientes de la comercialización de soya y derivados y en menor medida contribuyen los demás cultivos y el sector pecuario. En el tiempo, la tendencia general de cambios ha sido positiva. Comparado con los ingresos petroleros, la suma mencionada equivale al 47% de los resultados petroleros obtenidos en el mismo periodo. No es una cifra nada menor, tomando en cuenta que la bonanza del gas ha sido de grandes dimensiones. El ascenso paulatino de la agroexportación y el declive del negocio del gas explican el crecimiento de la importancia y de la participación del agro

cruceño en el comercio exterior y en las cuentas nacionales. Para el 2023, la renta de las agroexportaciones cruceñas supera a la renta petrolera (2,3 vs. 2,0 mil millones de dólares) y, en adelante, es previsible que esta tendencia se mantenga sin cambios. El agro cruceño, debido al agotamiento de la renta del gas, pero también por su constante crecimiento, tiene un papel protagónico.

Aproximadamente, podemos señalar que la mitad de los ingresos brutos equivalen a los ingresos netos, especialmente en momentos en que el precio internacional del “grano de oro” se cotiza por encima de 600 dólares por tonelada. Los mejores años están determinados por el alza de los precios internacionales. En los últimos tres a cuatro años, el precio internacional de la soya se mantuvo estable y por encima de 500 dólares por tonelada, lo que garantiza con holgura un margen de utilidad bastante atractivo para el sector sojero, aunque los beneficios no se distribuyen equitativamente entre los productores sojeros debido a múltiples factores. La producción primaria reúne a pequeños, medianos y grandes productores, cuyos costos de producción difieren, al igual que los niveles de rendimiento por hectárea. Además, entre la cosecha y la puesta del grano en los puertos de exportación existen múltiples eslabones comerciales y prestaciones de servicios de transporte, acopio, almacenaje, procesamiento y comercialización.

Esta renta agraria se distribuye de una manera muy distinta a la renta petrolera. Al estar bajo el control del sector privado que está concentrado en un enclave regional (Santa Cruz), la agroexportación tiene un impacto elevado y directo sobre el funcionamiento y la dinámica de la economía cruceña. No se parece a la renta petrolera que se concentra en el gobierno nacional y se distribuye mediante múltiples canales económicos y extra-económicos. Aunque la lógica rentista gobierna la distribución de los ingresos agropecuarios, ésta también circula bajo el influjo de los mecanismos de mercado. Debido a que el productor primario se acoge al Régimen Agrario Unificado (RAU), la transferencia directa de la renta agraria al sector público es casi nulo. El resultado es una mayor importancia de la renta agraria en la economía cruceña y el eslabonamiento con el sector público es bajo, al igual que con el resto de las regiones y economías nacionales.

Un cambio importante con respecto a la era del estaño es que —ahora— el Estado no tiene el control monopólico o exclusivo de la renta de todos los recursos naturales. Ciertamente controla el sector gasífero, pero no así la agricultura cruceña ni de la minería del oro. Esta observación obliga a plantearnos una nueva pregunta de trabajo: pensando desde el interés nacional, ¿es mejor que la renta esté bajo el control del Estado o, por el contrario, debería estar en manos del sector privado? A primera vista, los mecanismos de distribución difieren entre el sector público y privado, y también los impactos directos sobre la economía, pero no son rentas independientes entre sí. Al contrario, existen grandes interdependencias, principalmente porque la agricultura cruceña capta indirectamente transferencias de una parte de la renta petrolera que fluyen en forma de subvenciones para los combustibles. El papel influyente de la renta petrolera en la dinamización de una economía cruceña refuerza el liderazgo de éste último en la economía nacional. Retomaremos este tema en el Capítulo 5 que está dedicado a redondear el análisis de los temas centrales planteados en esta sección y el resto de la publicación.

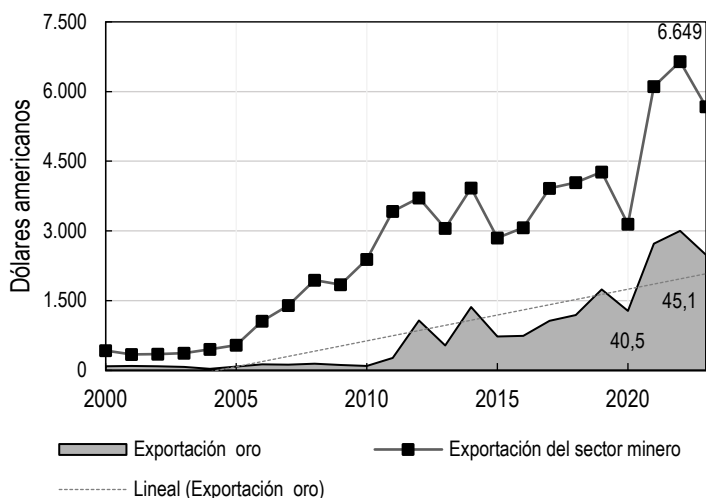
LA MINERÍA Y LLEGADA DE LA FIEBRE DEL ORO

Desde 2006, la minería boliviana registró una expansión sostenida en la producción nacional de concentrados, alcanzando su punto máximo en 2022 con 6,6 mil millones de dólares en exportación. Particularmente, la producción de zinc, plomo y plata se incrementaron marcadamente a partir del 2008, como efecto de la llegada de grandes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), destacando los proyectos de San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé y Sinchi Wayra. La minería privada juega un papel fundamental en cuanto a los volúmenes de producción: el 77% de la producción total de plomo, 70% de la producción de zinc y 68% en la producción de plata¹⁸. Las cooperativas mineras tienen una participación minoritaria pero relevante en el crecimiento de la economía sectorial.

La explotación del oro comenzó a influir decisivamente en la expansión minera a partir del año 2012, cuando la minería superó 1.000 millones de dólares en exportación, alcanzando una participación del 29% sobre el valor de las

exportaciones mineras. En los últimos tres años (2021-2023), el oro alcanzó una participación de 45% en promedio, lo que evidencia la importancia económica que tiene en la actualidad. Anteriormente, la extracción del oro estaba reducida a pequeñas actividades artesanales en el norte de La Paz, particularmente en la región de Tipuani, una de las más ricas en oro aluvial. Influenciado por el crecimiento de la actividad aurífera de Perú, esta actividad se intensificó y creció en la Amazonia boliviana, a lo largo del río Madre de Dios, llegando hasta los territorios recónditos del departamento de Pando y Beni. Los archivos de la gobernación de La Paz indican que en 2010 había 459 cooperativas registradas y una década después, en 2020, creció hasta alcanzar 1.300 que, según algunas estimaciones, generaría empleo para 130 mil personas¹⁹.

GRÁFICO 10. BOLIVIA: EXPORTACIÓN MINERA Y AURÍFERA 2000-2023
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS



FUENTE: Elaboración con base en datos obtenido del Sistema Integral de Información Productiva, (SIIP); Instituto Nacional de Estadísticas, (INE); Banco central de Bolivia, (BCB).
Nota: Datos calculados en base a la metodología UNCTAD, (Exportación commodities) Rev 3. CUCI.

La exportación de oro metálico tenía un valor de 537 millones de dólares en 2013 y alcanzó un récord de 1.361 millones para el año siguiente (2014). En 2019 superó la anterior marca llegando a 1.739 millones en valor de exportación y después de

la emergencia sanitaria de Covid-19, en 2022, alcanzó el registro máximo al situarse en 3.003 millones de dólares, lo que equivale al 41% de las exportaciones mineras y 22% de participación sobre el total de las exportaciones bolivianas. El 2023 bajó a 2.482 millones de dólares, pero se mantuvo por encima de 2.046 millones generados por la exportación del gas natural. De esta manera, el oro se convirtió en el principal producto de exportación de Bolivia, desplazando al segundo lugar las exportaciones estatales de gas natural.

Las señales internacionales son todavía favorables para la fiebre del oro. La demanda mundial del oro sigue siendo superior a la oferta. La producción mundial del oro estaba en torno a 3.600 toneladas para el año 2023. El crecimiento sostenido de la demanda está impulsado por la participación de bancos centrales de distintos países, principalmente por parte de los bancos de India, Emiratos Árabes, Suiza, entre otros. Al menos en el corto y mediano plazo, todo indica que el fenómeno del oro seguirá desempeñando un papel económico influyente. Al 2024, siguen en pie las amenazas de recesión económica. El crecimiento de la economía de China sigue lento, las guerras y los conflictos armados también alimentan la incertidumbre de los mercados, al igual que la inflación del dólar en Estados Unidos. El *boom* del oro tiene una relación inversa con respecto al crecimiento de la economía mundial. Los pronósticos de la Cámara Mundial del Oro (CMO) prevén que la tendencia ascendente se mantendrá para el periodo 2024-2025, alcanzando unos 2.600 dólares la onza troy para fines del periodo.

En Bolivia, la minería del oro ha llamado la atención pública por sus altos costos ambientales, básicamente, debido a la contaminación del medio ambiente con el mercurio. También ha sido objeto de observaciones y cuestionamientos por muchos sectores de la sociedad civil porque los cooperativistas mineros pagan impuestos marginales. El gobierno nacional no tuvo éxito a la hora de negociar con los cooperativistas mineros para incrementar las recaudaciones tributarias, llegando a acordar solamente un pago de 4,5% sobre el valor de producción. Los cooperativistas tienen como carta de negociación la exigencia de una ley que reconozca el acuerdo alcanzado a cambio de vender el oro al Banco Central de Bolivia (BCB), algo en que están

sumamente interesados las autoridades para mejorar las reservas internacionales netas (RIN).

El interés gubernamental es tan grande que, hacia finales del 2023, las autoridades del sector anunciaron la intención de reactivar la creación de una empresa estatal para ingresar al negocio del oro. La Empresa Boliviana del Oro (EBO), creada en el 2010 con el mandato de comprar el mineral en regiones alejadas como Pando o el norte de Santa Cruz, reabrió varias sucursales en las regiones de producción aurífera para adquirir el oro de los cooperativistas.

Todo esto significa que el oro se ha convertido en un salvavidas inesperado para la economía boliviana. Cumple la función de un colchón de amortiguamiento para la caída de las divisas, principalmente causada por el declive de la exportación del gas y su efecto negativo sobre los ingresos fiscales. Lo llamativo es que este salvavidas ni por asomo formaba parte de los planes y estrategias de industrialización del modelo económico de Evo Morales y Luis Arce. Su importancia económica está en que, al margen del hecho de que el oro causa daños ambientales de alto impacto y tributa casi nada, es una fuente valiosa para la generación de divisas extranjeras, principalmente dólares. A diferencia del gas natural, la renta del oro está bajo el control privado, por lo que dinamiza circuitos económicos no relacionados directamente con el gasto público.

Industrialización del litio: otro proyecto fallido

La demanda mundial de litio ha crecido en años recientes, sobre todo para la producción de baterías en la industria de vehículos eléctricos. La producción mundial ha pasado de solo 9.500 toneladas en 1995 a más de 100.000 toneladas para el año 2021, acompañado por una evolución radical de los precios²⁰. El 60% de las reservas mundiales del “oro blanco” fueron identificados dentro del llamado “triángulo de litio” conformado por Chile, Argentina y Bolivia.

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), creada en 2017, cuantificó por su parte 21 millones de toneladas de litio en el Salar de Uyuni (Potosí), lo que convertiría a Bolivia en el primer país del mundo con este tipo de recursos

naturales, con una participación cercana al 24% de las existencias mundiales. Recientemente, en 2023, el presidente Arce anunció que YLB identificó adicionalmente 2 millones de toneladas en los salares de Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí), por lo que el potencial de reservas habría aumentado hasta 23 millones de toneladas. Según la información gubernamental, Bolivia se estaría consolidado como el país con el reservorio de litio más grande del mundo, seguido por Argentina con 19,3 millones de toneladas y Chile con 9,6 millones de toneladas²¹.

Sin embargo, un informe de la CEPAL aclara la importancia de diferenciar entre “recursos de litio” y “reservas de litio”. Lo primero refiere a depósitos de litio conocidos en términos geológicos, pero no explotados, o depósitos de litio que se cree que existen, pero que no están evaluados. Por su lado, las “reservas de litio” son las que pueden extraerse con la tecnología disponible y tienen viabilidad económica. Para el cálculo de “reservas de litio” se toma en cuenta varios aspectos relacionados con factores económicos, mercados, ingeniería, métodos de extracción y condiciones legales; todo esto, más allá del conocimiento geológico que se tiene sobre los depósitos del “recurso litio”. Esta explicación esclarecedora explica el hecho de por qué Bolivia ni siquiera aparece en el ranking mundial de los países con mayores reservas de litio y la participación marginal que tienen las exportaciones bolivianas. Por lo tanto, las cifras que maneja YLB y el gobierno nacional no son equivalentes a “reservas de litio”, para lo que hace falta estudios y certificaciones internacionales.

Actualmente, Chile es el principal exportador mundial del oro blanco. En 2023, comercializó en el mercado global 250 mil toneladas de carbonato de litio y, a pesar de la caída de la cotización, embolsó 7.800 millones de dólares; mientras que Bolivia despachó solamente 320 toneladas ese mismo año, captando tan solo 14,6 millones de dólares; es decir, menos del 1% con respecto al país vecino. El mismo año, 2023, Argentina exportó 170 mil toneladas por un valor total de 5.180 millones de dólares. De nuevo, Bolivia está bastante lejos de los principales exportadores de litio, a pesar de la existencia de 23 millones de toneladas de “recursos de litio”²².

Los problemas relacionados con la explotación e industrialización del litio son de gran magnitud en Bolivia. Incluso existen severos problemas de planeamiento a corto plazo. Por ejemplo, a inicios del 2023, el gobierno nacional informó que exportaría litio por un valor de 576 millones de dólares²³, sin embargo, el ingreso efectivamente captado apenas llegó al 2,5% de la meta prevista. Este tipo de desaciertos ponen de manifiesto una realidad muy complicada para los próximos años. Bolivia tiene un desempeño negligente, por decir lo menos, y ocupa un lugar marginal y casi irrelevante en el negocio mundial del ‘oro blanco’.

Una de las razones de fondo, sino la principal, es que el gobierno boliviano cree erróneamente que el mercado del litio es estático o que los precios altos seguirán siendo estables en los próximos años. Pero, la realidad es distinta. El mercado global del oro blanco está mostrando señales de cambios constantes, tanto en términos de descubrimiento de nuevas reservas, precios como en cuanto a avances tecnológicos. Estados Unidos y otros países desarrollados están invirtiendo miles de millones en exploración, innovación y alternativas. Debido a que las mayores reservas están en el “triángulo del litio” de América del Sur, China y Australia; los países industrializados tienen suficientes razones geopolíticas para rastrear nuevas fuentes de suministro en sus territorios. Entienden claramente que proyectos de exploración que llevan a cabo tienen altas probabilidades de éxito porque la mayor parte del mundo no ha sido estudiado en busca de yacimientos de litio.

En economía se sabe que cualquier brecha entre una demanda alta y una oferta baja acaba creando incentivos para la innovación. Al inicio, una brecha de mercado provoca alzas en los precios, pero acabará impulsando el desarrollo tecnológico para reajustar tanto la demanda como la oferta. Precisamente, esto es lo que está sucediendo en el mundo. Varios centros de investigación energética están haciendo grandes esfuerzos para mejorar las baterías de magnesio, iones de sodio, hidrógeno, redox de vanadio y otros. También están en marcha proyectos para disminuir el uso del litio como materia prima en la industria de automóviles eléctricos. Una consecuencia de estos ajetreos es que el rezago de Bolivia se profundiza. Los conocimientos y procesos son más especializados y complejos con el paso de los años, lo que significa que la brecha de atraso tecnológico se ensancha.

Hasta ahora, la estrategia boliviana se puede calificar como un fracaso. Además del control estatal y su participación mayoritaria en toda la cadena de valor, Bolivia se impuso como meta la industrialización del litio hasta llegar a producir las baterías de ion-litio, lo que implica un alto nivel de conocimiento y especialización, algo que no posee el país. Si bien a nivel global los eslabones de extracción están controlados por los países que tienen reservas de litio, como Australia, Estados Unidos, Chile o Argentina, los eslabones de industrialización están concentradas en los países asiáticos como Japón, Corea del Sur y China.

Entonces, el ambicioso plan gubernamental de fabricar baterías significa que Bolivia tendría que competir con estos países, algo que no es realista, peor todavía sabiendo que el gobierno boliviano impone estrictas condiciones para que los socios extranjeros transfieran conocimientos, garanticen mercados de exportación y, además, tengan participación minoritaria en el negocio. Las autoridades olvidan que la producción de baterías de ion-litio forma parte de una carrera tecnológica de alta intensidad por aumentar la capacidad de almacenamiento, la rapidez de la carga y, al mismo tiempo, reducir sustancialmente los costos de producción.

El afiebrado movimiento de los países productores e industrializadores de litio contrasta enormemente con la lentitud y los desaciertos de Bolivia.

BALANCE: EL MODELO DEL SIGLO XXI

El gas natural, la agricultura de exportación y la minería han tenido una enorme influencia sobre la economía boliviana de los últimos 23 años, algo difícil de imaginar a finales del anterior milenio. Anteriormente, el estaño tenía el papel protagónico al monopolizar las exportaciones nacionales. En ese entonces, debido al potencial de la minería de Los Andes, el país tenía ventajas obvias en el mercado mundial de minerales. Pero, la inesperada y abrupta caída del precio del estaño de 1985 obligó al gobierno nacional a cerrar la minería estatal y, con ello, quedó expuesta a la luz pública la extrema fragilidad del aparato productivo nacional y la ausencia de alternativas económicas. La producción de hidrocarburos y su exportación al mercado

argentino en poca cuantía no había alcanzado el tamaño suficiente para llenar el vacío dejado por el estaño. La puesta en marcha de la exportación del gas natural estuvo rodeada de conflictos y polémicas relacionadas con el debate político sobre cómo debería distribuirse la renta del gas entre el Estado boliviano y las empresas petroleras como Petrobras y Repsol.

Aunque la agroexportación comenzó en la última década del siglo XX, tampoco tenía la talla suficiente para reemplazar al estaño. Desde el 2001, mantuvo un ritmo de crecimiento constante, alcanzando una participación mayor a un tercio del total de las exportaciones. La legalización de los cultivos transgénicos en el año 2005 fue decisiva para la expansión de la frontera agrícola y el protagonismo económico del departamento de Santa Cruz. La baja rentabilidad del agro cruceño, comparado con los monocultivos de Brasil o Argentina, no impidió su inserción en el mercado global de materias primas agrícolas, fundamentalmente de la soya. La agroexportación se benefició también de las exenciones tributarias creadas con el Régimen Agrario Unificado (RAU) y el congelamiento del precio de los combustibles vigente desde el año 2004. La principal amenaza para el sostenimiento de la expansión del agro cruceño surgió a partir de las grandes dificultades que sobrelleva actualmente el Estado para financiar la importación de combustibles a precios subvencionados. Las subvenciones financiadas por la renta del gas natural fueron favorables para el crecimiento de la agroexportación.

Actualmente, 2021-2023, el oro es el principal producto de exportación. En los últimos tres años tiene una participación promedio de 2,7 mil millones de dólares en las exportaciones, superando al gas natural que registra un promedio de 2,4 mil millones de dólares, y la agricultura cruceña que está cerca de 2,3 mil millones. En términos temporales, el auge del oro llegó en un momento propicio para compensar la desaceleración de la renta del gas natural, entre 2013 y 2014. A medida que caía la importancia del gas, el oro fue escalando tanto en valor de exportación como en volumen de producción. En términos generales, las exportaciones bolivianas siguieron creciendo, pero principalmente gracias a la explotación del oro y la agroexportación.

Entonces, el actual modelo de dependencia de los recursos naturales se caracteriza por la presencia de tres sectores claves: i) gas natural, ii) agricultura cruceña y iii) minería, fundamentalmente el oro. Durante los primeros 23 años de la historia reciente (2001-2023), la participación económica de estos tres sectores ha ido variando. El gas natural lideró las exportaciones bolivianas por 16 años seguidos (2004-2020), pero el año 2021 fue desplazado al segundo lugar por el oro y al tercer lugar el 2023 (después de la agroexportación). También llama la atención que el oro no aparecía entre los primeros tres lugares hasta el año 2011, mientras que la agricultura cruceña mantuvo una presencia constante y en alza.

A la hora de hacer el análisis, es importante tener en cuenta que la economía del gas natural y el agro cruceño tienen interdependencias significativas entre sí, mientras que la minería del oro tiene una trayectoria menos dependiente. Dicho de otra forma, la renta del gas sostiene las subvenciones a los combustibles, principalmente del diésel, cuyo mayor beneficiario sigue siendo la agricultura cruceña, de modo que una menor disponibilidad de ingresos públicos por la renta del gas conducirá, tarde o temprano, al aumento de los costos de producción del sector agropecuario y la caída de la renta agrícola. La minería del oro, por su lado, no tiene el mismo grado de dependencia económica, a pesar de que también se beneficia, en cierta medida, con el diésel barato. Ante un no tan hipotético escenario de agotamiento de la renta del gas, la agroexportación sufriría las consecuencias negativas en mayor medida que la minería privada y los cooperativistas auríferos.

En definitiva, el modelo del siglo XXI no es muy distinto al del siglo XX. La elevada dependencia de los recursos naturales exportables sigue siendo la principal característica de la economía boliviana. La mayor novedad es que la mono-economía del estaño ha sido reemplazada por la tríada económica conformada por el gas natural, la agroexportación y la minería. Incluso, el declive casi irreversible del gas natural y la dependencia del agro de la renta de hidrocarburos, hacen pensar que Bolivia estaría de retorno a la mono-economía de la minería, sabiendo que la exportación de los minerales se recuperó y se mantiene estable durante los últimos años. Particularmente entre algunas

corrientes de opinión cruceña, estas interdependencias son ignoradas porque consideran que la agricultura de exportación es un modelo económico de tipo no rentista, sino un modelo agroindustrial autónomo del apalancamiento económico que proviene de la renta petrolera y minera. Pero, basta una somera observación empírica para constatar que la economía de Santa Cruz sigue girando en torno a la renta de la tierra y la lógica rentista de la economía nacional. Profundizaremos sobre este tema en el siguiente capítulo.

Hasta aquí, esta sección estuvo dedicada a plantear los elementos centrales que configuran la composición de la economía boliviana del siglo XXI, develando la persistencia de la dependencia de la renta de los recursos naturales y las recientes dinámicas de cambio entre los tres sectores clave. El siguiente capítulo está orientado a la caracterización y medición de la dependencia, basándonos en metodologías internacionales, y a la problematización de los temas emergentes, principalmente relacionados con los impactos económicos de la maldición de los recursos naturales.

4

LOS MALES ECONÓMICOS

PRELIMINARES

Hasta aquí, hemos visto que las rentas generadas por el modelo primario-exportador o por el modelo de la dependencia de recursos naturales han sido determinantes para el surgimiento de los momentos de bonanza económica y, en contraposición, su ausencia o menor importancia está asociada a los momentos de estancamiento y atraso de la economía nacional. En el pasado, las rentas dependían decisivamente de la explotación y exportación de un solo recurso natural: el estaño. En el nuevo milenio, los ingresos rentistas se originan en tres sectores: el gas natural, la agricultura cruceña y la minería del oro.

Los momentos de crisis demostraron la inexistencia o irrelevancia de economías no rentistas o no extractivas, lo que equivale a decir que Bolivia no tuvo ni tiene una matriz productiva suficientemente consolidada y diversificada. El colapso del estaño a mediados de la década de los 80 demostró de la peor forma posible que el país no estaba preparado para existir sin la renta de los recursos naturales. En ese momento, el Estado simplemente quedó incapacitado para sostener el financiamiento de los gastos públicos o para pagar la deuda externa acumulada. Básicamente, el desempleo y la precariedad laboral se generalizaron porque no existían fábricas ni empresas productivas (estatales o privadas) para absorber la mano de obra de los mineros despedidos, los campesinos migrantes o la población urbana empobrecida. Después del cierre de las minas del estaño, las demás empresas públicas colapsaron en cascada, quedando al descubierto que casi todas se sostenían gracias a las transferencias directas e indirectas de la renta minera.

En el nuevo milenio, el declive de la economía del gas natural está demostrando, una vez más, que la historia se repite para Bolivia. Al igual que a finales del siglo pasado, desde el 2019 no estamos preparados para sostenernos sin el rentismo del gas natural. En un afán por revertir la caída del ingreso por la venta a Brasil y Argentina, el gobierno nacional implementó un conjunto de medidas y políticas económicas orientadas a la ampliación de la agricultura de monocultivos a costa de los bosques tropicales y amazónicos. Redobló su apuesta por la creación de más empresas públicas bajo la consigna “industrialización con sustitución de importaciones”. Últimamente, planea producir etanol y biodiesel para combatir el agotamiento de las reservas de gas y petróleo¹. Sin embargo, estas medidas para potenciar el papel del “Estado empresario” no representan verdaderas fuentes alternativas de ingresos fiscales.

Si bien Bolivia sobrelleva sin demasiados sobresaltos la caída de la renta del gas, hasta ahora, ello no se debe a las medidas económicas adoptadas en el último tiempo, sino, fundamentalmente, a la inesperada presencia protagónica de la minería del oro y la expansión del agro cruceño. Sin proponérselo, los cooperativistas auríferos comenzaron a inyectar divisas a la economía nacional en un momento oportuno; es decir, coincidiendo con los años de “vacas flacas” de la renta del gas. A pesar de que la renta del oro contribuye casi nada a las arcas del Estado, tiene un efecto dinamizador sobre la economía en general. Esto demuestra que el auxilio momentáneo no provino de los planes empresariales del gobierno, sino del oro, cuya bonanza no fue prevista y menos planeada como parte de las medidas económicas del gobierno nacional.

Dicho esto, ahora corresponde analizar los “males económicos” relacionados con el modelo primario-exportador enraizado en nuestra historia, el rentismo y el atraso económico. Estos elementos están entre las principales expresiones económicas que se estudian cuando hablamos de la maldición de los recursos naturales.

EL ATRASO ECONÓMICO DE BOLIVIA

En el primer capítulo, dijimos que hablar de atraso económico es hablar de bajos niveles de desarrollo y crecimiento económico. Uno de los indicadores de medición ampliamente utilizado en la economía es el PIB per cápita o el ingreso por habitante. Por supuesto que existen otros indicadores y maneras de medir el desarrollo y el crecimiento económico de un país. Es más, varios organismos internacionales consideran que desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico, por lo que incluso existen indicadores y metodologías diferenciados. Pero, en cualquier caso, el ingreso por habitante sigue siendo hasta el día de hoy una valiosa herramienta económica para evaluar temas como el atraso económico, entendido éste como un bajo nivel de progreso o avance.

Para medir los cambios en el PIB per cápita, al menos debemos comparar dos datos. Una manera muy conocida de hacerlo es contrastando las cifras actuales con las de los años anteriores. Por ejemplo, es bastante común que un economista, consultado por algún periodista sobre cómo califica el desempeño económico del año en curso, exprese su opinión de experto haciendo comparaciones entre los ingresos recientes y los de años de referencia que considera relevantes. Comparará periodos de cinco o más años si el consultado desea hacer apreciaciones sobre escenarios de mediano y largo plazo. Por otro lado, los políticos en funciones de gobierno también se acostumbraron a realizar ejercicios parecidos, con la diferencia de que el “antes” es una referencia sesgada para hablar mal de los anteriores gobiernos. Hacen esto ya sea para echarse flores con cualquier cambio positivo que pudiera existir o para echar la culpa a los gobiernos anteriores si los resultados actuales son negativos. En cualquier caso, echar un vistazo al pasado para ver cuánto hemos avanzado (o retrocedido) es una manera de medir el ritmo al que estamos marchando hacia el rumbo deseado.

Otra forma de medir los cambios es haciendo comparaciones con otros países. A veces, algunos economistas —quizá en un afán bienintencionado que puedan tener para resaltar su opinión— suelen comparar la economía boliviana con países lejanos o demasiado distintos como los asiáticos o los europeos.

Aunque algunas de las comparaciones no son completamente descabelladas, sabiendo que había similitudes o parecidos hace cinco o más décadas, existe el riesgo de transmitir mensajes equivocados o puntos de vista interesados. Por ejemplo, una de las prácticas irresponsables de los economistas del gobierno del MAS ha sido comparar la Bolivia de los años de auge rentista con países de altos ingresos como Suiza, China, Estados Unidos o Japón. Algo parecido sucede también cuando los estratos sociales ricos tienen estilos de vida y juzgan los problemas nacionales según la imagen que tienen de los países desarrollados. Por alguna razón, pareciera que los bolivianos (no todos) preferimos compararnos con realidades lejanas y no con los países más cercanos y similares a nosotros, como son nuestros vecinos, los de América del Sur y América Latina.

Por lo tanto, la medición del atraso económico que exponemos a continuación utiliza el PIB per cápita Bolivia comparado con los países cercanos y similares. La intención es mostrar cómo estamos y cuánto hemos cambiado en relación con otros países de la región. La tabla 6 presenta el atraso de Bolivia frente a los países vecinos y de América del Sur. La primera columna es el resultado de la comparación de similares ingresos per cápita con respecto a la cifra registrada el año 2000 en Bolivia. Por ejemplo, Chile registró un PIB per cápita similar al del año 2000 de Bolivia en el año 1973 (3.632 vs. 3600 dólares), de donde salta a la vista que hemos tardado 29 años para alcanzar a Chile. La segunda columna arroja los resultados del mismo ejercicio, con la diferencia de que la cifra base es el PIB per cápita del año 2022. Las diferencias entre ambas columnas evidencian si las brechas se estrecharon, se mantuvieron igual o se ampliaron.

TABLA 6: BOLIVIA: ATRASO ECONÓMICO EN COMPARACIÓN
CON PAÍSES VECINOS Y AMÉRICA DEL SUR, 2000 - 2022

America del Sur	Año 2000 (Brecha en número de años)	Año 2022 (Brecha en número de años)	Diferencia 2000-2022
Argentina	37	39	+2
Brasil	26	28	+2
Chile	29	29	0
Colombia	22	16	-6
Ecuador	25	15	-10
Perú	14	15	+1
Paraguay	21	14	-7
Uruguay	27	19	-8
Venezuela	30	25	-5
Promedio	26	22	-4

FUENTE:: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Banco Mundial, BM.
<https://datos.bancomundial.org/>.

En relación con los cinco países vecinos, las conclusiones se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. *El atraso o rezago de Bolivia se presenta en todos los casos y sin excepción.* Los cinco países vecinos alcanzaron ingresos per cápita iguales o similares a los de Bolivia en el pasado, dicho de otro modo, Bolivia lleva un rezago que supera dos décadas.
2. *La brecha es de 25 años en promedio y se mantiene sin modificaciones en los últimos 22 años, entre el 2000 y 2022.* Las diferencias se redujeron únicamente con respecto a Paraguay, de 21 años a 14 años; se ampliaron con relación a Argentina, Brasil y Perú; y se mantuvieron igual con respecto a Chile (29 años). El achicamiento relativamente significativo con respecto a Paraguay ha sido contrarrestado por ensanchamiento con relación a los tres países mencionados.

3. *Las brechas que más han crecido son las que nos separan de Argentina y Brasil (de 37 a 39 años y de 26 a 28 años, respectivamente), mientras que la que más se ha reducido es con respecto a Paraguay (de 21 a 14 años).* Este comportamiento económico señala que seguimos alejándonos de los países con mayores ingresos, mientras que el acercamiento a Paraguay implica que tenemos un desempeño relativamente positivo frente a la economía que más se asemeja a Bolivia.
4. *El crecimiento de los ingresos per cápita ha sido generalizado en el periodo analizado y entre los seis países.* El hecho de que la brecha promedio esté estancada en 25 años significa que el crecimiento económico de Bolivia tuvo el mismo ritmo y velocidad que los países vecinos. Bolivia no acortó las diferencias con las economías vecinas, sino que marcha en la retaguardia, al mismo ritmo y a la misma distancia que hace 22 años.

Con respeto a los países de América del Sur, podemos complementar las observaciones de la siguiente manera:

1. *Al igual que en el anterior punteo, el atraso de Bolivia se presenta en todos los casos, en comparación con los nueve países.* Todos alcanzaron los niveles de ingreso per cápita de Bolivia en algún momento del pasado, lo que significa que ocupamos el último lugar en términos de ingreso por habitante.
2. *En promedio, Bolivia presentaba un atraso de 26 años para el año 2000 y se redujo a 22 años para el año 2022.* En 22 años la brecha se achicó en 4 años. Este cambio se debe principalmente al mayor dinamismo boliviano con respecto a Ecuador, Uruguay, y secundariamente con relación a los demás países.
3. *La brecha se ensancha con relación a Argentina y Brasil.* Bolivia se aleja de la realidad económica de los dos países más grandes en cuanto al tamaño del PIB.

4. *Bolivia presenta cambios y cifras algo más alentadoras cuando se hacen comparaciones con los países no vecinos de América del Sur.* Sin embargo, los años de atraso en promedio siguen siendo superiores a dos décadas.

Entonces, en términos de ingreso per cápita, se observa que una consecuencia concreta de la maldición de los recursos naturales es el atraso de Bolivia. Aunque los años de bonanza inyectaron cifras millonarias para acrecentar el tamaño de la economía nacional, se evidencia que este empujón fue insuficiente para recortar las diferencias con respecto a los países de la región. En otras palabras, el ritmo del crecimiento económico de Bolivia se acerca al promedio regional, pero no llegó a superar la velocidad promedio de crecimiento. Mejoró levemente en comparación con las economías de crecimiento lento como Ecuador. Por lo tanto, el panorama general es casi el mismo que hace 22 años.

Una conclusión de cierre de este acápite es que Bolivia se parece a América del Sur de hace 22 años y a los países vecinos de hace 25 años. Tener en mente este rezago en número de años que nos falta para igualar los ingresos per cápita de países cercanos, puede resultar útil para imaginarnos los desafíos o el tamaño de las transformaciones. Sería también de utilidad comparar hacia adentro nuestras realidades regionales o cambios en el tiempo, por ejemplo, la ciudad de El Alto de 1998 con respecto al presente, o la ciudad de Santa Cruz de hace 20 años con el presente. Este tipo de comparaciones nos pueden ayudar a entender que cerrar las brechas económicas de dos décadas o más representa un desafío de gran envergadura, más todavía si al mismo tiempo tenemos que hacer frente a otro tipo de desafíos en el campo político, social, educativo o cultural.

Otra manera de imaginarnos las brechas podemos extraer de la observación empírica o cotidiana, como cuando los visitantes o turistas connacionales nos cuentan sus experiencias y percepciones después de haber vivido en otras regiones del país o en otros países. En general, una conclusión que tienen es que realmente estamos atrasados no solo en el tema económico, sino en varios aspectos de la vida. Incluso, los visitantes nacionales que recorren por unos días los poblados fronterizos tienen la percepción de que estamos quedándonos atrás.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la mejor situación de los vecinos no significa que no sufran la maldición de los recursos naturales; al contrario, también tienen el mismo problema (ver siguiente acápite). La diferencia está en que, teniendo el mismo problema estructural, comparativamente tienen un aparato productivo más sólido y diversificado, además de otras ventajas en cuanto a su inserción en el comercio internacional.

GRADOS DE DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES

Una de las metodologías más utilizadas para medir la dependencia de los recursos naturales consiste en identificar y cuantificar la participación de las materias primas con respecto al total de las exportaciones nacionales. Un país será más dependiente cuando las exportaciones estén más concentradas en materias primas o primarias. Según la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés)² se considera que un Estado es dependiente si el 60% o más del valor de sus exportaciones se origina en mercancías categorizadas como materias primas o recursos naturales procesados a nivel primario. Para ello, se identifican los ítems relacionados y no relacionados utilizando la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI, tercera revisión), con un desglose que llega hasta el nivel de tres dígitos³. Esto incluye: [0] Alimentos y animales vivos, [1] Bebidas y tabaco, [2] Materias brutas no comestibles, excepto combustibles, [3] Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados, [4] Aceites, grasas y ceras animales y vegetales, [667] Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, [68] Metales no ferrosos, [971] Oro no monetario (excluyendo minerales de oro y concentrados).

TABLA 7. BOLIVIA: DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES
EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES, 2000-2023

Dependencia de las exportaciones de mercancías y materias primas									
Detalle	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2020	2022	2023
Exportación de mercancías (en millones de dólares)	1.246	2.867	6.965	12.252	12.899	8.737	6.975	13.604	10.798
Exportación de materias primas (en millones de dólares)	1.064	2.617	6.526	11.784	12.491	8.350	6.659	12.969	10.468
- Exportación de productos básicos como proporción de todas las exportaciones de productos asignados (porcentaje)	85,4%	91,3%	93,7%	96,1%	96,8%	95,6%	95,5%	95,3%	96,9%
- Productos agrícola	37%	22%	16%	17%	15%	17%	21%	24%	25%
- Energía	14%	50%	43%	55%	52%	46%	29%	23%	20%
- Minerales y metales	34%	19%	34%	25%	30%	33%	45%	49%	53%
Dependencia de las importaciones de materias primas									
Importación de materias primas(millones de dólares)	452	557	1.226	2.161	2.242	1.984	1.634	4.156	4.030
Importación de alimentos (millones de dólares)	258	228	388	624	734	601	707	703	735
Importación de alimentos como la proporción de todas las importaciones de productos asignados (porcentaje)	12,8%	9,3%	6,90%	6,4%	6,90%	6,1%	10,2%	5,9%	6,40%
Importación de energía (millones de dólares)	129	247	687	1.298	1.279	1.150	749	3.189	3.025
Importación de energía como la proporción de todas las importaciones de productos asignados (porcentaje)	6,00%	10,10%	12,30%	13,40%	12,00%	11,7%	10,7%	26,90%	26,30%

FUENTE: Elaborado con base en datos del Sistema Integral de Información Productiva, (SIIP); Instituto Nacional de Estadísticas, (INE).
NOTA: El cálculo realizado se hizo en base a la metodología UNCTAD, (Exportación commodities) Rev 3. CUCI.

Utilizando esta técnica, la UNCTAD publica periódicamente reportes multipaís de monitoreo de la evolución de la dependencia de los recursos naturales. Este trabajo de seguimiento sirve para advertir sobre la relación estrecha que tiene la dependencia con las condiciones estructurales y problemas persistentes en el tiempo, como la dotación de recursos, la composición de los factores productivos, el marco institucional, la situación geográfica, historia, entre otros. También señala que la dependencia tiene implicaciones negativas que afectan de diversas formas al bienestar, crecimiento y desarrollo de las naciones.

Debido a que los países dependientes son vulnerables a las agitaciones de los mercados globales, recomienda desarrollar capacidades de resiliencia frente a los *shocks* negativos, disminuir la dependencia gradualmente y diversificar las exportaciones.

Respecto a Bolivia y al tema que nos ocupa, los reportes de UNCTAD ofrecen información valiosa para conocer el estado de situación de nuestra dependencia y su evolución a lo largo de los años. La tabla 6 expone esta información, comparando periodos representativos de las últimas dos décadas.

Las principales conclusiones se pueden enumerar de la siguiente manera:

1. *La dependencia de Bolivia es alta o muy alta, en vista que el 96,9% de las exportaciones (2023) está concentrada en rubros que tienen origen en los recursos naturales.* Este indicador está más próximo a la dependencia absoluta (100%) que al valor mínimo fijado en 60% por la UNCTAD para que un país sea clasificado como dependiente de materias primas exportables. En pocas palabras, Bolivia es altamente dependiente.
2. *En 23 años, entre 2000 y 2023, la dependencia de Bolivia aumentó de 85,4% a 96,9%.* La variación alcanza 11,5 puntos porcentuales, lo que denota que la situación boliviana se agravó, más aún si tomamos en cuenta que ya estábamos en el pasado cerca de la dependencia absoluta. Hemos seguido intensificando el problema. Como veremos en el siguiente subtítulo,

Bolivia está entre los países de la región con mayor dependencia de los recursos naturales.

3. *Los principales rubros exportables que explican la dependencia son tres: el sector de productos agrícolas, hidrocarburos y minerales:* Según las cifras recientes (2023), la minería es el principal rubro (53%), seguido por agricultura (25%) e hidrocarburos en tercer lugar (20%). Comparado con las cifras del 2000, el sector de hidrocarburos subió su participación del 14% al 20%, el sector agrícola bajó su participación del 37% al 25%, y la minería ascendió del 34% al 53%. Para el 2005, la participación de hidrocarburos escaló hasta el 50% y se mantuvo en primer lugar hasta el año 2015.
4. *La evolución de la dependencia boliviana se debe a una mayor tasa de participación del rubro de minería, lo que tiene estrecha relación con el aumento acelerado de las exportaciones de oro a partir del año 2014.* Sin embargo, el diagnóstico presentado en el Capítulo 3 ayuda a visualizar de forma longitudinal que la renta del gas natural pasó de monopolizar las exportaciones en un momento intermedio (2005 a 2019), a ocupar el tercer lugar.

Como hemos señalado desde el Capítulo 1, la dependencia boliviana de los recursos naturales es un hecho histórico, al menos en los últimos 120 años, con la diferencia de que el estaño predominaba en el pasado, pero fue reemplazado hace algo más de dos décadas por el gas natural, la agricultura de exportación y el oro.

Los esfuerzos del gobierno nacional de disminuir la exportación del gas en calidad de materia prima se han centrado en la producción de fertilizantes agrícolas en la planta de transformación de Bulo Bulu. Sin embargo, como se observa en las estadísticas de comercio exterior, la exportación de fertilizantes ha sido marginal y casi inexistente. Otro esfuerzo para contrarrestar la dependencia ha sido la promoción de la exportación de productos procesados y semiprocesados, lo que podemos encontrar en el sector privado, específicamente entre los agroexportadores de Santa Cruz. Y en efecto, en los últimos

años, se exporta más soya semiprocada que en forma de granos, principalmente en calidad de aceite en bruto y torta de soya. También creció la exportación de aceite vegetal comestible como producto de consumo final. Estos cambios explican que exista cierta corriente de opinión que considera que la agricultura cruceña ya no se puede considerar como un rubro exportador de materias primas. Pero, lo cierto es que no bastan los niveles de procesamiento incorporados en el agro para la reclasificación de las mercancías exportadas como productos manufacturados o industrializados. Así lo establece la metodología de UNCTAD validada en cientos de países y mejorado durante varios años.

Por último, habría que señalar que el principal riesgo de la dependencia de Bolivia no parece estar relacionada con la volatilidad de los precios, algo en que hacen énfasis los estudios internacionales, sino en el agotamiento físico de las reservas de gas natural y la ausencia de sustitutos exportables de similar importancia. Los precios de las materias primas se estabilizaron en niveles altos en el último quinquenio y no existen previsiones hacia la baja. Por supuesto que es difícil prever el comportamiento del mercado global para el mediano y largo plazo, pero la demanda tanto de *commodities* agrícolas y como del oro siguen en alza, este último como un activo de resguardo ante la ralentización de la economía mundial. Por eso, la amenaza más realista sigue siendo la crisis económica a causa de la caída de la renta petrolera. El único sustituto potencial era el litio, pero los resultados recientes evidencian que Bolivia no solo corre el riesgo de quedarse todavía más atrás en el desarrollo de la capacidad productiva y exportadora del “oro blanco”, sino de convertirse en el mayor fracaso en la industria del litio.

ATRASO Y DEPENDENCIA

La literatura existente sobre la relación entre el crecimiento económico y la dependencia de los recursos naturales varía en cuanto a metodologías, variables de análisis y los estudios más conocidos presentan mayormente comparaciones entre varios países. Sin embargo, un elemento en común que prevalece como variable económica constante en todos ellos es la tasa de crecimiento del PIB per cápita en un determinado periodo de

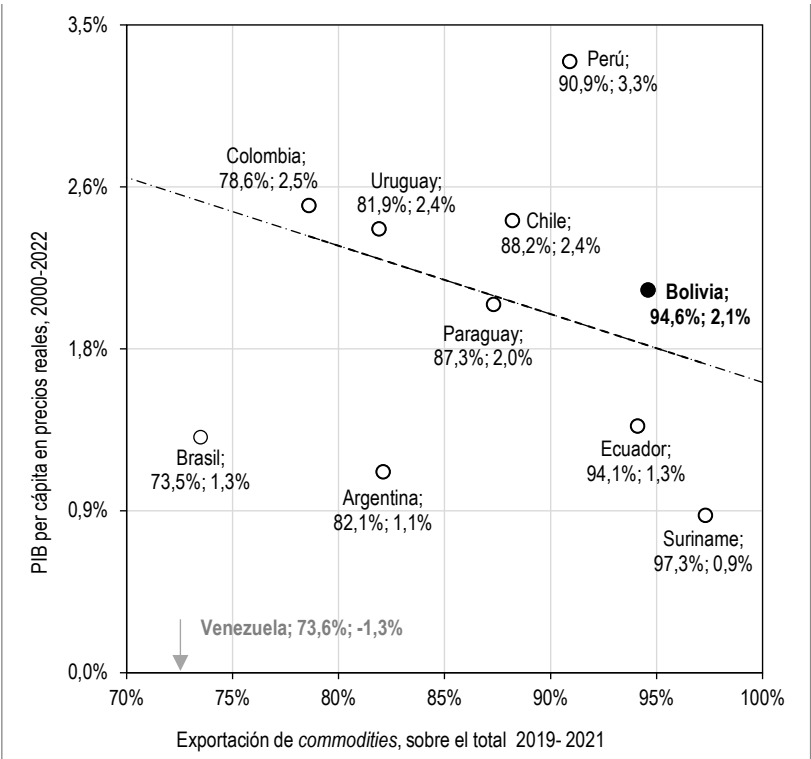
tiempo. Como una de las variables relacionadas con los recursos naturales, destaca la tasa de participación de los recursos naturales en el PIB o en las exportaciones. A partir del análisis relacional de este tipo de variables, se entiende que la maldición de los recursos naturales se manifiesta cuando a una mayor participación de los recursos naturales corresponde una menor tasa de crecimiento del ingreso per cápita.

En el caso de Bolivia, hemos optado por seguir las técnicas y metodologías más utilizadas en la literatura para llegar a los resultados expuestos en el gráfico 11. Primero, hemos mantenido y tomado como variable económica la tasa de crecimiento per cápita, basándonos en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE)⁴. Segundo, hemos optado por utilizar como variable de medición de la dependencia la tasa de participación de los recursos naturales sobre las exportaciones nacionales. También podríamos haber utilizado la tasa de participación en función al PIB nacional, pero los resultados son similares, por lo que optó por echar mano de las estadísticas ya procesadas, validadas y presentadas en el apartado de arriba. De forma similar al procedimiento utilizado para medir el atraso económico, se hizo un análisis comparativo con respecto a los países de América de Sur, utilizando las estadísticas disponibles del periodo 2000-2022 para dos variables: crecimiento promedio del PIB per cápita y tasa de participación de la renta de los recursos naturales con respecto las exportaciones de mercancías⁵. La principal respuesta que buscamos es cómo cambia la variable económica en función de un mayor o menor grado de dependencia de la renta de los recursos naturales.

El gráfico 11 presenta los resultados de 11 países de América del Sur y la interpretación requiere cautela y complementaciones analíticas de tipo cualitativo. En general, los resultados expuestos reflejados en la tendencia lineal descendente sugieren que a mayor dependencia de los recursos naturales corresponde una menor tasa de crecimiento económico y a la inversa. Esta constatación guarda concordancia con los estudios que sostienen que los países ricos en recursos naturales, económicamente crecen a tasas más bajas o a ritmos más lentos que aquellos países con menor dependencia de los recursos naturales exportables.

Nótese que la línea de tendencia es descendente, lo que significa que, efectivamente, a mayor dependencia corresponderá menor crecimiento económico. Por ejemplo, Ecuador, comparado con Colombia, tiene una tasa de crecimiento menor (1,3% vs. 2,5) y, al mismo tiempo, mayor participación de los recursos naturales sobre las exportaciones (94,1% vs. 78,6%). En otras palabras, Colombia tiene mejor desempeño económico exportando menos recursos naturales.

GRÁFICO 11. CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y DEPENDENCIA DE RECURSOS NATURALES



FUENTE: Elaboración con base en datos al Fondo Monetario Internacional (FMI); Datos del PIB per cápita a precios reales; Sistema Integral de Información Productivo (SIIP); Datos de exportación. UNCDAT: Los datos de las exportaciones (2018-2021) son promedios extraídos del informe: “El estado de dependencia de los productos básicos en 2023”.

La línea de tendencia trazada no toma en cuenta los datos de Brasil, Argentina y Venezuela porque los mismos están significativamente aislados de la nube de puntos.

El comportamiento diferenciado de los dos gigantes sudamericanos tiene explicaciones razonables, como la crisis económica y las altas tasas de inflación en el caso de Argentina, y la severa recesión económica que experimentó Brasil en la última década. En cuanto a Venezuela, es por demás conocido que las múltiples crisis que sufre el país petrolero hacen que sea un caso especial y atípico. Para empezar, Venezuela no tiene reportes nacionales e internacionales de estadísticas confiables desde hace al menos una década. De hecho, el dato de crecimiento del PIB per cápita utilizada en este trabajo proviene de una fuente distinta al resto y metodologías diferenciadas que solamente ofrecen datos aproximados⁶. Nótese que Venezuela tiene menor dependencia que varios países de la región y ello se debe a la caída de las exportaciones de petróleo en los últimos años a causa de las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Maduro.

Veamos la situación de Bolivia. Tiene una dependencia de 94,6% de los recursos naturales y un crecimiento promedio que alcanza a 2,1%. El resultado es que estamos en el grupo de los países con mayor dependencia (hacia el lado derecho del gráfico) y en un punto medio en cuanto a desempeño económico. Perú aparece como un país similar al nuestro en cuanto a dependencia de recursos, pero tiene un crecimiento económico significativamente superior. Paraguay y Ecuador tienen menores tasas de crecimiento en comparación con Bolivia. Como es previsible, nuestro crecimiento económico no se aleja de los resultados promedios de los países de la región porque la renta del gas impulsó el crecimiento hasta el 2014 y en los siguientes años no decayó en demasía debido al apalancamiento proporcionado por las reservas de divisas y el crecimiento de la deuda interna y externa.

Pero las previsiones económicas para los próximos años apuntan hacia una recesión por doble partida. Por un lado, la renta de los recursos naturales seguirá declinando y no existen alternativas en el corto plazo; y, por otro lado, se prevé que la recesión sea el futuro común para los países de la región⁷. Además, el aumento del riesgo país es una señal de alarma que anuncia la llegada de años de crisis prolongadas cuando se trata de países con alta dependencia de los recursos naturales.

Es oportuno aclarar que los países de la región tienen niveles de ingresos que difieren significativamente entre sí, razón por la que, por ejemplo, no es fácilmente comparable el crecimiento económico de Bolivia con los de países de ingresos altos como Brasil. El ingreso per cápita del país vecino es más que el doble con respecto a Bolivia (147% mayor para el 2022) y en estas circunstancias, una tasa de crecimiento igual (digamos de 2%) tendrá resultados diferenciados en cuanto a las cifras absolutas de cada país. Además, los países de ingresos altos por lo general también tienen dificultades para crecer a tasas altas, pero cada punto porcentual alcanzado (o perdido) tiene un impacto amplificado. Por esta razón, resulta engañoso hacer comparaciones como las que suelen difundir los políticos en funciones de gobierno al afirmar con vehemencia que nuestro país está creciendo porcentualmente en igual o mayor medida que los países de altos ingresos.

Para cerrar este análisis, resumamos las cautelas y limitaciones a tener en cuenta para mayores interpretaciones de los resultados expuestos. Primero, los 11 países que hemos tomado en cuenta constituyen una muestra relativamente pequeña, lo que no llega a satisfacer las recomendaciones de la ciencia estadística de tomar al menos 30 unidades de observación. Segundo, la cualificación del análisis cuantitativo requiere tener conocimientos a profundidad sobre los comportamientos económicos de cada país o los desempeños significativamente diferenciados que experimentaron los países latinoamericanos. Ahí está el caso de la bonanza del gas boliviano, prácticamente sin paralelismos en la región o el crecimiento ascendente de la renta del litio en Chile durante la última década. También debemos tomar en cuenta que la economía regional de la primera década (2001-2010) difiere en algunos aspectos clave de la segunda década (2011 adelante). Y tercero, los crecimientos y decrecimientos anuales están obviamente influenciados por las medidas gubernamentales que causan efectos rezagados y adelantados en el tiempo, como el agotamiento de la capacidad de endeudamiento que hace estallar las recesiones retardadas o los endeudamientos en alza que alargan los periodos previos de bonanza.

En suma, las oscilaciones e inestabilidades son bastante comunes en las economías latinoamericanas, por lo que

las variables de análisis se multiplican y complejizan con mucha facilidad, al igual que las tareas de procesamiento e interpretación, incluso al grado de que ni las herramientas de análisis estadístico más sofisticadas ayudan significativamente a profundizar nuestro estado actual de conocimiento.

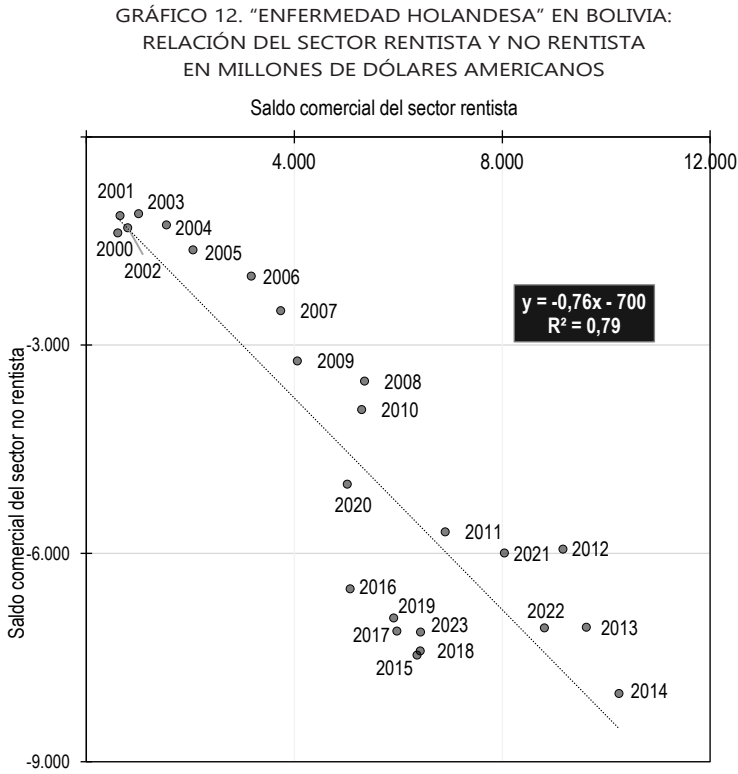
LA “ENFERMEDAD HOLANDESA” EN BOLIVIA

En simple, retomando los conceptos y definiciones del Capítulo 1, la “enfermedad holandesa” se presenta cuando una economía se “desindustrializa” a causa de la renta de los recursos naturales; es decir, es un efecto negativo provocado por un aumento repentino de ingresos rentistas. Los economistas que estudiaron el caso de los Países Bajos (Holanda) evidenciaron que el descubrimiento de grandes reservas de gas natural en la década de 1960 causó estancamiento o recesión de los sectores productivos que no estaban relacionados con la bonanza petrolera. La explicación económica simplificada sería que la renta encarece el costo de vida, eleva los precios de insumos productivos, al igual que los salarios; por lo que las industrias y manufacturas nacionales pierden competitividad y rentabilidad.

Sabiendo que existen este tipo de fenómenos económicos, tiene mucho sentido interesarse en saber si este es el caso de Bolivia, pero el razonamiento expuesto arriba no debería extrapolarse de manera automática o mecánica. Existen fundadas razones para evitar extrapolar fenómenos económicos sin antes tomar en consideración las obvias diferencias entre países con distintos grados de desarrollo económico o trayectorias históricas definitivamente no comparables. Pero, en el marco de los propósitos de este libro, el elemento diferenciador de mayor peso a tener en cuenta es que previo a la llegada de la renta, los Países Bajos tenía importantes industrias y manufacturas en funcionamiento; mientras que Bolivia, históricamente, no pasó de tener incipientes economías industriales y manufactureras. Por lo tanto, diferencias de este tipo exigen tener cautela en el análisis y la interpretación de la información cuantitativa.

Una forma de evaluar estadísticamente la “enfermedad holandesa” es hacer un ejercicio de regresión estadística relacionando los saldos comerciales del sector rentista con el

del sector no rentista, y presentar los resultados utilizando un diagrama como el que se muestra en el gráfico 12. Para este ejercicio se utilizaron los datos oficiales de comercio exterior del periodo 2000-2023, clasificando los sectores según la misma metodología internacional utilizada para la medición de la dependencia de los recursos naturales.



FUENTE: Elaborado en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y Sistema Integral de Pensiones (SIIP).

El gráfico 12 muestra que los saldos comerciales positivos del sector rentista han ido acompañados de saldos comerciales negativos del sector no rentista, y a la inversa. Este comportamiento del comercio exterior se observa a lo largo de los 23 años evaluados. En promedio, un incremento de un millón de dólares en el sector rentista resulta en una reducción de 751 mil dólares en el sector no rentista. La correlación es significativa estadísticamente ($R^2=79\%$).

En los primeros cinco años (2001-2005), las brechas o diferencias son relativamente pequeñas, pero a medida que el *boom* asciende, crece el déficit comercial del sector no rentista, alcanzando en 2014 el punto extremo (situado a la derecha y abajo del gráfico). En otras palabras, los aumentos en las exportaciones de tipo rentista han sido acompañados por incrementos en importaciones de bienes no rentistas y no por incrementos en el valor de producción del sector manufacturero o industrial con potencial para sustituir importaciones y diversificar las exportaciones.

A continuación, resumimos las principales razones y explicaciones de la “enfermedad holandesa” observada en las últimas dos décadas de la economía boliviana.

1. *No existe “desindustrialización”, sino un “efecto asfixiante”.* Según la literatura, el principal problema asociado a la “enfermedad holandesa” es la “desindustrialización”; es decir, que el sector no rentista (manufacturas e industrias) retrocede cuando se presenta la bonanza rentista, perdiéndose productividad, competitividad internacional y participación en los mercados de exportación. Sin embargo, el caso de Bolivia parece confirmar que este fenómeno económico se presenta concretamente en países que ya tienen industrias y manufacturas y no así en países atrasados o altamente dependientes de los recursos naturales. En países como el nuestro, el rentismo aparte de “desindustrializar” lo poco de fábricas y manufacturas que existían, fundamentalmente estaría impidiendo o asfixiando las posibilidades de creación de condiciones y el surgimiento de empresas creadoras de valor agregado. Es una especie de efecto asfixiante parece explicar por qué resulta demasiado difícil incubar empresas y emprendimientos desde cero o por qué la renta acaba reinvirtiéndose en el mismo sector rentista (o en actividades ilegales de alto lucro). El “efecto asfixiante” del rentismo es menos llamativo que la “desindustrialización”. Por ejemplo, el cierre de una fábrica que quiebra a causa de la competencia desleal del contrabando, llamará la atención de mucha gente,

las protestas de los trabajadores serán inevitables y los medios de comunicación crearán corrientes de opinión sobre el hecho; sin embargo, la asfixia de empresas o emprendimientos que apenas están dando los primeros pasos es un problema más grave, pero también invisible, silenciosa y no tan palpable como la quiebra de una fábrica. Por eso, muchos creemos que la bonanza no tuvo efectos negativos, porque asfixia tempranamente y mata silenciosamente las posibilidades de diversificación y crecimiento de las economías de valor agregado.

2. *Tipo de campo fijo.* En Bolivia, el tipo de cambio oficial está congelado en 6,86 bolivianos por dólar americano desde el año 2011. En economías abiertas al comercio internacional, una medida económica razonable que se utiliza es la devaluación gradual de la moneda nacional para apoyar al sector exportador. Cuando el dólar sube, los exportadores tienen incentivos económicos concretos para aumentar la producción y ello tiene efectos positivos sobre el empleo y el consumo nacional. Pero este no fue el caso de Bolivia y en parte tiene explicaciones lógicas. Primero, no hacía falta descongelar el tipo de cambio para aumentar las exportaciones porque estas mayormente dependían y todavía dependen de *boom* rentista. No había nada que fomentar. Segundo, el descongelamiento del tipo de cambio hubiera tenido un efecto nulo o marginal para el crecimiento de manufacturas e industrias por la simple razón que estas son casi inexistentes. En el caso de Bolivia, el tipo de cambio fijo afectó negativamente, pero de una manera distinta a los países menos dependientes de los recursos naturales. La apreciación de la moneda nacional se convirtió en un incentivo importante para el crecimiento de las importaciones y el contrabando. Por eso el déficit comercial del sector no rentista se ahondó con el pasar de los años. En efecto, algunos rubros productivos sufrieron los efectos negativos de la competencia legal e ilegal de las importaciones, pero la mayor parte de

los bienes producidos en el exterior no desplazaron a las industrias nacionales, sino que simplemente llenaron los vacíos ya existentes en la oferta nacional. La inflación baja que publicita el gobierno nacional como un logro económico, en realidad, es una consecuencia lógica de la apreciación de la moneda nacional. El tipo de cambio fijo abarató las importaciones (al igual que el negocio del contrabando) y la consecuencia obvia es la inflación baja. Por lo tanto, las noticias de que Bolivia tiene una de las tasas más bajas de la región o del mundo, en realidad, no son buenas noticias, sino la confirmación de que Bolivia es uno de los países más dependientes de las importaciones, del contrabando y sin producción nacional.

3. *Expansión de economías conexas al rentismo.* El sector de servicios tiene una cualidad que lo distingue del sector de bienes: no es sustituible por las importaciones. Esto significa que la demanda y la oferta de servicios creció más o menos a la par del crecimiento económico impulsado por el rentismo. Aunque la importación de servicios también ha tenido márgenes importantes de crecimiento, sobre todo los servicios especializados y en tecnologías, mucha gente encontró oportunidades económicas en el sector de servicios, principalmente en aquellos rubros directa e indirectamente dependientes de la economía rentista. Un indicador económico que suelen utilizar a su favor las autoridades políticas es el crecimiento de los negocios de comida y bebida, principalmente los restaurantes. En efecto, los datos confirman que este tipo de negocios han atravesado por un buen momento, al igual que los rubros de turismo, espectáculos o servicios de transporte al viajero. Pero, tienen un punto débil. El auge de los servicios es dependiente del *boom* de recursos naturales. Una expresión de esta correlación se observa en el crecimiento de los espectáculos públicos en tiempos de bonanza, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado. Otra evidencia se observa en las medidas gubernamentales para la promoción del gasto en servicios

no productivos, por medio de vacaciones laborales con fines turísticos para funcionarios públicos o la ampliación de días no laborables, uniendo feriados y fines de semana. Un problema con los servicios conexos al rentismo es que su crecimiento no se debe necesariamente a cambios sostenibles como la innovación, competitividad o una optimización de la relación calidad y precio. Por eso, este tipo de servicios acaban siendo de baja calidad, especulativos, poco competitivos o poco atractivos para el turismo internacional. Por lo general, los servicios turísticos que ofrecen los países rentistas son pésimos en comparación con países menos rentistas.

4. *Atrofia de capacidades productivas.* La frase “aprender haciendo” es un concepto validado por la teoría económica como un factor importante para el aumento de la productividad laboral. La ejercitación y la repetición de tareas y procesos son partes fundamentales para el desarrollo de industrias y manufacturas más rentables y sostenibles. Un secreto de la economía china es el uso de este concepto para el desarrollo acelerado de capacidades propias mediante la “ingeniería inversa”, que no es otra cosa que la obtención de información y conocimientos de diseños desarrollados por economías más avanzadas. El problema nuestro es que tanto los procesos productivos como las prácticas de “ingeniería inversa” son inexistentes o escasos para “aprender haciendo”. El empeoramiento del saldo comercial negativo en los rubros no rentistas significa que nuestras capacidades productivas se atrofiaron y siguen atrofiándose con el tiempo. Esta pérdida de potencialidades humanas, o la especialización en servicios no basados en conocimientos, causa daños económicos en el mediano y largo plazo.

A manera de sintetizar la sección, cabe subrayar que los males económicos de Bolivia tienen estrecha relación con el papel influyente que desempeña la renta de los recursos naturales, en particular aquella renta que abruptamente irrumpe en la economía nacional. Cuando su presencia se disemina por todas las arterias del aparato productivo, determina comportamientos

y procesos de tipo rentista. En nuestro caso, la influencia económica de la renta es negativa, al igual que en muchos países similares, aunque no es una regla de oro o un fatalismo del que no se pueda escapar. En realidad, la renta es una oportunidad económica mal aprovechada.

LOS MALES ECONÓMICOS EN LOS HECHOS: DOS CASOS ILUSTRATIVOS

Las experiencias y expresiones concretas de los males económicos que causa el rentismo están por todo lado. Incluso se podría insinuar que la mayoría de los lectores conoce al menos un caso concreto con cierto nivel de detalle y que haya ocurrido durante los años de la última bonanza. Ahí están, por ejemplo, los trabajadores de la costura y confección de ropa convertidos ahora en minibuseros, comerciantes informales o, incluso, contrabandistas. Similar cambio se produjo con miles de profesionales formados para el campo productivo, pero convertidos en políticos y burócratas ocupando puestos laborales en el aparato estatal que no tienen relación con procesos productivos. Este tipo de cambios ocupacionales corroboran los hallazgos y las conclusiones expuestas líneas arriba: las actividades económicas que agregan valor mediante procesos de transformación se estancan o se atrasan cuando cobra fuerza la renta de los recursos naturales.

Para contribuir a la lista de hechos o casos conocidos por los lectores, vamos a completar esta sección presentando dos experiencias ilustrativas: el caso de América Textil S.A. (AMETEX) y los créditos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)⁸.

El rescate gubernamental de AMETEX

AMETEX es un nombre que todavía suena familiar para muchas familias bolivianas. Era una empresa de textiles dedicada a la manufactura de hilados y tejidos, conocida en el mercado nacional por la producción de casimires, frazadas, mantas y confección de prendas de vestir. Fue fundada como empresa privada el año 1996 a modo de un complejo textil, llegando a conglomerar seis factorías y cerca de 17 pequeñas y medianas

empresas subcontratadas⁹. Un estudio sobre esta empresa señala que AMETEX nació con capacidad de producir hasta ocho millones de prendas por año, llegó a emplear a cuatro mil trabajadores de forma directa y un número similar mediante las empresas subcontratadas¹⁰.

AMETEX se benefició, por unos años, con el Acuerdo de Preferencias Arancelarias para productos andinos y la erradicación de drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés) que otorgaba ventajas económicas y comerciales para la exportación de los textiles nacionales al mercado de Estados Unidos. La empresa nacional llegó a producir para gigantes transnacionales como Polo, Hilfiger, Náutica, Lee y otros. En su mejor momento, llegó a comercializar por un valor de 50 millones dólares por año.

Hacia 2008, cuando la renta del gas ya había despegado, el gobierno de Evo Morales incumplió las condiciones estipuladas con el gobierno estadounidense para alcanzar los objetivos de la lucha antidroga. En consecuencia, el ATPDEA fue suspendido. El cierre del mercado norteamericano no solo afectaba a AMETEX, sino también a los exportadores de productos de cuero y joyería. Con la pérdida de las preferencias comerciales, AMETEX también perdió competitividad frente a los competidores de otros países, como Malasia e Indonesia. En un intento por subsanar las consecuencias negativas, el gobierno de Morales se ofreció a otorgar financiamiento para el pago de los aranceles y promovió nuevos acuerdos comerciales para ingresar a los mercados de Venezuela y Brasil, cuyos gobiernos tenían afinidad ideológica con el gobierno boliviano. Sin embargo, estas soluciones no compensaban la pérdida del mercado preferencial más importante que tenía Bolivia. A esto se sumó las serias dificultades financieras que ya arrastraba la empresa. Hacia el 2010, la deuda de la empresa textilera ascendía a 59 millones de dólares, lo que era muy alto en comparación con el total de sus activos (73 millones de dólares).

El 2012, los dueños de la empresa llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional que se propuso rescatar la manufacturera y salvar las fuentes de empleo de los trabajadores. El 11 de junio de 2012, Morales promulgó el Decreto Supremo 1253 para la creación de la Empresa Nacional Textil (ENATEX) como una entidad pública estratégica dedicada a la “producción y comercialización

de productos del Complejo Productivo Textil, procurando la generación de empleo digno”. En otras palabras, el gobierno se hizo cargo de AMETEX, llegando a recontractar a cerca de 1.800 trabajadores para reactivar las operaciones. Según un informe oficial, entre 2012 y 2014, la empresa estatizada optó por enviar los textiles a los nuevos mercados de exportación, principalmente a Venezuela (54%), y marginalmente Argentina, Brasil y Cuba¹¹. El mismo informe recomendaba como soluciones de mediano plazo el rescate de la iliquidez con recursos públicos, transferir a los trabajadores a otras empresas productivas o declarar la quiebra según el Código de Comercio. Hacia el 2015, el gobierno optó por este último, cerrando definitivamente ENATEX, bajo el argumento de una supuesta transformación del mismo en un Centro de Servicios Tecnológicos para la industria textil.

Según varios economistas consultados por los medios de comunicación, el fracaso del probablemente mayor emprendimiento productivo no rentista, se debió a los altos costos de producción y la política salarial que no tenía correspondencia con la productividad laboral. Incluso durante la vigencia del ATPDEA¹², la empresa textil reportaba pérdidas económicas. A esto habría que sumar varios otros factores como el cierre del mayor mercado de exportación, las desventajas comerciales de los mercados sustitutos o la falta de producción nacional de materia prima (algodón). Si hurgamos un poco más el porqué de los costos altos, vamos a encontrarnos con un factor clave y estrechamente conectado a la renta del gas. En vista que el gobierno disponía de un flujo grande de ingresos, aprobó varias medidas orientadas al aumento generalizado de los salarios, mayores beneficios económicos para los trabajadores, contratos laborales rígidos, bonos como el doble aguinaldo, entre otros.

En el sector rentista, estas medidas no fueron un problema, pero en los rubros productivos no rentistas, como AMETEX, causaron grandes dolores de cabeza. El propio gobierno, cuando se hizo cargo de la textilera, no pudo operar la textilera según sus propias reglas de juego y acabó atentando contra los derechos laborales de los trabajadores. Y en lugar de encarar una reingeniería financiera de la empresa, optó por el camino más fácil: asumir las pérdidas económicas con cargo a los ingresos públicos, quedando en evidencia los efectos perversos del rentismo.

El papel contraproducente del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)

El BDP comenzó sus operaciones el año 1996, es decir, previo a la llegada del boom rentista. Tiene dos dueños. El Estado boliviano con una participación del 80% y el restante 20% pertenece a la Corporación Andina de Fomento (CAF)¹³. Inicialmente, operaba principalmente como una entidad de segundo piso, es decir, no financiaba directamente a las personas o empresas sino mediante otros bancos del sistema financiero. Después, la ley de servicios financieros amplió sus facultades para que pueda operar como entidad de primer piso.

Como sugiere el mismo nombre, el BDP tiene como principal mandato, financiar las actividades del sector productivo y el desarrollo productivo. La intención que justifica su existencia es que se haga cargo del lado descuidado por los bancos comerciales; esto es, apoyar el emprendimiento productivo de sectores emergentes que no tienen la misma rentabilidad que las economías consolidadas o inmersas en la explotación de los recursos naturales exportables. En términos generales, el BDP declara que su razón ser es el desarrollo productivo, la industrialización y la autosuficiencia alimentaria. En los últimos años, señaló que tiene como prioridad, “canalizar el financiamiento para la ejecución de las políticas y programas estatales destinados al fomento del desarrollo del sector productivo, con sustitución de importaciones”¹⁴. Para ello, el banco ofreció nuevas ventajas económicas como la ampliación de los plazos hasta 15 años y tasas de interés desde 0,5% anual.

Sin embargo, los hechos son muy distintos. La composición de la cartera de créditos del BDP se caracteriza por una alta concentración y monopolización de los créditos en muy pocos sectores. Según los informes financieros a diciembre de 2022, el 41% del financiamiento está en el rubro de “agricultura y ganadería”, seguido por “intermediación financiera” con 39% de participación. En tercer lugar, se encuentra el rubro de “industria manufacturera” con 14%. En términos absolutos, el principal rubro tiene una cartera de crédito que alcanza a 313 millones de dólares, de un total de 762 millones de dólares. Excluyendo el financiamiento del BDP a la “intermediación financiera”, el 67% de

los créditos directamente otorgados se concentran en “agricultura y ganadería”. Aunque la publicidad de BDP hace énfasis en que los créditos tienen un enfoque social, incluyente e innovador, lo cierto es que casi todo el financiamiento está canalizado hacia la agricultura, que no es otra cosa que la agricultura de exportación de Santa Cruz. La renta del gas financia la renta agrícola. El sector rentista de economía se autofinancia.

Para entender un poco más sobre las dinámicas internas de este tipo de operaciones financieras, resulta útil repasar una denuncia pública sobre un crédito del BDP que no habría sido pagado. Según una publicación de *News Time*, la familia Barbery Coca¹⁵ recibió el año 2018 un crédito del BDP por 30 millones de bolivianos, pagaderos en un plazo de 36 meses y destinados para un proyecto inmobiliario denominado “Altos de Cotoca”. Aunque consta en papeles que se trata efectivamente de un proyecto inmobiliario, el préstamo fue calificado y aprobado como “crédito manufacturero”. Después de un tiempo, la familia deudora dejó de pagar las cuotas por dos años y medio, llegando a adeudar a junio de 2023, más de 29 millones de bolivianos. Ante estos hechos, el departamento jurídico de BDP inició los procesos judiciales correspondientes, exigiendo ante la justicia el embargo preventivo de los bienes, acciones y fondos bancarios. Este proceso judicial develó que el BDP sabía que la familia deudora se dedicaba a la agricultura y el préstamo estaba dirigido a esta actividad. Por eso, intentaron retener los pagos por la venta caña de azúcar, soya y otros, que recibía la familia de las empresas como Emapa, Cargill, Fino, Alicorp, Gravetal, Rico Industrias Oleaginosas, SAO, Nutriol y Granos Crisol. Los abogados del banco también intentaron confiscar las cosechas de caña o zafras a los ingenios azucareros Guabirá, La Bélgica, Unagro y San Aurelio. Según las últimas declaraciones a la prensa de parte de BDP, la deuda está “en proceso de recuperación, por la vía judicial, de las garantías que respaldan el crédito otorgado a la empresa Yerba Buena SRL, cuyo incumplimiento de pagos fue reportado a la Central de Información Crediticia de la ASFI”.

Este caso puntual, al margen de los problemas de incumplimiento de las cuotas, es una muestra bastante representativa de cómo los planes gubernamentales de financiar al sector productivo, manufacturero o industrial,

en realidad acaban reforzando el modelo rentista. También expone pistas de que los créditos que están siendo aprobados con el justificativo de “industria manufacturera” y así aparecen en los papeles, sirven para inyectar capital de operaciones al sector agroexportador y financian rubros conexos, como el sector inmobiliario que especula con la renta de lotes de terreno urbano. En definitiva, cuando la economía funciona al ritmo o bajo el influjo de la renta de los recursos naturales, los créditos preferenciales del BDP son contraproducentes para el crecimiento de las economías no rentistas.

MALES ECONÓMICOS VENIDEROS: ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Si bien desde el 2016 en adelante el crecimiento de la agroexportación cruceña y de la minería del oro compensaron hasta cierto punto el agotamiento del gas natural, las últimas noticias de comercio exterior no son alentadoras. Entre 2022 y 2023, no solo disminuyó la exportación de gas natural (-31% en valor), sino que también del agro cruceño (-17%) y del oro (-17%). Estas caídas coincidentes de los tres principales rubros no son una casualidad, sino una manifestación concreta de la crisis económica en ciernes, por ahora reprimida a costa del agotamiento de las reservas de divisas y oro del BCB y mayor endeudamiento público¹⁶.

Como hemos visto, prácticamente no existen alternativas para reemplazar la exportación de los recursos naturales. La única opción con potencial era la exportación del litio, pero Bolivia lleva un rezago de al menos una década en la puesta en marcha de las plantas de explotación. Las últimas noticias sobre la ruina de las plantas de producción de litio reafirman las peores previsiones. Otra posibilidad en que creen tanto el gobierno nacional como los gremios agropecuarios de Santa Cruz es la expansión de la agricultura de exportación. Para ello, las medidas económicas en marcha son la subvención de la importación de combustibles, principalmente el diésel, que usa el agro mecanizado y la flexibilización de las medidas de regulación de la deforestación de bosques primarios. Adicionalmente, está en la mesa de negociaciones la aprobación de más variedades

de cultivos GM, principalmente de nuevos eventos y variedades de soya transgénica, maíz, caña de azúcar, trigo, algodón y otros. Sin embargo, estas medidas tienen limitaciones debido al racionamiento del suministro de combustibles y los problemas de abastecimiento de diésel para el agro mecanizado. Además, los bajos rendimientos agrícolas no se deben únicamente a la falta de acceso y legalización de nuevas semillas GM¹⁷.

En este escenario de escasas o nulas alternativas, las últimas medidas gubernamentales apuntan a la reducción de las importaciones. El principal foco de atención de las autoridades es sustituir una parte de la gasolina y el diésel con biocombustibles de origen nacional. Para ello, los empresarios del sector privado alcanzaron a sellar acuerdos con YPFB para el abastecimiento de alcohol etanol requerido para mezclar con la gasolina. Paralelamente, la producción de biodiésel a partir de la soya está en marcha, al igual que los proyectos de introducción de la palma aceitera en las zonas tropicales del país. Hasta ahora, el impacto económico es inexistente, aunque los promotores de los biocombustibles esperan la sustitución de al menos una décima parte de los combustibles fósiles. En todo caso, es una medida paliativa en un contexto de urgencias económicas.

Más o menos, estas serían las medidas concretas para hacer frente a la crisis económica. El tipo de cambio fijo y el congelamiento de los precios de combustibles siguen siendo innegociables para el gobierno del MAS y, en realidad, cualquier modificación o ajuste causaría desastres económicos y políticos cuya verdadera magnitud es complejo de vaticinar. El problema de fondo es que el aparato productivo nacional es estructuralmente dependiente de combustibles subvencionados e importaciones abarataadas por el tipo de cambio fijo.

El peor escenario es el estallido de la crisis económica, que fundamentalmente significa inflación descontrolada de los precios, deuda pública insostenible y, en definitiva, crisis política y social. Existe otro escenario posible: la recesión y depresión económica prolongada. Generalmente, se materializa en forma de ralentización de las actividades económicas, altas tasas de desempleo, caída de las inversiones públicas y privadas, menor consumo y caídas de las importaciones. En el día a día, estos males se presentan en forma de escasez

generalizada, desde largas filas de espera en los surtidores de combustibles, menores oportunidades para encontrar un empleo laboral, desahorro familiar, acceso todavía más restringido a los servicios de salud, rentas injustas de jubilación, hasta la quiebra de los pequeños negocios que sostienen a los cuentapropistas.

En cualquier caso, cualquiera de estos u otros escenarios, no hacen más que mostrar sin filtros una cruda realidad que muchos olvidamos en tiempos de bonanza rentista: la maldición de los recursos naturales.

CIERRE

Hemos utilizado y aplicado el concepto económico de la “maldición de los recursos naturales”, pero habría que aclarar que, propiamente, lo negativo no consiste en tener, poseer o incluso extraer los recursos naturales, sino en el potencial negativo o pernicioso que conlleva la renta obtenida, especialmente cuando tales ingresos son altos y aparecen de forma inesperada. De una u otra forma, las consecuencias negativas de la maldición de los recursos naturales están conectadas al uso de la renta emergente. Decir “maldición del rentismo” quizá sería una frase más precisa.

En cualquier caso, lo cierto es que el mal económico mayor es el atraso o el estancamiento, cuyas características y expresiones específicas hemos identificado como i) Bolivia tiene un atraso económico de al menos 20 años con respecto a los países vecinos y la renta del gas achicó esta brecha apenas en un par de años, ii) existe y prevalece una alta dependencia de la exportación de los recursos naturales (sector rentista) en calidad de materias primas o productos poco transformados, iii) el crecimiento económico es lento con respecto a países menos dependientes de la renta de los recursos naturales, o incluso con respecto a países con similares grados de dependencia como es el caso de Perú, iv) la constatación del fenómeno de la “enfermedad holandesa” nos habla de la asfixia económica que sufren los sectores productivos, emprendimientos y empresas que no son beneficiarios del rentismo, pero fundamentales para el desarrollo económico de mediano y largo plazo.

Por último, las experiencias concretas como la quiebra de

ENATEX o la canalización hacia el sector rentista de los fondos del BDP ayudaron a imaginarnos las grandes dificultades que existen a la hora de apoyar y consolidar alternativas no rentistas en momentos o tiempos de bonanza rentista. En el primer caso, ni el dinero de la renta ni la intervención directa del Estado lograron rescatar a la empresa textilera que llegó a generar empleo para cuatro mil trabajadores. El segundo es otra muestra que los créditos productivos con bajos intereses son insuficientes o no compensan las múltiples desventajas económicas que causa el rentismo al encarecer los costos de producción nacional. Esto demuestra que es falsa la creencia de que no existen empresas privadas por falta de acceso a capital. El BDP incumple su razón de ser porque está reforzando el modelo rentista, en lugar de facilitar la transición hacia economías productivas y diversificadas.

5

LOS MALES POLÍTICOS

INTRODUCCIÓN

La palabra política tiene muchos significados, pero en este texto vamos a adoptar un concepto básico como punto de partida: política es la manera en que se toman las decisiones de interés general dentro de una sociedad¹. Por lo general, las decisiones son tomadas por los gobiernos investidos de autoridad y poder mediante el voto de los gobernados. En el marco de los temas centrales de este libro, será más apropiado delimitar su amplitud y referirnos a la “política económica”; es decir, hablar con relación a las decisiones tomadas por el gobierno y las autoridades públicas sobre asuntos económicos de interés nacional. Para ello, importan dos aspectos: i) perfilar los rasgos generales del gobierno como tomador de decisiones y ii) identificar qué decisiones tomó en el campo económico. Si el desempeño político del sector público tomador de decisiones económicas resulta ser pobre o negativo, podremos concluir que el atraso de Bolivia no se debe únicamente a los fenómenos económicos explicados en el capítulo anterior, sino que también es consecuencia de los problemas políticos.

Esta declaración inicial es necesaria, a pesar de que algunos lectores ya tengan sus respuestas en la punta de la lengua. Y ciertamente, la mayoría de los bolivianos sabemos que, primero, el desempeño político de Bolivia ha sido históricamente conflictivo, inestable, cambiante y altamente dependiente de los gobiernos de turno y; segundo, cuando los periodos de crisis vuelven a emerger, crecen los cuestionamientos de la gente a las decisiones económicas tomadas por el sector gubernamental. Al parecer, las preocupaciones sobre cuestiones económicas entran en un estado de letargo en tiempos de auge y reflotan cuando reaparece la amenaza de crisis económica².

La bonanza del gas se tornó influyente desde el primer año de gobierno del MAS, quitando de encima a la clase gobernante al menos el peso de la mitad del problema económico: la captación de ingresos públicos dejó de ser una preocupación gubernamental. La otra mitad del problema —la administración de los gastos públicos— siempre es menos desafiante. A juzgar por sus acciones iniciales, el gobierno de Evo Morales tenía intenciones genuinas para hacer un buen uso de los ingresos en alza. La renta petrolera de los primeros años fue utilizada para sanear las obligaciones financieras del maltrecho aparato público y reducir la pobreza mediante transferencias directas y bonos sociales mejorados a favor de las poblaciones más vulnerables. El gobierno también adoptó políticas macroeconómicas orientadas a regular el flujo monetario; bolivianizar las transacciones financieras y controlar las presiones inflacionarias. Si bien estas medidas subsanaron los altos costos sociales de la crisis económica, no representaban en sí mismos desafíos complejos en términos de gestión, eficiencia y visión estratégica. En resumidas cuentas, gastar es más cómodo que generar ingresos.

Sin embargo, a juzgar por las acciones posteriores, el gobierno del MAS no solo acabó mostrándose incompetente para el diseño e implementación de políticas económicas capaces de enfrentar los retos de transformación estructural, sino que sucumbió con bastante facilidad ante los males del rentismo. La propuesta gubernamental sobre cómo mejorar el aparato productivo desapareció al momento de la implementación, aunque siguió perviviendo como discurso anticapitalista y antineoliberal. El interés por generar ingresos públicos alternativos a la renta de los recursos naturales se desvaneció rápidamente y solo reapareció cuando la renta del gas seguía sin recuperarse de la caída libre.

Este planteamiento introductorio propone que la renta de los recursos naturales influye negativamente sobre el desempeño de la política y la calidad de las políticas económicas. El objetivo de lo que sigue es corroborar esta hipótesis, explicar la naturaleza de las interrelaciones entre economía y política y, de esta manera, complementar o ampliar el abordaje centrado en lo económico del capítulo anterior. Al igual que en el apartado precedente, el periodo examinado abarca 2001-2023, cuyos hitos principales son el auge, el momento cumbre y el declive de la renta del gas natural.

RENTISMO Y POLÍTICA

Los economistas y politólogos que estudian las relaciones entre rentismo económico y política, a menudo toman como un estudio de referencia el trabajo de Michael Ross, publicado en 2001, sobre cómo la renta del petróleo puede convertirse en una piedra indeseable en el camino de la democracia³. La principal conclusión de este influyente estudio es que existe una correlación negativa entre las exportaciones de petróleo y minerales, y los procesos de transición hacia la democracia. Para explicar y sostener sus hallazgos de investigación, Ross propuso tres “mecanismos causales”. Según este planteamiento, el primer mecanismo denominado “efecto rentista” consiste en la tendencia de los gobiernos rentistas a no cobrar impuestos y aumentar los gastos públicos con la intención de mantener bajo su control cualquier reacción indeseable de la sociedad civil. El segundo mecanismo es el “efecto represión” que se presenta cuando la renta es utilizada por los gobiernos para reforzar el aparato coercitivo del Estado, principalmente mediante incrementos sustanciales del gasto militar y policial. Por último, el tercer mecanismo es el “efecto modernización”, que aparece cuando el rentismo no conduce a cambios sociales y culturales que son requeridos como requisitos elementales para construir gobiernos democráticos.

Este esquema analítico sigue utilizándose en varios estudios recientes y tiene la ventaja de combinar elementos cualitativos propios de la disciplina de ciencias políticas con elementos cuantitativos. Entonces, siguiendo esta corriente de análisis, vamos a apoyarnos en el esquema expuesto para examinar el caso boliviano, aplicando los dos primeros “mecanismos causales” e introduciendo un tercero que llamaremos “efecto censura”, en lugar del mecanismo referido a la modernización. Las razones de esta modificación vamos a explicar más adelante.

Previamente, debemos aclarar que el estudio de Ross, al igual que de varios otros autores que se inspiraron en el mismo, utiliza grandes cantidades de datos estadísticos procesados mediante sofisticadas herramientas econométricas y utilizando modelos de “teorías formalizadas”. En este trabajo no se pretende hacer lo mismo, fundamentalmente por dos razones. La primera, tal como se señaló desde un inicio, no pretendemos tratar los problemas

económicos como si fueran un campo privativo de los economistas acostumbrados a utilizar jergas y modelos matemáticos que, ciertamente, tienen potencial para contribuir al conocimiento, pero también es verdad que desalientan debates democráticos, amplios y multidisciplinarios. Además, no es ningún secreto decir que, por lo general, los economistas diseñamos modelos cuantitativos pésimos o simples, algo que se hace evidente especialmente cuando tales diseños son sometidos a los ojos especializados de los científicos en estadística pura y cuando pasa por las manos de matemáticos. La segunda razón es porque en Bolivia, al igual que en otros países que sufren la maldición de los recursos naturales, la información cuantitativa y las estadísticas económicas y gubernamentales son de baja calidad y poco confiables, lo que no se arregla ni es posible de subsanar ni siquiera echando mano de las herramientas computacionales más sofisticadas.

EFFECTO RENTISTA

Entenderemos que la política en general y el régimen de gobierno, en particular, sufren efectos negativos si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Durante la bonanza de la renta, el gobierno no hace reformas tributarias significativas, ya sea porque tiene la intención de alejar el control ciudadano de la gestión pública o porque opta por conservar las alianzas funcionales con los grupos de poder.
2. El gasto gubernamental aumenta con respecto al PIB nacional, lo que a su vez se utiliza para la cooptación de actores políticos clave y establecer relaciones prebendales con entes organizados de la sociedad civil, movimientos sociales, aliados políticos y otros.
3. Los ingresos del sector productivo del gobierno (empresas públicas) disminuyen en cuanto a su contribución al PIB nacional.

Presión tributaria y privilegios tributarios

En cuanto a los impuestos, durante la bonanza del gas (2006-2014), las recaudaciones tributarias totales alcanzaron cifras récords en Bolivia. El principal factor del cambio ha sido sin duda la renegociación estatal de los contratos con las petroleras, llegándose a incrementar la renta gasífera hasta un 82% del valor producido en los pozos de San Alberto y San Antonio. Aprovechando el crecimiento de la economía nacional, el gobierno también ejerció mayor fiscalización sobre el sector formal de la economía, lo que condujo a la ampliación de la base tributaria, mayor eficiencia de las entidades recaudadoras y mejora de la cultura tributaria entre los contribuyentes. En promedio, en el periodo de bonanza, el total de las recaudaciones tributarias representaban alrededor del 25% del PIB.

Descomponiendo las recaudaciones entre hidrocarburos, agricultura y oro, podemos evidenciar que la mayor proporción de los ingresos fiscales tenía su origen en la renta del gas natural. En 2006, la recaudación nacional sumaba 3,06 mil millones de dólares, de los cuales 1,2 mil millones correspondían a los impuestos del sector de hidrocarburos (IDH, IEHD, IUE, IVA, IT y RC-IVA), principalmente generados por la extracción del gas natural. En términos porcentuales, esto representaba el 39% de las recaudaciones. Para el 2014, las recaudaciones del sector en cuestión alcanzaron 3,19 mil millones de dólares que sobre un total de 9,26 mil millones, equivalían al 35%⁴. Entre el 2006 y 2014, las recaudaciones relacionadas con los hidrocarburos crecieron un 165%, mientras que las recaudaciones totales un 202%. Esta tendencia de cambios progresivos sugiere que la fiscalización tributaria del sector formal de la economía incidió positivamente en el crecimiento de las recaudaciones del mercado interno.

Un hecho muy significativo es que, al margen de la renegociación de los contratos petroleros, no hubo posteriores reformas tributarias. Una vez que Bolivia se embarcó en los años de bonanza, el MAS se despreocupó por reajustar los regímenes tributarios que se habían creado en el contexto de las reformas de liberalización económica. No hay justificaciones válidas para este descuido de gran alcance porque existían y existen razones y argumentos suficientes para hacer reformas tributarias al menos

en dos rubros económicos de mucha relevancia: la agricultura del oriente boliviano y la minería del oro.

La agricultura de monocultivos paga impuestos de acuerdo a un régimen especial de obligaciones. Desde el año 1996 está vigente el Régimen Agropecuario Unificado (RAU)⁵ que dispone un pago anual y simplificado que sustituye al impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a las transacciones (IT) y utilidades de las empresas (IUE). En su momento, la principal justificación de este régimen diferenciado fue la necesidad de reactivar e incentivar la agricultura cruceña afectada por la crisis de los años 1980 y 1990. Se daba por sobreentendido que sería un régimen transitorio y temporal, pero se convirtió en un privilegio tributario permanente. Para tener una idea general, las recaudaciones totales por concepto de RAU del año 2006 alcanzaron 1,6 millones de dólares, lo que equivalía a 0,1% del total de las recaudaciones. El año de mayor recaudación por el tributo del RAU fue el 2021, con 4,9 millones de dólares⁶. Estas cifras que no condicen para nada con el tamaño económico del agro mecanizado se deben a que el pago anual ronda en torno a cuatro dólares por hectárea de tierra agropecuaria, cifra que no tiene correspondencia lógica con el valor de producción del sector sojero que ronda 1.200 dólares por hectárea. Comparativamente, el impuesto agropecuario no se parece en nada al 30% sobre las ganancias que paga el productor sojero de Argentina o al 25,5% que llega en el caso de Brasil⁷.

El gobierno de Evo Morales no tomó iniciativa alguna para introducir reformas tributarias en el sector agroexportador. Durante los años de bonanza, el sector agropecuario se convirtió en uno de los principales opositores políticos del gobierno nacional. El poder del agro cruceño contrarrestó varias decisiones gubernamentales, incluyendo la fallida medida de incrementar los precios de combustibles hacia finales del 2010. Sin embargo, cuando la renta del gas comenzó a declinar, el acercamiento se materializó rápidamente entre estos enemigos políticos. Los beneficiarios del RAU se comprometieron a dinamizar el crecimiento económico para compensar las pérdidas de la renta gasífera, por medio de la ampliación de la frontera agrícola, aumento de los volúmenes de exportación y mayor producción de carne vacuna para nuevos mercados de exportación.

Para ello, el gobierno otorgó múltiples facilidades como el reconocimiento y la protección de la propiedad privada de la tierra y desregulación de las medidas de protección de los bosques, áreas protegidas y parques nacionales. En estas circunstancias, hablar de reformar el RAU se convirtió en un tema tabú y políticamente incorrecto.

El sucesor de Morales, Luis Arce, no se desmarcó de la línea política establecida. La única medida que incomodó a los grandes agropecuarios fue el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). Fue creado el año 2021 como un tributo anual aplicable a las grandes riquezas patrimoniales de las personas y no así de empresas. Grava a fortunas mayores a 4,3 millones de dólares mediante alícuotas que varían entre 1,4% a 2,4%. Por este concepto, el 2022 las recaudaciones alcanzaron 29,5 millones de dólares. Según las propias estimaciones del gobierno, el número de contribuyentes llegó a 225 personas.

Pasando al sector de la minería del oro, el gobierno intentó modificar el régimen tributario minero, pero sin éxito. Durante los años de altos ingresos (2006-2014), la minería del oro no había despegado, por lo que no fue objeto de atención de parte de las autoridades de fiscalización tributaria. Aunque la ley minera 535⁸ establece tasas impositivas de hasta 37,5% sobre las utilidades de la minería privada, tiene una debilidad de enormes implicaciones que consiste en la vigencia de una alícuota “especial” del 2,5% para la “minería marginal”; es decir, para la minería sin capacidad de generación de utilidades positivas. Este resquicio legal ha sido muy bien aprovechado para la evasión de los impuestos por parte de los mineros auríferos.

Según los estudiosos del tema⁹, los mineros cooperativistas que producen el 99% del oro, en realidad, son empresas privadas en un 80%, mismas que deberían pagar impuestos según las tasas establecidas para el sector privado empresarial. Pero, al estar reconocidos como mineros cooperativistas están considerados como trabajadores de la “minería marginal”, lo que les abre las puertas para pagar impuestos según la alícuota fijada para este sector (2,5%). El 2020, cuando la exportación del oro alcanzó 53 toneladas en volumen y 3 mil millones de dólares en valor, el gobierno recaudó una suma total de tan solo 80 millones de dólares del sector aurífero. Esta cifra absurda

confirma las prácticas generalizadas de evasión de impuestos por parte de los rentistas del oro.

Desde el año 2020, el gobierno nacional busca modificar la normativa para incrementar la recaudación tributaria de este sector. Inicialmente, el gobierno intentó modificar la alícuota especial elevando hasta un 7%, pero los cooperativistas respondieron al anuncio con una masiva protesta que acabó tomando las calles principales de la sede de gobierno¹⁰. En octubre de 2022, miles de mineros pertenecientes a más de 1.500 cooperativas afiliadas a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecomán LP) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferresco) tomaron control de la ciudad de la Sede de Gobierno, cerrando las calles y avenidas e instalando cientos de puntos de vigilia. Para entonces, el gobierno nacional había reducido su petición al 5%, en un intento vano por desactivar el conflicto. Después de varias reuniones y negociaciones, finalmente, acordaron un impuesto único del 4,8% sobre el valor bruto de la venta de oro y la venta preferencial del oro al Estado para el fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB)¹¹.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre auríferos y gobierno nacional no fue plasmado en una ley, por lo que los cooperativistas siguieron exigiendo la aprobación de una norma que ratifique el acuerdo de que pagarán un impuesto de 4,8% por la extracción del oro y, entretanto, optaron por suspender la venta del oro al BCB.

El privilegio tributario de los cooperativistas mineros se mantiene en pie porque existe una estrecha alianza política con el partido gobernante. Los mineros cooperativistas formaron parte del “Pacto de Unidad”¹² que llegó a aglutinar a las organizaciones y movimientos sociales más representativos de Bolivia. Al igual que varios sectores cooptados, los cooperativistas llegaron a ocupar cargos jerárquicos en el poder ejecutivo y sus líderes mayormente permanecen en los curules parlamentarios desde hace varios años. La iniciativa gubernamental de corregir la distorsión tributaria del oro era inexistente durante los años de bonanza y solamente apareció cuando las urgencias económicas obligaron al gobierno a nuevas

fuentes de captación de ingresos públicos. Pero en el contexto de declive y crisis, los cooperativistas auríferos tienen una nueva carta de negociación: el monopolio de la producción del oro que al gobierno le urge comprar para reponer las reservas agotadas del Banco Central de Bolivia (BCB).

Gastos de cooptación

El segundo elemento a considerar para el análisis del “efecto rentista” es el gasto gubernamental, concretamente, la expansión del gasto público con fines prebendales y de cooptación de actores políticos claves. Una tarea nada fácil que plantea ello es identificar cuáles son los gastos o rubros presupuestarios elegibles como gastos clientelares, visualizar su comportamiento en el tiempo y diferenciar según los momentos de auge (2006-2014) y declive (2014-adelante). Debido a que esta tarea es intrincada y sobrepasa los alcances de este trabajo, vamos a tomar un caso representativo: el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple¹³.

Este programa fue creado por decreto en abril de 2007, en forma de Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), con financiamiento de las arcas del Estado y ayuda financiera de Venezuela. Según un reporte de la UPRE del 2016¹⁴, entre el 2007 y 2015, se financiaron 6.671 proyectos con un monto de inversión que llegó a 1.530 millones de dólares. Los proyectos consistían principalmente en construcción de aulas escolares, canchas de fútbol, coliseos multideportivos, hospitales, sedes sindicales, compra de camionetas para organizaciones sociales, entre otros. Las inauguraciones y entregas de las obras ocupaban un lugar muy importante en la agenda presidencial y sus colaboradores de alto rango, principalmente, como viajes oficiales a casi todos los municipios rurales del país.

Un trabajo de investigación de un grupo de periodistas evidenció varias irregularidades en el manejo de estos proyectos. El reporte señala que el programa benefició a “un grupo de 20 empresas, algunas de ellas de empresarios cercanos al partido de Gobierno y de aliados políticos en momentos claves del legislativo”. La constructora Machupo cobró 5,5 millones de dólares por la construcción de cuatro proyectos y sería de propiedad de la familia Seoane Gutiérrez. La empresa Tauro

S.A. se adjudicó la construcción de 29 canchas de fútbol, cuyo accionista Douglas Ascarrunz tendría vínculos con los altos mandos del MAS. La empresa Paula Construcciones construyó una sede sindical y un campus universitario por un valor de 9,4 millones de dólares, cuyo dueño tendría parentesco con aliados políticos del MAS en Tarija. La investigación identificó también a la empresa de Jorge José Márquez Saleg como una de las principales beneficiarias, al haberse adjudicado 13 proyectos por un monto total de 36,6 millones de dólares¹⁵.

Al margen de varias observaciones e irregularidades que existen sobre la administración de los fondos, el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple califica como gasto de cooptación o clientelar debido a que fue diseñado explícitamente como una estrategia política-electoral, inspirada en el modelo peronista de “Eva Cumple” de Argentina y tuvo la participación del gobierno de Venezuela. Los alcaldes y dirigentes sindicales elaboraban proyectos con apoyo de funcionarios públicos contratados con esa finalidad y organizaban actos multitudinarios para recibir cheques bancarios de las manos del primer mandatario o sus colaboradores cercanos. A la finalización de los proyectos, el programa contemplaba la organización de nuevas concentraciones masivas de la población beneficiaria para proceder a la entrega de las obras. Estas actividades se intensificaron durante las épocas electorales y los pedidos de apoyo electoral eran más explícitos. En reiteradas ocasiones, los primeros mandatarios presionaron públicamente a los electores a votar por los candidatos del MAS, sean para las gobernaciones o municipios, y condicionaron el financiamiento de los proyectos a los resultados electorales. Esto es lo que se denominó como la “campana electoral continua”.

Empresas públicas

Finalmente, veamos el tercer elemento del “efecto rentista”. Es decir, queda por constatar si los ingresos del sector productivo del gobierno disminuyeron o no. Generalmente, los resultados son valorados de acuerdo a su contribución al PIB nacional, pero vamos a ensayar ejercicios alternativos y complementarios con información desagregada. Como es obvio, el sector productivo estatal está conformado fundamentalmente por

las empresas públicas. El retorno del modelo estatista, desde 2006, se materializó en una apuesta decisiva por la intervención estatal en el sector productivo mediante la creación de nuevas empresas públicas. Las establecidas hasta entonces eran pocas y destacado aquellas calificadas como estratégicas, como es el caso de YPFB¹⁶. Con la llegada del MAS al poder, se crearon varias empresas financiadas con fondos públicos, pero no todas fueron implementadas al mismo tiempo, sino en distintos momentos y con periodos diferenciados de gestación, crecimiento y consolidación. Estos detalles en apariencia menores no deben obviarse para una valoración equilibrada. La tabla 7 sintetiza el estado actual de las empresas públicas.

En suma, existirían 31 empresas públicas a nivel nacional y departamental, sin tomar en cuenta las empresas municipales. Según los datos disponibles para 2023, el patrimonio neto asciende a 11,7 mil millones de dólares. Los ingresos corrientes suman 9,3 mil millones de dólares y los egresos 9,1 mil millones, existiendo una diferencia positiva que totaliza 246 millones de dólares. Debemos advertir que el resultado económico no está determinado únicamente por la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, por lo que la última cifra no equivale necesariamente a las utilidades o pérdidas registradas en los estados financieros de las empresas. Para cualquier investigación independiente, el mayor problema es la falta de acceso transparente a la información financiera y la baja confiabilidad de los reportes financieros. A pesar de ello, los datos presentados en la tabla 6 aportan información valiosa para conocer los aspectos centrales del funcionamiento económico de las empresas públicas.

Primero, el patrimonio neto equivale al 32% con respecto al PIB nacional (que está en torno a 40 mil millones de dólares). Los ingresos corrientes representan el 79% del patrimonio neto. La diferencia entre ingresos y egresos representa el 1,05% con respecto al patrimonio. En términos de rentabilidad financiera, el desempeño general de las empresas está bastante alejada de los niveles óptimos. La importancia relativa del resultado económico mejora un poco cuando se compara con los ingresos (1,4%), pero este indicador porcentual está por debajo de la tasa de interés referencial del mercado financiero, que ronda un 3% en promedio.

TABLA 8. BOLIVIA: EMPRESAS NACIONALES Y REGIONALES ADMINISTRADAS POR EL ESTADO, 2023
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

N°	Sector	Año de creación	Empresas en funcionamiento	Patrimonio Neto	Recursos Corrientes	Egresos Corrientes	Resultado Económico	Resultado Económico
1	Extractivo	1936	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	YPFB	8,466	7,371	-7,370	60,977
2		1952	Corporación Minera de Bolivia	COMIBOL	517,117	315,759	-265,488	50,270
3		2007	Empresa Siderúrgica del Mutún	ESM	85,304	3,095	-2,444	0,651
4		2017	Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos	YLB	6,674	31,535	-40,371	-8,835
5	Servicios	1964	Empresa Nacional de Ferrocarriles	ENFE	62,291	0,480	-0,515	-0,035
6		1977	Transporte Aéreo Boliviano	TAB	56,026	13,919	-13,492	0,503
7		2009	Bolivia TV	TV	19,732	7,861	-8,895	-1,033
8		1979	Empresa Naviera Boliviana	ENABOL	33,419	-	-	-0,009
9		2007	Boliviana de Aviación	BOA	35,848	372,092	-400,657	-28,566
10		2008	Depósitos Aduaneros de Bolivia	DAB	28,940	16,347	-13,587	2,760
11		2010	Agencia Boliviana Espacial	ABE	16,731	41,063	-32,603	8,463
12		2011	Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura civil	EBC	0,724	53,135	-48,732	4,403
13		2014	Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico	EETC MT	672,591	26,482	-65,531	-36,923
14		1996	Administración de Servicios Portuarios -Bolivia	ASP-B	47,516	15,078	-12,834	2,244
15		2010	Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo	GESTORA	5,601	43,958	-29,811	14,147
16		1945	Empresa Pública Transporte Aéreo Militar	TAM	0,765	0,823	-1,669	-0,845
17		1977	Empresa de servicios aéreos Bolivianos	ESABOL	8,678	2,741	-4,463	-1,721
18		1987	Empresa Mísicuni	PMM	209,923	2,846	-11,915	-9,066
19		2009	Empresa Tarijeña de Gas	EMTAGA 'S	65,274	9,457	-10,585	-1,126
20		1962	Empresa Nacional de Electricidad	ENDE	585,978	331,456	-164,596	168,527

Nº	Sector	Año de creación	Empresas en funcionamiento	Patrimonio Neto	Recursos Corrientes	Egresos Corrientes	Resultado Económico	Resultado Económico
21	Industrial 11.677	1966	Empresa Metalúrgica Vinto- Nacionalizada	EMVA	82,927	262,151	-271,115	-8,964
22		11.677	Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional	COFADENA	97,921	12,411	-9,315	4,742
23		2007	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos	EMAPA	393,850	220,870	-183,295	37,574
24		2007	Cartones de Bolivia	CARTONBOL	8,799	4,869	-4,735	0,134
25		2008	Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos	EBIH	4,029	5,373	-6,164	-0,791
26		2010	Empresa azucarera San Buenaventura	EASBA	46,871	9,086	-14,090	-5,003
27		2013	Empresa Pública Quipus	QUIPUS	18,163	10,682	-9,634	1,047
28		2014	Empresa Estatal Boliviana YACANA	YACANA	20,516	0,642	-4,598	-3,955
29		2017	Empresa Pública Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia	EEPB	9,125	15,492	-13,507	1,985
30		2007	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	EBA	64,313	50,492	-49,725	0,669
31		2022	Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria		5,533	5,192	-11,210	-6,017
Total					11.667	9.257	9.076	246,209

FUENTE: Elaboración con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MIEFP).

Nota: Los estados de recursos y gastos corrientes de las siguientes empresas no se cuentan disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Papelbol, Ecobol, SENATEX, ABEN, Naabol, ABC-Correo, en el que solo disponen información del presupuesto de recursos y gastos corrientes.

- La empresa Boltur, cierra sus operaciones en 2021, y se crea otra empresa en reemplazo con el nombre de Conoce Bolivia, y otras que finalizan sus operaciones son: Empresa Nacional de Fundiciones, Empresa Nacional de Televisión Boliviana y la empresa de correos de Bolivia, en la que se crea otra con el nombre de Agencia de correos de Bolivia.

- Entre las empresas que se fusionaron están Lácteos de Bolivia (LACTEOSBOL), la Empresa Pública Productiva Apícola (PROMIEL) y la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA).

Segundo, el sector extractivo concentra el 77% del patrimonio neto, seguido por el sector industrial con 11,5% y servicios con 10,8%. En cuanto a ingresos y gastos corrientes, el sector extractivo predomina sobre los otros dos, con una participación de 83% y 84% respectivamente. Sin embargo, el alto flujo del movimiento económico sectorial no está acompañado por resultados económicos de igual importancia. De hecho, el 77% del resultado económico ha sido generado por el sector industrial, mientras que el sector de servicios arrojó resultados negativos.

Lo más llamativo es que el 68% del resultado económico proviene de una sola empresa pública: ENDE. Este protagonismo, que ya existía en la gestión 2022, se repitió el 2023, cuando esta empresa informó que las 11 empresas subsidiarias de ENDE Corporación cerraron la gestión con ganancias cercanas a 148 millones de dólares. Al momento de presentar este logro económico, la autoridad del ramo afirmó que “el mito de que nuestras empresas del sector energético son deficitarias es totalmente falso”¹⁷. El segundo resultado económico que destaca proviene de YPFB al haber alcanzado un resultado positivo de 61 millones de dólares.

Tercero, exceptuando ENDE y YPFB, el panorama económico luce sombrío para el resto de las empresas públicas. Juntos, las 31 empresas públicas arrojaron un resultado negativo de 113 millones de dólares. 16 empresas presentaron resultados negativos y 15 empresas arrojaron resultados positivos. Entre las empresas con peor desempeño económico figuran la empresa metalúrgica Vinto (-50,9 millones de dólares), la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico (-31,6 millones de dólares) y la Empresa Pública Nacional Textil (ENATEX) (-21,8 millones de dólares). Las tres empresas fueron creadas e implementadas en el marco del retorno del Estado empresario en el año 2006.

El principal problema con las empresas públicas no es la tendencia de los resultados económicos, es decir, si estos disminuyen o aumentan, sino las pérdidas económicas persistentes y generalizadas. Ciertamente, existen empresas rentables como las que hemos mencionado y destacado, pero la mayoría tiene rendimientos financieros pobres o negativos. Solo en casos excepcionales como Mi Teleférico, la falta de

rentabilidad podría tener una justificación razonable como empresa de interés social, pero se tornan inviables cuando los egresos son el doble de los ingresos. Esto es lo que precisamente sucede con la empresa de transporte por cable. Para revertir la situación de las empresas públicas, las autoridades adoptaron medidas apresuradas como la compra estatal de bienes y servicios a las empresas públicas deficitarias. Este tipo de medidas mejoraron las ventas de las fábricas de papel e imprentas del Estado, pero solamente son posibles cuando hay mayor disponibilidad de gastos públicos.

Para cerrar este apartado de “efecto rentista”, cabe sintetizar que hemos constatado que se cumplen las tres condiciones, por lo tanto, debemos concluir que la renta de los recursos naturales tiene un efecto negativo sobre la política. La bonanza rentista fue decisiva para que el gobierno nacional no haya hecho reformas tributarias de forma oportuna y orientadas a la eliminación o al menos disminución de los privilegios impositivos que refuerzan la lógica rentista. Una parte de la renta petrolera fue utilizada para gastos públicos explícitamente clientelares, concretamente, el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple, que financió miles de pequeños proyectos como parte de una estrategia política de “campana electoral continua”. Aunque algunas obras como los sistemas de riego beneficiaron a las capas sociales más empobrecidas, la mayoría de los proyectos y fondos fueron destinados para obras no productivas como sedes sindicales, compra de camionetas para militantes del MAS o construcción de canchas de fútbol.

Por último, el dinero del gas sirvió para financiar más de 50 empresas públicas (incluyendo municipales) que al día de hoy no justifican las inversiones realizadas ni tienen niveles de rentabilidad mínimamente requeridos para la viabilidad económica de cualquier empresa productiva. Todo esto tiene efectos políticos y económicos negativos porque, en última instancia, el razonamiento por detrás de las malas decisiones económicas adoptadas está plagado de cálculos políticos y relaciones clientelares tanto con los grupos de poder que gozan de privilegios impositivos, con los empre-saurios que se adjudican las obras públicas, como con las poblaciones pobres electoralmente decisivas.

EFFECTO REPRESIÓN

Siguiendo el esquema propuesto, entenderemos que el deterioro de la política a causa del “efecto represión” se materializa cuando:

1. El gasto militar crece en cuanto a su participación en el gasto público.
2. Aumenta el tamaño del sector militar como proporción de la fuerza laboral.

Gasto militar

El gasto público destinado a las Fuerzas Armadas creció en 459 millones de dólares entre los años 2006 y 2014, es decir un 273%. Este crecimiento extraordinario no es un hecho aislado del desempeño general de la economía, sino que ocurrió en tiempos de expansión generalizada del gasto público. De esta manera, el gasto militar pasó de 168 millones en 2006 a 626 millones de dólares para en 2014. En adelante, la cifra anual se mantuvo en alrededor de 570 millones anuales en promedio, con leves altibajos interanuales.

El gasto militar no sufrió grandes cambios con respecto a los gastos corrientes del sector público. En 2006, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas representaba el 4,3% con respecto al gasto corriente del gobierno nacional y para el año 2014 estaba cifrado en 4%. En los años posteriores, la participación militar dentro de los gastos gubernamentales sufrió una leve caída como porcentaje de participación, alcanzando en promedio un 3,1%. Sin embargo, esta menor participación porcentual no significa que también haya disminuido en cifras absolutas. Para el año 2022, el gasto militar llegó a 640 millones de dólares, marcando un nuevo récord con respecto a los registros de las últimas dos décadas.

De igual forma, el gasto militar tuvo cambios leves con relación al PIB de Bolivia. Para el 2006, equivalía al 1,5% del PIB nacional, cifra que tocó su punto más alto el 2008, cuando subió hasta un 2%. Entre 2006 y 2014, en promedio, la participación del gasto militar giró en torno a 1,7% comparado con el PIB, y desde el 2015 bajó levemente para posicionarse en torno al 1,5%.

El comportamiento oscilante y con tendencia al alza del gasto militar debe leerse en el contexto de relaciones políticas

cambiantes entre el gobierno del MAS y las Fuerzas Armadas. Históricamente, el gasto militar está subordinado a las decisiones políticas, necesidades gubernamentales de seguridad interna y crecimiento vegetativo del presupuesto y población militar, sin que hayan sido determinantes las necesidades o las estrategias de seguridad externa. La mayor capacidad de gasto del gobierno del MAS facilitó su acercamiento a las Fuerzas Armadas.

Después de la nueva Constitución del 2009, los militares adoptaron la wiphala (y otros símbolos patrios) como parte de su indumentaria y cambiaron el grito militar de “Subordinación y Constancia. ¡Viva Bolivia!”, por el mensaje de “Patria o Muerte. ¡Venceremos!”. Estos cambios se gestaron hacia el 2014, cuando se produjo la “Marcha por la Descolonización” protagonizada por uniformados disidentes exigiendo reformas entre las instituciones militares no alineadas a los postulados del Estado Plurinacional. Un resultado de la protesta militar ha sido la puesta en marcha del programa “Igualdad de Oportunidades”, fundamentalmente concretada en la creación de cuotas para el ingreso a los centros de formación miliar para jóvenes de origen indígena, campesino y originario¹⁸. En 2016, el gobierno, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)¹⁹, también fortaleció su acercamiento a los uniformados con la creación de la Escuela Antiimperialista.

Aunque la incorporación de los símbolos del Estado Plurinacional en los uniformes militares y la modificación del “grito de guerra” con mensajes revolucionarios afines a la ideología del MAS han sido resistidos por parte de grupos de uniformados y militares en servicio pasivo, el respaldo político de las Fuerzas Armadas se impuso y cada vez fue más explícito, hasta la víspera de la renuncia de Evo Morales en 2019²⁰. Los mensajes de los uniformados giraron en torno a ideas como la defensa del gobierno revolucionario del MAS, advertencias y amenazas públicas a los opositores del gobierno, sean personas, partidos políticos, medios de comunicación o activistas. En los últimos años del gobierno de Morales, la relación con los militares fue más estrecha, hasta el grado de exaltar el carácter caudillista del mandatario, cuya expresión más llamativa fue la composición de la “Marcha Evo Morales”²¹ y su entonación pública durante los desfiles y actos militares.

Personal militar y gasto per cápita

La información pública sobre el tamaño del personal militar es escasa y ello se debería a motivos de seguridad nacional. Los organismos internacionales como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) de Londres estiman que las fuerzas militares bolivianas están integradas por unos 40 mil efectivos armados y 30 mil como personal militar no armado²². Hacia el año 2006, los efectivos armados estaban en torno a 32 mil miembros, por lo que se puede inferir que el crecimiento anual estaría en torno a 500 nuevos miembros (entre 1% a 2% anual).

Según los datos publicados por Banco Mundial, basados en los reportes de IIEE²³, para el 2006, el personal militar (armado y no armado) de Bolivia sumaba 83 mil personas, habiendo escalado rápidamente de 70 mil miembros registrados el 2005²⁴. Se mantuvo en el mismo nivel hasta el 2013 y el 2014 descendió a 71 mil miembros, lo cual no varió hasta el último reporte disponible (2020).

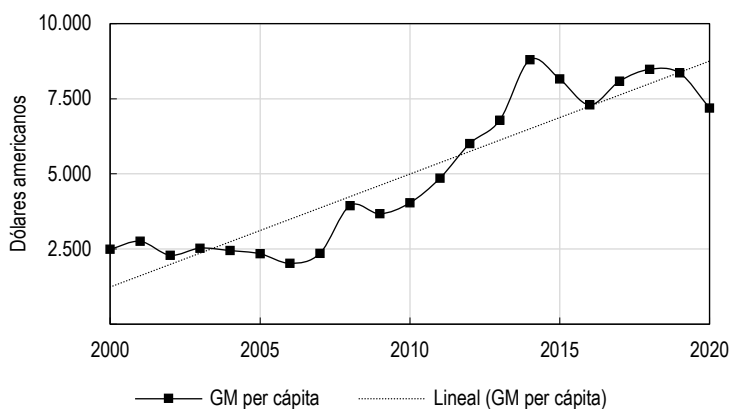
Una conclusión preliminar a la luz de estos datos es que el personal militar creció muy por debajo del crecimiento presupuestario. Mientras el presupuesto militar aumentó en 282% entre el 2005 y 2014, el personal militar creció en 18,5% en el mismo periodo. Teniendo en cuenta que los efectivos armados crecieron entre 1% a 2% anual, se entiende que el aumento de la población militar se debe a un mayor número de personal no armado, es decir, personal civil encargado de asuntos administrativos, técnicos, logística y similares. Además, el número de miembros retornó desde el 2014 a su situación anterior a la bonanza, manteniéndose en alrededor de 70 mil miembros.

Cruzando los datos presupuestarios y de personal, podemos obtener el gasto militar per cápita, que creció de 2.023 dólares per cápita del 2006 a 8.790 dólares para el año 2014. Es el punto más alto porque en los años posteriores bajó levemente para situarse en promedio en torno a 7.900 dólares per cápita por año. Está claro que el aumento del gasto militar no se debió al crecimiento de la población militar.

Entonces, ¿en qué se gastó el presupuesto militar? Para responder apropiadamente, es importante tener en cuenta un antecedente de relevancia. Antes de la bonanza del gas natural,

aproximadamente el 75% del presupuesto militar estaba destinado a sueldos y salarios del personal y el resto se distribuía entre gastos de transporte, servicios y otros. Esto significa que había muy poco margen para la modernización y mejoramiento de la logística militar. En consecuencia, el aumento sustancial del presupuesto significó una oportunidad sin precedentes para el mejoramiento de la infraestructura militar y dotación de equipamiento militar. Esto podemos constatar en los recursos públicos que se destinaron para la ampliación, refacción y remodelación de infraestructuras militares, entre viviendas, bloques de instrucción castrense y escuelas militares. También el gobierno implementó tecnologías nuevas como el Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA) e invirtió fondos públicos para capitalizar empresas militares como la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA)²⁵.

GRÁFICO 13. BOLIVIA: GASTO MILITAR PER CÁPITA, AÑO 2000-2020



FUENTE: Elaborado con base en datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 2000-2020.

Sin embargo, una parte del presupuesto militar también se destinó para gastos en personal. En un inicio, el incremento salarial del personal militar benefició de forma inversamente proporcional a los suboficiales y sargentos. En 2009, el aumento salarial para los militares de alto rango alcanzó un 4%, mientras que los sueldos de militares de baja graduación subieron un 26%.

En adelante, el personal militar fue beneficiario tanto de las disposiciones gubernamentales de mejoras salariales obligatorias como de negociaciones alcanzadas mediante acuerdos específicos.

El privilegio económico más llamativo está en la disposición legal que ordena la jubilación de los militares con el 100% de su salario, lo que contrasta radicalmente con las rentas de jubilación del resto de los trabajadores bolivianos aportantes al fondo de jubilación que, en muchos casos, sus rentas no sobrepasan el 30% del salario ganado. Para conseguir este privilegio diferenciado, los militares de las Fuerzas Armadas se valieron de la Ley de Pensiones y Jubilaciones de 1937, que establece una escala para la jubilación que llega al 100% del salario para los castrenses con 30 años de servicio continuo o 35 años en caso de servicio discontinuo; y un mínimo de 50% para aquellos uniformados con 15 años continuos o 20 discontinuos. Adicionalmente, los militares consolidaron varios otros beneficios y bonificaciones como la bonificación de responsabilidad para oficiales de alto rango, bonificación por peligrosidad para militares que operan en áreas de conflicto o en situaciones peligrosas, asignación familiar que varía según el número de dependientes, entre otros.

EFFECTO CENSURA

Primero, debemos explicar por qué proponemos que se debe prescindir del “efecto modernización” e incorporar en su lugar el “efecto censura”. La idea original de Ross asume que la renta degrada la política cuando la especialización ocupacional no se materializa, la urbanización no aumenta y cuando los niveles educativos no mejoran. Lo contrario significaría que tienen lugar cambios sociales y culturales positivos y favorables para la gestación y crecimiento de gobiernos democráticos. Este planteamiento ha sido cuestionado y puesta en duda por varios estudiosos, hasta el punto que, unos años después, el propio autor reexamina su influyente estudio y admite la existencia de inconsistencias²⁶. Es más, sus resultados revisados sugieren que, en realidad, el Estado rentista puede llegar a mejorar la educación, la salud y otros servicios sociales, debido a que dispone de ingresos altos para subsidiar, pero estas mejoras no conducirán necesariamente hacia la democracia, sino

que pueden coexistir con las fuerzas antidemocráticas que restringen las libertades políticas.

El “efecto censura” que proponemos no tiene una formulación teórica o matemáticamente formalizada. La idea es presentar un ejercicio analítico inicial sobre las probables correlaciones entre la renta y la censura política, entendida esta última como la restricción deliberada de la libertad de expresión por razones políticas, que incluye restricciones para el acceso a la información o represalias en contra de las expresiones de opinión susceptibles de afectar al régimen político. En mayor o menor medida, la censura se practica en todo tipo de gobierno, pero el rentismo tiene potencial para empeorar la censura o las restricciones a la libertad de expresión.

Algunos indicadores que planteados para entender este asunto son:

1. Control estatal de los medios de comunicación
2. Procesos judiciales en contra de políticos de oposición (presos políticos), periodistas y activistas
3. Acceso a información pública

Control de medios de comunicación

En cuanto al control estatal de los medios, existen muchas evidencias objetivamente verificables sobre cómo la bonanza de la renta ha sido utilizada para ejercer mayor control gubernamental de los medios de comunicación. Las formas han sido variadas, desde la compra directa de los medios privados por parte del Estado, pasando por la creación de nuevos medios de comunicación, hasta el financiamiento discrecional de medios privados bajo la figura de publicidad gubernamental. En 2014, un periodista publicó un libro que daba cuenta de la existencia de una red de medios “paraestatales”, conformada por el gobierno para restringir la libertad de prensa, atacar a los periodistas y a medios independientes²⁷. Devela la estrategia de cooperación que se instauró entre varios medios privados que sin llegar a formar parte de la administración pública funcionaban con financiamiento consignado en las cuentas nacionales como gastos de publicidad.

En efecto, los gastos en publicidad gubernamental crecieron vertiginosamente durante el periodo de auge. En 2020, se reveló que, en nueve años, entre 2011 y 2019, los gastos destinados a la publicidad del Viceministerio de Comunicación totalizaban 246 millones de dólares. Para tener una idea, en 2017, el gasto publicitario televisivo estaba cifrada en 33,5 millones de dólares; 3,3 millones para la prensa escrita y 1,1 millones para la radio²⁸. Otra información de importancia es el crecimiento del canal estatal Bolivia TV, cuyo patrimonio aumentó desde 13 millones de dólares del 2008 hasta alcanzar 73 millones de dólares para el 2014. En 2008 recibía un financiamiento estatal de 15 millones de dólares anuales y en 2014 aumentó hasta alcanzar a 50 millones anuales. El efecto multiplicador de estos recursos se puede observar en la multiplicación de los trabajadores de los medios estatales y “paraestatales”, los incrementos salariales, cientos de radios comunitarias de alcance local integrados en la red de medios más extensa del país o en miles de consultores en línea contratados para manejar las redes sociales pro-gubernamentales.

Los llamados “guerreros digitales” fueron creados abiertamente por el MAS con el objetivo de defender al gobierno en las redes sociales. El 2016, se graduaron 80 ciberactivistas mediante cursos financiados con dinero público. Más tarde, el gobierno reclutó otros 500 activistas para la creación de miles de páginas, perfiles, grupos y contenidos digitales. Durante los conflictos políticos del 2020, se detectó que una parte de estos grupos operaba desde Argentina. Parcialmente, en 2023 se hizo pública la manera en que operaban estas redes. Meta procedió a eliminar 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas en Instagram. El informe de la plataforma global señala que los grupos identificados incurrieron tanto en comportamientos inauténticos coordinados como en reportes masivos (o reporte abusivo coordinado) en apoyo al gobierno boliviano y para criticar e intentar silenciar a los opositores políticos. Identificó más 2,3 millones de cuentas que seguían una o más de las páginas sancionadas y un gasto aproximado de 1,1 millones de dólares en anuncios de Facebook e Instagram, pagados mayormente desde cuentas bancarias en moneda nacional²⁹.

Todo esto hace evidente que el rentismo guarda una relación directa con el aumento del gasto gubernamental destinado al control de los medios de comunicación. Esta experiencia boliviana tiene paralelismos con lo sucedido en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y la experiencia venezolana desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Sin embargo, también habría que hacer notar que la presencia influyente del gobierno coincidió con una época de grandes cambios en tecnologías de información que afectaron negativamente a los medios tradicionales. La prensa escrita tiene grandes dificultades para seguir imprimiendo en papel los periódicos, no solo en Bolivia sino en todo el mundo. La televisión tradicional está perdiendo audiencia como nunca debido a los avances arrolladores del *streaming* digital o las nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales. Consciente de estos cambios, el gobierno comenzó a destinar más recursos para los medios digitales y redes sociales, aunque sin haber alcanzado los resultados que obtuvo en cuanto al control político de los canales de televisión, la prensa escrita, la radio y otros medios tradicionales.

Sobre la persecución judicial de las voces críticas y políticos de oposición, solo se pueden perfilar algunas consideraciones preliminares, fundamentalmente, debido a la ausencia de datos o indicadores específicos. Además, la información cuantitativa y cualitativa disponible sigue siendo objeto de polémicas y debates acalorados porque no están libres de sesgos políticos. Incluso, los informes internacionales de derechos humanos tienen contradicciones y, más de una vez, fueron desestimadas tanto por parte del gobierno como por las organizaciones de la sociedad civil.

Existe un punto de partida que goza de amplio consenso nacional. Esto es, la crisis de la justicia en Bolivia. No solo el gobierno, los opositores, la sociedad civil, sino que algunas autoridades judiciales están de acuerdo en que la crisis de la justicia tocó fondo y no existen señales de salida. Un hecho extremo fue la “auto-prórroga” de los magistrados de los tribunales de justicia del más alto rango, quienes legalmente concluyeron su mandato en diciembre de 2023³⁰. El gobierno de Arce incumplió su mandato constitucional de organizar y realizar las elecciones judiciales para nombrar oportunamente a las nuevas autoridades del poder judicial. El gobierno no es consistente con su crítica a la justicia por

los actos de corrupción, por la retardación de la justicia, por los consorcios de jueces y abogados que defienden a los delincuentes o narcotraficantes. No acepta explícitamente que la justicia está al servicio de la clase gobernante, pero la auto-prórroga consentida desmiente a las autoridades políticas. La división interna del MAS evidenció que los jueces y magistrados no tienen inconvenientes para cambiar de parecer, pasando de la aceptación de la reelección de Evo Morales al rechazo de esa posibilidad.

Judicialización de la política

Aunque el control gubernamental del poder judicial sigue siendo un tema por demás polémico y complejo, la principal corriente de opinión pública es que la justicia está sometida a las decisiones políticas del gobierno nacional, tanto durante el gobierno de Morales, en el corto periodo del gobierno transitorio, como en la era del gobierno de Arce. El principal objetivo político es evitar el surgimiento y crecimiento de líderes políticos y movimientos políticos con potencial para convertirse en rivales político-electorales. Las amenazas públicas de enjuiciamiento, los actos de intimidación y los procesos legales abiertos están entre los principales mecanismos utilizados por el gobierno para disuadir la participación política de los políticos de oposición o el ejercicio de la crítica de parte de periodistas y activistas.

El número de presos políticos varía bastante según fuentes y afiliación política. Los medios de comunicación manejan cifras que varían en un rango de 200 a 300 personas recluidas por motivos políticos. Por ejemplo, los reportes de *Global Human Rights League* (GRHL)³¹ señalan que existirían 200 presos políticos identificados con nombres y apellidos, pero se debe tener en cuenta que esta organización tiene vínculos con los políticos de oposición del gobierno de Bolivia y Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció con cautela cuando visitó Bolivia en 2023, luego de contactarse con “personas que se autoidentificaron como presos políticos”. En su informe del 2022, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán declaró que “los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data, aún no han sido erradicados”³².

Para valorar si una detención tiene motivaciones políticas, pueden resultar de utilidad los siguientes indicadores:

1. Si la detención ha sido impuesta en violación de la libertad de pensamiento.
2. Si la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito del presunto responsable.
3. Si la detención es discriminatoria en comparación con otros hechos o delitos similares.

Los casos de detención más conocidos son cuatro: i) el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; ii) la expresidenta Jeanine Áñez; iii) el dirigente cocalero de los Yungas, César Apaza; iv) el exdirigente cívico, Marco Pumari. Excepto el dirigente cocalero, los otros tres fueron candidatos en las elecciones generales del 2019. Las acusaciones giran en torno a varios hechos que dan lugar a múltiples procesos judiciales que en combinación alargan los periodos de detención preventiva. Un elemento en común entre estos casos es el supuesto “Golpe de Estado” que habría ocasionado o derivado en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. El exgobernador de Santa Cruz, a un año de su detención, ha sido imputado por al menos 22 delitos relacionados con el “Golpe de Estado”, el paro cruceño de 36 días y otros hechos relacionados con su gestión en la Gobernación. Áñez fue condenada a 10 años de reclusión por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y la Procuraduría General del Estado la acusa de haber cometido delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Apaza fue sentenciado a tres años de cárcel por la quema del mercado paralelo de la coca, ocurrida en 2022 durante enfrentamientos entre cocaleros yungueños disidentes y afines al gobierno. Pumari fue imputado por los delitos de terrorismo en grado de complicidad, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa dentro del caso “Golpe de Estado”³³. A juzgar por los hechos y según las premisas señaladas, estos casos están motivados por decisiones políticas encausadas por la vía judicial.

Recientemente, el gobierno ha puesto en escena una nueva narrativa para contrarrestar las acusaciones de judicialización de la política. La estrategia es hablar de “políticos presos” y no de “presos políticos”. Aunque parece un juego de palabra, tienen significados distintos. Los “políticos presos” son personas dedicadas a la política que resultaron encarceladas por razones o delitos ajenos a su labor política. El argumento del gobierno es que se trata de políticos que se encuentran con detención preventiva porque cometieron delitos comunes. Esta afirmación no está alejada de la verdad porque, al final de cuentas, todos los políticos cometieron y cometen delitos comunes, pero lo que los convierte en “presos políticos” es la desproporción entre el delito y la severidad del enjuiciamiento.

Acceso a la información

En papel, Bolivia tiene políticas y normativas casi inmejorables de transparencia y acceso a la información de interés público. Junto con las organizaciones sociales, el gobierno dispuso la rendición pública de cuentas que deben llevar a cabo todas las entidades públicas tanto al inicio de gestión como a la finalización de la misma. Las normativas vigentes incluyen otros mecanismos como las peticiones de informes orales y escritos por parte de los parlamentarios interesados en la fiscalización del sector público.

La principal dificultad no está tanto en el funcionamiento de estos y otros mecanismos de acceso a la información, sino, fundamentalmente, en la calidad y veracidad de la información gubernamental. Por ejemplo, los reportes o memorias anuales de los ministerios son irregulares e incompletos en cuanto a contenidos. Mucha gente duda sobre la calidad y confiabilidad de las estadísticas económicas de las cuentas nacionales o sobre las proyecciones presupuestarias del sector público. Con frecuencia, las autoridades políticas emiten reportes de tasas de desempleo que no superarían el 5%, cifra que se asemeja a los registros de economías avanzadas como los países europeos, pero obviamente no refleja la realidad del mercado laboral de Bolivia. Esto es así porque las metodologías del INE³⁴ consideran como persona empleada a cualquiera que haya declarado que trabajó al menos una hora a la semana.

Otro problema con el acceso a la información es la manipulación política. Según el gobierno, el crecimiento negativo del 8,7% del PIB del año 2020 no fue a causa del Covid-19, sino por culpa del gobierno transitorio. Las memorias del Ministerio de Economía, del BCB y de varias otras entidades públicas están repletas de diagnósticos económicos que sostienen esta tesis políticamente conveniente. La recuperación económica, pasada la emergencia sanitaria, fue presentada como un logro del gobierno de Arce y no como un hecho económico generalizado en América Latina y el mundo. Las explicaciones gubernamentales de las relaciones de causa-efecto tiene implicaciones de consideración en el campo económico porque ocultan la gravedad de los problemas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, el gobierno sostiene que la persistente escasez de diésel y dólares se debe a la especulación, desinformación o al sabotaje de los políticos de oposición, cuando la realidad es la insostenibilidad de la subvención a los combustibles y el declive del ciclo alto de exportaciones de gas natural.

Finalmente, la rendición pública de cuentas del sector público se convirtió en otra formalidad que, en el mejor de los casos, consiste en presentar información general en formato de documentos de diapositivas. Los asistentes a las audiencias públicas son celosamente seleccionados para la rendición de cuentas y los actos públicos están organizados de modo tal que no existe chance para preguntas, comentarios o réplicas de parte del público. Los representantes de las organizaciones sociales fungen la labor de representantes de la sociedad civil para la firma de las actas de constancia de la actividad informativa. La información fluye de forma unidireccional, al igual que en las conferencias de prensa que ofrecen las autoridades para comunicar verticalmente, pero no para interactuar con los periodistas.

CASO ILUSTRATIVO: EL FONDO INDÍGENA

El millonario desfalco del Fondo Indígena explotó en febrero de 2015, cuando la Contraloría reveló un daño económico al Estado que ascendía, preliminarmente, a 10,2 millones de dólares por proyectos aprobados y ejecutados irregularmente y por el financiamiento de los llamados “proyectos fantasmas”. Este hecho llamó la atención del público porque, además de su

trascendencia económica, los acusados eran nada menos que los principales líderes de las organizaciones y movimientos sociales del sector rural de todo el país. Entre los acusados, estaban prácticamente todas las organizaciones del nivel nacional que se habían conglomerado bajo la figura de “Pacto de Unidad” para respaldar política e ideológicamente al MAS durante la Asamblea Constituyente que refundó Bolivia como un Estado Plurinacional.

Esta historia tiene su origen en diciembre de 2005, cuando el entonces presidente Eduardo Rodríguez firmó uno de los últimos decretos de su gobierno para la creación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC)³⁵. La norma dispone la transferencia periódica del 5% del total de las recaudaciones del IDH para el mencionado fondo. Las estimaciones iniciales giraban en torno a 20 a 30 millones de dólares anuales, teniendo en consideración los volúmenes de exportación de gas natural y los precios internacionales, pero pronto el panorama se tornó enormemente favorable para las recaudaciones del Fondo Indígena. En los primeros dos años, 2006 y 2007, el dinero destinado al Fondo se acumuló rápidamente, llegando a un total de 108 millones de dólares. Pero el Fondo Indígena no funcionó en ese periodo y su implementación arrancó recién a inicios de 2009.

Según el decreto de creación, las decisiones del Fondo dependían del Directorio presidido por un ministro de Estado, e integrado por representantes de ministerios afines y 12 representantes de diferentes organizaciones campesinas, indígenas y originarias. En 2009, en los hechos, el Directorio tuvo una configuración algo diferente. El órgano decisorio estaba presidido por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, de ese entonces, Nemesia Achacollo, junto con los ministros de Economía (Luis Arce), Presidencia (Juan Ramón Quintana), Planificación del Desarrollo (René Orellana) y Desarrollo Productivo (Verónica Ramos). En representación de los sectores sociales estaban representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), de la Federación Nacional

de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS), de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPSC) y de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).

Las irregularidades del Fondo Indígena se produjeron en el periodo 2009-2014, esto es, una vez que entró en funcionamiento con la conformación del Directorio y hasta la alerta de la Contraloría en febrero de 2015. Según algunas investigaciones sobre el tema, las recaudaciones del Fondo sumaban 460 millones de dólares hasta finales del 2014. Durante los seis años de funcionamiento, el Directorio habría aprobado 3.177 proyectos, de los cuales 1.100 recibieron desembolsos totales y parciales para su implementación. El presupuesto aprobado para los proyectos giraba en torno a 157 millones de dólares, de los que se habría desembolsado 104 millones de dólares, quedando un saldo sin transferir de 52 millones³⁶.

La principal irregularidad estaba en que los desembolsos se realizaron a cuentas particulares o personales de los representantes de los proyectos aprobados. El traspaso del dinero público a cuentas particulares está prohibido por la Constitución, la Ley 1178 y el propio decreto de creación del Fondo Indígena. Un reporte de auditoría del Fondo de mayo de 2015 develó que se depositaron 98,4 millones de dólares a 978 cuentas particulares de representantes de proyectos, autoridades y dirigentes de organizaciones sociales, y solamente 8,6 millones se habrían depositado a cuentas bancarias abiertas específicamente a nombre de los proyectos aprobados. En promedio, cada cuenta bancaria personal recibió un depósito de más de 100 mil dólares. A esta irregularidad cabe agregar que la administración de los recursos del Fondo no estaba bajo el control de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)³⁷, lo que significa que existía una libertad administrativa y “flexibilidad” máxima para el uso de los recursos públicos.

Desde el 2015, la investigación se concentró en procesos legales en un intento por sancionar a los culpables y reparar el daño económico. Los primeros detenidos por la justicia fueron Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, ambos exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena. Aramayo declaró a la prensa en reiteradas ocasiones que él inició las investigaciones varios meses antes de la intervención de la Contraloría y que advirtió oportunamente

de las irregularidades a la ministra Achacollo y otras autoridades. Acusó al gobierno de Evo Morales y a sus ministros de estar por detrás del desfalco y, en represalia, sufrió las peores consecuencias carcelarias y judiciales por siete años. Fue el único procesado con sentencia por corrupción en ese caso. En total, las autoridades judiciales abrieron 256 procesos legales en su contra y durante su privación de libertad fue trasladado a 57 distintas cárceles y carceletas. Murió en la cárcel después de siete años de privación de libertad.

Durante el proceso legal, varias autoridades del gobierno fueron procesados con detención preventiva, incluyendo a la exministra de Desarrollo Rural y exdirigente de las Bartolinas, Julia Ramos, y la exministra Nemesia Achacollo. Felipa Huanca, ejecutiva de CNMCIOB “BS”, también fue detenida luego de prestar su declaración informativa en 2015. Entre otros acusados figuran Rodolfo Machaca, ejecutivo de la CSUTCB; Juanita Ancieta (CNMCIOB “BS”); Gustavo Aliaga (CSCIB), Melva Hurtado (CIDOB), Hilarión Mamani (CONAMAQ), entre otros. Presionados por las circunstancias, varios de los inculcados devolvieron el dinero. El exdirigente campesino, Damián Condori, devolvió la suma de 92 mil dólares que los dirigentes del oficialismo le habrían planteado usar ese dinero en la campaña política. Juanita Ancieta devolvió 718 mil dólares, aunque un informe del 2015 revela que recibió un monto mayor: 1,3 millones de dólares. Jorge Choque, de la dirigencia de campesinos de La Paz, habría recibido más de un millón de dólares para proyectos inconclusos de producción de forrajes en Sica Sica, Collana y Ayo Ayo. Melva Hurtado, de la CIDOB estuvo en la cárcel entre 2015 y 2017 por estar acusada de recibir más de 3 millones de dólares en dos cuentas personales. Y la lista continúa.

Según un informe preliminar de la intervención del Fondo Indígena, el daño económico superaría 14,6 millones de dólares y se habría detectado 30 “proyectos fantasmas” que representan 2 millones de dólares. Hasta el 2019, según la versión gubernamental, el dinero recuperado habría alcanzado 3,2 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras difieren demasiado, por ejemplo, con respecto a una publicación de Fundación Pazos Kanki³⁸ que afirma que el daño económico alcanzó 182,7 millones de dólares, en 1.032 proyectos, y que

solo se recuperaron 1,4 millones. Otro informe parlamentario consignó que el desvío de fondos sumó 78,3 millones de dólares en proyectos aprobados entre los años 2009 y 2016.

Este caso de corrupción, al margen de las interrogantes que deja sobre la verdadera magnitud del daño económico al Estado o el real alcance de la intromisión política para proteger a los culpables, expone la manera en que opera el “efecto rentista” en la práctica. Hemos visto que la renta del gas ha sido utilitaria para la cooptación política y deslegitimación de los movimientos sociales, habiéndose corroído tempranamente cualquier posibilidad de control social del Estado rentista como sería la rendición pública de cuentas. La dirigencia indígena y campesina se corrompió y cayó rápidamente en la lógica de despilfarro del dinero público, con el argumento de financiar proyectos productivos para la reactivación económica de la pequeña agricultura y de las comunidades indígenas. Aunque la demanda de apoyo productivo de la gente del campo está más que justificada, los proyectos no ofrecían ninguna oportunidad realista más allá de pequeños suministros y acciones puntuales: donación de semillas, entrega de ganado, realización de ferias comunitarias, equipamiento de pequeños centros de procesamiento o capacitaciones puntuales o funcionalizadas a los eventos político-electorales.

Para cerrar el caso del Fondo Indígena, no sería desatinado decir que el protagonismo político del campesinado y pueblos indígenas sufrió una interrupción prematura y no rindió los frutos esperados para la integración nacional. En adelante, la dirigencia campesina e indígena perdió toda capacidad y legitimidad para interpelar al poder político o para actuar como una fuerza social de contrapeso para cuestionar la creciente subordinación de los derechos de la Madre Tierra a los intereses de la economía rentista. En los últimos años, la dirigencia cooptada por el partido gobernante se fracturó aún más, entre quienes optaron por mantenerse leales a la facción gobernante del MAS y la facción que se inclinó por respaldar el proyecto electoral de Evo Morales.

CIERRE

Así como la expresión económica de la maldición de los recursos naturales es el atraso de Bolivia, la expresión política serían los comportamientos rentistas de los políticos y la degradación del sistema político en su conjunto. El gobierno del MAS se convirtió en un gobierno rentista desde el momento en que usó el dinero de los recursos naturales para alimentar su poder político y permanecer en el poder más allá de los límites constitucionales.

Las características y hechos específicos que hemos identificado en este capítulo son: i) La renta fue utilizada por el gobierno para gastos económicamente ineficientes, pero políticamente estratégicos para retener el control sobre el aparato estatal y los fondos públicos; ii) La preservación de los privilegios tributarios y la adjudicación de obras públicas sirvieron para estrechar las alianzas y relaciones clientelares entre el poder político controlado por el MAS y grupos de poder económico, dejando en un segundo plano la viabilidad y eficiencia económica de las inversiones; iii) Los gastos públicos fueron utilitarios para la cooptación de las poblaciones vulnerables; iv) Aunque el presupuesto militar creció a la par de la expansión del gasto público, no aumentó significativamente la población militar y su papel de represión de la población civil, sino las relaciones clientelares expresadas en beneficios concretos como la renta de jubilación con el 100% del salario castrense; v) El uso discrecional de la renta acrecentó el poder de censura política del gobierno nacional, controlando los medios de comunicación no alineados a los intereses gubernamentales, mediante injerencias abiertas en el órgano judicial para detener a opositores políticos o limitando el acceso a la información pública.

Por último, el caso del Fondo Indígena ilustra el efecto perverso y destructivo del rentismo estatal. Las organizaciones sociales de extracción campesina e indígena han sido el resultado de las luchas históricas de las mayorías excluidas y discriminadas del país, cuyo proyecto político era la transformación estructural del Estado. La llegada al poder de las organizaciones coincidió con un momento económico extraordinario. Probablemente, sería otra la historia sin este último elemento porque, si bien en un inicio la participación política de los sectores campesinos,

indígenas y populares giró en torno a las agendas históricas hasta la aprobación de la Constitución en 2009, sus líderes y dirigencias abandonaron paulatinamente los mandatos populares, para formar parte de la pelea por el acceso y control del rentismo estatal. Son los responsables directos del dinero del Fondo Indígena que fue trasferido a cuentas bancarias personales para “proyectos fantasmas”, actividades políticas y obras sin diseño técnico ni estudios de viabilidad económica. La clase dirigencial se corrompió, las tensiones internas se transformaron en disputas y divisiones abiertas y, en última instancia, los implicados acabaron deslegitimando las luchas históricas de la mayoría boliviana.

6

BALANCE: RENTISMO Y ATRASO COMO FENÓMENOS PERSISTENTES

PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO

La maldición de los recursos naturales —entendida como crecimiento económico lento a pesar de ciclos o periodos de auge o bonanza rentista— ha capturado la atención de muchos estudiosos de las teorías del desarrollo y todavía sigue siendo motivo de grandes debates y nuevos estudios en diferentes partes del mundo. Una polémica, más o menos superada, es la que giraba en torno a si la maldición es un fenómeno de alcance universal o generalizado; es decir, si es una ley económica de la que no pueden escapar los países con abundancia de recursos. El debate está ganando terreno en el sentido de que, si bien la renta de los recursos naturales tiene un peso explicativo importante, existen otros factores históricos, económicos y políticos que, en mayor o menor medida, condicionan el camino y el ritmo de desarrollo de los países ricos en riqueza natural.

En el caso que nos ocupa, Bolivia, existen suficientes elementos para concluir que la maldición de los recursos naturales es un mal enraizado en nuestra historia y tiene una presencia persistente y recurrente. Como tal, tiene estrecha relación con el fenómeno del rentismo y el atraso económico. Por supuesto que esta no es la única manera de interpretar el desempeño económico boliviano y, probablemente, ni la principal, pero ofrece un esquema analítico coherente y consistente.

En los capítulos 4 y 5, hemos expuesto dos facetas importantes de la maldición boliviana: la económica y la política. La primera sirvió para constatar la perseverante presencia de la elevada dependencia de las exportaciones de recursos naturales. Más del 95% de lo que exportamos es riqueza natural extraída.

Esta dependencia, casi absoluta, está íntimamente asociada al crecimiento lento en el mediano y largo plazo. Los momentos de auge obviamente aceleran e incrementan el crecimiento económico de corto plazo, pero, a la larga, este cambio se diluye y pierde relevancia. También hemos visto que Bolivia es una tierra fértil para la “enfermedad holandesa”; esto significa que los tiempos de bonanza rentista estancan, deprimen y atroflan las capacidades productivas de los sectores no rentistas. En general, los ingresos extraordinarios acabaron consolidando un sistema económico que sigue premiando a las actividades rentistas o extractivas y castigando a las actividades de manufacturas e industriales. Se puede encontrar una expresión concreta de este comportamiento económico en el hecho de cómo la renta del gas natural reforzó el crecimiento de la agricultura de monocultivos, pero resultó inútil, por ejemplo, para rescatar a Enatex, la empresa textilera más grande que hubo en el país y que, en su mejor momento, generó fuentes de empleo directo para más de cuatro mil trabajadores.

También hemos abordado la faceta política desde una perspectiva económica. En suma, hemos confirmado que la renta del gas natural o la renta petrolera controlada por el Estado, ha ejercido una influencia negativa sobre el desempeño de la política en general y sobre la calidad de las medidas económicas, en particular. Una vez que la renta se multiplicó, el gobierno de Morales no supo encarar las tareas de reformar los regímenes tributarios del sector rentista, fundamentalmente de la agricultura sojera y la minería del oro. Si bien renegó con las empresas petroleras en un inicio y ejerció mayor presión tributaria sobre la economía formalizada, adoptó el típico comportamiento rentista al no tocar los privilegios tributarios del poder rentista. El gobierno se comportó como un nuevo rico que no tiene necesidad ni incentivos económicos para cobrar las deudas a los amigos; al contrario, optó por gastar a manos llenas para aumentar su popularidad. La bonanza, que resultó pasajera, reforzó un fenómeno político bastante común en la historia latinoamericana: el “populismo autoritario” conducido por liderazgos mesiánicos que destruyen los pesos y contrapesos de la democracia y erosionan por igual tanto instituciones económicas como instituciones políticas.

Hecha esta recapitulación, es tiempo de hacer un balance, extraer conclusiones y alimentar la reflexión crítica, retomando los principales elementos de discusión. La intención es avanzar en la interpretación de las temáticas abordadas, los datos y las cifras presentadas y los resultados parciales. También está la idea de proponer algunos elementos de discusión amplia para así animar el diálogo con y entre los lectores.

CUANDO LA HISTORIA IMPORTA

Desde un inicio, hemos expuesto los temas abordados bajo el supuesto de que la historia económica importa a la hora de hacer balances y reflexiones sobre el estado actual y, sobre todo, cuando tenemos que proponer posibles caminos de salida del empantanamiento económico (tema del siguiente capítulo). Los capítulos 2 y 3 cumplen esta función y constituyen el necesario marco histórico. Nos proporciona un entendimiento general sobre los patrones y las tendencias de comportamiento que moldearon nuestra economía, los ciclos económicos que afectaron negativa y positivamente, las instituciones económicas y estructuras de poder. Qué duda cabe de que la historia es una valiosa fuente de aprendizaje de lecciones sobre los éxitos y fracasos económicos, y así eventualmente corregir los errores en el venidero.

La mirada retrospectiva nos recuerda y reconfirma que la maldición de los recursos naturales no es un fenómeno económico (y político) reciente o atribuible únicamente al último ciclo marcado por el auge y caída del gas natural. Excepto los momentos puntuales de auge por factores externos (por ejemplo, en 1968 el PIB creció 8,5%)¹, la economía nacional mayormente mantuvo un ritmo de crecimiento lento e invariablemente dependiente de los recursos naturales exportables. Durante el siglo XX, la historia boliviana giró en torno al estaño. El metal del diablo jugó un papel crucial para configurar la composición de las exportaciones, importaciones, relaciones y políticas comerciales con los demás países de la región y el mundo. Tanto el liberalismo económico de la primera mitad del siglo pasado como el nacionalismo económico posterior variaron únicamente en cuanto a quién tiene el control sobre los recursos naturales, pero no en cuanto a la dependencia de su explotación.

La llamada teoría centro-periferia se encargó de proporcionar una de las explicaciones más conocidas e influyentes en el pensamiento latinoamericano. Identificó nuestra condición de país subordinado y periférico en el mapa mundial como una causa de fondo del subdesarrollo. Esta forma de concebir nuestro lugar en la economía global ha sido fundamental para la formación de corrientes de pensamiento crítico frente al dominio de las fuerzas externas, pero también nos hizo perder de vista la necesidad de mirarnos con ojos autocríticos hacia adentro, a la hora de confrontar los problemas y desafíos nacionales.

Otra explicación no menor que se ensayó en el país es nuestra condición de país mediterráneo. Existen estudios al respecto que incluso llegaron a cuantificar y calcular en números, por ejemplo, cuánto pierde Bolivia como porcentaje del PIB al no tener acceso soberano al mar. Aunque la mediterraneidad es efectivamente una limitante, sería bastante problemático sostener con argumentos consistentes que Bolivia pierde hasta un 2% del PIB por año a causa de no tener acceso directo a los puertos de exportación en el océano Pacífico².

El estaño engendró uno de los cambios, sino el principal, de gran trascendencia para Bolivia. El Plan Bohan había advertido tempranamente de la necesidad estratégica de reinvertir el rentismo del estaño para diversificar y aumentar la producción nacional de alimentos e integrar el occidente y el oriente para el aprovechamiento de la riqueza natural de las tierras bajas. Una versión acortada al sector agropecuario de este plan, conocido como la Marcha al Oriente, se implementó en la segunda mitad del siglo XX para fomentar la agricultura comercial o capitalista en el oriente y crear nuevos asentamientos humanos para los campesinos pobres de la zona andina. Estas intenciones coincidieron sin proponérselo con las propuestas de los críticos de la teoría centro-periferia de industrializar para sustituir las exportaciones expoliadoras. En otras palabras, hubo un consenso de facto para construir de la mano del Estado carreteras de integración nacional, infraestructura productiva, fábricas nacionales, manufacturas de textiles, plantas agroindustriales, plantas de transformación y procesamiento de alimentos, entre otros.

En las últimas tres a dos décadas del siglo pasado, el sector de hidrocarburos tomó fuerza a partir de los descubrimientos de

reservas en la frontera entre Bolivia y Argentina, incluso llegó a jugar un papel de mediana importancia cuando se desplomaron las exportaciones mineras. De hecho, los primeros experimentos de exportación del gas natural al país vecino gestaron la posibilidad de desarrollar el potencial gasífero y exportar en el mediano plazo. Después de que el estaño colapsó definitivamente, los gobiernos de la década de 1990 tomaron varias decisiones y aprobaron nuevas políticas económicas con el objetivo de incrementar las reservas probadas y desarrollar los mercados de exportación hacia Brasil y Argentina.

Hernán Siles Zuazo gobernó los últimos tres años de la mono-economía del estaño y del super-Estado minero (1982-1985). Los conflictos políticos y sociales causados por los gobiernos militares obligaron al parlamento a reconocer el triunfo electoral de Siles de dos años atrás, retornar de su exilio y hacerse cargo del país, pero sin una mayoría parlamentaria³. La crisis económica era un hecho a esas alturas y estaba materializada en el crecimiento económico negativo, estancamiento de las exportaciones, insolvencia para el pago de la deuda externa, pérdidas económicas de la minería estatizada, entre otros. La economía de Bolivia estaba quebrada. Aunque Siles discursó ante la multitud que resolvería la crisis en los primeros 100 días de su gobierno, la situación empeoró exponencialmente y la inflación boliviana batió todos los récords. Las medidas económicas adoptadas, como la devaluación del tipo de cambio, la desdolarización y la fijación de precios, fueron inútiles y en última instancia exacerbaron la mutua retroalimentación entre la crisis económica y la crisis política.

Como hemos dado cuenta, el rescate económico llegó con la Nueva Política Económica de Víctor Paz Estenssoro en 1985, pero a cambio los bolivianos hemos pagado un costo social demasiado alto. En especial entre los no economistas, mucha tinta corrió y corre todavía sobre las múltiples consecuencias negativas de las políticas neoliberales implementadas con las medidas de *shock* para el ajuste estructural. Sin embargo, y sin desconocer las legítimas razones del rechazo popular, muchos economistas y no economistas reconocen la importancia y efectividad de las medidas que condujeron a la estabilización de la economía nacional.

Si alguna lección podemos extraer del desenlace de la era del estaño, esta sería que los tiempos de bonanza son malos

consejeros para la toma de decisiones económicas, mientras que los tiempos de crisis obligan a extremar esfuerzos para adoptar medidas económicas más eficaces. Por ejemplo, los años 70, durante el gobierno de Hugo Banzer, destacan en la historia como tiempos de estabilidad y crecimiento, pero el gobierno de ese entonces hizo poco o nada por frenar a tiempo la acumulación silenciosa de las pérdidas económicas de la COMIBOL. La experiencia del gobierno de Siles se puede interpretar como una incapacidad colectiva de reaccionar cuando el estallido de la crisis económica es un hecho. La negativa de la Central Obrera Boliviana (COB) para coger el gobierno con Siles significa que los líderes sindicales tenían pleno conocimiento de la gravedad de los problemas económicos y, a pesar de ello, fueron intransigentes en asfixiar al gobierno con sus demandas sectoriales. Probablemente, el gobierno de Paz Estenssoro, de 1985, representa una de las pocas veces en que aparece fugazmente un “Estado no rentista” que se caracteriza por decisiones económicas que no están subordinadas a la lógica rentista de obtener máximo beneficio sin esforzarse para crear valor.

CUANDO LA HISTORIA SE REPITE

Se puede decir que la llegada al poder de Evo Morales desencadenó emociones y sensaciones intensas de dos tipos y en dos momentos consecutivos. Primero, el MAS encarnó el empoderamiento político más importante de las mayorías sistemáticamente excluidas, llámese poblaciones indígenas, campesinas u originarias. Los primeros cuatro años (2006-2009) fueron excepcionales, al grado que el protagonismo de estas mayorías hizo posible la redacción y adopción de una nueva Constitución Política del Estado. En un segundo momento, gradualmente, el *boom* del gas natural condujo al empoderamiento económico de un gobierno que ya gozaba de una legitimidad política probablemente sin precedentes. Si bien, por un lado, todo esto significaba buenas noticias para el país, por otro lado, como se constataría tiempo después, estas emociones y sensaciones de empoderamiento fueron malos consejeros para la toma de decisiones económicas de mediano y largo plazo.

Precisamente, esto sucedió poco después. En un momento de mayor efervescencia, el gobierno del MAS lanzó un programa decenal (2014-2025) ambicioso para celebrar el Bicentenario de la fundación de Bolivia. Evo Morales y sus colaboradores habían planeado cuidadosamente para que las celebraciones del año 2025 coincidieran con la enésima reelección del mandatario. Morales presentó con amplia cobertura mediática la llamada “Agenda Patriótica 2025”, un plan de desarrollo compuesto por 13 pilares temáticos para construir, según reza el documento oficial, “una Bolivia Digna y Soberana”⁴. Al mismo tiempo, su inmediato colaborador, el vicepresidente Álvaro García Linera, puso en marcha un proyecto editorial denominado “Biblioteca del Bicentenario” con el objetivo de editar y publicar 200 libros representativos de la historia nacional. Un libro por cada año. El Banco Central de Bolivia (BCB) se puso a acuñar varias monedas conmemorativas. El entusiasmo no disminuyó a pesar de la ralentización de la economía. Hacia finales del 2020, cuando el MAS retornó al poder, Luis Arce retomó el programa decenal y promulgó una ley de conformación de un consejo nacional responsable de los preparativos y la celebración del año 2025.

Desde que el MAS se fracturó en dos, el entusiasmo se esfumó, al igual que los logros planeados. El plan aseguraba que Bolivia dejaría de ser dependiente de hidrocarburos y minería, pero nada de esto sucedió. También Morales vaticinaba que el arado egipcio desaparecería de los campos de cultivos y pasaría a ser una pieza de museo, pero miles de campesinos siguen utilizándolo para trabajar la tierra. La promesa de triplicar el ganado vacuno de Bolivia solo sirvió de pretexto para multiplicar los desmontes y empeorar la deforestación de los bosques tropicales. El proyecto editorial de la vicepresidencia alcanzó a publicar cerca de 40 libros, antes de eclipsar definitivamente hacia el 2021. Para finales del 2023, el gobierno de Arce dejó de interesarse por completo en las celebraciones, específicamente desde que la facción Evista del MAS lanzó una campaña electoral con el denominativo “Bicentenario Evo presidente 2025”.

Pero la causa de fondo del abandono de la Agenda Patriótica 2025 y de las celebraciones del Bicentenario es el fin de la bonanza rentista. La nueva realidad que enfrentamos los bolivianos está determinada por grandes dificultades económicas. El MAS no

convirtió el país en la Bolivia soñada en los momentos eufóricos, sino en una que no supo salir del atraso cuando el viento soplaba a favor. Gastó las reservas de oro y divisas para no colapsar de inmediato. Las Reservas Internacionales Netas (RIN)⁵ que superaban 15.123 millones de dólares en 2014, cayeron al 1.709 millón de dólares para el 2023 (1.566 millones en oro y 166 millones en divisas). Si Bolivia fuera una persona, esto es como si el saldo de su caja de ahorro cayera de 5.000 a 565 bolivianos, de los cuales solo 55 bolivianos son en efectivo. La deuda externa, que estaba en torno a 5.736 millones de dólares en 2014, aumentó hasta llegar a 13.588 millones (2023). De nuevo, esto es como si una persona que antes debía al banco 10.000 bolivianos, ahora está endeudada por 23.688 bolivianos.

Un problema fundamental con los momentos de auge repentino es la ausencia de una planificación sólida para administrar y hacer crecer la riqueza. Evitar los gastos excesivos y las inversiones improductivas. La creencia de que la bonanza duraría por mucho tiempo o que la economía del futuro estaba “blindada” fue difundida furiosamente por las autoridades políticas. El sector privado beneficiario de la explotación de los recursos naturales también se alineó al comportamiento rentista. En lugar de aumentar la inversión pública y privada para transitar gradual y decididamente hacia economías sostenibles y viables, la renta reforzó la dependencia del modelo primario-exportador. La dependencia del diésel barato y subvencionado aumentó hasta niveles inconcebibles y se convirtió en la principal cruz que carga a cuestas las finanzas públicas.

Si bien esta historia es, en esencia, la repetición del pasado, tiene algunas particularidades. En lugar de la mono-economía del estaño existen tres sectores clave: el sector de hidrocarburos, el sector agroexportador y el sector minero, mayormente la minería cooperativizada. Estas tres economías rentistas no están únicamente bajo el control estatal, sino que es compartido entre dos grandes actores rentistas: el Estado y el sector privado. Por eso, para profundizar en qué términos la historia se repite y qué hay de nuevo, tenemos que identificar los roles y las responsabilidades tanto del sector estatal (gas natural) como del sector privado (agricultura y minería del oro). ¿Qué grado de responsabilidad tienen cada uno de los sectores en cuanto al

lento crecimiento económico y el desempeño empobrecido de la política? ¿Cuánto influyen en las políticas económicas? Las siguientes dos secciones avanzan en este sentido.

EL ESTADO RENTISTA

A partir del control de la renta petrolera, el gobierno del MAS implementó su programa de gobierno bajo la consigna de que el “Estado tiene que ser todo, planificador, empresario, inversionista, banquero, regulador y productor del desarrollo”⁶. Rápidamente, Bolivia pasó de una época en que prevalecían ideas y reformas para achicar el Estado a una donde ocurriría exactamente lo opuesto. Lo poco que había de institucionalidad económica y política fue despreciada y menoscabada con el argumento de que eran expresiones neoliberales al servicio de élites nacionales y poderes extranjeros.

El intervencionismo estatal en la economía no se limitó solamente al control directo de los sectores estratégicos o monopolios que típicamente están en manos del Estado en América Latina, sino que abarcó una amplia gama de emprendimientos gubernamentales para la creación de alrededor de 40 empresas públicas nuevas con fines productivos. La premisa era simple y clara: usar la renta petrolera para producir sin el concurso del sector privado aquellos bienes o productos que no existían o eran escasos en el mercado nacional. Así aparecieron fábricas de cartones y papel, plantas de industrialización de la hoja de coca, fábricas de cemento, empresas de almendras, palmitos, lácteos, plantas de producción y refinación de azúcar y similares. También el Estado compró Enatex para intentar rescatarla de la quiebra y convertirla en una empresa pública promotora del sector manufacturero. La industria petroquímica fue un componente clave de la industrialización del gas. Es decir, el Estado apostó por expandir y multiplicar las economías no rentistas; es decir, aquellas que sabemos que sufren retrocesos e impactos negativos cuando florecen las economías rentistas.

Como vimos en el anterior capítulo, estas empresas públicas no llegaron a consolidarse o, al menos, no demostraron fehacientemente que tienen viabilidad económica. La mayoría

naufrió porque, al final de cuentas, no hubo un sujeto económico responsable del riesgo de inversión. Las autoridades políticas pusieron al mando de las empresas públicas a allegados y militantes del partido en calidad de gerentes o administradores, cuyos sueldos y salarios no dependían del desempeño productivo de las unidades de producción, y tampoco tenían contratos condicionados, por ejemplo, al logro de determinadas metas en cuanto a implementación, producción, ventas o utilidades de las empresas públicas. Aunque los administradores de los bienes del Estado actuaban como inversionistas y dueños de las empresas, en los hechos estaban liberados de responsabilidades relacionadas con los resultados económicos o financieros.

Dicho de otro modo, las empresas públicas no fueron precisamente la encarnación de “gastos productivos”, sino de “gastos no productivos”, lo que quiere decir que el dinero invertido no contribuyó al aumento de la producción y empleo, por lo tanto, no formó parte de procesos de expansión económica. Una evidencia de lo opuesto sería que la intervención estatal hubiese realmente incentivado el crecimiento de la demanda de los nuevos productos o estimulado inversiones adicionales para más plantas de producción, sean estatales o privadas. En realidad, los recursos invertidos en las empresas públicas pasaron a formar parte de la política de expansión de la demanda o consumo mediante mayor gasto público. El problema es que el efecto combinado de la inversión pública convertida en gasto y baja presencia en el mercado de lo producido por las empresas públicas no fue otra que el incremento de la dependencia nacional de los productos importados.

El intervencionismo estatal en la economía sufrió algunos cambios en los últimos años. La apremiante necesidad de buscar alternativas a la excesiva, y cada vez más costosa, dependencia de combustibles importados incitó al uso del dinero público para la producción de biocombustibles en alianza con el sector privado agroindustrial. La “era de los biocombustibles” fue relanzada como una iniciativa público-privada y estratégica para la industrialización y sustitución de las importaciones. La producción de biocombustibles y la alianza público-privada no estaban contempladas en los planes originales y no tienen líneas de continuidad con las empresas públicas. Como sabemos, el

objetivo apremiante no es la diversificación de la economía, ni la industrialización, sino la urgente necesidad que tiene el Estado para reducir los elevados gastos públicos destinados a la subvención de gasolina y diésel.

En el campo político, habría que preguntarse si el MAS ya tenía inclinaciones mesiánicas, caudillistas o autoritarias antes de llegar al poder en 2006 o estos males políticos han sido una consecuencia de la bonanza maldecida. ¿Hubiera sido otra la historia del aparato estatal si el MAS no hubiera tenido acceso a los abundantes ingresos por la renta de los recursos naturales? Ciertamente, en un inicio, el llamado “gobierno de movimientos sociales” tenía intenciones explícitas para dismantlar la institucionalidad neoliberal y colonial y refundar Bolivia. También ya tenía una estrecha cercanía con el gobierno de Venezuela, lo que influyó para la implementación de programas y planes populistas basados en la renta petrolera, como la creación de medios de comunicación estatales, bonos sociales en dinero en efectivo para las poblaciones pobres o el programa “Bolivia cambia Evo cumple”. Por supuesto que todo esto no hubiera sido posible sin la abundancia de la renta del gas natural.

Lo cierto es que el crecimiento económico basado en el rentismo fue utilizado como una de las principales justificaciones para la reproducción del MAS en el poder más allá de los límites constitucionales. Según el partido gobernante, el MAS había traído consigo estabilidad política y estabilidad económica y, la verdad, pocos podríamos estar en desacuerdo en que, efectivamente, fueron años de estabilidad. La alianza con los movimientos sociales y la presencia protagónica de los pueblos precoloniales contribuyeron a la estabilidad política, pero con el soporte material de la renta de los recursos naturales. La conversión de los dirigentes sociales en burócratas y parlamentarios debilitó los mecanismos de control social y ciudadano, por lo que el clientelismo y la corrupción se esparcieron a lo largo y ancho de todo el aparato estatal y los estratos sociales allegados al mismo. En definitiva, sin que importe mucho si el MAS tuvo inclinaciones autoritarias o prebendales desde un inicio, lo cierto es que el desenlace político fue desastroso para el instrumento político de los pueblos: el caudillismo de Evo Morales fue la cúspide del ascenso del MAS y el principio de su caída.

El retorno del MAS, a finales del 2020, con Luis Arce en lugar de su líder histórico, es un hecho concreto que se presta para testear cuáles son las posibles interconexiones entre un régimen de gobierno y un ciclo de auge o bonanza rentista. Muchos decían en su momento que el régimen autoritario de Morales se debía al carácter antidemocrático de las organizaciones sociales, populares y sindicatos agrarios y, fundamentalmente, a las inclinaciones autocráticas del líder cocalero y sus antecedentes de presidente vitalicio de las seis federaciones de sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba. Arce no tenía el mismo pasado y perfil político. De hecho, fue escogido como candidato presidencial por el propio Morales, justamente en consideración de que su bajo perfil político y condición de *outsider*⁷; es decir, ajeno a los movimientos sociales de extracción indígena, no representaría una amenaza para él, además de que el perfil de tecnócrata de su exministro de economía tenía potencial para atraer el voto de la clase media y electores descontentos con los giros antidemocráticos del gobierno transitorio.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el gobierno de Arce pasara de una postura política moderada a una más radicalizada que el propio régimen de su antecesor. Inicialmente, el gobierno de Arce se mostró como una versión democratizada del MAS, cercana a las clases medias urbanas, cuyas tenues aspiraciones electorales no pasaban de algunos coqueteos con el Partido Socialista 1 (PS-1). Si bien una versión centro-izquierda parecía armonizar mucho mejor con el perfil político de Arce y sus colaboradores, aparte de llenar un vacío electoral de cierta importancia, también dejaba de lado un espacio en la arena política boliviana que seguía teniendo potencial electoral: el espacio de la izquierda de discurso radical, gestor de políticas rentistas y acciones populistas. Finalmente, Arce se decantó por este último, concretándose el giro decisivo a finales del 2022 con el encarcelamiento del Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz electo democráticamente.

¿Acaso la bonanza rentista es una especie de fuerza gravitacional que sienta las bases para el surgimiento de regímenes políticos, autoritarios y líderes caudillistas, por lo general funcionales para la reproducción del Estado rentista. A diferencia de Arce, Morales ya tenía inclinaciones autoritarias

y caudillistas, pero ambos acabaron apostando por un régimen que sintetiza todos los males económicos y políticos de la maldición de los recursos naturales. ¿Por qué un político como Arce, alguien sin las cualidades carismáticas y seductoras que hacen a un líder caudillo y populista, abraza un régimen político autoritario y antidemocrático que en última instancia refuerza la vigencia de un Estado rentista? Se puede decir en esencia que Arce y sus seguidores se aferran a mantener intactas las políticas económicas basadas en el rentismo porque son los pilares fundamentales sobre los que descansa su reproducción en el poder, algo fundamental para evitar procesos judiciales y encarcelamientos altamente probables.

Cualquier versión moderada significaría hacer ajustes económicos altamente impopulares como la reducción del aparato estatal, recortes en el déficit fiscal, cierre de empresas públicas inviables o reducciones graduales de las subvenciones excesivas. No son pocos quienes piensan que los costos políticos serían demasiado altos para cualquier gobierno que intente corregir las distorsiones económicas que empeoran cuando declina la renta de los recursos naturales. Cualquier gobierno interesado en reformas tendría que estar dispuesto a pagar los altos costos políticos que no solamente cerrarían las puertas de reelección, sino incluso recortar periodos de gobierno. Y cualquier movimiento político con intenciones de sanear o al menos corregir parcialmente los males del rentismo, tendría escasas oportunidades de triunfar en la batalla electoral, especialmente si se puede “patear los problemas para adelante” mediante más endeudamientos o trasferencias disfrazadas de los gastos públicos hacia los bolsillos de la población (endeudamiento interno, costos financieros, racionamiento de productos, entre otros).

Para terminar, estas consideraciones obligan a reevaluar si bastaría un cambio de gobierno para recomponer la política y las políticas económicas. Al menos en las circunstancias actuales, ello parece poco probable. Para los electores, lo importante pocas veces se convierte en un asunto urgente porque, a fin de cuentas, la contención de los efectos negativos de la maldición de los recursos naturales puede durar varios años, lo que alarga la reproducción de gobiernos rentistas y atrasa el surgimiento de movimientos políticos alternativos.

Lo cierto es que estamos ante una realidad donde la maldición de los recursos naturales no se materializa únicamente como males económicos, sino también como males políticos, tanto así que la llegada al poder de un nuevo gobierno sin aspiraciones de reelección, apenas sería el inicio de un largo camino de transformación del Estado rentista.

EL SECTOR PRIVADO RENTISTA

Para entender en qué medida es atribuible el lento crecimiento y el desastroso desempeño de la política al sector privado rentista —aquel que controla una parte de la renta de los recursos naturales— es necesario empezar reexaminando las historias de éxito económico que nos cuentan los grupos de poder económico. Por ejemplo, los grandes agropecuarios cruceños nos tienen acostumbrados a escuchar historias de grandes logros económicos donde ellos aparecen como los principales gestores y creadores de la riqueza. Luego, utilizan esta narrativa para justificar por qué tienen plenos derechos para apropiarse la porción más grande de la torta. Los mensajes y discursos de los gremios de poder agropecuario están repletos de frases como el “modelo cruceño exitoso”, el “modelo de desarrollo cruceño”, “Santa Cruz es el motor económico de Bolivia” o “el agro cruceño alimenta a los bolivianos”.

Las dudas y las miradas críticas sobre estos relatos y mensajes han sido rechazados permanentemente o directamente descalificados por los mismos grupos de poder, lo que no es una sorpresa, pero lo que llama la atención es que la reprobación también proviene de parte de cruceños que no lucran directamente con la tierra agraria, incluyendo a personas que pertenecen a estratos sociales pobres y clase media. Varios estudios que existen al respecto, sostienen que una explicación de por qué la narrativa de las élites agrarias goza de amplia aceptación y respaldo ciudadano es el “regionalismo cruceño”, entendido éste como un sentimiento de identidad y orgullo de una región que se siente cohesionada por diversos factores históricos, culturales o económicos, cuyo enemigo sería el “centralismo” y la población “colla”⁸. Esta sería una de las explicaciones de por qué las dudas y las miradas críticas son interpretadas por los cruceños como un agravio dirigido a

toda la sociedad cruceña y no como un cuestionamiento a los estratos minoritarios que concentran el poder económico.

La popularidad de la que todavía goza las narrativas de éxito cruceño no significa necesariamente que sus promotores tengan la verdad. En realidad, la idea de que los grupos de poder regional serían los creadores de la riqueza sirve para justificar las desigualdades económicas y para convencer a la gente de por qué merecen tomar la mayor parte de la torta económica. Por eso, a menudo la gente de a pie está de acuerdo con que ellos merecen lo que tienen porque son los creadores de la riqueza y las grandes ganancias que obtienen son el fruto del hecho de haber asumido grandes riesgos de inversión. Pero, ¿realmente esto es así?, ¿la riqueza es creada por los grupos de poder regional?

Esta pregunta nos lleva de retorno a la cuestión de cuál es el origen de la riqueza o dónde se origina. Y como bien explica la economista Mariana Mazzucato⁹, “la riqueza es un *stock* acumulado de valor” y, a su vez, el “valor” es el resultado de la “producción de nuevos bienes y servicios”. Distingue el “valor creado” mediante procesos productivos basados en recursos humanos, físicos e intangibles, del “valor extraído” entendido como la extracción de recursos o productos ya existentes. Estos conceptos, que no solo son clarificadores en términos teóricos, sino pertinentes para nuestro análisis, están enraizados en el pensamiento fundacional de la economía, como es la “teoría del valor”. La economista, en contraposición a los economistas ortodoxos o de la escuela subjetiva, sostiene que el “valor”, o es el resultado del esfuerzo productivo, o proviene de la extracción y apropiación de los recursos naturales (es decir, la “renta”).

Entonces, lo expuesto en el Capítulo 3, en cuanto a la caracterización del agro cruceño y el Capítulo 4 que evidencia su naturaleza rentista, nos lleva a concluir que la riqueza generada dentro de la agricultura de monocultivos, fundamentalmente, es “valor extraído” (renta), antes que “valor creado”. Esta es la razón por la que concluimos que la agricultura cruceña de monocultivos forma parte del sector privado rentista. Esto no quiere decir que toda la riqueza está compuesta por “valor extraído”, sino que también está presente el “valor creado”, pero es una parte minoritaria. A partir de estos razonamientos, saltan a la vista algunas implicaciones de gran alcance o relevancia.

Primero, el agro cruceño es parte del problema boliviano de lento crecimiento económico porque, principalmente, pero no solamente, se trata de una actividad de tipo “primario-exportador”, basada en la extracción, acopio y comercio de productos agrícolas como insumos agrícolas no procesados o semiprocesados. La renta obtenida es extraordinaria porque tiene tasas de ganancia más altas comparadas con los rubros no rentistas, lo que se acentúa en periodos de precios internacionales altos en el mercado de los *commodities* agrícolas. La diferencia con el sector público está en que la renta está en manos del sector privado que tiene control y propiedad de las tierras agrícolas. Otra forma de evidenciar la naturaleza rentista del sector es la necesidad inexorable que tienen para el acceso, control y propiedad privada de tierras agrícolas de gran extensión o tamaños mínimos técnicamente aceptables para la agricultura de monocultivos mecanizados. En conclusión, los dueños del agro cruceño no son “creadores de valor”, como sostiene la narrativa regional, sino los “rentistas” de la tierra.

Segundo, el “valor extraído” significa que el modelo agrario no está al margen de los comportamientos económicos asociados al fenómeno de la maldición de los recursos naturales, como ser la excesiva dependencia de la exportación de materias primas, la pérdida de capacidades productivas en los rubros que forman parte de economías no rentistas, la dependencia de la economía regional de las importaciones o la escasa diversificación del aparato productivo. La intensificación de las actividades extractivas, en otros términos, significa que predomina el “capitalismo rentista y depredador” por encima del “capitalismo productivo”. Cuando el valor no es creado en el marco de los procesos económicos que producen nuevos bienes y servicios, el crecimiento económico que se observa en los momentos de bonanza resultará ser pasajero o efímero, porque inevitablemente desaparecerá cuando colapsen los precios internacionales o cuando se agoten las reservas o las potencialidades de explotación de los recursos naturales. En estas circunstancias, la narrativa de la agricultura cruceña como motor económico de país es inexacta. Lo más preciso sería decir que es uno de los tres motores económicos de un sistema económico nacional atrapado por la maldición de los recursos naturales, el rentismo y atraso económico.

Tercero, resulta sumamente llamativo que bajo la sombra dominante del sector agroextractivo, existen en Santa Cruz numerosas economías de pequeña escala que fácilmente podríamos clasificarlas como parte del grupo de economías “creadoras de valor”. Una parte de la riqueza regional, cuyo tamaño exacto no se conoce con precisión, está siendo creada a partir de actividades de transformación que producen nuevos bienes y servicios. Este hecho marca una diferencia de mucha relevancia con respecto a las fallidas empresas públicas que promovió el gobierno nacional afanado en avanzar en su propuesta de fundar un Estado empresario. Aunque la renta estatal ayudó ciertamente a la generación de empleos mediante miles o cientos de miles de pequeños emprendimientos, sobre todo en el sector de servicios, estas no lograron dejar de ser funcionales a la dinámica rentista, por lo que no tienen grandes oportunidades de sobrevivir a los momentos de crisis económica.

Ilustremos con algunos ejemplos el surgimiento prometedor de economías no rentistas en el contexto cruceño. En el sector inmobiliario, destacan las empresas constructoras que obtienen rentabilidad a partir de economías de escala, eficiencia operativa e innovación en diseño arquitectónico. Las constructoras de este tipo pertenecen al sector productivo de la economía porque crean nuevos productos (casas o viviendas) a partir de procesos de transformación, a precios competitivos y acordes con los costos de producción. A diferencia de los negocios de venta de lotes de terrenos en nuevas urbanizaciones que lucran sobre la base de la renta de la tierra, las empresas constructoras obtienen ganancias según su eficiencia y gestión empresarial, de modo que resulta más costosa la construcción por cuenta propia que pueda emprender un propietario de lote. Por supuesto que existen constructoras que obtienen “valor creado” y “valor extraído” al combinar su capacidad, su trabajo productivo con los negocios de las urbanizaciones que ganan con la renta de la tierra o especulan con promesas de “plusvalía”.

Otro rubro productivo relacionado con el anterior, estaría conformado por las empresas dedicadas a la fabricación de material de construcción, destacando productos de metal-mecánica, tuberías de plástico, diversas partes prefabricadas, pinturas, cerámicas y porcelanatos, insumos varios para obra

gruesa y fina, entre otros. Estas empresas hacen grandes esfuerzos de innovación empresarial debido a que están obligadas a competir en el mercado con productos importados y productos que ingresan vía contrabando. Algunas de estas empresas están eslabonadas con sectores empresariales del mismo rubro que están instaladas en otros departamentos y también tienen presencia en el mercado nacional. En parte debido a los altos costos de transporte, no participan o lo hacen marginalmente en las exportaciones.

También habría que diferenciar de la agricultura rentista a la agroindustria propiamente dicha y que está dedicada a la transformación y obtención de bienes finales o procesados. Los ingenios azucareros cruceños destacan en este ámbito por producir azúcar refinado para el mercado nacional, alcohol para consumo humano, industrial, combustibles e, incluso, generan energía propia con el bagazo de la caña. También están incursionando en los mercados internacionales y adoptando nuevas tecnologías para el desarrollo industrial. Ciertamente, los ingenios azucareros no existirían sin las políticas estatales de fomento al desarrollo agroindustrial del siglo pasado o algunos sin el capital acumulado a partir de la renta de la tierra. La acumulación primaria de capital se produjo en la economía extractiva, prácticamente en todos los casos, pero en la actualidad las empresas de este tipo destacan en tanto crean valor sobre la base de esfuerzos empresariales que materializan procesos de transformación, gestión eficiente y presencia en el mercado nacional.

En el rubro de maquinarias y máquinas existen también indicios prometedores, aunque resta mucho terreno por recorrer. Existen múltiples pequeños talleres o plantas de fabricación de partes y piezas, que en muchos casos siguen siendo centros de ensamblajes de partes importadas de productos a diseño final. Un ejemplo serían las ensambladoras de motocicletas. Aunque todas las partes y accesorios son importados de China, estos talleres agregan valor y aportan en alguna medida a la generación de conocimientos y mano de obra calificada. Otro caso interesante es el protagonismo creciente de los menonitas por sus habilidades para la reparación, mantenimiento e, incluso, fabricación de maquinarias agrícolas y equipos pesados.

Sus servicios técnicos gozan de amplio reconocimiento y confianza por parte de los clientes que valoran la calidad de los trabajos y las habilidades inventivas que tienen para fabricar partes y piezas. Roberto Navia, un reconocido periodista cruceño, sacó a la luz pública cómo los menonitas lograron concebir, diseñar y construir por cuenta propia, un puente de 150 metros sobre el río Parapetí, completamente funcional para la circulación de grandes maquinarias agrícolas¹⁰. Es más, según otro hecho noticioso, la gobernación de Santa Cruz habría comprado equipos y maquinarias de perforación de pozos de gran profundidad, mismos que constan en los registros oficiales como adquisiciones importadas de industria alemana, pero que, en realidad, se trataría de “maquinarias hechizas” fabricadas por los menonitas que viven en Santa Cruz.

Estos ejemplos y varios otros emprendimientos productivos testimonian que están naciendo economías creadoras de valor a partir o bajo la sombra influyente de la renta de los recursos naturales en manos del sector privado, concretamente, la renta de la agricultura cruceña. En términos de teoría económica, este tipo de cambios y procesos han sido estudiados como la acumulación primaria (o primitiva) del capital, una condición *sine qua non* que históricamente precedió al desarrollo del capitalismo. Aunque las economías cruceñas señaladas se encuentran en una etapa casi embrionaria en comparación con el tamaño dominante de las economías de “valor extraído”, representan uno de los sellos distintivos más significativos del sector privado, cuya importancia es mayor si contrastamos con el Estado rentista que no pudo encontrar una fórmula eficaz para transformar al menos una parte del gasto improductivo en gastos productivos; es decir, en capital semilla capaz de impulsar el surgimiento y la consolidación de actividades creadoras de nuevos productos y servicios.

Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso la renta controlada por el sector privado tiene potencial para el surgimiento y crecimiento de economías no rentistas? Ya dijimos que el Estado rentista tiene más fracasos que éxitos cuando se trata de crear economías no rentistas, a pesar de haber invertido sumas millonarias en varios emprendimientos. Para barajar algunas explicaciones, parece importante tener en cuenta que los mecanismos de distribución

o circulación de las rentas son diferenciados entre el sector público y privado. Como hemos visto, la renta estatal toma la forma de gasto público, incluso el capital destinado a la creación de empresas públicas acaba siendo gasto público, y como tal, se distribuye o circula según decisiones políticas. La decisión de quién se beneficia y a cambio de qué es eminentemente política y puede haberse adoptado persiguiendo objetivos múltiples. Los bonos sociales están motivados por criterios de justicia social y protección de las poblaciones pobres, mientras que los gastos militares se explican por la necesidad gubernamental de asegurarse la lealtad de las fuerzas armadas. Las adquisiciones de bienes por entidades estatales o las adjudicaciones de obras públicas con sobrepuestos no están basadas en criterios de eficiencia económica, sino en relaciones clientelares donde los llamados “empresarios” se imponen por encima de las relaciones de mercado.

En contraste, al menos una parte de la renta del sector privado circula de acuerdo a los mecanismos de mercado. Parcialmente, la renta del sector privado se distribuye mediante relaciones de mercado, compra y venta de insumos de producción agropecuaria, demanda y oferta de servicios utilitarios para la circulación de la renta, entre otros. La decisión de quiénes participan en los circuitos por donde fluye el dinero es tomada mediante los mecanismos de mercado y los flujos económicos tienen contrapartidas también económicas. Eventualmente, estas decisiones y relaciones económicas acabarán estableciendo entornos de negocios propicios para acelerar la circulación del dinero, el crecimiento de los actores económicos orientados hacia la actividad empresarial y la formación de capitales semilla. A su vez, estas dinámicas económicas tienen potencial para atraer e incorporar a nuevos inversores y emprendedores dispuestos a ganarse una cuota en el mercado mediante la competitividad y la optimización del proceso productivo.

Para potenciar y proyectar a futuro estas economías prometedoras se requiere cautela porque existen condicionamientos como el carácter predominantemente rentista del país o lecturas apasionadas que subestiman la complejidad de nuestra realidad. Por ejemplo, con frecuencia escuchamos que la solución a los grandes problemas económicos es la liberalización económica,

el protagonismo del sector privado como el único agente económico y la reducción del Estado a su mínima expresión. Los divulgadores de estas ideas sustentan sus planteamientos exponiendo como una prueba irrefutable la pujanza de la economía cruceña. No son pocos los economistas con presencia mediática que se adhieren a esta mirada simplificada. Cuando los periodistas les consultan sobre cuál es la solución para revertir la crisis económica, acaban repitiendo una lista de medidas bastante conocidas: liberalizar las exportaciones cruceñas, eliminar o reducir los aranceles de exportación, otorgar incentivos económicos para la agricultura mecanizada o dar acceso preferencial al mercado de divisas. En cuanto al sector público, a menudo recomiendan reducir el gasto público o cerrar las empresas públicas deficitarias. No podríamos estar en desacuerdo sobre este último.

El problema está en que la premisa de reforzar el modelo cruceño es una equivocación, básicamente porque se está sobredimensionando las economías creadoras de valor como las que hemos señalado que, si bien son prometedoras, son todavía secundarias. O, lo que es lo mismo, se subestima o se ignora el efecto contraproducente de reforzar el predominio de las economías rentistas. Quienes proponen las medidas señaladas olvidan que las recetas clásicas de otorgar facilidades y ventajas económicas al empresariado del sector privado tienen sentido en países menos rentistas y con economías creadoras de riqueza de mayor tamaño. Si bien existen economías productivas emergentes en Santa Cruz, estas siguen siendo minoritarias, cuya participación combinada en las exportaciones no sobrepasa el 5% del total departamental. Especialmente en el mediano y largo plazo, las medidas retroalimentadoras del rentismo serán inevitablemente contraproducentes para el crecimiento sostenido de las economías emergentes. En otras palabras, inyectar oxígeno a los sectores extractivos es reforzar el capitalismo “depredador” y matar el capitalismo “productivo”.

Para cerrar este balance, y particularmente para reforzar una mirada de águila de alcance nacional, lo que sigue presenta un esbozo de fotografía del estado actual de la economía. Para intentar escapar en alguna medida de la maldición de los reportes económicos nada amigables, siempre plagados de cifras y conceptos intrincados, vamos a presentar lo dicho como una

“ilustración simplificada”, una fotografía panorámica con fines didácticos para imaginarnos las características generales y las relaciones de proporcionalidad que existen entre los principales componentes del sistema económico nacional. Las cifras que se usan están basadas en datos económicos oficiales y recientes (2022 y 2023).

ILUSTRACIÓN SIMPLIFICADA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA

En el corazón de Sudamérica existe un pequeño pueblo de montañas y llanos, habitado por unas cuantas decenas de familias. El último año, el tamaño de su economía anual fue estimada en 10.000 pesos. Aunque cada familia cuida habitualmente de su propio hogar y necesidades, están organizadas en una sola nación, tienen reglas propias y los asuntos de interés público están a cargo de un gobierno conformado por representantes electos cada cierto tiempo.

Según los últimos reportes, el 85% de la economía de este pueblo fue contabilizada como gastos en consumo de bienes y pago de servicios. El restante 15% fue invertido principalmente en mejoramiento de caminos, construcción de pequeñas obras públicas, hidrocarburos y, en menor medida, emprendimientos económicos de carácter privado. Al igual que en el pasado, la gente protestó una vez más porque el dinero destinado a la inversión solo llegaba a 1.500 pesos, lo cual es poco dinero para las grandes necesidades de inversiones en infraestructura y obras de apoyo productivo. Aunque la exportación a otros pueblos generó un ingreso equivalente a 3.000 pesos, casi de inmediato todo ese dinero salió del pueblo para pagar las importaciones. Últimamente, el comercio con otros pueblos está arrojando saldos negativos.

Los 8.500 pesos destinados al consumo, en realidad están divididos en dos partes. Alrededor de 4.000 pesos es la suma de los gastos de todas las familias, generalmente destinados a la compra de alimentos, ropa, pago de servicios básicos, transporte, educación y otros. Es el gasto del sector privado. No todas las familias gastan por igual, porque algunos hogares son más ricos que otros o porque los ingresos y las oportunidades de negocio

varían de un hogar a otro. Uno de los gastos que más llama la atención desde hace un tiempo es el monto elevado que destinan los hogares a la educación básica y superior de los hijos. Aunque en este pueblo la educación es pública por ley, cada vez más familias optaron por pagar a los centros educativos privados. No les sobra ese dinero, pero lo hacen porque la calidad de la enseñanza pública es pésima. Los gastos en educación superior también están de subida, a pesar de que todos saben que la profesionalización no ha sido ninguna garantía para escapar del desempleo.

La otra parte, 4.500 pesos, es el gasto público; es decir, el dinero del que disponen los representantes que conforman el gobierno del pueblo. Llama la atención que la clase gobernante disponga de más dinero que la suma de todas las familias. De acuerdo a los libros de registros, se observa que la clase gobernante gastó más de la mitad del dinero en sueldos y salarios de ellos mismos, sueldos de los servidores públicos, incluyendo profesores, médicos, personal militar y policial. En los últimos años, la compra de combustibles a precios elevados se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el sector público. No solo tiene que transportar desde otros pueblos, sino que están obligados a distribuir y vender en el pueblo a un precio que es menos de la mitad del precio de importación. El último año, el gobierno gastó cerca de 1.000 pesos de los 4.500 para evitar el desastre que podría provocar el desabastecimiento de los combustibles subvencionados. También están preocupados porque las reservas o los ahorros están casi agotados. Últimamente, el endeudamiento se convirtió en el mecanismo fácil para financiar el gasto público. Incluso llegaron a prestarse dinero para pagar los gastos del censo de población que se llevó a cabo hace poco.

Tanto las familias como el gobierno de este pueblo están obligados a generar ingresos para costear los gastos mencionados, incluyendo los montos destinados a la inversión. Si bien la mayoría de las familias se gana la vida trabajando o haciendo negocios con la gente del mismo pueblo, la fuente mayor de donde emana el dinero es el comercio con otros pueblos. El gas natural, la agricultura de exportación y el oro movieron más de 3.500 pesos en negocios con otros pueblos y otros 3.500 pesos giraron en torno a las actividades relacionadas con las importaciones. Suman 7.000 pesos, por lo que

solo existe un saldo de 1.500 para completar los 8.500 pesos que representan el consumo y gasto general. Si a este saldo restamos unos 500 pesos que fácilmente serían los ahorros utilizados y los préstamos obtenidos, queda en evidencia que la riqueza o el valor propiamente creado por las economías del pueblo equivale solamente a unos 1.000 pesos; es decir, el 10% comparado con el tamaño total de la economía del pueblo (10.000 pesos). Para corroborar este hecho bastaría observar que casi todos los bienes de consumo, uso personal, doméstico o laboral, están fabricados en otros pueblos. La verdad, este pueblo de montañas y llanos produce muy pocas cosas para el autoconsumo.

Sin embargo, el hecho de que producen poco, no significa que la gente de este pueblo está sin hacer nada. Al contrario, la mayoría de los pobladores trabajan arduamente para generar sus ingresos. Trabajan en actividades no relacionadas con la transformación de la materia prima, la fabricación de productos industriales o manufacturas de bienes con valor agregado. Al menos una persona de cada dos trabaja en el sector de comercio, transporte o es cuentapropista. La actividad comercial gira en torno a la circulación de las exportaciones y las importaciones. El comercio ocupa a mucha gente, ya sea en negocios al mayoreo y negocios minoristas. Ahí están desde los grandes exportadores e importadores, hasta el encargado del puesto de ventas al público en general. También este grupo está integrado por quienes se dedican al contrabando para abastecer el mercado interno con bienes baratos. Por su lado, los transportistas están agrupados en dos grandes categorías, entre los que prestan servicios de transporte de pasajeros y los que pertenecen al transporte pesado o de carga nacional e internacional. Los primeros no están directamente relacionados con el comercio exterior, pero sí los segundos. Tanto el envío de las mercancías al exterior como la internación y distribución dentro del pueblo demandan permanentemente servicios de transporte. En cambio, los cuentapropistas no tienen vínculos directos con el comercio exterior y entre ellos pasan inadvertidos los pocos emprendedores que realmente transforman y producen bienes con valor agregado.

El gobierno de este pueblo obtiene sus ingresos principalmente por dos vías: la renta de los recursos naturales y recaudación de

impuestos. Actualmente, controla la renta mediante derechos de participación directa en la explotación de los recursos naturales e impuestos especiales. Todo esto representa como la mitad del dinero que utiliza para cubrir los gastos públicos. Aunque invirtió las ganancias de los años de bonanza en la creación de empresas públicas y fábricas, los pobladores conocen las mismas como “elefantes blancos” porque no generan ganancias económicas. En muchos casos, las empresas públicas siguen funcionando con dinero subvencionado. Por otra parte, los ingresos por impuestos provienen principalmente de los negocios particulares formalizados. El gobierno recauda el 13% del valor de las ventas brutas con el nombre de impuesto al valor agregado. Sin embargo, todo este dinero no es suficiente, por lo que estuvo financiándose con préstamos concedidos por los gobiernos de otros pueblos y préstamos captados de los ahorros de las propias familias con promesas de devolver pagando altos intereses. También la gente del pueblo sabe que los representantes electos han estado usando una parte del dinero del fondo de jubilación de los trabajadores del pueblo.

En resumen, la situación actual de este pueblo es delicada. Los gastos públicos superan a los ingresos que capta el gobierno, mientras que la inversión productiva es muy baja. Los ingresos del gobierno están seriamente afectados por la disminución de la renta del gas natural y el aumento imparable del gasto destinado a la subvención de combustibles. Por eso, desde hace unos cuatro años, promete producir biodiésel a partir de las cosechas de soya y palma aceitera. También los gobernantes anunciaron varios proyectos de industrialización para intentar reemplazar las importaciones. Hasta hace poco, el gobierno estaba entusiasmado con el negocio del litio para exportar a los pueblos que fabrican autos eléctricos. Aunque el negocio del litio parece estar condenado al fracaso, el sueño es seguir viviendo de la renta de los recursos naturales. Por su lado, los pobladores intensificaron la conversión de los bosques en tierras de cultivos y ganadería, al igual que el dragado de los ríos en busca de más oro. Necesitan generar los ingresos que hacen falta para comprar los bienes importados. Debido a que casi todo lo que consumen proviene del extranjero, todos buscan los dólares que se necesitan para el comercio con otros pueblos.

Todo apunta a que tanto los representantes electos como los pobladores están demasiado preocupados por resolver las urgencias económicas. El problema de fondo de este pueblo, la dependencia de recursos naturales, recibe poca o ninguna atención. Aquí se cumple el dicho: “lo urgente rara vez es importante”.

EL ATRASO ECONÓMICO COMO AGENDA NACIONAL

Se puede decir que el atraso económico no refiere solamente al lento crecimiento del PIB, sino también al comportamiento cíclico de tipo estacionario, a la elevada dependencia de la explotación de los recursos naturales y su exportación en calidad de materia prima o semiprocesada. El atraso económico tiene estrecha relación con la baja calidad de las medidas económicas tomadas por los gobiernos de turno, especialmente en tiempos de expansión del Estado rentista.

El rezago de la economía nacional también está reflejado en el último y penúltimo lugar que ocupamos cuando comparamos nuestro país con otros, concretamente, con respecto a los países vecinos y latinoamericanos. Si utilizamos como indicador el PIB per cápita, la brecha que separa a Bolivia de los vecinos es de 25 años, en promedio. Aunque en el nuevo milenio hemos reducido la brecha con respecto a Paraguay, de 21 años a 14 años, la distancia se ensanchó con relación a Argentina, Brasil y Perú (entre 28 a 39 años). Los momentos de bonanza nos hizo perder de vista el problema del atraso económico y cuando la crisis lo muestra de nuevo, las ventajas económicas ya no son las mismas.

Aunque parece obvio, el atraso económico, especialmente de las poblaciones rurales pobres, no ha sido visto necesariamente como algo negativo. Los pensadores del MAS incluso llegaron a concebir como una condición histórica valiosa para edificar el “socialismo comunitario”¹¹. De ahí que Bolivia destacó ante el mundo con sus líderes políticos y movimientos sociales hablando de nuevos paradigmas de cambio civilizatorio como el “Vivir Bien” y “los derechos de la Madre Tierra”. Estas visiones radicales atrajeron la llegada a Bolivia de eufóricos activistas anticapitalistas y ambientalistas de todo el mundo, todos interesados en descubrir y experimentar las formas y modos comunitarios de vida. Tiempo después, sólo algunos

de ellos admitieron que se habían formado expectativas poco o nada realistas.

Para algunos sectores privilegiados de la sociedad boliviana, el atraso económico tampoco es algo muy evidente. Particularmente, la élite económica vive de espaldas a la realidad de la mayoría de la población boliviana que se encuentra en situaciones muy precarias, altamente vulnerables y regiones consideradas como ajenas o parte de otro país. El crecimiento de la economía cruceña de las últimas décadas reforzó el imaginario de una economía regional moderna, integrada al comercio mundial y exitosa. Esta narrativa, que eventualmente resulta funcional para los intereses inmediatistas, es peligrosa para la propia población cruceña, ya que los problemas de carácter nacional acabarán diluyendo o licuando cualquier avance significativo que pudiera existir, además de exacerbar los males socioeconómicos y las luchas por el control de los recursos naturales.

Pero negar la existencia del atraso económico es un peligro que puede paralizarnos. Encarar sin excusas los problemas económicos que trascienden las urgencias del presente no es nada fácil. Si algo positivo podemos extraer de la persistencia del atraso económico, es tener un entendimiento meridianamente claro de que las soluciones fáciles no existen. Las narrativas excesivamente optimistas y simplificadas sobre el crecimiento económico —por ejemplo, vía plena vigencia del libre mercado— se parecen a las recetas de los gurús motivacionales de cómo cualquier persona puede hacerse rica siguiendo consejos obvios. Forzando la analogía, podemos decir que existen también gobernantes, políticos, expertos y voceros de grupos del poder económico que proponen medidas nada realistas y simplistas, que van desde industrializar de la mano del Estado, sustituir las importaciones o aplicar las ideas libertarias y anarcocapitalistas de Javier Milei. Plantear soluciones pensadas para contextos distintos al boliviano es ignorar o minimizar las complejidades de la realidad nacional y las circunstancias particulares que hacen a las economías regionales y sectoriales.

CIERRE

En sí mismo, ni los recursos naturales ni la renta son negativos para la economía. En muchos países, la renta ha sido y sigue siendo una pieza importante del aparato productivo. Es una ventaja económica que refuerza el funcionamiento y crecimiento de los procesos productivos. Pero cuando la renta es más que una pieza menor, comienzan los problemas. Si la renta llega a tener una presencia dominante o demasiado influyente en el aparato productivo de un país, digamos más del 60% del mismo, puede llegar a tener un impacto negativo sobre las actividades económicas en general; principalmente debilitando las capacidades y habilidades creadoras de valor o riqueza. Y cuando la renta llega a aumentar de forma explosiva, la llamada bonanza, es casi seguro que desatará emociones y sensaciones que nublarán el juicio de los que diseñan políticas económicas y casi siempre primarán las decisiones impulsivas. En ese momento, la renta habrá pasado de ser una bendición a ser una maldición. Al menos, esto hemos aprendido de lo sucedido en Bolivia.

Para decir de otro modo, imaginemos la situación de un estudiante universitario quien, mientras cursa sus estudios, vive con sus padres, depende económicamente de ellos y recibe una renta que le ayuda a prepararse para un trabajo productivo. Este apoyo juega un papel necesario e importante. Pero, si después de concluir sus estudios, el nuevo profesional sigue recibiendo la renta y durante un tiempo prolongado, es más probable que acabe teniendo un impacto negativo sobre sus planes para enrolarse en el mercado laboral, desplegar los conocimientos adquiridos y, con el tiempo, mejorar sus habilidades y capacidades productivas. Una excepción valedera sería que simplemente no encuentre empleo a pesar de haberlo buscado incansablemente. Pero, si la continuidad de la renta no se justifica, la dependencia de la misma será contraproducente, al igual que la pérdida de sus capacidades productivas y de las oportunidades de emanciparse de la autoridad de sus progenitores. Y si por esos azares de la vida, este profesional no emancipado gana la lotería, experimentará los mismos efectos que causa una repentina llegada de la bonanza rentista. En

estas circunstancias, tanto la renta suministrada por los padres como la renta de la suerte millonaria, habrán sido inútiles para desencadenar procesos productivos beneficiosos para esta persona, sus padres y la sociedad.

En Bolivia, si clasificamos los efectos negativos de la renta según su duración y magnitud, podríamos hablar de dos tipos de maldición: la permanente y la repentina. La primera refiere a la dependencia excesiva de los recursos naturales, tanto así que todas las actividades económicas tienen por centro de referencia la economía rentista. En el pasado, el estaño jugó este papel central por cerca de un siglo y, ahora, está el gas natural, la agricultura de monocultivos y la minería, principalmente el oro. Son los elementos ordenadores del aparato productivo nacional. Por eso, la diversificación es una de las grandes ausencias y cualquier cambio en uno de estos rubros causa alteraciones generalizadas. La segunda, la maldición repentina, refiere a los efectos de las abruptas alteraciones que causa la aparición de la bonanza rentista. El ejemplo reciente es la renta del gas natural que, en lugar de allanar los caminos de salida de la maldición permanente, reforzó los males económicos y políticos del rentismo. Las actividades extractivas se multiplicaron en detrimento de las actividades creadoras de riqueza. También elevó los costos de las distorsiones económicas y políticas económicas intervencionistas, como las subvenciones estatales o el gasto público para el control los precios y tipos de cambio.

En cuanto a los actores económicos implicados, hemos explicado el papel de dos tipos de actores: el Estado rentista y el sector privado rentista. La experiencia vivida con el gas natural pone de manifiesto que un Estado que ya era frágil, puede seguir empeorando, como si no existiera un fondo a tocar. Al repasar los llamados efecto rentista, represión y censura, hemos evidenciado cómo la renta petrolera sirvió para multiplicar el clientelismo, la cooptación, la corrupción y otros males que destruyen el sistema de pesos y contrapesos del sector público y su relación con la sociedad. Por supuesto que todo esto ocurrió bajo el influjo de la orientación ideológica del MAS y sus postulados estatistas e intervencionistas, pero ¿los resultados habrían sido distintos con otros actores políticos en el poder? Aunque no deberíamos descartar la concesión del beneficio

de la duda, tampoco podemos perder de vista que estamos lidiando con una condición histórica y estructural donde no solo el Estado es rentista, sino el sistema económico.

El sector privado rentista es un protagonista que encontró la manera de coexistir con el Estado rentista, sin necesidad de competir por la explotación de los mismos recursos naturales. En este capítulo, hemos visto con detenimiento el caso de los agroexportadores cruceños, quienes se posicionaron en los últimos años por encima del Estado en cuanto a presencia y participación en el comercio exterior. Es un sector rentista estrechamente eslabonado a la economía departamental, pero también al resto de la economía nacional mediante los mecanismos de mercado. Una parte de la renta agraria circula o se distribuye vía relaciones de mercado, lo que crea oportunidades de gestación de economías no rentistas, pero tenemos que insistir y subrayar el papel influyente que tienen las lógicas rentistas o el predominio del capitalismo “depredador” por encima del capitalismo “productivo”.

En suma, el atraso económico es el corolario de la maldición de los recursos naturales. Los actores rentistas, sea el gobierno de turno o el sector privado que se beneficia con los recursos naturales, negaron y van a seguir negando que Bolivia es un país atrasado porque sus intereses particulares están por encima de los intereses colectivos que conciernen a todos los bolivianos. Basta recordar que el gobierno nacional niega la existencia de la crisis económica, los dueños de la agricultura mecanizada siguen hablando de modelos exitosos y los mineros cooperativistas enfrascados en su momento de gloria. Y es que la maldición de los recursos naturales es como el refrán, que reza “en río revuelto, ganancia de pescadores”. En tiempos de precariedad y confusión, unos pocos lucran y sacan provecho de la situación.

7

SALIR DEL ATRASO ECONÓMICO, ¿CÓMO?

REALISMO MÁGICO VS. REALIDAD

Nuestra historia está marcada por la conquista, la colonización, la república, ciclos e hitos que explican la formación y el tejido de nuestra compleja realidad social, política y económica. El choque entre los pueblos precoloniales y culturas de ascendencia europea parece haber dado lugar al surgimiento de un fenómeno conocido como “realismo mágico”, algo muy propio de América Latina. Se conoce así a la literatura latinoamericana del siglo XX que se caracteriza por narrativas que combinan elementos realistas y elementos mágicos, de una manera tal que lo irreal es relatado y leído como algo creíble, plausible y natural. Cuando un lector queda atrapado por los relatos de Gabriel García Márquez, acaba aceptando sin reticencias la existencia de la “peste del insomnio” o sucesos todavía más surrealistas, como que en el pueblo de Macondo “se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir”¹.

El “realismo mágico” surgió y se afianzó como una herramienta poderosa para explorar y expresar la intrincada realidad de los pueblos latinoamericanos. Temas recurrentes como la opresión, la injusticia, las luchas sociales han sido narradas en clave literaria, mezclando realidades y simbolismos, creatividad y crítica. Sin embargo, este movimiento literario que ciertamente trascendió el ámbito del arte y la cultura —cuyo estudio es materia de literatos— parece haber sido adoptado interesadamente como una herramienta discursiva utilizada para afectar la vida real.

Muchas de las narrativas de desarrollo, planes y programas económicos no solo desafían la lógica convencional o son irracionales ante los ojos de cualquier persona mínimamente informada, sino que logran ganarse la credibilidad y aceptación de mucha gente, al menos por un tiempo.

Un ejemplo de narrativas de desarrollo que mezclan lo real y lo fantástico es el “Socialismo Comunitario”, una propuesta de los ideólogos del MAS que estaban en funciones de gobierno durante los primeros años. Según sus autores, se trataría de un “modelo civilizatorio” basado en elementos precapitalistas de las culturas precoloniales. No fue un discurso cualquiera, sino una “política de Estado” basada en el comunitarismo con supuestas potencialidades reales para esquivar la fase capitalista y así recortar el camino hacia el socialismo. La lógica comunitaria que ciertamente existe en contextos de precariedad económica fue concebido y aceptado como un valor intrínseco y extrapolable, por ejemplo, para la formación de cooperativas productivas no capitalistas en las comunidades rurales de Bolivia.

Otra narrativa que atenta contra la realidad y los principios básicos de la teoría económica es el llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” (MESCP), redactado hacia el año 2012 por Luis Arce y sus colaboradores del Ministerio de Economía. Fue presentado como el principal mecanismo de implementación del “Socialismo Comunitario”. En concreto, el MESCP es otra idealización irresponsable del Estado como un ente económico eficiente y único líder del proyecto de sustitución del patrón primario-exportador por un “patrón de desarrollo industrializador”. El MESCP abunda en los típicos diagnósticos sesgados que echan la culpa al pasado y se limita a formular postulados simplistas y planteamientos genéricos, sin sustento en evidencias, ni metas cuantificables. Su versión retocada se promocionó como una propuesta de “industrialización con sustitución de importaciones”, que el gobierno de Arce considera como su principal propuesta y estrategia para transformar la economía boliviana.

Pero, ¿cómo podríamos alcanzar la industrialización cuando ni siquiera es algo que hayan logrado los países vecinos que están 20 años delante de nosotros y tienen el doble o más de PIB per cápita con respecto a Bolivia?

Existen otras narrativas más aterrizadas, pero que pecan de optimismo. Una corriente que gana atención es aquella que propone un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, cuyos motores claves serían el capital humano, la tecnología y la innovación. En pocas palabras, el planteamiento consiste en hacer negocios sostenibles basados en plataformas digitales o tecnológicas, instalar parques solares y eólicos para energías renovables, construir ‘granjas’ de servidores en el altiplano para los gigantes de la internet global, producir bienes y servicios de carácter cultural e intelectual (“economía naranja”), entre otros².

Aunque todo esto llama la atención de mucha gente, no podemos dejar de hacernos preguntas que pueden resultar incómodas, pero necesarias. ¿Realmente Bolivia tiene ventajas (actuales y futuras) en cuanto al capital humano y conocimiento con respecto a otros países? ¿Google o Amazon barajarían seriamente la idea de instalar sus centros de datos en un territorio y contexto país poco o nada amigable para negocios? Si los motores claves son el capital humano, la tecnología y la innovación, ¿por qué debemos plantearnos un modelo de desarrollo basado en tales factores claves que no tenemos en la actualidad y estamos en desventaja? Bolivia ocupa el puesto 136 de 162 países en cuanto a registros de patentes, según el ranking 2022 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Simplemente, somos el penúltimo de América del Sur, quedando Paraguay en el último puesto³.

Otra corriente que también gana visibilidad es la propuesta de transitar hacia una “economía verde” con estándares ambientales similares a los de países desarrollados. No podríamos estar en desacuerdo, por ejemplo, con los planes para reemplazar el caótico sistema de transporte público por un renovado parque automotor, con unidades electrificadas e integradas, pero la realidad nos impone límites y nos advierte que algo así requiere un pacto social duradero y un consenso político de largo plazo. Además, mientras no existan mercados laborales alternativos para los choferes de los minibuses y micros, las posibilidades de reformar el transporte público serán mínimas. Sin embargo, lo dicho no quiere decir que debemos dejar de lado la necesidad de mejorar gradualmente los estándares de nuestras acciones y regulaciones ambientales. Una Bolivia sin grandes pretensiones

verdes puede resultar más efectivo, por ejemplo, para frenar y reducir paulatinamente la deforestación de los bosques tropicales y sus consecuencias sobre el cambio de clima.

Por último, otra narrativa que suena plausible, pero también alejada de la realidad nacional podemos encontrar en las propuestas económicas de los grandes agropecuarios. En 2020, cuando la economía decreció, los agroexportadores anunciaron públicamente que tenían la receta para lograr una tasa de crecimiento interanual del PIB nacional de hasta un 7% y durante varios años consecutivos⁴. Cuando los detalles de la receta salieron a la luz pública, se constató que la fórmula mágica no era otra que las demandas sectoriales de siempre: i) “biotecnología”, llámese legalización de cultivos transgénicos para soya, maíz, algodón y trigo; ii) créditos preferenciales para el agro; iii) creación de un fondo público de 600 millones de dólares y, iv) seguridad jurídica y derechos de propiedad sobre la tierra.

Aparte de que esta narrativa es cuestionable por presentar intereses sectoriales o particulares como si fueran de interés general, subestima las transformaciones de gran alcance que se requieren para crecer por encima del 7% y por varios años consecutivos. Para empezar, hace falta mucho más que fondos públicos para un rubro del sector primario. Para dimensionar el desafío, resulta de ayuda no perder de vista que China logró crecer por encima del 10% por varios años gracias a una serie de reformas que siguen siendo objeto de estudios que intentan desentrañar la fórmula aplicada. Una conclusión a la que llegaron algunos estudios económicos es que el crecimiento de dos dígitos de China no fue un fenómeno inmediato, sino el resultado de un proceso no lineal de gestación que duró varios años.

Hasta aquí, el propósito de este texto de apertura es advertir sobre la necesidad de ser realistas y pisar tierra a la hora de pensar y proponer respuestas o soluciones para los problemas económicos (y políticos). Las grandes narrativas ayudan a fijar horizontes deseables, pero son abstractos para dar pasos concretos. En términos futbolísticos, soñar con ganar la copa del mundo 2026 no tiene nada de malo, pero sería más realista y satisfactorio si trabajamos para salir el último lugar de la tabla de posiciones y escalar hasta llegar a ser el último de los seis equipos clasificados. Por lo tanto, en lugar de planes económicos

idealizados, haríamos bien en plantearnos metas alcanzables, pero desafiantes.

En este sentido, la propuesta concreta de este libro es que apostemos por achicar la brecha de 20 años que tiene Bolivia con respecto a los países de la región. Parece poca cosa, pero solo parece. Significa que tendríamos que duplicar el PIB per cápita en un periodo relativamente corto, digamos en 15 a 20 años.

En otras palabras, antes de soñar con modelos poscapitalistas, industrialización o utopías libertarias, el desafío inmediato y urgente es salir del atraso económico. Este es el punto de partida para los planteamientos que se desarrollan a continuación.

EJES DE TRANSFORMACIÓN

Los bolivianos, al estar expuestos y sufrir en carne propia el atraso económico, el rentismo y la maldición de los recursos naturales, hemos llegado a identificar una respuesta general, pero fundamental: reducir nuestra dependencia de los recursos naturales —o lo que es lo mismo— aumentar el crecimiento de las economías no rentistas. También está claro para muchos de nosotros que, paralelamente, tenemos que diversificar el aparato productivo nacional. Usando estas palabras, similares u otras, quizá algunos enfatizando más en algún tema en particular, podríamos decir que los bolivianos ya tenemos una gran coincidencia sobre el norte hacia donde debemos caminar. En otras palabras, ya tenemos el objetivo principal de un plan, programa, estrategia económica o como se llame, de modo que no deberíamos ya perder mucho tiempo en discusiones y debates al respecto. Primer planteamiento superado.

Segundo, tenemos que abrir y ampliar los mercados de exportación para “productos bandera”. En los capítulos previos hemos visto que la economía boliviana depende decisivamente de las exportaciones. El mundo es un mercado enorme y Bolivia apenas existe en el mapa del comercio global. Paraguay, —el país vecino con un PIB similar al nuestro, aunque con menor población— exportó en 2023 nada menos que 17,1 mil millones de dólares; es decir, un 60% más que Bolivia. Paraguay es un ejemplo cercano y concreto que nos está diciendo que podemos exportar más, pero no nos ayuda para pensar en

productos de exportación que lleven el sello “Hecho en Bolivia”. En la actualidad, Bolivia no tiene posicionado un producto de exportación de alto valor que los consumidores del mundo identifiquen como boliviano. Entre los más conocidos están los chocolates de cacao amazónico de la quinua real, aunque estea última no deja de ser un producto primario.

Mientras la experiencia paraguaya nos dice que se puede exportar más, la peruana puede ayudarnos a pensar en productos exportables con sello boliviano. El país vecino es conocido en el mundo por los espárragos frescos y procesados que se venden en los supermercados de las principales ciudades. Es el segundo productor mundial y anualmente exporta por un valor superior a 500 millones de dólares⁵. Solo el espárrago genera a Perú el equivalente a la cuarta parte del valor de exportación del gas natural boliviano.

Lo más interesante de esto, es que Perú no siempre fue productor del llamado “rey de la verdura”. En 1985, una asociación de pequeños agricultores de la región de Ica, inquietos por sustituir los cultivos tradicionales de la zona, entraron en colaboración con la Estación Experimental San Camilo para experimentar con cultivos alternativos como melones, páprika, vainitas y, por supuesto, el espárrago⁶. Unos años después, los estudios agronómicos y económicos resultantes sentaron las bases para el desarrollo de un proyecto asociativo para cultivar 500 hectáreas entre varios productores y exportar con apoyo gubernamental a los Estados Unidos. Hoy en día, esta experiencia sigue creciendo y se está replicando en la sierra peruana y la costa del Pacífico.

Es decir, un “producto bandera” no tiene por qué ser necesariamente un producto originario o propio del territorio nacional. No hace falta tener “ventajas comparativas” desde un inicio. Tampoco tiene que ser altamente procesado o industrializado desde un inicio. Si revisamos las estadísticas de exportación boliviana, vamos a encontrarnos con una amplia gama de productos que ya vendemos al mundo, pero exportamos en cantidades minúsculas. Tenemos manufacturas de cuero, madera, artículos de pasta de papel, tejidos, hilados, artesanías, entre muchos otros. No son “producto bandera” propiamente, pero probablemente tienen potencial. Sería aventurado sugerir

cuál o cuáles de estos ítems deberían impulsarse, ya que hacen falta diagnósticos participativos con los actores económicos involucrados, preselección de alternativas, experimentación y estudios de factibilidad de diversa índole. Para la selección y priorización definitiva deberíamos plantearnos como un criterio general la identificación de los rubros intensivos en mano de obra o generación de empleo. La pequeña agricultura de exportación y el sector manufacturero tienen estas características y potencialidades.

Tercero, limitar gradualmente la exportación de recursos naturales en bruto o materia prima. Para la selección de los rubros a limitarse y los grados de procesamiento exigibles es fundamental basarse en criterios e indicadores de eficiencia económica y beneficio social. Se requieren estudios para constatar si vale la pena limitar la exportación primaria y procesar en el país, porque no siempre es el caso. Una muestra de desaciertos es la planta de Buló Buló que se construyó como parte del proyecto estatal de industrialización del gas natural en forma de fertilizantes químicos exportables (urea y amoníaco)⁷. Sin embargo, hasta ahora, las ventas anuales no justifican la inversión multimillonaria de más 1.000 millones de dólares, y lo que es peor, el gas natural utilizado como materia prima se agota. A la hora de tomar esta decisión de industrialización no tomaron en cuenta las autoridades que la planta genera escasas oportunidades de empleo directo e indirecto. Esto es así porque las actividades intensivas en tecnología y capital, como la planta de urea, no crean grandes oportunidades laborales y tienden a empeorar la dependencia de la economía nacional del conocimiento y capital extranjero.

En el sector de la agroexportación, tenemos avances hacia el comercio de productos semiprocados. Aunque la exportación de granos de soya ha sido mayoritaria en sus inicios, está aumentando gradualmente la exportación de torta de soya, aceite en bruto, aceite refinado y harina de soya. No existen estudios específicos sobre el impacto de estos procesamientos en cuanto a la creación de valor agregado y fuentes de empleo, pero la racionalidad económica indica que son mejores alternativas a la exportación de granos sin procesar. Ahora, esto no implica que se pueda escalar automáticamente la transformación

soyera al siguiente nivel, de aceite en bruto a biodiésel. La razón principal es que, en términos económicos, sigue siendo demasiado costoso producir diésel de plantas oleaginosas en comparación con el diésel extraído del petróleo. Debemos pensar en otras vías de escalamiento de la transformación, por ejemplo, la producción de alimentos de exportación para mascotas, una industria global emergente que mueve en ventas cerca de 200 mil millones de dólares anuales.

En el sector minero, sabemos que Bolivia explota y exporta minerales sin refinamiento y sin recuperación de metales de alto valor. La exportación de concentrados de zinc de Potosí y Oruro significa pérdida de oportunidades de agregación de valor mediante la refinación de productos metálicos, o la comercialización por separado de metales como indio, cadmio, azufre, plata, cobre o platino. Hace varios años comenzaron los proyectos de instalación de plantas refinadoras de zinc y la planta siderúrgica de El Mutún, pero no existen señales de arranque de las actividades transformadoras. Además, se debe tener en cuenta que los procesos de transformación no solo demandan grandes inversiones, sino también reingenierías para mejorar la gestión económica de la minería estatal (COMIBOL) y reducir los costos ambientales de la minería cooperativizada.

Relentizar la exportación de recursos naturales debería ser una apuesta estratégica para la diversificación productiva, lo que significa que debemos recortar las grandes inversiones que refuerzan el modelo rentista. Aparte de los tres grandes rubros de exportación que hemos visto, no debemos olvidar que Bolivia exporta recursos naturales sin procesar a pequeña escala y de mil maneras: madera en bruto, cueros sin procesar, café en grano, quinua en grano, algodón sin procesar, entre otros. Perú adquiere de las comunidades del altiplano una variedad de recursos, como la leña de thola, tierra agrícola, arena y agregados, así como abono orgánico procedente de las llamas. Existen fenómenos por demás curiosos como la importación de café procesado o instantáneo para el consumo nacional, siendo que somos un país productor y exportador de café en grano. ¿Cómo se explica la importación de alimentos procesados con materias primas nacionales? Otra irracionalidad económica es la planta estatal para la industrialización de la hoja de coca que solo refuerza la

economía del circuito ilegal del narcotráfico, el comportamiento rentista de los coccaleros y otras consecuencias negativas en el ámbito social y político⁸.

Cuarto, autoabastecimiento gradual de productos alimentarios o de consumo masivo. Aunque la producción nacional sostiene el consumo nacional de alimentos como el azúcar o arroz, seguimos siendo deficitarios en otros productos de primera necesidad. El 70% del pan que consumimos los bolivianos se elabora con harina y trigo importados. Los precios subvencionados y el contrabando afectaron a las zonas potenciales para la producción triguera de Cochabamba y Chuquisaca. El aporte de los trigueros a la seguridad alimentaria se ha reducido, a pesar de varios intentos del gobierno nacional por fomentar la producción a pequeña escala. Pero como bien recomiendan los ingenieros agrónomos, cualquier plan de mejora sectorial demanda varios años de trabajo y esfuerzo, ya sea para la selección de las mejores variedades de semilla o para consolidar unidades productivas viables. Por lo tanto, si aspiramos al diseño e implementación de proyectos sectoriales para la seguridad alimentaria, los mismos tendrían que estar categorizados como políticas de Estado.

El autoabastecimiento debe basarse en la competitividad económica de la producción nacional y la eliminación de la competencia ilegal de los productos de contrabando. Sabemos que EMAPA se creó para apoyar la producción para el consumo nacional de maíz, arroz y trigo, mediante compras a precios subvencionados por encima de los que rigen en el mercado. Si bien las políticas proteccionistas de este tipo son estratégicas para incubar nuevos emprendimientos, las mismas no pueden ser permanentes ni compensatorias del problema de contrabando. De modo que no basta encarar los problemas de producción, sino que paralelamente deben controlarse y eliminarse las distorsiones de mercado. Y a la inversa, la lucha contra el contrabando será inútil si paralelamente no están en marcha procesos de reactivación de la producción nacional.

Quinto, escalar las economías para contrarrestar la excesiva fragmentación de las pequeñas manufacturas e industrias. No sería exagerado decir que existen cientos de miles de emprendimientos familiares y empresas unipersonales, sin interconexiones entre sí, ni economías de escala. Aunque la gran mayoría están asociados

para velar por sus intereses sectoriales frente al Estado, tienen una participación excesivamente fragmentada en el mercado interno y externo, entre otras razones, debido a que la producción a pequeña escala impacta directamente sobre la variabilidad de los inventarios, precios y calidad de los productos. Si bien los pequeños artesanos y manufactureros se encargan de producir desde calzados hechos con materia prima nacional, prendas de vestir así sean con insumos chinos, hasta productos de hogar, no tienen un tamaño suficiente y producción homogénea para despachar grandes contenedores de mercancías de forma continua. Algunos productos artesanales siguen siendo productos a medio camino entre objetos decorativos y productos utilitarios que no llegan a atender del todo una necesidad de uso práctico.

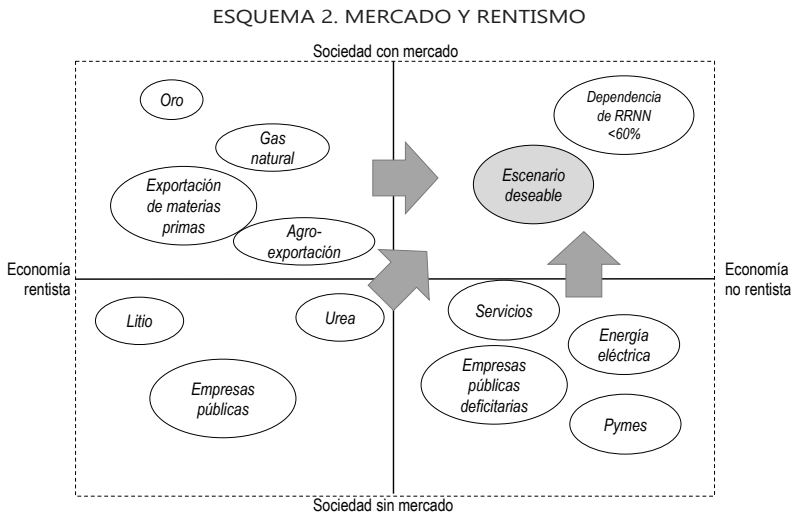
POLÍTICAS ECONÓMICAS

Nos referimos al conjunto de acciones y medidas que cualquier gobierno debe implementar para influir en el crecimiento económico, generación de empleo, competencia empresarial, comercio exterior, inversiones y otros. Los ejes de transformación, como los señalados arriba, plantean acciones que no pueden existir en la nada. Se necesita un conjunto de políticas y medidas económicas específicamente pensadas para el acompañamiento de las acciones. En el país, nos hemos malacostumbrado a pensar que las políticas económicas son equivalentes a las políticas macroeconómicas, un reduccionismo que nos hace creer erróneamente que tener estabilidad macroeconómica es sinónimo de crecimiento y desarrollo económico. La experiencia fallida del MESCP nos hace ver que el modelo keynesiano de gasto público a cualquier costo no funciona para las economías con alta dependencia de los recursos naturales porque, en esencia, lo que hace es reforzar el rentismo, los males económicos y políticos, en lugar de incentivar la creación de riqueza.

Para los fines de un plan o programa de mediano plazo (20 años) para salir del atraso económico, habría que distinguir las medidas entre aquellas que son necesarias para el cambio y las medidas económicas que deberían servir para administrar los problemas en curso, llámese el fracaso económico de las empresas públicas o las consecuencias de la crisis pos-bonanza

de la renta petrolera. Por supuesto que las líneas divisorias serán difusas, sin embargo, sería un error que una estrategia anti-atraso no tenga políticas y medidas propias, a modo de una burbuja encapsulada capaz de sobrevivir a los agitados y problemáticos contextos sociopolíticos.

Para identificar las políticas pertinentes, no se debe perder de vista el objetivo de focalizarnos en la creación, crecimiento y consolidación de actividades productivas no rentistas. Para esto, es necesario diagnosticar el estado actual de la economía boliviana. La figura de abajo es una presentación esquemática que relaciona rentismo y mercado y algo así sirve para visualizar las necesidades de cambio. La trayectoria ideal sería avanzar desde una economía rentista y sociedad (casi) sin mercado hacia una economía no rentista y sociedad con mercado.



FUENTE: Elaboración propia.

Complementariamente, la tabla 7 esboza y sintetiza algunos planteamientos de políticas económicas para salir del atraso económico.

TABLA 9. POLÍTICAS ECONÓMICAS

Nº	Área económica	Definición	Objetivo	Indicadores
1	Renta petrolera	Ingresos públicos captados por derechos de propiedad y participación.	Crear un fondo de reserva no disponible para gasto público y préstamo.	5%-10% de los ingresos anuales. Fondo en activos reales (divisas u oro)
2	Renta de litio	Ingresos públicos esperados en los próximos años.	Destinar al fondo de reserva no disponible para gasto público y préstamo.	>50% de los ingresos anuales. Fondo en activos reales (divisas u oro)
3	Renta agrícola	Ingresos del sector privado captados por la agroexportación.	Canalizar capital hacia el sector no primario de la economía.	Priorizar portafolio de inversiones no rentistas. Limitar exportaciones sin valor agregado.
4	Renta minera y oro	Ingresos del sector privado minero y aurífero.	Canalizar capital hacia el sector de pequeña manufactura e industria.	Incentivar joint venture cooperativistas-pymes.
5	Economía de mercado	Un sistema con barreras mínimas para empresas, regulación del abuso de poder del mercado y distorsiones mínimas de las intervenciones.	Alentar la participación en el mercado sin distorsiones, privilegios y favoritismos.	Mismas reglas de juego para inversión pública y privada.
6	Sistema tributario	Recaudaciones aplicables a las actividades económicas.	Reclasificar el régimen tributario en dos: sector rentista y no rentista.	Reducir brechas y privilegios en el sector rentista. Eliminar presión tributaria sobre economías emergentes y creadoras de valor.
7	Comercio exterior	Flujo comercial con las economías del mundo, libre de medidas discriminatorias y restricciones.	Aumentar la exportación de productos procesados o manufacturados.	Reformar tarifas, servicios de comercio y servicios digitales. Liberar la importación de combustibles.
8	Innovación y conocimiento	Productividad laboral mediante cooperación público-privado e internacional.	Ajustar el sistema de formación profesional, acorde a la realidad nacional.	Reducir desempleo y subempleo de profesionales universitarios. Ajustar la oferta de educación superior a la demanda de mercado.

Nº	Área económica	Definición	Objetivo	Indicadores
9	Diversificación agrícola	Variedad de cultivos para consumo nacional y comercio exterior.	Aumentar el número de variedades cultivadas por hectárea.	Mayor oferta de la pequeña agricultura. Nuevos cultivos de exportación no intensivos en uso de la tierra.
10	Inversión extranjera directa	Transferencia de capital desde otros países para establecer empresas.	Mayor inversión privada en sectores emergentes.	Incentivo para capital de riesgo. Control de instrumentos de deuda y financieros.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, está el tema bastante polémico y politizado del rol del Estado en la economía. ¿Se necesita un Estado intervencionista o un Estado ausente que deja el funcionamiento de la economía según el libre juego de las fuerzas de mercado? Al respecto, debemos decir que el debate actual está gravemente contaminado. La idealización del Estado que llevó al gobierno del MAS a implementar proyectos económicos irracionales y altamente ineficientes en términos de productividad y competitividad, incitó a su vez a la radicalización de las posturas opuestas que plantean la dictadura del mercado. Al final del día, este tipo de polémicas son parte de un debate falso porque el desarrollo económico necesita tanto de la presencia estratégica del Estado como de una ‘sociedad con mercado’. Y para ello, hacen falta medidas correctivas desde ambos extremos.

Por el lado del Estado, la idealización de su intervención en la economía es un mal que debemos extirpar lo antes posible. Es el origen del gasto público no productivo que sirvió para la creación y financiamiento de decenas de empresas públicas deficitarias. La ineficiencia económica del Estado es demasiado preocupante, al grado que los rubros rentistas de altas tasas de utilidad como la minería estatizada (COMIBOL) reportan pérdidas en sus estados financieros. Los fallidos intentos de industrialización del litio son otra prueba concreta de la incompetencia económica del estatismo. Un problema crucial con el Estado interventor es la ausencia de riesgos y responsabilidades para los tomadores de decisiones. El riesgo económico y los costos de fracasar son reales para un empresario privado, pero cero o no existen para las autoridades y funcionarios públicos que administran las empresas

públicas. Por detrás de los proyectos productivos irracionales están gerentes despreocupados de los riesgos y pérdidas económicas. La presencia del Estado debería estar justificada únicamente por razones estratégicas (incubación de empresas, por ejemplo) y estar condicionada a tener responsabilidades sobre los riesgos que conlleva invertir en cualquier actividad empresarial.

Por el lado del mercado, la idealización del “libre mercado” es el otro mal a extirpar. Según los economistas creyentes en la “mano invisible”, los precios fijados según el libre juego de la oferta y demanda conducirán a la optimización del proceso productivo y a la distribución óptima de los ingresos entre los actores económicos. En consecuencia, dicen los economistas alineados, cualquier intervención debería limitarse a eliminar las imperfecciones o barreras a fin de reconstituir en todo momento la competencia en igualdad de condiciones. Pero, el principal problema con este razonamiento es que los actores económicos que entran en competencia no tienen el mismo poder económico y político, por lo que el libre mercado, aun con las imperfecciones corregidas, simplemente será funcional a lo preexistente y estará amoldado a las correlaciones de poder desiguales entre actores rentistas y no rentistas. Dicho de otro modo, al menos en el caso boliviano, el libre mercado es un mecanismo de reproducción del predominio de los sectores rentistas o extractivistas, por encima de los sectores no rentistas, por lo tanto, esta dinámica se contrapone a los objetivos de transformación para reducir la dependencia de los recursos naturales, incentivar el crecimiento de las economías no rentistas y diversificar la matriz productiva.

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO

Para empezar, los menos indicados para ser protagonistas de los cambios de interés nacional son quienes lucran con el atraso económico y el rentismo. Tenemos dos grandes grupos de este tipo: el Estado empresario y dueño de los recursos naturales, principalmente del gas natural; y el sector privado controlador de las rentas del agro mecanizado y mineras, principalmente agroexportación y oro. El primer grupo está investido de poder político y el segundo de poder económico, ambos tienen intereses particulares y comportamientos rentistas. Los políticos en

funciones de gobierno preferirán mantener el statu quo porque cualquier reforma económica representa una seria amenaza para su reproducción en el poder, mientras que el sector privado rentista utilizará su influencia sobre las instituciones políticas, económicas y sociales para resistir los cambios y reformas.

Tampoco sería lógico esperar cambios a partir de una coalición de ambos poderes. Las únicas alianzas que son de interés mutuo entre el poder político y el poder económico son las que están orientadas a reforzar el predominio de los rubros rentistas por encima de los rubros creadores de valor o riqueza. Casi siempre, la convergencia entre los gobiernos de turno y el sector privado rentista ha sido utilitaria para cuidar de intereses particulares, cortoplacistas y políticas económicas conservadoras. Una prueba por demás fehaciente ha sido el giro de 180 grados que dio el MAS en 2014, desde una postura radical en contra de las élites económicas, hacia un matrimonio duradero de conveniencia. El resultado de esta coalición no ha sido otra que el continuismo del MAS al mando del Estado rentista y la preservación de los privilegios económicos que acentúan el carácter rentista del sector privado.

Por lo tanto, los cambios y las soluciones para salir del atraso económico tienen que surgir necesariamente desde el “poder originario” del pueblo boliviano y no desde los poderes fácticos. Uno pensaría que las cosas ya funcionan de esta manera porque los planes de gobierno que se aplican han sido consentidos por la población y respaldados con el voto mayoritario de las elecciones generales; sin embargo, los planes de gobierno siguen siendo expresiones de intereses sectarios, no equivalen a una estrategia económica de carácter mandatorio y, por lo general, no sobreviven a las luchas intestinales de los partidos políticos y cambios de gobierno. Las propuestas de cambio deben formar parte integral de estrategias de desarrollo nacional que no pueden variar según el color partidario o la ideología de los gobiernos de turno. Por todo esto, otra manera de invocar el “poder originario” está contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE) que prevé los mecanismos y procedimientos necesarios para elaborar y adoptar mandatos vinculantes. El Referendo parece ser el mecanismo más apropiado para una consulta basada en el ejercicio de la democracia directa y participativa. Una consulta

ciudadana de este tipo tiene un sustento sólido en la CPE también que prevé de manera explícita que el Estado deberá conducir la economía mediante un “proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana” (art. 316.1).

POLÍTICA DE ESTADO PARA SALIR DEL ATRASO

Digamos fuerte y claro, Bolivia no tiene una “Política de Estado” para salir del atraso económico. No tenemos una estrategia, plan o programa nacional que esté por encima de los intereses y voluntades de los gobiernos de turno. Cualquier cambio de gobierno significa rupturas y discontinuidades. Los políticos empoderados no están obligados a preservar políticas económicas de mediano y largo plazo. Se supone que la CPE fija lineamientos estratégicos y orientaciones innegociables, pero el problema es que tales disposiciones en materia económica siguen siendo enunciados genéricos, contradictorios y relativismos sin anclajes firmes. En estas circunstancias, cualquier gobierno electo democráticamente, al estar ungido de legitimidad y legalidad, tiene amplias libertades para deshacer y rehacer los procesos económicos previos.

Las únicas políticas y medidas económicas que perduran en el tiempo y sobreviven a los políticos de turno son las que están en la raíz del problema y las que reproducen el rentismo. Entre estas podemos mencionar el congelamiento de los precios de los combustibles vigente desde hace dos décadas, el tipo de cambio fijo desde hace 13 años, el régimen tributario que premia a los que lucran con el atraso y castiga a los verdaderos creadores de valor, la falta de directrices fiscales para limitar los gastos corrientes del Estado, el endeudamiento público, el déficit fiscal y otros gastos discrecionales. ¿Por qué persisten estas medidas antieconómicas? Sencillamente, porque son convenientes para los intereses sectarios y cortoplacistas. Por ejemplo, la distorsión del precio de los combustibles se hubiera podido corregir oportunamente y a menor costo, al menos parcialmente, cuando empeoró la dependencia de las importaciones. Años después, el costo es y será demasiado alto, por la simple razón de que todo el sistema económico y cada uno de nosotros somos dependientes del combustible barato y subvencionado.

Entonces, un plan o programa para salir del atraso tiene que tener el estatus de “Política de Estado”. Se utiliza esta expresión para referirse a un conjunto de principios fundamentales, objetivos y acciones que deben servir de guía para dirigir el desarrollo de una nación. Una Política de Estado no tiene que estar asociada con un gobierno en concreto ni una ideología determinada. Las políticas de este tipo necesitan consenso y legitimidad porque acabarán afectando a muchos sectores sociales y ámbitos de la vida de las personas. Lidar con los desafíos estructurales requiere una planificación a mediano y largo plazo.

DISEÑO, FINANCIAMIENTO E INSTITUCIONALIDAD

Para imaginarnos el tamaño del desafío en términos de diseño, financieros e institucionalidad, tenemos una referencia histórica muy importante: el Plan Bohan de 1942. Y para tener una idea del desafío institucional tenemos que referirnos a la experiencia de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) ¹⁰, ente creado el mismo año (1942), justamente para implementar las recomendaciones del mencionado Plan.

En aquella época, el Plan Bohan estimó un presupuesto total de 88 millones de dólares para cuatro planes centrales: el plan vial, agrícola, irrigación y plan petrolero. Si expresamos estas cifras al valor actual (2023) podemos tener una mejor idea. Sabiendo que este presupuesto equivalía aproximadamente al 130% del valor total de las exportaciones anuales de la época, en cifras actuales estaríamos hablando de unos 15 mil millones de dólares. Un monto considerable para el tamaño de la economía nacional. Por eso mismo, los autores del Plan recomendaron implementar en varias etapas, fijando un presupuesto inicial de 26,1 millones de dólares para la primera etapa, lo que comparado con el tamaño de las exportaciones actuales equivaldría cerca de 5 mil millones de dólares de inversión. Aún por etapas, el desafío seguía siendo difícil. El presupuesto total del Plan Bohan de 88 millones equivaldría como un 35% del PIB actual. Solo para la primera etapa, habría reunir un presupuesto similar a la suma de las exportaciones de un año de gas natural y soya.

El presupuesto de la primera etapa (26,1 millones de dólares) estaba destinado para cinco tipos de inversiones: comunicación,

agricultura, petróleo, minería y salud. Otra manera de traducir a dólares actuales sería utilizando las tasas de inflación acumuladas en el tiempo, por lo que probablemente estamos hablando de unos 650 a 800 millones de dólares actuales. Una limitación que tenemos para hablar de cifras más precisas es que no existían estadísticas del PIB en la primera mitad del siglo XX. Preliminarmente, podríamos sugerir un punto intermedio y conservador, quizá entre 2,5 mil a 3 mil millones de dólares actuales como presupuesto de la primera etapa del plan. ¿Es alcanzable hoy en día? La respuesta es sí, teniendo en cuenta que anualmente el gobierno nacional gasta cerca de 800 millones de dólares solamente para pagar la Renta Dignidad. ¿Es financiable? De nuevo si, sabiendo por ejemplo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó recientemente un préstamo de 500 millones de dólares para pagar retroactivamente los gastos ejecutados por el gobierno nacional para cumplir una promesa electoral denominada Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos¹¹. Tomando otro parámetro de referencia, sería como el doble de la inversión ejecutada para la construcción de la planta de Bulu Bulu de fertilizantes de urea y amoníaco.

Para la ejecución de la primera etapa del Plan Bohan, en 1942 el gobierno nacional suscribió un “pacto social” para la creación de una Sociedad Anónima con el nombre de Corporación Boliviana de Fomento (CBF). Funcionó por 43 años, hasta que fue disuelto en 1986 por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en el marco de las reformas de la “Nueva Política Económica”. Una pregunta que todavía se plantean historiadores como Nigel Caspa es ¿Cómo sobrevivió la CBF a las coyunturas políticas y agitaciones sociales por más de cuatro décadas?¹²

La CBF tuvo como principal fuente de financiamiento los créditos del EXIMBANK de 15,5 millones de dólares equivalentes al 60% del presupuesto planeado por el Plan Bohan para la primera etapa. Otros 9 millones fueron aportes de capital de parte del gobierno boliviano a razón de 250 mil dólares mensuales durante los años 1942, 1943, 1944 y 1945. El resto del financiamiento tuvo como principales fuentes el Fondo de Fomento Gomero, establecido por la *Rubber Reserve Company*, el Fondo de Servicio Sanitario-Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos y el Fondo para Caminos del gobierno boliviano.

Aunque la experiencia de la CBF no estuvo libre de inestabilidades administrativas y desaciertos, sobre todo en los primeros 10 años, contribuyó decisivamente al desarrollo económico regional y nacional. Con una participación del sector público que difiere radicalmente de lo implementado por el MAS, promovió emprendimientos empresariales orientados a la generación de empleo. Entre las empresas más representativas destacan las fábricas de cemento (FANCESA), la planta de industrialización de leche (PIL), las plantas de refinación de azúcar (Guabirá y Bermejo), la planta de baldosas y cerámica (FABOCE), la fábrica de aceites comestibles de Villamontes, las fábricas de vidrios planos, los asentamientos dirigidos de Palos Blancos, entre otros. Complementariamente, el Estado cumplió las funciones de banca de desarrollo por varios años, mediante el Banco Agrícola, Banco Minero y Banco del Estado. Al día de hoy, estas fábricas siguen operando, lo que es un indicador positivo de los aciertos que tuvo el modelo implementado durante el siglo XX.

Este antecedente histórico aporta elementos valiosos para pensar y diseñar una nueva etapa de planificación para el desarrollo y —en términos del tema central de este libro— para planificar la salida del atraso económico. Haciendo un paralelismo, esta intención sería como la primera etapa del Plan Bohan.

A modo de lecciones de aprendizaje podemos rescatar los siguientes elementos:

1. *Planificación.* Se debe destacar la importancia de contar con diagnósticos sólidos, estudios de factibilidad y documentos de respaldo para identificar los programas y planes económicos. En ese sentido, el Plan de 1942 se tomó en serio la tarea de identificar metas concretas de mediano y largo plazo, los potenciales productivos del país y, quizá lo más importante, estableció como un principio fundamental que los intereses sectoriales o regionales deberían estar subordinados a los intereses nacionales. En otras palabras, nos dice que un plan económico no puede ser una simple sumatoria de reivindicaciones y demandas sectoriales, gremiales, regionales o sindicales, tal como sucede en la actualidad.

2. *Tiempo.* El Plan en cuestión recomendaba un periodo de implementación de 40 años, dividido en dos etapas para alcanzar las metas de mediano y largo plazo. Esto se cumplió casi al pie de la letra, ya que la CBF funcionó por 43 años, aunque mayormente ocupada en completar la primera etapa. Algunos componentes del Plan concluyeron tempranamente, como es el caso de la creación de las zonas de colonización dirigida de las tierras bajas.
3. *Presupuesto.* Si tomamos como referencia el financiamiento de 1942 actualizando según el tamaño de las exportaciones y las tasas de inflación acumuladas, podríamos estar hablando de un presupuesto situado en un rango entre 8 mil millones y 12 mil millones de dólares para un plan de desarrollo económico de similar alcance. En los años de bonanza del gas natural, bastaba reservar el ingreso de dos años para crear un fondo de desarrollo de esta magnitud. En actuales circunstancias, se tendría que destinar al menos la renta del gas de tres a cuatro años. Sabemos que las probabilidades de financiamiento serán menores si seguimos aplazando las reformas de gran alcance. Asumiendo que una primera fase de un plan de desarrollo económico demandaría unos 20 años, ante todo para salir del atraso, y la mitad del presupuesto de referencia, estaríamos hablando de una necesidad de financiamiento que aproximadamente alcanza entre 4 mil a 6 mil millones de dólares. Este monto es más que razonable e, incluso en medio de las dificultades económicas que siguen empeorando, sería viable y aceptable para el tamaño de la economía boliviana. En el cuadro de políticas económicas (arriba) hemos sugerido algunas fuentes de financiamiento relacionadas con la canalización de una parte de los fondos desde las economías rentistas hacia las economías no rentistas.
4. *Modelo institucional.* La CBF ha sido diseñada como un instrumento institucional de carácter público-privado para la implementación de los programas de desarrollo y los planes de inversión. Además de

realizar inversiones y otorgar préstamos orientados al sector industrial y manufacturero, la CBF tenía como finalidad la implementación de proyectos productivos que después de un tiempo de maduración tenían que ser transferidos al sector privado. Debido a que su principal mandato era el fomento productivo y no administrar las empresas y fábricas establecidas, tenía la obligación que alentar la compra por parte de inversores privados de los proyectos empresariales rentables y consolidados por la Corporación. Este diseño institucional difiere diametralmente de los planes del gobierno del MAS a la hora de crear empresas públicas. Mientras el actual Estado empresario no tiene intenciones de desprenderse de las empresas y fábricas públicas, en el pasado había claridad sobre el papel de fomento de la economía y las circunstancias en que deberían ser transferidos al sector privado. Los planes actuales del gobierno consisten en usar discrecionalmente los fondos públicos para crear empresas, patrimonio y mantener la propiedad y funcionamiento en manos del sector público. A modo de compensar la desatención del sector privado, se generaron mecanismos alternativos como el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Fondo Indígena. En el primer caso, hemos visto que el financiamiento se concentró en la agricultura de monocultivos; es decir, reforzó el modelo rentista. En el segundo caso, también hemos visto que el Fondo Indígena sirvió en última instancia solamente para la cooptación política de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias.

Resumiendo, para superar el rezago económico se requieren:

- i) un financiamiento entre 4 mil a 6 mil millones de dólares,
- ii) planes económicos de mediano plazo, de unos 20 años, y
- iii) un modelo institucional específicamente diseñado para tal propósito. Tras el cierre de la CBF en 1986, Bolivia careció de un marco institucional similar por cerca de 20 años (1986-2006). Es un vacío muy grande que en parte se debió a la profunda crisis económica de la época, y en parte se explica por la creencia de

que la “mano invisible” del libre mercado se encargaría de llevar al país por el camino del desarrollo y crecimiento económico. Entre los años 2006 y hasta el presente, casi otros 20 años, este vacío fue llenado por el llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” (MESCP), el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) creado para apoyar el desarrollo de las empresas estatales, las propias empresas estatales, el BDP, el Fondo Indígena y otros similares. Sin embargo, los fracasos están a la vista de todos los bolivianos.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONSENSO SOCIAL

Para el diseño y adopción de un plan para salir del atraso económico, una importante vía institucional de la que disponemos es el Referendo de mandato popular vinculante. Ya hemos señalado que al menos deberíamos tener 20 años como horizonte de planeación. También hemos indicado que un plan de estas características requiere: i) conformación de una comisión encargada del diseño y elaboración, ii) consenso social y mandatos vinculantes, iii) presupuesto planeado y fuentes de financiamiento, iv) diseño del modelo institucional para la implementación, entre otros aspectos.

Un proceso de planificación y consenso social, al menos debería tener cinco etapas:

1. *Etapla participativa.* Por iniciativa ciudadana, crear y dinamizar espacios de diálogo y debate con amplio involucramiento de la sociedad civil, incluyendo al sector público y sector privado. Idealmente, elaborar principios y lineamientos centrales sobre la naturaleza del plan, alcances, metas de mediano y largo plazo y resultados esperados. Los medios de comunicación y las plataformas digitales podrían jugar un rol decisivo para la formación de una corriente de opinión pública sobre la necesidad de encarar el problema de la maldición de los recursos naturales..
2. *Etapla organizativa.* Conformar gradualmente plataformas ciudadanas, aglutinadoras y facilitadoras de los procesos participativos. La idea es que las instancias

surjan de la etapa participativa y contribuya a discutir los procedimientos necesarios para la conformación de comisiones económicas independientes. Los términos específicos de este proceso deberían discutirse en esta etapa. Entre las responsabilidades de las comisiones tendría que priorizarse el recojo de las iniciativas ciudadanas y la elaboración de informes económicos para la identificación de los pilares fundamentales y estrategias para el desarrollo de la economía nacional.

3. *Etapas de elaboración del plan.* Otorgar a la comisión económica de independencia política, autonomía económica y técnica, para la preparación de un informe o plan exhaustivo, siguiendo los principios y lineamientos resultantes de los espacios de participación ciudadana de la etapa organizativa. Los contenidos mínimos del plan deberían estar compuestos por un diagnóstico económico riguroso, identificación de acciones estratégicas, metas, tiempos, indicadores de verificación, fuentes de financiamiento, entre otros.
4. *Etapas de consenso.* La propuesta de plan debería someterse a procesos previamente establecidos de socialización, retroalimentación, ajustes y elaboración de documentos finales para la consulta ciudadana. El gobierno nacional tiene las competencias para aprobar las leyes que hagan falta para organizar un referendo consultivo y la puesta en vigencia de los resultados.
5. *Etapas de implementación.* El plan aprobado debería tener un reconocimiento legal en calidad de “Política de Estado” y convertirse en un mandato vinculante para los gobiernos de turno. El propio plan tendría que establecer las medidas necesarias para su puesta en marcha, los diseños y mecanismos institucionales, las instancias de seguimiento, fiscalización y monitoreo de la implementación.

CIERRE

Al completar las últimas líneas de este trabajo, no puedo evitar el escribir en primera persona y pensar si acaso este texto no es otro “lamento boliviano” o si las propuestas sobre cómo salir del atraso no son una más de las narrativas de “realismo mágico”. Durante el tiempo que trabajé en este libro (2022-2024), me esforcé por no reproducir el mal hábito nacional de quejarnos de todo, echar la culpa únicamente a las fuerzas estructurales y, lo que sería peor, quedarse en la protesta sin pasar a la propuesta. Por eso, desde un inicio, la idea fue contribuir en la medida de lo posible a los planteamientos realistas y las acciones concretas que ya existen, lo cual no tiene por qué ser incompatible con compromisos por cambios estructurales.

Sin embargo, pasar de la protesta a la propuesta y de ésta a la acción no es algo sencillo ni un asunto de voluntad ciudadana o política. Aunque seguimos siendo una sociedad fracturada y rentista, tenemos avances que no deberíamos ignorar. Por ejemplo, a riesgo de equivocarme, puedo decir que hemos hecho bastante respecto a la cuestión histórica y estructural de las “Dos Bolivias”, una de blancos y otra de indios, en palabras de Felipe Quispe. Es bueno constatar que las nuevas generaciones de jóvenes de origen indígena no viven ya con la misma apremiante necesidad que tenían sus padres para ocultar su origen y apellido. Sería deshonesto no reconocer el aporte del MAS para el protagonismo político de los excluidos, al igual que sería un desacierto no admitir que, a cambio, los bolivianos hemos pagado un costo político (y económico) demasiado alto. Hemos convertido la política en una batalla sin sentido histórico.

También puedo decir que tenemos avances con respecto a un otro problema histórico y estructural: la ruptura entre el occidente y el oriente, entre “cambas” y “collas”. Desde que vivo en Santa Cruz y siendo de origen “colla”, tengo la firme percepción de que estamos tejiendo más cosas en común que las que nos separan.

Poco a poco, el discurso regionalista radical —llámese separatismo o federalismo— está quedando en el pasado, al igual que el ensimismamiento social de las élites cruceñas. Santa Cruz es un enclave regional insertado en el mercado nacional y global, supo construir el entorno de negocios más favorable que

tiene Bolivia cuando se trata de emprendimientos y economías de mercado, y al ser el principal polo de atracción para la migración interna, Santa Cruz es una sociedad en permanente transformación. Al haberse convertido en el departamento más poblado del país y un centro económico gravitacional, los cruceños, tanto los nacidos en la tierra de Ñuflo de Chávez como los “nacidos donde les dio la gana” saben que tienen un desafío del que no tienen escapatoria: pensar Bolivia, pensar más allá del regionalismo y proponer un proyecto país para Bolivia. Ya no hay lugar para vivir de espaldas a la realidad nacional.

Por su lado, en mi condición de “colla” puedo decir que poco a poco el occidente aprendió a reconocer y valorar positivamente los avances y logros del oriente, en particular, en materia económica. Debido a su situación de sede de gobierno, la economía de La Paz gira en torno a las actividades del sector público que, si bien genera empleo en el aparato estatal, por otro lado, no ha sido precisamente el mejor entorno para el crecimiento de economías no rentistas, mercados e inversiones del sector privado. Muchas empresas, fábricas y negocios financieros, al verse asediados y paralizados por las marchas y protestas permanentes, mudaron a Santa Cruz sus plantas de producción, sedes y oficinas centrales, lo cual está motivando autocríticas saludables entre los paceños y alteños sobre la ausencia de economías de mercado. El reconocimiento “colla” del aporte “camba” al crecimiento de las economías de mercado es todavía más meritorio, si tomamos en cuenta que su terca desconfianza en los mecanismos de mercado estuvo más que justificada porque, precisamente, los “collas” son quienes acabaron pagando la mayor parte de los costos socioeconómicos causados por las reformas neoliberales de los 90². Su cambio de actitud es una oportunidad para construir verdaderas “sociedades con mercado” y el “recelo colla” un recordatorio de los peligros que entraña el “libre mercado”.

Habría que agregar a todo esto que cada vez más bolivianos cabalgan entre “los dos mundos”, entre el occidente y el oriente. En parte, esta dinámica de integración nacional es el resultado del Plan Bohan, de los programas de reasentamientos de la época del Consejo Nacional de Reforma Agraria, de los proyectos económicos de integración nacional y de la actual interdependencia de las economías regionales del occidente y

el oriente boliviano. Al parecer, el boliviano promedio es quien viaja más por el país, hace negocios y conoce de primera mano las distintas realidades. No es exactamente el caso de los personajes políticos más conocidos o de quienes ocupan puestos claves en el gobierno. Muchas de las autoridades que manejaron y manejan la economía de nuestro país ni siquiera tienen antecedentes de experiencia laboral fuera del lugar donde nacieron. El primer mandatario y sus colaboradores más cercanos no recorren libremente hace años las calles de las principales ciudades del país. En Santa Cruz, sus visitas oficiales se restringieron a la mínima expresión, por lo general no pasan de reuniones fugaces dentro del hangar presidencial del aeropuerto, en las instalaciones enclaustradas de YPFB o más allá de visitas furtivas a algunos poblados rurales.

Mi punto es que los elementos unificadores que tenemos, así sean prematuros, son fundamentales para proyectar las transformaciones. No tenemos por qué dibujar el futuro de Bolivia sobre una hoja de papel en blanco. Los pasos que hemos dado no son logros menores. Tenemos un antes, avances en cuanto a cuestiones históricas y estructurales y nuevos puntos de partida. Ahora, el reto que nos toca asumir es dejar de lamentarnos, levantarnos de las caídas y alzar la mirada más allá del cortoplacismo.

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de los siete capítulos, hemos expuesto los principales elementos, causas y consecuencias de la “maldición de los recursos naturales”. Hemos constatado que este fenómeno no es reciente o aislado, sino que constituye una parte fundamental de nuestra historia económica. A pesar de que somos un país rico en recursos naturales, no supimos construir un aparato productivo fuerte y diversificado. Nuestro sistema económico tiene fallas estructurales, componentes mal ensamblados y la consecuencia obvia es el funcionamiento defectuoso. Es como una casa construida sobre cimientos endeble, con fallas de diseño, paredes agrietadas, goteras en el techo; en suma, material de mala calidad por todo lado. Así como no hace falta ser arquitecto para caer en cuenta que los problemas son serios, tampoco hace falta ser economista para darnos cuenta que el aparato productivo nacional no brinda seguridad económica ni está acondicionado para soportar tormentas.

El retorno de los apuros económicos confirma una vez más que los múltiples problemas están eslabonados, se retroalimentan entre sí, y tienden a perpetuarse en el tiempo. Forman un círculo vicioso del que no hemos podido escapar. La renta de los recursos naturales acentúa la posición dominante de las economías rentistas o extractivas, mientras que las economías creadoras de valor siguen abandonadas a su suerte y sufriendo problemas de crecimiento. Ahora que la crisis toca la puerta de los bolivianos una vez más, el gobierno está haciendo lo mismo de siempre: patear para adelante los problemas económicos.

¿Por qué no podemos romper el círculo vicioso o la maldición de los recursos naturales? Por varias razones, sin duda. En tiempos de penurias, cuando reina la confusión o cuando

los ánimos están exaltados, por lo general estamos inclinados a buscar culpables y enemigos entre nosotros mismos. Es más, las cosas pueden empeorar porque no faltan quienes buscan aprovecharse del mal momento. Como reza la sabiduría popular, “en tiempos de crisis, los charlatanes y los estafadores se multiplican”. Por eso, lo primero que deberíamos evitar es actuar impulsivamente; en lugar de ello, respirar, recuperar la calma y aclarar nuestros pensamientos. Lo segundo sería no dejarnos seducir por los que se aprovechan de la situación y lucran en río revuelto. Pero estos pasos apenas son el inicio. Haciendo uso de las herramientas analíticas y conceptuales de la economía, hemos visto que estamos obligados a redoblar la apuesta cuando los problemas económicos empeoran y trascienden hacia lo político, social y cultural.

Una muestra de que el rentismo llegó a propagarse más allá de lo económico es el papel influyente que tiene en el campo político. Hemos constatado cómo la abundancia de la renta degradó el desempeño de la política. El rentismo gubernamental carcomió severamente la eficiencia económica del Estado y la institucionalidad pública, distorsionó el funcionamiento de los mercados y empeoró las prácticas clientelares. Hemos centrado la mirada en tratar de entender las relaciones entre el rentismo y las políticas económicas, lo que en contrapartida significó que otros temas de carácter político y social quedaron fuera del alcance de este libro, por lo que harán falta estudios específicos, por ejemplo, sobre las conexiones entre el rentismo y la política. Al hablar de los problemas económicos, hemos entendido que también tenemos que hablar de atraso político.

Finalmente, si se tendría que resumir en una sola frase los elementos centrales de este libro, esta sería que el rentismo y el atraso económico son los ejes centrales de todos los problemas de Bolivia. También son la consecuencia de todos los problemas. Causa y efecto a la vez. La maldición de los recursos naturales no es únicamente un fenómeno económico sino también político. No está en duda que los bolivianos queremos extirpar de raíz todos estos males, pero tal como hemos advertido tempranamente, existe una minoría —pequeña, pero empoderada— que se opone, esa minoría que lucra y se beneficia con el modelo económico vigente. Los que controlan la renta, usan y seguirán utilizando su poder

económico y político para que el modelo vigente no muera en Bolivia.

Por todo lo dicho, para empujar los cambios en la misma dirección de manera más decidida, importa demasiado que todos hablemos de economía sin ser economistas.

REFERENCIAS Y NOTAS

INTRODUCCIÓN

1. Véase el reportaje en Clarín: «Lamento Boliviano»: Un lamento boliviano que nació en Perú, 09.02.2015. Disponible en <https://goo.su/3k4o9>
2. Véase la letra de “Lamento boliviano” en: <https://goo.su/jIszIx7>
3. Entre 1982-1985, Bolivia ha sido el primer país contemporáneo que experimentó la hiperinflación más elevada y prolongada. Para el año 1985, alcanzó una tasa inflacionaria de más de 11.000% en promedio. Generalmente se considera que existe hiperinflación cuando la subida descontrolada de los precios sobrepasa al menos una vez un índice mensual de 90% o cuando supera una tasa de 1.000% anual.
4. Banco Central de Bolivia- BCB (2024). Soberanía Monetaria, Estabilidad Macroeconómica y Desarrollo Económico y Social: Políticas Monetarias entre 1985 y 2000. Vol.1; La Paz, Bolivia: BCB. Obtenido de <https://goo.su/zGLiLt>
Morales A., Juan Antonio (1986). Estabilización y nueva política: Económica en Bolivia, Documento de Trabajo, No. 09/86, La Paz, Bolivia: Universidad Católica Boliviana, IISEC.
5. El Movimiento al Socialismo se fundó en la ciudad de Santa Cruz en 1995, durante el Congreso Tierra, Territorio e Instrumento Político, en el que participaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB; la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, FNMCB-BS; la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, CSCB; y la Central Indígena del Oriente de Bolivia, CIDOB.

6. Días, M. (2024). Entrevista al exvicepresidente Álvaro García Linera publicado por La Razón: García Linera dice que la primera fase del Estado Plurinacional está en el fin, 2024. La Paz, Bolivia: La Razón. Disponible en: <https://rb.gy/z8jrfl>
7. Collier, P. (2008). El club de la miseria: Que falla en los países más pobres del mundo (Ensayo | Historia). Editorial: Turner, 2008.
8. Ver más de la Ley de Exvinculación de 1984: <https://goo.su/rBYg4>
9. Urioste M. (2003) La reforma agraria abandonada: Valles y Altiplano. Editorial: PLURAL, Editores: CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
10. Véase en reportaje de ERBOL: ¿Bolivia avanza hacia la industrialización con sustitución de importaciones?, 2019. Disponible en <https://goo.su/XDIz>
11. Morales, R. (2020) El atraso de Bolivia. ¿Cuándo y por qué Bolivia se atrasó en su desarrollo? La Paz, Bolivia: CIEES Econometría.
12. Ha-Joon, C. (2012). 23 cosas que no sabías del capitalismo. Traducción Jofre Homedes Beutnagel. Editorial DEBATE. Traducción Jofre H.B.
13. Surge a finales de 1940 y se desarrolla en 1950, también conocida como neo estructuralismo. Esta escuela del pensamiento se basa en tres ejes teóricos: i) teoría de la economía internacional (industrialización como sustitución de importación); ii) teoría estructuralista de la inflación y iii) teoría del Estado.

1. EXPLORANDO EL TERRENO: MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES ECONÓMICAS

1. García Marquez, G. (1976). Cien años de soledad. Editorial: Sudamericana. Edición: Buenos Aires.
2. Marwan, A. y James B. (2023). Natural resource curse: A literature survey and comparative assessment of regional groupings of oil-rich countries. Resources Policy. Vol.84. Revista: El Sevier.

3. Auty, R. (1993). *Sostener el desarrollo en las economías minerales: la tesis de la maldición de los recursos* (1ª ed.). Rutledge. London.
4. Corrocher, N. y Lenzi, C. y Deshares, M.L. (2020). The curse of natural resources: an empirical analysis of European regions. *Regional Studies*. Vol. 54. 1-15.
5. The Economist (1977). 'The Dutch disease', *The Economist*. Pág. 82-83
6. Brincíková, Z. (2016). The Dutch Disease: An Overview. University of Economics in Bratislava, Slovak Republic. *European Scientific Journal*, 2016.
7. Mazzucato, M. (2019). *El estado emprendedor: Mitos del sector público frente al privado*. Editorial: Taurus. Traductor: Francisco Javier San Julián Arrupe.
8. Véase en reportaje de National Geographic: El tsunami de 2004 en el Índico: el más devastador de la historia. España: National Geographic, 2022. Disponible: <https://goo.su/1kBb0U>
9. Pérez, C.E. y Sunkel, O. y Torrez, O.M. (2012). Raúl Prebisch (1901-1986): Un recorrido por las etapas de su pensamiento sobre el desarrollo económico. CEPAL: Naciones Unidas. Disponible en: <https://goo.su/epTUz>
10. Véase en reportaje de Diario La República: ¿Subirá la producción de petróleo venezolano por las medidas declaradas por EE.UU.?, 2023. <https://goo.su/i1QgZi>
11. Prebisch, R. (1981). La teoría de la dependencia en el contexto de la crisis mundial. *Revista de la CEPAL*, (13), 7-16.
12. Sachs, J. y Warner, M. A. (1997). Natural resource abundance and economic growth (No. 5398). National bureau of economic research.
13. Manzano, O., y Rigobón, R. (2021). Resource Curse or Debt Overhang? National Bureau of Economic Research.
14. Gylfason, T (2001). "Natural resources, education, and economic development," *European Economic Review*, Elsevier, vol. 45(4-6), pages 847-859, May.

15. Bustelo, P. (2019). Los cuatro dragones asiáticos: Economía, política y sociedades. Madrid: Alianza Editorial.
16. Entre varios aportes valiosos, podemos mencionar “La economía boliviana de los últimos cincuenta años: reflexiones sobre el desarrollo de largo plazo” (2014) de Juan Antonio Morales, “El atraso de Bolivia” (2020) de Rolando Morales, “La trampa del rentismo y cómo salir de ella” (2011) de Roberto Laserna, “Bolivia: Una nueva mirada al rol de los recursos naturales en el crecimiento económico” (2020) de Manuel Olave y otros. Asimismo, existen varias publicaciones promovidas por centros de investigación como Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung en Bolivia, Universidad Católica Boliviana, CIDES-UMSA, CEDLA, CEDIB, Fundación TIERRA, entre otros.
17. Christophers, B. (2020). Rentier Capitalism: Who Owns the Economy and Who Pays for It.? London-New York: Verso.
18. Mazzucato, M. (2018). El valor de las cosas: quién produce y quién gana en la economía global. Editorial: Taurus. Traductor: Ramón González Férriz
19. La escuela ortodoxa y la escuela heterodoxa hacen referencia a corrientes de pensamiento económico que difieren entre sí en algunos aspectos. La primera califica la economía como una ciencia exacta y racional con resultados previsibles, mientras que la escuela heterodoxa considera la economía como una ciencia social, por lo que los comportamientos económicos pueden ser imprevisibles y las interpretaciones subjetivas. La economía ortodoxa utiliza datos y análisis estadísticos y la heterodoxa observa otras variables como las instituciones, historia, estructura social, política, entre otros. El pensamiento ortodoxo es el mainstream que predomina entre los economistas.
20. Véase en el libro “el valor de las cosas” de Mariana Mazzucato.
21. Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. (p. 331). London: Macmillan.
22. Véase en reportaje de Los Tiempos: Bolivia y sus recurrentes elefantes blancos, 31.05.2021. Obtenido de <https://goo.su/Cpg5p>

23. World Bank Open Data- BM (2024). Estadísticas del Producto Interno Bruto de Bolivia (2022). Obtenido de <https://shorturl.at/exyIW>
24. Van Rompaey, C. y Metreau, E. y Hamadeh, N. (2023). Clasificación de los países elaborada por el Grupo Banco Mundial según los niveles de ingreso para el año fiscal 24 (julio, 2023- junio, 2024). Banco Mundial: Blogs del Banco Mundial.
25. Instituto Nacional de Estadísticas- INE (2024). Estadísticas del parque automotor de Bolivia, según departamento, (2022). Obtenido de <https://goo.su/2klSTX>
26. Véase en Portal Jurídico: <https://goo.su/gSlXSTO>

2. HERENCIA HISTÓRICA: EL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR DEL SIGLO XX

1. Pensilvania, D. (2007). Path Dependence: A Foundational Concept for Historical Social Science. *Cliometrica*: 1:91-114. Berlin: Springer
2. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) fue creada mediante Decreto Supremo 3196, en fecha 2 de octubre de 1952 y antecede a la nacionalización de las minas del 31 de octubre del mismo año. Fundación Jubileo (2018). Bolivia: “Corporación Minera de Bolivia” -COMIBOL, desempeño y desafíos actuales. Serie de debate público 67. La Paz, Bolivia: Jubileo. Obtenido de <https://onx.la/1687f>
3. Prieto, M. (1985). Paz Estenssoro fue elegido presidente de Bolivia en la segunda vuelta con los votos de las minorías de izquierda. *El País*. Obtenido de <https://elpais.com>
4. Véase en reportaje de La Razón: Sachs, Goni y el 21060. Obtenido de <https://goo.su/NvTCSF>
5. Cajías de la Vega, M., (2010). Crisis, diáspora y reconstitución de la memoria histórica de los mineros bolivianos: 1986-2003. *Si Somos americanos*, Revista de Estudios Transfronterizos, X (2), 61-96.

6. Fondo Monetario Internacional- FMI (2024). Debt relief under the Heavily Indebted Poor Countries Initiative. (1996). Alivio de la deuda en el marco de la iniciativa para los países pobres muy endeudados (ppme). Obtenido de <https://goo.su/ExEhc>
7. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- MEFP (2024). Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 2014. Obtenido de <https://goo.su/wuYv>
8. Muriel, H.B. (2017). Historia de los patrones comerciales de Bolivia, 1900-2015. Cap 3. En Un siglo de economía en Bolivia Tomo I, (1900-2015). Konrad Adenauer Stiftung.
9. Arce, R. (1977). Influencia de las empresas transnacionales en la minería del estaño: el caso de Bolivia. CEPAL, documento de trabajo N° 4, julio de 1977
10. Zephyr, F. y Musacchio, A. “El mercado internacional del caucho natural, 1870-1930”. Enciclopedia EH.Net. Editada por Robert Whaples en 2008. Obtenido de: <https://goo.su/Bvig>
11. Ayub, M. y Hashimoto, H. (1985). The Economics of Tin Mining in Bolivia. Washington D.C: Banco Mundial
- Schurz, L. W. (1921). Bolivia: A Commercial and Industrial Handbook. Washington: Bureau of Foreign and Domestic Commerce.
12. Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015) Tomo I. (2019). Bolivia: Historia de los patrones comerciales de Bolivia (1900-2015). Pág. 138, cap. III. Disponible en: <https://onx.la/0bbd8>
13. Véase en The Economist: FDR y el New Deal, 1999. Obtenido en <https://goo.su/bClpa>
14. Gumucio, M. (1978). Historia gráfica de la Guerra del Chaco. Ediciones Populares Ultima Hora
15. Flores, G. (2017) Agricultura. Estructura agraria y actores en conflicto (1900-1952). En Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015). Tópicos de historia económica, Konrad Adenauer Stiftung e.V. KAS
16. Bohan, M. (1942). Informe de la Misión Económica de Estados Unidos a Bolivia. Plan Bohan 1942. ‘Programa de Fomento: Trazo de un sistema caminero, fomento al sector productivo,

- estudios de construcción de obras en zonas en conexión con el desarrollo del cultivo en justificación a las inversiones''. Traducción al castellano por G. V. Bilbao la Vieja, agosto 3, 1943, 7. Pág. 13 La Paz: Plan Bohan
17. Bohan, M. (1942). Informe de la misión económica de los Estados Unidos. La Paz: Plan Bohan
 18. Fifer, V. (1982). The Search for a Series of Small Successes: Frontiers of Settlement in Eastern Bolivia. *Journal of Latin American Studies*. También en: Urioste, M. y Pacheco, D. (2001). Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX. La Paz, Bolivia: PIEB.
 19. Montenegro, D. y Guzmán, A. (1999) Inversión y productividad en el sector agrícola-agroindustrial boliviano: caso de la agricultura comercial período 1985-1998 Obtenido de: <https://onx.la/f85f3>
 20. Decreto Supremo N.º 21060, 29 de agosto de 1985. Capítulo V. Título IV. Bolivia 1985: Corporación Boliviana de Fomento. Disuelto por normativa en 1986, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
 21. Omar, V. C. (2017). Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015) Tomo II. Obtenido de <https://onx.la/34d58>
 22. Yacimientos Petrolífero Fiscales Bolivianos- YPFB (2024). Reseña histórica sobre su creación. Disponible en: <https://goos.u/jkYuNM1>
 23. Véase en: Un siglo de Economía en Bolivia (1900-2015) Tomo I. (2017). Período 1900-1930. Pág. 164.
 24. Comisión Económica para América Latina, CEPAL (2024). Análisis y proyecciones del desarrollo económico: IV el Desarrollo económico de Bolivia, 1960. Realizado en el Departamento de asuntos económicos y sociales México 1958. Disponible en la biblioteca de Las Naciones Unidas, ONU.
 25. Colque, G. (2015) Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano. Fundación TIERRA.

26. Morales, Juan Antonio (1986). Crisis y política económica en Bolivia de 1982 a 1985, Documento de Trabajo, No. 08/86, Universidad Católica Boliviana, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), La Paz
27. Muriel, H. B. y Barja G. (2006). Inserción Internacional en Bolivia: Estrategias, Resultados y Perspectivas. La Paz: Maestrías para el Desarrollo y Banco Interamericano de Desarrollo. Pag 157, cap. 3.
28. Villegas Q. C. (2004). Exportación de Gas Natural; Privatización de la Industria Petrolera en Bolivia: Trayectoria y Efectos Tributarios. La Paz: Plural Editores y CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo.
29. Ministerio de Minería y Metalurgia, (2022). Dossier estadístico del sector minero metalúrgico, 1980-2021. La Paz, Bolivia. Obtenido de web: www.mineria.gob.bo
30. El Instituto Nacional de Colonización se crea con el objetivo de facilitar la tramitación, distribución y titulación de tierras en zonas específicas para su colonización, el año 1965.
31. Se usa para identificar a los componentes de una corriente de pensamiento que nace en Latinoamérica en protección de la CEPAL a finales de la década de 1940, sus principales exponentes son: Raúl Prebisch, Celso Furtado, Anibal Pinto, Ricardo Bielschowsky, Miguel Torres, Alicia Bárcena, entre otros. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2024). 75 años de la CEPAL y el pensamiento cepalino, y décadas de 1950: Orígenes de la CEPAL y los años cincuenta: modelo centro-periferia e industrialización Disponible en <https://goo.su/7zpaLv3>
32. Prebisch, R. (2012). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Chile: CEPAL Disponible en <https://goo.su/hfEz6>
33. Prebisch, R., y Cabañas, G. M. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. El Trimestre Económico. <https://goo.su/Sxpuo8>

34. Peres, J. (2015). Avances y desafíos en la historia económica de la Bolivia independiente. Tinkazos vol.18 no.37.
35. Grebe, H. (2017). Los ciclos de la economía mundial y el desarrollo de Bolivia. En un siglo de Economía en Bolivia (1900-2015) Tomo I. (2017). KAS.
36. Banco Agrícola de Bolivia fue una más de las instituciones que terminó con resultados deficitarios. Se creó en los años 70 con la finalidad de dar soporte al sector agropecuario sus operaciones finalizaron en 1991. Posteriormente, se crearon fondos y programas en beneficio del productor campesino. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas- UDAPE (2024). “Sector Agropecuario de Bolivia” 1990-2004. Obtenido de <https://www.udape.gob.bo/>
37. Las semillas genéticamente modificadas son alteraciones genéticas, que se llevan a cabo en laboratorios, trayendo consigo consecuencias para el consumo en la sociedad. Empleando a éstos, otros químicos conexos, principalmente el herbicida “glifosato”. Colque, G. (2022). Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025”. La Paz, Bolivia: TIERRA.
38. La “década perdida”, es un término que fue acuñado por la CEPAL, en referencia a 18 países de América Latina con elevado endeudamiento con las bancas privadas, lo que provocó la caída del crecimiento económico, elevadas tasas inflacionarias, y volatilidad en el tipo de cambio. Arancibia, J. (2000). América Latina: aspectos de la década perdida. (1980-1988). Disponible en: <https://onx.la/ff157>

3. EL MODELO DEL SIGLO XXI: RENTA PETROLERA, AGRÍCOLA Y MINERA

1. Escobar, E. M. (1998). Y2K (terror milenarista). Disponible en: <http://surl.li/sjxuu>
2. Véase en reportaje El País: Banzer renuncia a la presidencia de Bolivia. Obtenido de <https://goo.su/0XPj8>

3. Véase en reportaje de AGUALIBRE: La guerra del agua en Cochabamba, 2000. Obtenido de <https://goo.su/nS5M0A1>
4. Kruse, T. (2005). Sindicato y nuevos movimientos sociales en América Latina: La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia: Terrenos complejos, convergencias nuevas. Enrique de la Garza Toledo (compilador). Editorial: Colección grupos de trabajo de CLACSO, Buenos Aires: Argentina.
5. La Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) fue fundada en 1997 y llegó a afiliar a más de 100 organizaciones de regantes del valle cochabambino.
6. Cúneo, M. (2011) Felipe Quispe, el último Mallku. El Viejo Topo/ septiembre 2011
7. En el año 2000, Banzer congeló los precios por litro de la gasolina en 3,31 bolivianos y el diésel en 3,12 bolivianos.
8. Régimen Agropecuario Unificado, consiste en el pago anual de impuestos de manera simplificada (IVA, IT, IUE y RC-IVA), por toda actividad agrícola, pecuaria, avicultura, apicultura floricultura y piscicultura.
9. Véase Memoria 2005 de Empresa Petrolera Andina S.A. Obtenido en <https://shorturl.at/eBHO5>
10. Aprobado por la ley de Hidrocarburos N° 3058 en mayo de 2005. Es un porcentaje que se cobra sobre el valor total de la producción de hidrocarburos y se destina al Estado boliviano. La alícuota (IDH), que es el treinta y dos por ciento (32%), se transfiere a las gobernaciones, municipios, prefecturas, universidades y el Tesoro General de la Nación.
11. Arce C. (2014). Industrialización en el proceso de cambio. La modernización populista del MAS. La Paz, Bolivia: CEDLA. Disponible en <https://goo.su/uNM9>
12. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, (2024). Rendición pública de cuentas final, 2023. Obtenido en <https://goo.su/JyLjwTL>
13. Disponible en <https://shorturl.at/lyDY2>

14. Véase en portal web de EBIH: Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburo, <https://goo.su/0RNsce>
15. Véase en reporte Agencia boliviana de Información, ABI. EMAPA proveerá 3.000 toneladas iniciales de aceite de soya para la producción de biodiésel en Santa Cruz. 28.03.2024 Obtenido de <https://goo.su/0VcXPg>
16. Urioste, M. (2011). Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia. La Paz. Bolivia: Fundación TIERRA.
17. Véase en reportaje El Deber: Etanol de sorgo, el biocombustible del futuro en Bolivia, impulsado por Granosol, 29.04.2024, Obtenido de <https://goo.su/QoXNl>
18. Calle, A. y Bustos, P. (2019) Minería en Bolivia: Implicancias en el comercio y producción. Documento de trabajo N° 07/2019. BCB
19. Zaconeta, A. (2022) La bonanza del oro en Bolivia: entre la asimetría y el dejar hacer. CEDLA, disponible en <https://shorturl.at/mwCR7>
20. KPMG (2016) ‘‘Litio: una oportunidad de crecimiento y desarrollo regional’’. Prensa Energética, 2021. CABBA, Argentina. Página 33, Capítulo: América Latina y la oportunidad de Litio.
21. Véase en reportaje BBC News Mundo: Litio en Bolivia: por qué el país con las mayores reservas de este valioso recurso tiene tantos problemas para explotarlo. 19.05.2020 Obtenido de <https://goo.su/YENp>
22. CEPAL (2023) Extracción e industrialización del litio: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe. También véase en reportaje Bloomberg: Cuatro países producen más del 96% del litio del mundo: dos son latinoamericanos. 13.07.2022 Obtenido de <https://goo.su/TZeO2yD>
23. Véase en reportaje El Deber: ministro Montenegro dice que hay estabilidad de precios y proyecta ingreso de \$us 576 millones por exportación de carbonato de litio, 19.03.2023 Obtenido de <https://goo.su/bPfEK19>

4. LOS MALES ECONÓMICOS

1. Véase en reportaje DW ACTUALIDAD: Bolivia inaugura su primera planta de biocombustibles, 26.03.2024. Obtenido de <https://goo.su/93Z8Gro>
 2. Véase la página web de UNCTAD, disponible en <https://unctad.org/>
 3. United nations conference on trade on development- UNCDAT (2024). The State of Commodity Dependence 2023. Disponible en <https://goo.su/aXB6sp>
 4. Instituto Nacional de Estadísticas- INE (2024). Informaciones estadísticas de PIB per cápita (2000-2022). Obtenido de <https://goo.su/ZwLmj>
 5. Al-Shammari, N., Al-Hossayan, N., y Behbehani, M. S. (2018). Diagnosing the curse of natural resources in Kuwait. Journal of Economic and Administrative Sciences. Pág. 153–171. <https://doi.org/10.1108/jeas-06-2017-0052>
 6. International Monetary Fund. (2023) – Datos de GDP per cápita, current prices. (2000-2022). Disponible en: <https://goo.su/o5ae>
 7. Pollin, R. “Análisis de la política económica de Clinton”, New Left Review, núm. 4, Madrid, Akal, septiembre-octubre de 2000, pág. 15-41.
 8. El Banco de Desarrollo Productivo – BDP, constituida como una sociedad anónima mixta, iniciando sus operaciones en 2007, con un capital de 90 millones de dólares, dependiente de Nacional Financiera Boliviana- NAFIBO, y Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo- FONDESIF. Al 2022 el 80% de las acciones es del Estado boliviano y el 20% del Banco de Desarrollo de América Latina- CAF.
- Banco de Desarrollo Productivo- BDP - SAM. (2024). Banco de Desarrollo Productivo - BDP - SAM. Disponible en <https://www.bdp.com.bo/>
9. Véase en informe nacional de Coyuntura: Fundación Milenio, “AMETEX. Historia de un emprendimiento”. N° 202, 12.07.13.

10. Rojas, C, B. (2014). En los caminos de la “economía plural”: Hacer empresa pública desconociendo los derechos de los trabajadores 2015. La Paz, Bolivia: CEDLA. Disponible en: <https://goo.su/fvPUK>
 11. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural- MDPE (2024). Informe especial: EMATEX vs ENATEX, 2015. Santa Cruz, Bolivia: UDAPRO
 12. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, un beneficio suspendido por Estados Unidos a Bolivia en 2008, por no cumplir con algunas condiciones acordadas como “la falta de cooperación para la lucha de antidrogas”.
 13. La CAF tiene como función actuar como intermediario financiero, está conformada por 19 países de América Latina y el Caribe, España, Portugal y 13 bancos privados latinoamericanos.
- Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF, (2024). CAF capitaliza el 20%, del Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia, 2022. Obtenido de <https://goo.su/mXhUBy>
14. Banco de Desarrollo Productivo- BDP SAM (2024). Informe: Balance Social, gestión 2022, BDP. Pág. 17- Introducción Objetivos estratégicos, BDP''. Obtenido de <https://goo.su/XyQqvn>
 15. Véase en reportaje Newstime. Revelan que la familia Barbery Coca está involucrada en créditos impagos, irregularidades e influencias, 2023. Disponible en <https://newstime.bo>
 16. Véase en reportaje La Razón: Al cierre de 2023, las reservas internacionales cayeron a \$us 1.709 millones, según BCB, 4.01.2024. Obtenido de <https://goo.su/bbaGt>
 17. Véase el reportaje de El Deber: En Bolivia crece el área de cultivo, pero se estanca el rendimiento de producción de alimentos. 14.04.2024

5. LOS MALES POLÍTICOS

1. Lahera, P.E. (2004). Políticas y políticas públicas en los procesos de reforma en América Latina. Proyecto que se llevó a cabo por la CEPAL, con el apoyo de Francia. Editorial: CEPAL.
2. Gonzales, O. J.L. (2007). El rentismo y la construcción de problemas de investigación en ciencia políticas. Universidad Internacional de Andalucía: España.
3. Ross, M. (2001). “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics, vol. 53, no. 3, pp. 325-361.
4. Sistema de Impuestos Nacionales- SIN (2024). Memoria institucional 2020; Recaudación tributaria de Bolivia 2008. Bolivia: SIN. Obtenido de <https://goo.su/tUG3f>
5. Véase en FAOSTAD: Decreto Supremo N° 24.463 - Régimen Agropecuario Unificado, 1996. Obtenido de <https://goo.su/x6wLbC>
6. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- MEF (2024). Boletín económico: Ingresos tributarios, 2020. Año 7 - N° 11 – 2021. Disponible en <https://goo.su/pxSGP>
7. Colque, G. (2023). El secreto del modelo de desarrollo cruceño. La Paz, Bolivia: TIERRA. Obtenido en <https://goo.su/37T7EX2>
8. Ley 535 de 2014. Ley de Minería y metalurgia, por objeto regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros. Revocando otras leyes y Decretos que se aprobaron en 1997 (ley 1777; DS 29.117; DS29.164; ley 3787; Ley 3720). Obtenido de <https://goo.su/CWUmUEB>
9. Pérez, D. (2024). Oro, una riqueza que genera desigualdades. La Paz, Bolivia: CEDLA. Disponible en <https://cedla.org/noticias2/oro-una-riqueza-que-genera-desigualdades/>
10. Véase reportaje de Opinión: Mineros toman la Paz para reducir la alícuota del impuesto del oro, 25.10.2022. Obtenido de <https://goo.su/WktU>

11. Banco Central de Bolivia -BCB. (2024). Boletín, 2023. N°68 de Bolivia: “Reservas Internacionales”. Disponible en <https://www.bcb.gob.bo/>
12. Está compuesto por las principales organizaciones matrices nacionales: la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia - CSCIB, Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” - CNMCIOB-“BS”, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano - CIDOB y Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ, además de la diversidad de organizaciones afiliadas.
13. El Programa fue creado en el 2007 por durante el gobierno de Evo Morales con el fin de apoyar en la implementación de proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social. El programa es dependiente del Ministerio de la Presidencia y opera a través de la UPRE.
14. Unidad de Proyectos Especiales- UPRE (2024). Plan Estratégico Institucional, 2016. Institución dependiente del ministerio de la Presidencia de Bolivia. Obtenido de <https://goo.su/fU5rghq>
15. Véase en reportaje El Deber: Rivera, D., (2023). Ni Bolivia Cambió, ni en Evo cumplió: La investigación de Acceso Investigativo y Connectas, en alianza con ERBOL, El País y El Deber.
16. Foronda, M. E. A. (2022). Impacto de la nacionalización de hidrocarburos en las exportaciones de gas natural y el PIB de Bolivia, periodo 1996-2012. Economía & Negocios, 4(1), 41–62.
17. Ministerio de Hidrocarburos y energía- MHE (2024). Reporte: “ENDE cierra el 2023 con una utilidad de Bs 1.037 millones y asegura aporte al pago de los bonos sociales”. Disponible en: <https://goo.su/8RaFoG>
18. Véase en reportaje Infodefensa: Morales ordena incluir la wiphala en el uniforme militar y cambia la arenga castrense por una frase del Ché, 13.03.2010. Obtenido de <https://goo.su/ET0tM>

19. El Banco del Alba está integrado por siete países: República Bolivariana de Venezuela, República de Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, la Mancomunidad de Dominica y Antigua y Barbuda. Cuya función es fortalecer la integración económica, las políticas sociales y la unidad de los trabajadores.
20. Véase en reportaje Agencia de Noticias Fides: Las fuerzas armadas y la Policía piden la renuncia del presidente Morales, 10.11.2019. Obtenido de <https://goo.su/Ixpe7Bk>
21. Véase en reportaje CNN: Polémica por himno del ejército de Bolivia a Evo Morales, 01.06.2016. Obtenido de <https://goo.su/CZoTh>
22. The International Institute for Strategic Studies - IISS. Disponible: <https://www.iiss.org/>
23. International Institute for Strategic Studies, IISS (2006). The Military Balance 2006 (Military Balance). Editorial: Routledge; 106ª edición.
24. The World Bank (2023). Sobre: “Datos de personal a precios corrientes de las fuerzas armadas de Bolivia 1960-2020” Disponible: <https://goo.su/XPAzwqg>
25. Véase en reportaje Ambassade de France en Bolivie: Inauguración del centro de mando construido por Thalès, 2019, Obtenido de <https://goo.su/Uz6la>
26. Ross, E.S. (1886-1951). Social Control. A Survey on the Foundations of Social Order. New York: The Macmillan Company, 1901. Editor: Nueva York, The Macmillan Company; Londres, Macmillan & Co., Ltd.
27. Rocha, F. V. (2014). Bolivia: entre la polarización y la contrahegemonía comunicacional. Observatorio Latinoamericano, 14, 92-110.
28. Véase en reportaje Brújula Digital: Gobierno anterior gastó Bs 1.700 millones en propaganda, semanarios desconocidos recibían más recursos que diarios nacionales, 7.05.2020. Obtenido de <https://goo.su/Yn3Zpa>

29. Véase en reportaje Voz de América-VA: “Guerreros digitales” generan acusaciones y revuelo político en Bolivia, 27.02.2023. Obtenido de <https://goo.su/xkPFFIT>
 30. Véase en reportaje de ERBOL: Magistrados deciden prorrogarse en el cargo hasta que se elijan nuevas autoridades judiciales, 12.12.2023. Obtenido de <https://goo.su/PnuNMG>
 31. Global Human Rights League- GHRL. (2021). ‘ ‘ Global Human Rights League – Lista de presos políticos en Bolivia año 2020-2021. Disponible en <https://goo.su/KRoRpu>
 32. Véase en reportaje de Naciones Unidas- ONU. (2022). Informe: Visita al Estado Plurinacional de Bolivia Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán. Disponible: <https://goo.su/e7sM3>
 33. Véase en reportaje El DIARIO: Imputan a Marco Pumari por el supuesto golpe de Estado, 19.08.2023. Disponible en: <https://goo.su/X3fWQo9>
 34. Instituto Nacional de Estadística- INE (2024). Metodología sobre encuesta, hogares y empleo 2020. Obtenido de <https://goo.su/wudN>
 35. Decreto Supremo No 28.571 - Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas. FAOLEX. (2020). Disponible en: <https://goo.su/rkrpYW>
 36. Véase en reportaje de Eju: Fondo Indígena de Bolivia gastó sólo el 22% de sus recursos en proyectos, 19.12.2015. Obtenido <https://goo.su/GpQb1K>
 37. Ley 1178 DE 1990. Ley SAFCO regula los sistemas de Administración y de Control de los Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.
- Véase en reportaje de Opinión: Fondo Indígena, Ley Safco y control previo, 2020. Disponible en: <https://shre.ink/8CGq>
38. Ayo, D., (2016). La verdad sobre el Fondo Indígena. Un modelo vicioso de gestión pública, La Paz, Bolivia: Fundación Pazos Kanki.

6. BALANCE Y CONCLUSIONES

1. World Bank- (2024). Datos: Crecimiento anual del PIB de Bolivia, 1961-2022. Obtenido de <https://goo.su/XyQqvn>
2. Barría, C. (2018). Fallo de La Haya: Qué efectos económicos tendría para Bolivia y Chile la salida al mar con soberanía que reclama La Paz. BBC News Mundo. Disponible en <https://www.bbc.com>
3. El País. (1984). Siles Zuazo: 18 deportaciones y 22 años de exilio. El País. Disponible en <https://elpais.com>
4. Ministerio de Autonomías de Bolivia- MA (2014). Agenda Patriótica 2025 ¿Quién hace qué?:13 pilares fundamentales. Obtenido de <https://goo.su/XyQqvn>
5. Banco Central de Bolivia- BCB (2024). Datos de las Reservas Internacionales; Deuda pública externa de Bolivia, 2014-2023. La Paz, Bolivia: BCB. Obtenido de <https://www.bcb.gob.bo/search/node/boletin%2069>
6. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- MEFP (2024). Modelo Económico Social Comunitario Productivo: El modelo Neoliberal vs Modelo Económico Social Comunitaria Productivo. Pág. 8.
7. Son aquellos que no se encuentran involucrados con el ámbito político, usualmente estos se presentan con nuevos, y con discursos anti-partidarios.
8. Soruco, X. y otros (2008). Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. Fundación TIERRA.
9. Mazzucato, M. (2019). El valor de las cosas: Quién produce y quién gana en la economía global. Traducido por Ramón González Ferriz. Editor: TAURUS, 2019
10. Navia, R. (2022). El puente “clandestino” de los menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso y amenaza al Kaa Iya. Revista Nómadas. Obtenido de <https://goo.su/1zl17O>
11. García L.A. (2015). Socialismo Comunitario, un horizonte de época. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Obtenido de <https://goo.su/fczem>

7. SALIR DEL ATRASO ECONÓMICO, ¿CÓMO?

1. García Márquez, G. (1976). Cien años de soledad. 47. ed. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
2. Uno de los impulsores de este tipo de propuestas es el economista Gonzalo Chávez, véase <https://rb.gy/l4im3u>
También se puede consultar, Benavente, J.M. (2018). Tres maneras de entender el vínculo entre la economía naranja y la innovación. Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (2024). Estadísticas de propiedad intelectual Bolivia, 2022. Obtenido de <https://goo.su/m0roL7>
4. Véase por ejemplo “IBCE: PIB de Bolivia podría crecer más del 7%”, publicado por Los Tiempos, disponible <https://rb.gy/v1p7x4>
También en reportaje de Comunicadores Construyendo Bolivia, CCB: IBCE asegura que Bolivia puede crecer en 5.1% según proyecciones de la CEPAL con un gran pacto social-productivo público-privado.
5. Véase en reportaje de Logística Perú: Perú encabeza la exportación sudamericana de espárrago superada solo por china, 2022. 31.07.2023. Obtenido de <https://goo.su/VRqjR>
6. Tim M. O’Brien (2014). El ejemplo del espárrago peruano. Reporte del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
7. Véase en reportaje La Razón: Inauguración de la Planta Amoniaco y Urea da inicio a la era de la industrialización, 14.09.2017. Obtenido de <https://goo.su/qUTLz>
8. Véase en reportaje del Ministerio de Desarrollo Productivo: Bolivia inicia construcción de la primera planta industrial procesadora de la hoja de coca en Cochabamba, 01.10.2022. Obtenido de <https://goo.su/T32U>
9. Smith, A. (1727-1790). La mano invisible de Adam Smith.
10. Se crea con el objetivo de generar desarrollo y explotación de los recursos naturales.

Corporación de Fomento Boliviano (1965). Síntesis de realizaciones. La Paz, Bolivia. Disponible en la Biblioteca de Central de la UMSA.

11. Véase en reportaje La Razón: El 'Bono contra el Hambre' será financiado con créditos del BID y BIRF.12.08.2020 Obtenido de <https://goo.su/pWmgu6>
12. Caspa, N. (2016) La Corporación Boliviana de Fomento: Historia, pág. 183-206.

OTRAS LECTURAS

- Aliaga, L. J; y Quino, H. Vi. y Rubín de Celis, R. (2011). Ciclos económicos e inversión en Bolivia, Documento de Trabajo, No. 02/11, Universidad Católica Boliviana, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), La Paz
- Beverinotti, J. y Canavire-Bacarreza, G. y Chacón, N. (2020). Coordinadores. Como acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media. Banco Internacional de Desarrollo, BID.
- Bujosa, F.S. (2020). La reforma y apertura económica de China (1978-1993): planificación al mercado. Bujosa Fluxà, Sergi.
- Calle, S.A. y Bustos A.P. (2019). Minería en Bolivia: Implicancias en el comercio y producción. La Paz, Bolivia: Banco Central de Bolivia, BCB.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Extracción e industrialización del litio Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe, 2023. Santiago, CEPAL.ç
- González Oquendo, Luis J. (2007). "Rentismo y construcción de problemas de en Ciencia Política" (Tesis de Maestría). Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España.
- International Fellowship of Reconciliation, IFOR. (2024). Informe: Servicio militar, objeción de conciencia al servicio militar y problemas relacionados, 2022. Obtenido de <https://goo.su/1IFVvz9>
- Laserna, R. y Gordillo, J.M y Komadina J. (2011, 3º ed.). La trampa del rentismo. La Paz, Bolivia: Fundación Milenio.

- Lema, G.A. (2016). Coord. De la Revista de la carrera de historia, N° 37. La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés.
- M. Obaya, (2019) “Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/49), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Rutledge, E. (2017). Oil rent, the Rentier State/Resource Curse Narrative and the GCC Countries. Revisión: Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC.
- Sanhueza, C. (2020). Radiografía de mercado de litio, una perspectiva desde el comercio internacional. Chile: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
- Zarate, C.C. y Aranda, M.P. (2019). “Irregularidades en la Administración del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinas, (FDPPIOYCC)”. La Paz, Bolivia: UMSA.

LISTA DE TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1.	Bolivia: Exportación 1900 - 1930, en miles de dólares americanos y toneladas	59
Tabla 2.	Bolivia: Exportación 1930 - 1952, en miles de dólares americanos y toneladas	63
Tabla 3.	Bolivia: Exportación 1952-1985, en miles de dólares americanos y toneladas	68
Tabla 4.	Bolivia: Exportación 1985-2000, en millones de dólares americanos y toneladas	73
Tabla 5.	Bolivia: Recaudación de la renta petrolera según componentes en intervalos quinquenales, 2000 - 2023, en millones de dólares americanos	94
Tabla 6.	Bolivia: Atraso económico en comparación con países vecinos y América del Sur, 2000 – 2022	121
Tabla 7.	Bolivia: Dependencia de los recursos naturales, en millones de dólares y porcentajes, 2000-2023	125
Tabla 8.	Bolivia: Empresas nacionales y regionales administradas por el Estado, 2023	160
Tabla 9.	Políticas económicas	224
Gráfico 1.	Bolivia: Exportación 1900-1930, en miles de dólares americanos y toneladas	58
Gráfico 2.	Exportación 1930-1952, en miles de dólares americanos y toneladas	62
Gráfico 3.	Bolivia: Exportación 1952-1985, en miles de dólares americanos	67
Gráfico 4.	Bolivia: Exportación 1985-2000, en millones de dólares americanos	72
Gráfico 5.	Bolivia: Exportación 2000-2023, en millones de dólares americanos	87

Gráfico 6. Bolivia: Producción y exportación de gas natural 2001-2023, en millones de dólares americanos y millones de metros cúbicos	91
Gráfico 7. Bolivia: Renta petrolera 2000-2023, en millones de dólares americanos	93
Gráfico 8. Santa Cruz: Superficie cultivada y producción, 2000-2022, expresado en miles de hectáreas (ha) y miles de toneladas (Tm)	100
Gráfico 9. Santa Cruz: Renta agrícola bruta del modelo cruceño (2001-2023)	104
Gráfico 10. Bolivia: Exportación minera y aurífera, 2021 - 2023	107
Gráfico 11. Crecimiento económico y dependencia de recursos naturales	130
Gráfico 12. “Enfermedad holandesa” en Bolivia: Relación del sector rentista y no rentista, en millones de dólares, 2000 – 2023	134
Gráfico 13. Bolivia: Gasto militar per cápita, año 2000-2020	167
Esquema 1. Representación esquemática de la maldición de los recursos naturales y estado rentista	42
Esquema 2. Mercado y Rentismo	223

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADN	Acción Democrática Nacionalista
AEC	Arancel Externo Común
ALBA	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
AMETEX	América Textil S.A.
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
ATPDEA	Acuerdo de Preferencias Arancelarias para Productos Andinos y la Erradicación de Drogas
BCB	Banco Central de Bolivia
BDP	Banco de Desarrollo Productivo
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAF	Corporación Andina de Fomento
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPSC	Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CMO	Cámara Mundial del Oro
COB	Central Obrera Boliviana
COFADENA	Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu
CPE	Constitución Política del Estado
CPEM-B	Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
CSCB	Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

CUCI	Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
EBIH	Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos
EBO	Empresa Boliviana del Oro
EMAPA	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
ENATEX	Empresa Nacional Textil
ENDE	Empresa Nacional de Electricidad Bolivia
EXIMBANK	<i>Export-Import Bank of the United States</i>
FABOCE	Fábrica Boliviana de Cemento
FANCESA	Fábrica Nacional de Cemento Sucre. S.A.
FDPPIOYCC	Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas
FECOMAN LP	Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz
FEDECOR	Federación de Regantes de Cochabamba
FERRECO	Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNMCB-BS	Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa
GM	Genéticamente Modificada
GRHL	<i>Global Human Rights League</i>
HIPC	<i>Heavily Indebted Poor Countries</i>
IDH	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IED	Inversiones Extranjeras Directas
IEHD	Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados
IIEE	Instituto Internacional de Estudios Estratégicos
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
IT	Impuesto a las Transacciones
IUE	Impuesto a las Utilidades de las Empresas

IVA	Impuesto al Valor Agregado
MAS	Movimiento al Socialismo
MESCP	Modelo Económico Social Comunitario Productivo
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PIB	Producto Interno Bruto
PIL	Planta Industrializadora de Leche
PS-1	Partido Socialista 1
RAU	Régimen Agrario Unificado
RC-IVA	Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado
RIN	Reservas Internacionales Netas
SAFCO	Ley de Administración y Control Gubernamentales
SEDEM	Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria,
SIDACTA	Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo
SIIP	Sistema Integral de Información Productiva
TCF	Trillones de pies cúbicos
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UPRE	Unidad de Proyectos Especiales
YLB	Yacimientos de Litio Bolivianos
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

AGRADECIMIENTOS

No habría sido posible escribir este libro sin el apoyo de muchas personas.

En primer lugar, expreso mi agradecimiento a la Fundación TIERRA, la institución donde trabajo desde hace veinte años. Muchas de las ideas expuestas han sido el resultado de trabajos en equipo y estimulantes conversaciones sostenidas con los colegas y amigos de la institución, todos ellos genuinamente comprometidos con las causas de interés nacional. Agradezco de manera especial al Director Ejecutivo Juan Pablo Chumacero, tanto por el soporte personal que recibí para concluir este proyecto que estuvo por más de dos años en mi mesa de trabajo, como por el apoyo institucional para la publicación.

Quisiera dejar constancia de mi gratitud y aprecio a Miguel Urioste. Antes de conocerle personalmente, había leído su libro *“La economía del campesino altiplánico en 1976”*. En 2004 me reclutó como ayudante de investigación, cuando ya se había de alejado de la arena política-partidaria y estaba de vuelta a su faceta de intelectual y estudioso apasionado por la economía política de la reforma agraria, tierra y territorio. Durante los años que trabajé con él me brindó apoyo incondicional e ilimitado y, con el tiempo, se convirtió en una de las personas más influyentes para mí y muchos compañeros de trabajo. Es mi mentor, si cabe el término. Este libro está dedicado a Miguel.

También estoy muy agradecido con las personas que trabajaron arduamente para preparar esta publicación. Primero, mi reconocimiento a Katherine Paola Mamani Benavides, joven economista formada por la Universidad Autónoma

Gabriel René Moreno (UAGRM). Su dedicación, compromiso y trabajo como ayudante de investigación han sido decisivos. También agradezco a Eva Guadalupe Tapia y María Eugenia Daza por sus colaboraciones en el cuidado de edición, a Rudy Idiaquez por el diagramado profesional y su actitud proactiva para la puesta a punto. A Lindsay Ponce por el diseño de la portada.

Expreso mi gratitud a los amigos y personas que conocí en Santa Cruz. Muchas de las ideas planteadas no hubieran madurado sin el diálogo, el contacto cotidiano y sin la contraposición de ideas en torno a la realidad cruceña y nacional.

Por último, quiero expresar de manera amplia mi agradecimiento a mi familia y seres queridos cercanos, quienes, sin necesidad de estar involucrados directamente, brindan en todo momento el soporte emocional e incondicional que está por detrás de cada trabajo y cada persona. Y por supuesto, ninguno de los nombrados es responsable de mis errores y desaciertos.

Suele pensarse que los recursos naturales son una bendición o una ventaja económica para el progreso de las naciones, pero **¿por qué Bolivia – siendo un país rico en recursos naturales – es una de las economías más pobres de América Latina y el mundo?**

A partir de esta pregunta, este libro aborda problemas económicos de carácter nacional, como nuestra dependencia histórica de la exportación de materias primas, las razones y consecuencias del agotamiento de la renta del gas, el fracaso del Estado empresario, el sinsentido de los planes de industrialización, entre otros.

También contiene ideas y propuestas sobre cómo podemos contrarrestar los males económicos, salir del atraso persistente y reestructurar el aparato productivo. La pretensión no es ofrecer una receta tallada en piedra para asuntos por demás complejos e intrincados, sino aportar al debate entre todos los bolivianos.

Este libro ha sido escrito con un sentido de urgencia ante el actual escenario de crisis económica. Es una invitación para que hablemos de economía sin ser economistas.

ISBN: 978-9917-9749-0-1

